

32



Movimientos socioambientales en América Latina

Maristella Svampa | Henri Acselrad | Horacio Machado Aráoz | Alberto Acosta y Decio Machado | Norma Giarracca y Daniela Mariotti | Pablo Ospina Peralta y Rickard Lalander | César Enrique Pineda | Mina Lorena Navarro | Jorge Luis Duárez Mendoza

Debate

Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época - José Guadalupe Gandarilla Salgado

Experiencias latinoamericanas

El #YoSoy132 y las elecciones en México - Luz Estrello y Massimo Modonesi

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

La filosofía de la praxis - Adolfo Sánchez Vázquez





Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

OSAL Observatorio Social de América Latina

Año XIII N° 32 / publicación semestral / noviembre de 2012

Editores

Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Coordinador

Lucio Fernando Oliver Costilla

Director de la *Revista del OSAL*

Massimo Modonesi

Colectivo Editorial

Guillermo Marcelo Almeyra Casares, Rolando Álvarez Vallejos, Armando Chaguaceda Noriega, Francisco Luciano Concheiro Borquez, Julio César Guanche, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chávez, Lucio Fernando Oliver Costilla, João Marcio Mendes Pereira, Franklyn Ramírez Gallegos, Julián Rebón, Agustín Santella, Carlos Abel Suárez

Consejo consultivo editor

Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Haití], Margarita López Maya [Venezuela], Carlos Walter Porto Gonçalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal], Joan Subirats [España], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valdés [Cuba]

Secretaria de redacción

Luz Estrello

Asistentes de coordinación

Juan Chaves, Francesca Savoia y Emma Rosa Tenorio Bueno

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana y Caribeña

- Argentina y Uruguay, coordinado por María Celia Cotarelo [Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA]
- Bolivia, coordinado por Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo [Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES-UMSA]
- Brasil, coordinado por Roberto Leher [Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, LPP-UERJ]
- Colombia, coordinado por Guillermo Correa Montoya [Escuela Nacional Sindical, ENS]
- Chile, coordinado por Juan Carlos Gómez Leyton [Departamento de Investigaciones de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, DI-UARCIS]
- Costa Rica, coordinado por Ana Lucía Gutiérrez Espeleta [Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, IIS-FCS-UCR]
- Ecuador, coordinado por Mario Unda [Centro de Investigaciones CIUDAD]
- Guatemala, coordinado por Simona Violetta Yagenova [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Guatemala, FLACSO-Guatemala]
- México, coordinado por Lucio Oliver y Massimo Modonesi [Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, FCPS-UNAM]
- El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, coordinado por Marco A. Gandásegui, h. [Centro de Estudios Latinoamericanos, "Justo Arosemena", CELA]
- Paraguay, coordinado por Quintín Riquelme [Centro de Documentación y Estudios, CDE]
- Perú, coordinado por Ramón Pajuelo Teves [Instituto de Estudios Peruanos, IEP]
- República Dominicana y Puerto Rico, coordinado por Juan Luis Corporán [Departamento de Investigación e Incidencia, DII, del Centro Bonó]
- Venezuela, coordinado por Marco Antonio Ponce [Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA]

Escriben en este número

Alberto Acosta, Henri Acselard, Tatiana Coll Lebedeff, Jorge Luis Duárez Mendoza, Luz Estrello, José Guadalupe Gandarilla Salgado, Norma Giarracca, Rickard Lalander, Decio Machado, Horacio Machado Araújo, Daniela Mariotti, Massimo Modonesi, Mina Lorena Navarro, Aureliano Ortega Esquivel, Pablo Ospina Peralta, César Enrique Pineda, Maristella Svampa.

Informes

Dirigirse a <www.clacso.org> | <osal@clacso.edu.ar> | <osal.redaccion@yahoo.com.mx>



Año XIII N° 32 - Noviembre de 2012

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**

Divulgación Editorial Carlos Abel Suárez

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable Editorial Lucas Sablich

Director de Arte Marcelo Giardino

Diseño de Tapa y Producción Fluxus Estudio

Impreso en Gráfica Laf – Monteagudo 74, Villa Lynch, San Martín – Pcia. de Buenos Aires.

Tirada 700 ejemplares

Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO

ISSN: 1515-3282 – Impreso en Argentina – octubre de 2012

Copyright Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Domicilio de la Publicación

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145/9505 | Fax [54 11] 4305 0875 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org.ar



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional
de las Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d' Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)



La revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) es indizada en Directory of Online Access Journals <www.doaj.org>, Directorio Latindex <www.latindex.unam.mx>, Unesco Social and Human Science Online Periodicals <www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html>, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe <www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas>, Latin Americanist Research Resources <<http://lanic.utexas.edu/larrp>> e Hispanic American Periodicals Index <<http://hapi.ucla.edu>>.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Dirección Nacional del Derecho de Autor: Expediente N° 641.603

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Observatorio Social de América Latina (OSAL) y sus respectivos isotipos y logotipos son marcas registradas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Sumario

Editorial Massimo Modonesi	9
Movimientos socioambientales	
Consenso de los <i>commodities</i>, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina Maristella Svampa	15
Descaminhos do “ambientalismo consensualista” Henri Acselrad	39
Los dolores de <i>Nuestra América</i> y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación Horacio Machado Aráoz	51
Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina Alberto Acosta y Decio Machado	67
“Porque juntos somos muchos más”. Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados Norma Giarracca y Daniela Mariotti	95
Razones de un distanciamiento político: el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana Pablo Ospina Peralta y Rickard Lalander	117
La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile César Enrique Pineda	135
Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple Mina Lorena Navarro	149

Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal. Una aproximación estructural en términos histórico-políticos Jorge Luis Duárez Mendoza	173
--	-----

Debate

Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época José Guadalupe Gandarilla Salgado	191
---	-----

Experiencias latinoamericanas

El #YoSoy132 y las elecciones en México. Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió Luz Estrello y Massimo Modonesi	219
--	-----

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Adolfo Sánchez Vázquez Aureliano Ortega Esquivel	245
---	-----

La filosofía de la praxis Adolfo Sánchez Vázquez	263
---	-----

Reseña

<i>La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982 - 2010)</i> Tatiana Coll Lebedeff	282
--	-----

Lista de publicaciones recientes	289
----------------------------------	-----

Editorial

Tendencias derechistas y repliegues en la resistencia

MASSIMO MODONESI

En los últimos años, lamentablemente inició una fase en que los equilibrios políticos en América Latina parecen inclinarse, tendencialmente, hacia la derecha.

Los meses recientes mostraron evidencias contundentes en este sentido. En junio, en Paraguay, con un nuevo “golpe blanco” la oligarquía terrateniente vuelve a tomar las riendas del gobierno. En julio, en México, por medio de una descarada y fraudulenta operación de manipulación del voto, orquestada por el capilar aparato del viejo partido de Estado —el PRI—, se impuso un candidato construido artificialmente a nivel mediático e inflado por encuestas hechas a la medida. En agosto, el movimiento estudiantil chileno es agredido por una represión particularmente brutal y sistemática. En otros países, gobernados por fuerzas progresistas, la derecha levanta la cabeza y muestra los dientes.

Por otra parte y de forma simultánea, en estos mismos países, tendencias derechistas o si se prefiere conservadoras se manifiestan al interior de los llamados gobiernos progresistas. Esto puede observarse tanto en la orientación oscilante de las políticas públicas, en la recomposición de las alianzas, en la cristalización burocrática de élites políticas en instituciones estatales y, sobre todo, en el creciente desfase respecto de los intereses de sectores sociales que recurren con mayor intensidad a la movilización como instrumento de protesta y de oposición. Estas manifestaciones dan cuenta de la persistencia de malestares laborales o de la emergencia de agravios socioambientales; pero lo que marca una ruptura difícilmente reversible es que los gobiernos responden atacando, deslegitimando, criminalizando, cuando no directamente reprimiendo a movimientos sociales cuyos orígenes y demandas son indudablemente populares y progresistas. Esta confrontación recurrente, si no permanente y las formas que va adquiriendo, objetiva e inequívocamente, derechizan a los gobiernos progresistas. Al margen de las posturas y de los argumentos que sostienen los posicionamientos contrapuestos,

es innegable que se trata de más de un (o más que un) síntoma, de la demostración de una involución que obliga a sacar ciertas conclusiones amargas. Por redistributivo, antiimperialista y progresista que sea –asumiendo y concediendo que estas características se cumplen cabalmente en todos los países– un gobierno que desmoviliza, burocratiza, *clienteliza* y además se confronta a los movimientos de protesta que surgen desde abajo, como mucho puede impulsar lo que Gramsci llamaba *revolución pasiva*. Además, si la delegación y el caudillismo imperan como mecanismo de *pasivización*, aparece la sombra de lo que el mismo autor llamaba *cesarismo progresivo*. Todo esto acompañado y sostenido por un intenso proceso de *transformismo*, es decir, la cooptación de partes importantes cuando no enteros grupos dirigentes de los sectores populares en los marcos de una institucionalidad tendencialmente inmutada y, por lo tanto, impregnada de lógicas y dinámicas conservadoras. Gramsci sostenía que una revolución pasiva implicaba un proyecto-proceso de transformación en el cual se incorporaban ciertas demandas e impulsaban ciertos cambios; pero sin rebasar determinado umbral y con finalidad substancialmente conservadora. Sin participación activa, protagonismo y movilización permanente, o por lo menos recurrente, no hay proyecto emancipatorio que se extienda en el tiempo, se intensifique y asuma radicalmente la agenda antineoliberal, ni que pueda vislumbrar cambios de alcance anticapitalista.

En medio de este panorama poco alentador, en gran parte de América Latina, después de un ciclo en donde las luchas sociales se habían proyectado en sentido antagonista y habían provocado significativos cambios políticos, observamos un poderoso empuje hacia la reconfiguración de la subalternidad como condición para sostener nuevas y viejas modalidades de dominación, frente a las cuales reaparecen formas de lucha típicamente defensivas y de resistencia que hay que reconocer como tales, sin que ello implique restarles valor ni desconocer su potencial.

En este sentido, este número de *OSAL* ofrece un panorama ilustrativo y al mismo tiempo inquietante de las dinámicas de despojo ambiental y de una serie de luchas de resistencia que, frente a esto, han surgido en América Latina, no sólo en países donde gobierna la derecha, como por ejemplo México y Chile, sino también allá donde encontramos gobiernos progresistas que no frenan el despojo neoextractivista sino que, bajo el argumento del financiamiento al desarrollo, se hacen cómplices de empresas transnacionales y alimentan las dinámicas depredadoras del capitalismo actual. Con ello, una profunda fractura atraviesa el que otrora, en los tiempos de las rebeliones antineoliberales, parecía el campo de las fuerzas populares; y, en esta división, una fracción oscila y resbala hacia la derecha, bajo ropajes nacional populares, pero siempre menos progresista y siempre más conservadora.

Este amplio dossier inicia con un texto de Maristella Svampa en el cual la socióloga argentina bosqueja el panorama del problema poniendo de relieve tanto sus dimensiones estructurales, vinculadas a la persistencia y profundización del modelo primario exportador ligado a las tendencias de la economía mundial y la complicidad entre sectores dominantes del centro y de la periferia, así como la emergencia de fenómenos de resistencia. En este mismo sentido interviene el brasileño Henri Acselrad, quien cuestiona el pragmatismo “paliativo” de un ambientalismo *consensualista* que no reconoce la emergencia de fuertes y significativos conflictos en los cuales afloran las resistencias hacia un desarrollismo basado en la explotación

de los “ambientes” de los trabajadores, los campesinos y las comunidades. Por su parte, el argentino Horacio Machado Aráoz pone en evidencia la lógica imperial colonial de lo que ha sido nombrado neoextractivismo, señalando sus implicaciones económicas, sociales y ambientales pero también “biopolíticas”. En un tenor similar, los ecuatorianos Alberto Acosta y Decio Machado revisitan la historia del surgimiento del pensamiento ambientalista, el nacimiento de la ecología política y la crítica al modelo desarrollista para reflexionar sobre las implicaciones actuales de los distintos tipos de ambientalismo que circulan en la actualidad en América Latina. Abordando otro aspecto del problema, las argentinas Norma Giarracca y Daniela Mariotti presentan y analizan una dimensión poco estudiada de los movimientos socioterritoriales: sus alianzas; dando cuenta de las estrategias que formulan y siguen para seleccionar a sus interlocutores y para tejer acuerdos con otros actores. Examinando uno de los clivajes fundamentales de la política ecuatoriana de los últimos años, Pablo Ospina Peralta y Rickard Lalander indagan las causas de los conflictos y del distanciamiento entre el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa. En su artículo sobre la lucha del pueblo mapuche en Chile, el sociólogo y activista mexicano César Enrique Pineda pone de relieve la dimensión socioambiental del conflicto, resaltando la resistencia de los mapuches a la industria forestal, los procesos extractivos mineros y la construcción de proyectos hidroeléctricos. Desde México, Mina Lorena Navarro propone estudiar a los movimientos socioambientales a partir de una noción de lo común, que permita colocar en el centro del análisis la relación antagónica entre las diversas estrategias de despojo implementadas por el capitalismo y la defensa emprendida por quienes se ven afectados. Cierra el dossier el artículo del joven sociólogo peruano Jorge Luis Duárez Mendoza, quien interpreta los conflictos socioambientales en Perú como demostración de la imposibilidad del neoliberalismo de resolver los problemas históricos de la estructura social de este país.

En otras secciones, el lector de este número puede encontrar textos de José Guadalupe Gandarilla Salgado sobre la crisis capitalista, pensada como crisis civilizatoria y como crisis de la modernidad; y de Luz Estrello y Massimo Modonesi, quienes relatan la emergencia del movimiento Yo Soy 132 en el contexto de la polémica elección presidencial mexicana. La tradicional sección de aportes del pensamiento crítico latinoamericano está dedicada, en esta ocasión, al filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez, fallecido recientemente en México y cuyas contribuciones a un marxismo crítico pensado como filosofía de la praxis tratamos de sintetizar volviendo a publicar un texto del propio autor, más una síntesis de su trayectoria y su pensamiento elaborada por Aureliano Ortega Esquivel.

Por último, Tatiana Coll Lebedeff reseña el libro fundamental –y monumental (casi mil páginas publicadas por CLACSO)– de Hugo Aboites sobre las reformas neoliberales en materia de evaluación educativa en México y las luchas antineoliberales que las contrastaron a lo largo de treinta años.

Buena lectura.

Movimientos socioambientales

Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina

Maristella Svampa

Descaminhos do “ambientalismo consensualista”

Henri Acselrad

Los dolores de *Nuestra América* y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación

Horacio Machado Aráoz

Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismo y conflictos actuales en América Latina

Alberto Acosta y Decio Machado

“Porque juntos somos muchos más”. Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados

Norma Giarracca y Daniela Mariotti

Razones de un distanciamiento político: el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana

Pablo Ospina Peralta y Rickard Lalander

La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile

César Enrique Pineda

Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple

Mina Lorena Navarro

Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal. Una aproximación estructural en términos histórico políticos

Jorge Luis Duárez Mendoza

Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina

MARISTELLA SVAMPA

Investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.

Resumen

En este artículo, Maristella Svampa propone reflexionar sobre el carácter de las luchas socioambientales en América Latina a partir de dos elementos de análisis: la inflexión extractivista y la ambientalización de las luchas sociales. El primero de ellos está estrechamente vinculado al cambio en el modelo de acumulación del sistema capitalista, identificado por la autora como *Consenso de los commodities*, basado en la expansión de proyectos que buscan la extracción y exportación de bienes naturales a gran escala. El segundo, se vincula con el giro ecoterritorial que en los últimos años está marcando a los movimientos que se resisten a dichos proyectos y que combina la matriz indígena comunitaria con el discurso ambientalista, que hace énfasis en la defensa de la territorialidad. De esta manera, la autora plantea un recorrido por algunos de los conflictos territoriales en el continente y al final apunta cuáles serían los retos que ellos están representando al interior del pensamiento crítico latinoamericano.

Abstract

In this paper, Maristella Svampa proposes to reflect on the nature of socio-environmental struggles in Latin America from two viewpoints for analysis: the extractivist drive and the environmentalisation of social struggles. The former is closely related to the change in the cumulative capitalist system, which Svampa sees as a "consensus of commodities", i.e. one based on scaling up projects aimed at large-scale exploitation and export of natural resources. The latter relates to the environmental and territorial move that has lately become the hallmark of movements that object to such projects. This move brings together an indigenous community matrix and the environmental discourse, which focuses on the defence of territoriality. Thus, the author presents a review of some of the territorial conflicts in the continent and, towards the end, points out the possible challenges they represent for the core of Latin American critical thinking.

Palabras clave

Extractivismo, territorialidad, luchas socioambientales, pensamiento crítico.

Key words

Extractivism, territoriality, socio-environmental struggles, critical thinking.

Cómo citar este artículo

Svampa, Maristella 2012 "Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Un análisis que aborde la actual cuestión política y el rol de los movimientos sociales en América Latina debe incluir necesariamente una reflexión sobre el carácter de las luchas socioambientales que hoy atraviesan la región y las diversas dimensiones que estas involucran. En razón de ello, con el fin de analizar cómo las diferentes dimensiones de las luchas socioambientales aparecen en el paisaje político latinoamericano, proponemos una presentación en cuatro momentos sucesivos. En un primer momento, haremos referencia a la expansión del extractivismo en la región latinoamericana, en el contexto del Consenso de los *commodities*. Luego de ello, realizaremos un análisis del proceso de ambientalización de las luchas en América Latina, así como de los tópicos y tensiones que atraviesan lo que hemos dado en denominar el giro ecoterritorial, en el cual convergen la matriz indígena comunitaria, el lenguaje acerca de la territorialidad y el discurso ambientalista. En tercer lugar, haremos hincapié en los conflictos y tensiones territoriales que hoy recorren diferentes escenarios nacionales, marcados por lo que denominamos, siguiendo a Zavaleta, la "visión eldoradista" en relación a los recursos naturales. Por último, daremos cuenta de la fractura que hoy se abre en el marco del Consenso de los *commodities*, dentro del pensamiento crítico latinoamericano, en relación a esta problemática.

El Consenso de los *commodities* y la inflexión extractivista

En el último decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los *commodities*, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Ciertamente, si bien la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en la región, resulta claro que en los últimos años del siglo XX y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado.

Así, lo que denominamos como *Consenso de los commodities* apunta a subrayar el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por el *boom* de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Tal como lo revelan los datos de la CEPAL (2011), la mayoría de los productos básicos de exportación

tación de la región mostraron un crecimiento vertiginoso en los últimos años: los precios de los alimentos alcanzaron su máximo histórico en abril de 2011 (maíz, soja, trigo); los metales y minerales superaron el máximo registrado antes de la crisis de 2008, y algo similar puede decirse sobre los hidrocarburos. Aun en un contexto de crisis económica y financiera internacional, que anuncia mayor incertidumbre y volatilidad de los mercados, las economías latinoamericanas continúan con un desempeño positivo: así, los datos de 2011 proyectaban una tasa de crecimiento del PIB regional del 4,7%, contra el 6% de 2010 (CEPAL, 2010).

Sin embargo, este modelo de crecimiento presenta numerosas fisuras estructurales. Por un lado, la demanda de materias primas y de bienes de consumo tiene como consecuencia un vertiginoso proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, algo que se ve agravado por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China, que se va imponiendo crecientemente como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial. En efecto, mientras que hacia 1990 China representaba tan solo un 0,6% del comercio exterior total de América Latina, en 2009, ya alcanzaba el 9,7%. Este crecimiento fue en detrimento de EE.UU., los países de la UE y Japón. Actualmente, China es el segundo socio comercial de la región. "Las exportaciones de América Latina hacia China se concentran en productos agrícolas y minerales. Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban el 55,7% de las exportaciones totales de la región al país oriental. Al mismo tiempo, los productos que China coloca en América Latina son principalmente manufacturas que cada vez poseen mayor contenido tecnológico" (Slipak, 2012). En suma, este proceso de intercambio desigual no sólo ha contribuido al incremento del precio de los *commodities*, sino también a generar un creciente efecto de reprimarización en las economías latinoamericanas.

Este proceso viene, también, acompañado por la creciente pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado tanto a la exportación de alimentos a gran escala como al destino de los mismos, pues cada vez más la demanda de dichos bienes está destinada al consumo de ganado, así como a la producción de biocombustibles.

Por otro lado, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo Consenso de los *commodities* conlleva la profundización de una dinámica de desposesión (Harvey, 2004) o de despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación. No es casual que gran parte de la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos procesos sea la consolidación de un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas, 2009; Schuldt y Acosta 2009; Svampa y Sola Álvarez, 2010), el cual debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como "improductivos".

Así definido, el extractivismo no contempla solamente actividades típicamente consideradas como tales (minería e hidrocarburos), sino también los agronegocios o la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoprodutor, que desestructura y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras. La inflexión extractivista comprende también aquellos

proyectos de infraestructura previstos por la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones; programa consensado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000, cuyo objetivo central es facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus puertos de destino. Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también el gas no convencional o *shale gas*), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen las figuras emblemáticas del extractivismo en el marco del consenso de los *commodities*.

Uno de los rasgos centrales del actual estilo extractivista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte tanto sobre la gran envergadura en términos de inversión de capitales (en efecto, se trata de actividades capital-intensivas, y no trabajo-intensivas); el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales); la especialización productiva (*commodities*), así como de los mayores impactos y riesgos que dichos emprendimientos presentan en términos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación, que además de generar escasos encadenamientos productivos endógenos operan una fuerte fragmentación social y regional y terminan por configurar espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional (Voces de Alerta, 2011). Por último, en función de una mirada productivista y eficientista del territorio, el consenso de los *commodities* alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los mismos. En el límite, los territorios escogidos por el capital son considerados como “socialmente vaciables” (Sack, 1986), o territorios sacrificables.

Ahora bien, la apelación a un “consenso” tiene la virtud de invocar no sólo un orden económico sino la consolidación de un sistema de dominación, diferente al de los años noventa, pues alude menos a la emergencia de un discurso único que a una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas que van marcando la coexistencia y entrelazamiento entre la ideología neoliberal y el neodesarrollismo progresista. En razón de ello, el consenso de los *commodities* puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período. Como ya había sucedido en la etapa del Consenso de Washington, el Consenso de los *commodities* establece reglas que suponen la aceptación de nuevas asimetrías y desigualdades ambientales y políticas por parte de los países latinoamericanos en el nuevo orden geopolítico.

Por un lado, contribuye a acentuar las líneas de continuidad entre un momento y otro, porque efectivamente tanto las transformaciones sufridas por el Estado nacional como la política de privatizaciones de los bienes públicos operadas en los noventa sentaron las bases normativas y jurídicas que permitieron la actual expansión del modelo extractivista, garantizando “seguridad jurídica” para los capitales y una alta rentabilidad empresarial, que en líneas generales serían confirmadas –con sus variaciones específicas– durante la etapa de los *commodities*.

Por otro lado, hay elementos importantes de diferenciación y ruptura. Recordemos que en los años noventa el Consenso de Washington colocó en el centro

de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir al Estado como un agente metaregulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del neoliberalismo. A diferencia de ello, en la actualidad, el consenso de los *commodities* pone en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

En la medida en que los diferentes megaproyectos avanzan (...) y tienden a reconfigurar el territorio (...) ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes y el alcance mismo de la democracia

El consenso de los *commodities* va configurando, pues, en términos políticos, un espacio de geometría variable en el cual es posible operar una suerte de movimiento dialéctico, que sintetiza dichas continuidades y rupturas en un nuevo escenario que puede caracterizarse como “posneoliberal”, sin que esto signifique, empero, la salida del neoliberalismo. En consecuencia, dicho escenario nos confronta a una serie de nuevos desafíos teóricos y prácticos, que abarcan una pluralidad de ámbitos, desde lo económico, social y ambiental, hasta lo político y civilizatorio.

El proceso de ambientalización de las luchas sociales

Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales, visibles en la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.

Entendemos por conflictos socioambientales a aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, así como van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los diferentes megaproyectos avanzan de modo vertiginoso y tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes sino también el alcance mismo de la democracia, pues se imponen sin el consenso de las poblaciones, generando fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.

En este contexto, la explosión de conflictos socioambientales ha tenido como correlato aquello que acertadamente Enrique Leff llamara “la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano” (2006). A esto hay que añadir que el escenario actual aparece marcado también por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía. Asimismo, en este nuevo entramado juegan un rol no menor ciertas organizaciones no gubernamentales ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones, muchas de las cuales combinan la política de *lobby* con una lógica de movimiento social– y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundan intelectuales y expertos, que no sólo acompañan la acción de las organizaciones y los movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de ellos. Esto quiere decir que dichos actores deben ser considerados menos como “aliados externos” y mucho más como actores con peso propio, al interior del nuevo entramado organizacional.

Así, el proceso de ambientalización de las luchas incluye un enorme y heterogéneo abanico de colectivos y modalidades de resistencia, que va configurando una red cada vez más amplia de organizaciones, en la cual los movimientos socioterritoriales no son los únicos protagonistas. Desde nuestra perspectiva, lo más novedoso es la articulación entre actores diferentes (movimientos indígenas campesinos, movimientos socioambientales, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), lo cual se ha venido traduciendo en un diálogo de saberes y disciplinas, caracterizado tanto por la elaboración de un saber experto independiente de los discursos dominantes (un saber contra experto), así como por la valorización de los saberes locales, muchos de ellos de raíces campesino indígenas. Al igual que en otros casos, esta dinámica organizacional, que combina la acción directa (bloqueos, manifestaciones, acciones de contenido lúdico), con la acción institucional (presentaciones judiciales, audiencias públicas, demanda de consultas, propuestas de leyes), encuentra como actores centrales a los jóvenes y las mujeres, cuyo rol es crucial tanto en las grandes estructuras organizacionales como en los pequeños colectivos culturales.

Una dimensión que caracteriza los conflictos socioambientales es la multiescalaridad, concepto que hace referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización (Sassen, 2007) y alude por ello al involucramiento de un entramado complejo de actores sociales, económicos, políticos, locales, regionales, estatales y globales. La multiescalaridad tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, para el caso de las industrias extractivas, la dinámica entre “lo global” y “lo local” se presenta como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados (en sus diferentes niveles), que promueven un determinado modelo de desarrollo; y, por otro lado, resistencias provenientes de las comunidades locales, que cuestionan tal modelo, y reclaman su derecho a decidir en función de otras valoraciones. En este marco, los conflictos socioambientales suelen combinarse perversamente con una tipología inherente al modelo extractivo, las llamadas economías de enclave, y por tanto tienden a encapsularse en la dimensión local. Dicha localización del conflicto se traduce en un deterioro

mayor de los derechos civiles, quedando librados de la intervención de la justicia y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad frente a los actores globales es mayor que el de sus homólogos nacionales.

Por otro lado, pese a esta tendencia al encapsulamiento local de los conflictos (sobre lo cual volveremos más adelante), la generación de espacios de cruces y la articulación progresiva de una “red de territorios” (Santos, 2005) reflejan otro aspecto de la dinámica multiescalar, que va abarcando desde lo local y lo nacional, hasta lo subcontinental. El resultado de ello es la generación de un diagnóstico común y la expansión de una nueva gramática colectiva, que sitúan el actual proceso de ambientalización de las luchas en continuidad con el internacionalismo que América Latina conoce, al menos como tendencia, desde el año 2000, con el inicio de un nuevo ciclo de acción colectiva a nivel regional y la realización de los foros sociales.

Resulta imposible realizar un listado de las redes autoorganizativas nacionales y regionales de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. A título de ejemplo, podemos mencionar la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, nacida en 1999, en Perú); la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina, surgida en 2006) que congrega a organizaciones de base que cuestionan la megaminería y el modelo de agronegocios; la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, México), creada en 2008 en instalaciones de la UNAM, y que agrupa diferentes organizaciones de base que luchan contra la megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagránjas industriales (cerdos, pollos, camarones), contando con el apoyo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Entre las redes transnacionales podemos citar a la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), que desde 2006 agrupa organizaciones de Perú, Bolivia, Colombia, Chile y, en menor medida, de Argentina, y aboga por la creación de un Tribunal de Delitos Ambientales. Por último, existen varios observatorios consagrados a estos temas, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991 con sede en Chile, el cual asesora a comunidades en conflicto en favor de sus derechos ambientales, así como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que existe desde 1997 y articula a más de cuarenta organizaciones, desde México hasta Chile, entre las cuales se halla el OLCA, la CONACAMI y la reconocida organización no gubernamental Acción Ecológica, del Ecuador.

Estas redes y movimientos socioterritoriales han ido generando un *lenguaje de valoración* acerca de la territorialidad, opuesto o divergente al discurso ecoeficientista y a la visión desarrollista que sostienen gobiernos y grandes corporaciones. Al mismo tiempo, en algunos casos estas redes vienen impulsando la sanción de leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una *nueva institucionalidad ambiental*, como es el caso en Ecuador, lo cual entra en colisión con las actuales políticas públicas de corte extractivista.

Entre todas las actividades extractivas, la más cuestionada en América Latina es la minería metálica a gran escala. En efecto, en la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno *versus* las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras,

Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región (Voces de Alerta, 2011). Sólo en el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación da cuenta de que los conflictos por la actividad minera concentran el 70% de los conflictos socioambientales y de que éstos, a su vez, representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país, no casualmente uno de aquellos donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera (De Echave, *et al.*, 2009). Este contexto de conflictividad contribuye directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socioambientales y a la violación de los derechos en la medida en que no se generan procesos de consultas adecuados a las comunidades y son desalojadas de las tierras reclamadas por las empresas que contaminan los recursos de las comunidades, como el agua y el territorio, de los que dependen para su vida (OCMAL, 2011).

Así, en un nuevo escenario de vinculación global que los diferentes gobiernos latinoamericanos –sean progresistas, de izquierda o de inspiración neoliberal– comparten en nombre del Consenso de los *commodities*, la minería metalífera a cielo abierto se ha convertido en una suerte de figura extrema, un símbolo del extractivismo predatorio, al sintetizar un conjunto de rasgos particulares directamente negativos para la vida de las poblaciones y el futuro de nuestros países.

Tópicos del giro ecoterritorial

En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina ha venido asentando la base de lo que podemos denominar el *giro ecoterritorial*, esto es, la emergencia de un lenguaje común que da cuenta del cruce innovador entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio y el discurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, los cuales funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos¹, sino como productores de una subjetividad colectiva.

Bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y “buen vivir” son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes². Ciertamente, en primer lugar, y a contrapelo de la visión dominante, en el marco del giro ecoterritorial, los bienes naturales no deben ser comprendidos como *commodities*, esto es, como pura mercancía; pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, incluso aunque algunos lo tengan. En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes integra visiones diferentes que afirman la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social, cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio. Como afirma Bollier (2008) “el concepto de bienes comunes describe una amplia variedad de fenómenos; se refiere a los sistemas sociales y jurídicos para la administración de los recursos

compartidos de una manera justa y sustentable [...] lleva implícita una serie de valores y tradiciones que otorgan identidad a una comunidad y la ayudan a auto-gobernarse". Este carácter de "inalienabilidad" aparece vinculado a la idea de lo común, lo compartido, y, por ende, a la definición misma de la comunidad o de los "ámbitos de comunidad" (Esteva, 2007).

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, la referencia recurrente a los bienes comunes aparece ligada a la noción de territorio o territorialidad. Ciertamente, la denominación alude a aquellos bienes que garantizan y sostienen las formas de vida en un territorio determinado. Así, no se trata exclusivamente de una disputa en torno a los "recursos naturales", sino de una disputa por la construcción de un determinado "tipo de territorialidad", centrado en un lenguaje que apunta a la protección de "lo común" en el marco de una concepción "fuerte" de la sustentabilidad. Es precisamente el desconocimiento de estas otras valoraciones lo que abre las puertas a que los territorios sean considerados como "áreas de sacrificio".

Varios son los pilares que dan sustento experiencial a este lenguaje en torno a "lo común", en clave de sustentabilidad fuerte. En unos casos, la valoración del territorio está ligada a la historia familiar, comunitaria e incluso ancestral ("territorio heredado"). Otras veces, la concepción del territorio "heredado" y/o del territorio "elegido", va convergiendo con la concepción del territorio vinculada a las comunidades indígenas y campesinas ("territorio originario"). Por último, involucra a quienes, habiendo optado por abandonar los grandes centros urbanos del país, han elegido los lugares hoy amenazados, motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida, o de jóvenes que optaron por un estilo de vida diferente en el cual la relación con "lo natural" y el ambiente juega un papel central ("territorio elegido")³. En la línea del territorio originario se inserta la defensa cada vez más dramática del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, expresado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que recogen casi todas las constituciones latinoamericanas, el cual se ha convertido en una herramienta en disputa para lograr el control/recuperación del territorio, amenazado por el actual modelo de desarrollo extractivista, tal como lo reflejan los casos de Perú, Ecuador y Bolivia (Oxfam, 2011).

Otro de los tópicos que recorre el giro ecoterritorial es el de *soberanía alimentaria*, que aparece ligado a la noción de bienes comunes, mediante la afirmación de la diversidad (Perelmuter, 2011). La soberanía alimentaria afirma el derecho de los pueblos a producir alimentos y el derecho a decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce. Dicho concepto fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Sin duda, conlleva el reconocimiento de los derechos de los campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Desde entonces, y en un contexto en el cual los gobiernos latinoamericanos han optado masivamente por consolidar un paradigma agrario basado en los transgénicos, la temática atraviesa el debate agrario internacional (Vía Campesina, 2004).

Asimismo, el giro ecoterritorial presenta contactos significativos con los llamados "movimientos de justicia ambiental", originados en la década del ochenta

en comunidades negras de Estados Unidos. Según Henri Acelard (2004: 16), la noción de justicia ambiental

[...] implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en que tal derecho puede ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades”.

De este modo, la unión de la justicia social y el ecologismo supone ver a los seres humanos no como algo aparte sino como parte integral del verdadero ambiente (Di Chiro, 1998). El movimiento de Justicia Ambiental es un enfoque que enfatiza en la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia, y en el racismo ambiental hacia los pueblos originarios despojados de sus territorios, que son, en fin, la injusticia de género y la deuda ecológica. En esta línea que reivindica un paradigma de la democracia ligado a los derechos humanos, se ubican organizaciones como el OLCA, ya citado, y la Red de Justicia Ambiental, en Brasil⁴, así como diferentes asambleas patagónicas de la Argentina que hoy luchan contra la megaminería.

... el buen vivir involucra una fuerte dimensión ambiental (...) basada en la ruptura con la ideología del progreso

Sin embargo, hay que decir que el tópico de la justicia ambiental hoy tiende a ser desplazado por otros, como el del “buen vivir”. Ciertamente, una de las consignas que ha otorgado mayor vitalidad al actual giro ecoterritorial es la del “buen vivir”, vinculado a la cosmovisión indígena andina *suma kausay* o *suma qamaña* (en quechua y aymara respectivamente). Sin duda, este es uno de los tópicos más movilizadores, de origen latinoamericano, que tiende puentes entre el pasado y el futuro, entre la matriz comunitaria, el lenguaje territorial y la mirada ecologista.

Dada su importancia, es necesario preguntarse cuáles son los sentidos que adquiere el buen vivir en los actuales debates que se llevan a cabo, sobre todo, en Ecuador y Bolivia. Todos coinciden en afirmar que es un “concepto en construcción” y, por ende, también en disputa. Para el boliviano Xavier Albó (2009), detrás del concepto está la lógica de las comunidades de muchos pueblos indígenas originarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes, y su plasmación como parte del país. Por otra parte, para la ecuatoriana Magdalena León (2009), la noción de buen vivir se sustenta “en reciprocidad, en cooperación, en complementariedad” y aparece ligada a la visión ecofeminista de cuidado de la vida, de cuidado del otro.

Dos constituciones latinoamericanas, la de Ecuador y la de Bolivia, incorporaron la perspectiva del “buen vivir”. Para el caso del Ecuador, el gobierno elaboró, a través de la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), el Plan del Buen Vivir 2009-2013, que propone, además del “retorno del Estado”, un cambio en el modelo de acumulación, más allá del primario exportador, hacia un

desarrollo endógeno, biocentrado, basado en el aprovechamiento de la biodiversidad, el conocimiento y el turismo. Como afirma el plan presentado, “el cambio no será inmediato, pero el programa del ‘Buen Vivir’ constituye una hoja de ruta” (Ospina Peralta: 2010).

En un libro reciente publicado en Bolivia, que apunta a establecer un estado del arte sobre el tema, se indica que el Vivir Bien implica una serie de aristas, entre ellas una vida “dulce”, buena convivencia, acceso y disfrute a bienes materiales e inmateriales; reproducción bajo relaciones armónicas entre las personas, orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas y naturales; relaciones armónicas entre las personas y la naturaleza, y entre las personas mismas; realización afectiva y espiritual de las personas en asociación familiar o colectiva y en su entorno social amplio; reciprocidad y complementariedad en las relaciones de intercambio y gestión local de la producción; visión cosmocéntrica de la vida (Farah y Vasapollo, 2011). Aun así, y más allá de las diferentes posturas que van diseñando una superficie amplia sobre la cual se van inscribiendo diferentes sentidos, el buen vivir, como afirma Gudynas (2011b), involucra una fuerte dimensión ambiental, en la medida en que postula otra mirada sobre la naturaleza, basada en la ruptura con la ideología del progreso. Sin embargo, como todo concepto en disputa, y en un contexto de asociación creciente entre gobiernos progresistas y extractivismo, el buen vivir puede sufrir un temprano vaciamiento y, en el límite, una posible *vampirización* en manos de las diferentes retóricas gubernamentales.

Por último, existe un último tópico asociado al giro ecoterritorial: el de los derechos de la naturaleza. El mismo reenvía a una perspectiva jurídica filosófica basada en la ecología profunda, que aparece por primera vez en la nueva Constitución ecuatoriana e ilustra el desplazamiento desde una visión antropocéntrica de la naturaleza hacia otra “sociobiocéntrica” (Acosta, 2011), o “biocéntrica” (Gudynas, 2009). En dicha Constitución, la naturaleza aparece como sujeto de derechos: esto incluye “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (Artículo 71). La naturaleza posee así valores intrínsecos (también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana.

Visión “eldoradista”, conflictos y tensiones territoriales

Hemos dicho que el giro ecoterritorial da cuenta de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan como estructuras de significación y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos. Dichos marcos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora, a instalar nuevos temas, lenguajes y consignas, al tiempo que orientan la dinámica interactiva hacia la producción de una subjetividad colectiva común. Así, resulta claro que éstos apuntan a la expansión de las fronteras del derecho, así como tienden a expresar una disputa societal en torno de lo que se entiende o debe entenderse por “verdadero desarrollo” o “desarrollo alternativo” y por “sustentabilidad débil o fuerte”. Al mismo tiempo, ponen en debate lo que se entiende por soberanía, democracia y derechos humanos; sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de

los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, o en los del “buen vivir”, la demanda apunta a una democratización de las decisiones, más aún, al derecho de los pueblos de decir “no” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.

En este sentido, el giro ecoterritorial de las luchas da cuenta de cómo las organizaciones y movimientos sociales involucrados van construyendo un conocimiento alternativo, el cual constituye una condición necesaria pero no suficiente para hablar de alternativas al modelo de desarrollo imperante. Asimismo, las nuevas estructuras de significación están lejos todavía de haberse convertido en debates de sociedad. Ciertamente, son temas que tienen una determinada resonancia social, mediante su inscripción en la agenda política y parlamentaria, pero las expectativas que muchos ciudadanos latinoamericanos tienen sobre las políticas públicas y en los procesos de transformación social encarados por los gobiernos progresistas, opacan, subalternizan y tienden a neutralizar la potencia de dichos marcos contestatarios.

Adicionalmente, existen otros obstáculos, vinculados a las dificultades propias de los movimientos y espacios de resistencia, atravesados a veces por demandas contradictorias, así como por la persistencia de determinados imaginarios sociales en torno al desarrollo. Así, una de las dificultades aparece reflejada por la tensión de territorialidades y la preeminencia de una mirada “eldoradista” sobre los recursos naturales. Tomamos esta expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta (2009), quien afirmaba que la idea del subcontinente como lugar por excelencia de los grandes recursos naturales fue dando forma al *mito del excedente*, “uno de los más fundantes y primigenios en América Latina”. Con ello, el autor boliviano hacía referencia al mito “eldoradista” que “todo latinoamericano espera en su alma”, ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural), que genera el excedente como “magia”, “que en la mayor parte de los casos no ha sido utilizado de manera equilibrada”. Aunque las preocupaciones de Zavaleta poco tenían que ver con la problemática de la sustentabilidad ambiental, que hoy es tan importante en nuestras sociedades, creemos que resulta legítimo retomar esta reflexión para pensar en el actual retorno de este mito fundante, de larga duración, ligado a la abundancia de los recursos naturales y sus ventajas, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación. Por ende, entendemos *la visión eldoradista* de los recursos naturales como una expresión regional de la actual ilusión desarrollista.

En este sentido, es necesario reconocer también que el actual proceso de construcción de territorialidad se realiza en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. De modo esquemático, puede afirmarse que existen diferentes lógicas de territorialidad, según nos refiramos a los grandes actores económicos (corporaciones, élites económicas), a los Estados (en sus diversos niveles), o a los diferentes actores sociales organizados y/o implicados en el conflicto. Mientras que las lógicas territoriales de las corporaciones y las élites económicas se enmarcan en un paradigma economicista, que señala la importancia de transformar aquellos espacios donde se encuentran los recursos naturales considerados estratégicos en territorios efi-

cientes y productivos, la lógica estatal, en sus diversos niveles, suele insertarse en un espacio de geometría variable.

Veamos brevemente algunos casos nacionales para ilustrar esta problemática. Para el caso del Perú, la lógica estatal entronca claramente con una visión neoliberal, asociada a la desposesión. Esto ha sido ilustrado emblemáticamente por el ex presidente Alan García quien, en octubre de 2007, publicó en el tradicional diario *El Comercio* (Lima) el célebre artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”, el cual anticipaba de manera brutal su política en relación a la Amazonia y a los recursos naturales, basada en la expansión hacia los territorios “ociosos”. Así, a fin de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en junio del 2008 el ejecutivo sancionó un centenar de decretos legislativos, entre ellos un paquete de 11 leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretos legislativos, rebautizados como “la ley de la selva” por las organizaciones indígenas y las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, fueron criticados desde diferentes sectores como anticonstitucionales. Finalmente, la represión de Bagua, en junio de 2009, que costó la vida de más de 30 habitantes de las poblaciones amazónicas, 10 policías y un número indeterminado de desaparecidos, así como las protestas que le siguieron, no sólo obligaron al gobierno de Alan García a derogar aquellos decretos que afectaban directamente el derecho de consulta sino que también permitieron que el país asomara al descubrimiento de los pueblos amazónicos, históricamente excluidos.

En el último año, esta tendencia hacia la criminalización y la represión se ha venido agravando bajo el gobierno de Ollanta Humala, pese a que inicialmente había despertado expectativas de renovación. Efectivamente, frente a los conflictos suscitados por la resistencia social a la megaminería, cada vez más radicalizada, el giro militarista que dio el gobierno confirmó la tendencia de retornar a la figura clásica del “orden e inversiones”, asociada a la matriz neoliberal. En menos de un año de gobierno ya se han registrado quince muertos por represión. A mediados de 2012, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 3 provincias del departamento de Cajamarca, mientras se lanzaba un paro indefinido en contra del cuestionado proyecto minero “Conga”, de la empresa Yanacocha. El proyecto implicaría entre otras cosas la destrucción de 4 lagunas. En la actualidad, la escalada represiva y la política de detenciones masivas es tal, que el peruano Santiago Pedraglio caracterizó a la gestión de Humala como la formación de un gobierno minero militar (2012)⁵.

Respecto a la Argentina, en los últimos años ha habido varios conflictos que contribuyeron a instalar la problemática ambiental en la agenda pública. Algunos, de modo directo, como el conflicto entablado con el Uruguay por la instalación de las papeleras (que motivara un largo corte al puente internacional que comunica ambos países, realizado por los vecinos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, entre 2005 y 2010), la problemática de la contaminación en la cuenca del Riachuelo y la discusión en el congreso de la Ley nacional de protección de los glaciares (2010). Otros, como el conflicto entablado entre el gobierno nacional y las corporaciones agrarias, en relación a las retenciones móviles al sector (2008), iluminaron de manera más lateral el proceso de desposesión hacia campesinos e indígenas que hoy ocurre en las llamadas áreas marginales, en especial en las

provincias del norte, asociado a la expansión de la soja. A esto se añadió que, en el inicio de su segundo mandato, en diciembre de 2011, el gobierno de Cristina Fernández sancionó una nueva Ley antiterrorista, que torna aún más difusa la figura penal de “terrorismo”, ampliando su aplicación –como en el caso ecuatoriano– a las organizaciones que supuestamente “financian dichos actos terroristas”. Esta ley obtuvo el rechazo generalizado de organizaciones sociales, de derechos humanos y de intelectuales, incluido el de aquellos sectores que apoyan al gobierno, pues todo indica que el objetivo de la misma es el de penalizar la protesta social.

Por otro lado, en Argentina, pese a su presencia en numerosas provincias, los conflictos en relación a la megaminería han estado encapsulados en el nivel local y han ido avanzando de la mano de la sanción de leyes provinciales que limitan este tipo de actividad, en que se utilizan sustancias tóxicas (Voces de Alerta, 2011). Sin embargo, a principios de 2012 hubo una inflexión que produjo el ingreso de la cuestión minera a la agenda política nacional: los vecinos de Famatina, en la provincia de la Rioja, volvieron a levantarse en contra de la megaminería. En 2007 ya habían expulsado a la empresa Barrick Gold, que se proponía explotar el cerro, y habían logrado una ley provincial de prohibición de la megaminería. Pero, en 2008 esa ley fue derogada y dejó el conflicto en un *impasse*. Como suele suceder, frente a las resistencias, los gobiernos aguardan la apertura de “nuevas oportunidades políticas” para tratar de avanzar con tales proyectos. Así, luego de las elecciones generales realizadas en octubre de 2011, la provincia de La Rioja firmó un nuevo convenio con otra empresa canadiense (*Osisko Mining*). Fue entonces que los vecinos de Famatina iniciaron un nuevo bloqueo para impedir el acceso de la empresa minera al cerro. Poco después, el corte se convertía en una gran pueblada, de resonancia nacional, que obligaría a la provincia a suspender el inicio del proyecto. Esta súbita visibilización de la lucha antiminera suscitó una sostenida solidaridad en las grandes ciudades, y tuvo su continuidad en otras movilizaciones y cortes, realizados en otras provincias.

Asimismo, hubo varios episodios de represión y de criminalización, que abarcaron incluso el bloqueo de una localidad (Andalgalá, en Catamarca) por parte de sectores promineros. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Fernández de Kirchner apuntó a la confirmación del modelo minero. Más aún, en un contexto de fuerte polarización política, la intelectualidad vinculada al kirchnerismo y la nueva juventud militante buscaron mantener “blindado” el discurso, negando la responsabilidad del gobierno nacional respecto de la lógica de desposesión y su alianza evidente con las corporaciones mineras; subrayando, en contraste con ello, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros. En la actualidad, en un contexto de fuerte realineamiento entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, que ha vuelto a encapsular en sus contextos locales la cuestión minera, la crítica al extractivismo es llevada a cabo por un conjunto de movimientos socioterritoriales (no solamente socioambientales), colectivos culturales e intelectuales ligados a la izquierda independiente y a parte de la izquierda partidaria y clasista.

El caso de Ecuador y Bolivia ilustran una situación más paradójica. Así, recordemos que una de las mayores expresiones del giro ecoterritorial ha sido

la propuesta del gobierno ecuatoriano, en mayo de 2007, de no explotar el petróleo en el bloque 43 del parque nacional Yasuni. Es decir, se busca mantener el crudo en la tierra, con la idea de proteger la biodiversidad, apoyar a las culturas aisladas, combatir el cambio climático y, en fin, de promover un tipo de desarrollo social basado en la conservación de la naturaleza y la promoción de energías alternativas. La comunidad internacional participaría con una compensación financiera, creando un fondo de capital que sería administrado por la ONU, con la participación del Estado ecuatoriano, la sociedad civil y los contribuyentes. Vale aclarar que el Yasuni, situado en la Amazonia, al este del Ecuador, es el bosque más biodiverso del planeta: en una sola hectárea del bosque hay tantas especies de árboles como en todo EE.UU. y Canadá juntos. El parque nacional es, además, hogar de los huaorani y de algunos de los últimos pueblos indígenas que aún viven en aislamiento, sin contacto con otras culturas. En estas tierras se encuentran las reservas más grandes de petróleo ecuatoriano, en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), de 900 millones de barriles.

...una práctica extraccionista viene acompañada por un falso discurso industrialista (“el gran salto industrial”)

Organizaciones de pueblos originarios como la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones ambientalistas no gubernamentales, como Acción Ecológica, muy activas en este campo, ilustran el giro ecoterritorial de las luchas. Esto no sólo porque estamos hablando del país en el cual se han pergeñado innovaciones jurídicas y constitucionales importantes, como la ya referida sobre los derechos de la naturaleza, sino porque en un contexto de grandes tensiones con el gobierno de Rafael Correa, dichos actores colectivos apuntan permanentemente a la profundización del debate acerca del modelo de desarrollo y a la necesaria salida del extractivismo.

No obstante ello, todo esto no ha sido suficiente para frenar la implementación del modelo de minería a gran escala, que ha sido desde el comienzo uno de los caballitos de batalla del presidente ecuatoriano. Tengamos en cuenta que en 2008, la Asamblea Constituyente planteó declarar al Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente, se declaró la caducidad de miles de concesiones mineras ilegales, poniendo en vilo proyectos extractivos millonarios; pero posteriormente, en enero de 2009, el parlamento aprobó la nueva Ley minera, profundizando el modelo extractivista, de por sí basado en la explotación de petróleo.

A principios de marzo de 2012, el gobierno de Correa firmó el primer contrato de minería metálica a gran escala en el Ecuador con la empresa Ecuacorrientes SA, por 25 años. Días más tarde, una movilización social convocada por la CONAIE empezó una larga marcha que inició su recorrido en Zamora y terminaría en Quito. El primer punto, de los 19 que formaron la agenda de la marcha, fue precisamente la oposición a la minería metálica a gran escala y la demanda de

reversión del contrato con Ecuacorrientes (Ospina Peralta, 2012). Esta avanzada de la megaminería se inserta, además, en un contexto de fuerte confrontación discursiva entre el presidente Correa y las organizaciones socioambientales, así como de una escalada de criminalización de sus luchas, bajo la figura de “sabotaje y terrorismo”, que en la actualidad alcanza a unas 170 personas, sobre todo ligadas a las resistencias contra la megaminería⁶.

Asimismo, cabe agregar que la discusión acerca del alcance del derecho de consulta es uno de los puntos candentes, sobre todo en los países de matriz andina. Así, en Ecuador, el Convenio 169 de la OIT, referido al derecho de consulta de los pueblos originarios, fue ratificado por la Constitución en 1998, pero en la práctica no se ha cumplido. Debido a ello, este derecho corre el riesgo de ser acotado y reformulado bajo otras figuras como, por ejemplo, la consulta prelegislativa, o bien mediante el desconocimiento de los canales regulares de la consulta, que supone el reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas.

Una línea similar parece recorrer Bolivia, a partir del arribo de Evo Morales al gobierno, en 2006. Recordemos que este emergió como una de las expresiones más innovadoras y radicales de los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos, ilustrando la síntesis entre movimientos sociales y nuevo poder político. Ahora bien, es necesario distinguir dos momentos diferentes en los 6 años de gestión que ya lleva Evo Morales. Por un lado, hubo una primera etapa de gobierno, entre 2006 y 2009, donde predominaron los conflictos con las oligarquías del oriente, lo cual coexistió con la creación de nuevos marcos constitucionales (el Estado Plurinacional), y la voluntad de creación de un Estado nacional, que apuntara a la nacionalización de los recursos naturales y la captación de la renta extractivista. Por otro lado, una segunda etapa arrancó en 2010, tras la derrota de las oligarquías regionales, cuyo objetivo es la consolidación de un proyecto hegemónico de carácter estatalista, basado en la promoción de una serie de megaproyectos estratégicos, de carácter extractivo (participación en las primeras etapas de explotación del litio, expansión de la megaminería a cielo abierto, en asociación con grandes compañías transnacionales, construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras en el marco del IIRSA, entre otros). Así, mientras que la primera fase apuntaba a potenciar un lenguaje descolonizador múltiple, más allá de las tensiones evidentes, la segunda reduce los contornos del proceso de descolonización no sólo con la tendencia a desplegar una hegemonía por momentos poco plural, sino principalmente por medio de la exacerbación de una práctica extractivista, que viene acompañada por un falso discurso industrialista (el “gran salto industrial”, en palabras del vicepresidente Álvaro García Linera).

Sin embargo, este proceso de *unidimensionalización* del proyecto del MAS comienza a encontrar severos obstáculos. Si bien uno de los puntos de inflexión fue la contracumbre realizada en Cochabamba sobre el cambio climático (en abril de 2010), sin duda el conflicto que constituyó el *parteaguas* fue el del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional “Isiboro Sécore”). Recordemos que el TIPNIS se convirtió en una zona de discordia entre los habitantes de la región y el gobierno por la construcción de una carretera. Se trata de una zona muy aislada y protegida, cuya autonomía es reconocida desde los años noventa. En ese contexto, el gobier-

no de Evo Morales se propuso llevar a cabo la construcción de dicha carretera, recortando la autonomía del territorio, sin consultar previamente a las poblaciones indígenas involucradas y a sabiendas de que éstas se oponían a la misma⁷.

Después de una larga marcha de indígenas desde el TIPNIS hasta La Paz, apoyada por varias organizaciones (la Confederación Indígenas del Oriente Boliviano, entre ellas) y numerosas redes ambientalistas, y luego de un oscuro hecho de represión, el gobierno de Evo Morales retrocedió en sus propósitos, aunque no está del todo claro cuál será la resolución final del conflicto. Sin embargo, lo ocurrido con el TIPNIS, refleja la fuerte disputa por la definición de lo que hoy se entiende en aquel país por descolonización, en la medida en que muestra la tensión explícita entre la hipótesis estatalista fuerte (un Estado nacional que avanza con megaproyectos extractivos, sin consultar a los ciudadanos) y la hipótesis de construcción del Estado Plurinacional (respeto de las autonomías indígenas y de la filosofía del “buen vivir”).

En términos más generales, la visión “eldoradista”, promovida por los gobiernos progresistas más radicales (Bolivia, Venezuela y Ecuador), aparece hoy asociada a la acción del Estado (productor y relativamente regulador) y a una batería de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (petróleo y gas, sobre todo). Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir como un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tienen por base la consolidación de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionales o metareguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga un “mega actor”, o a que su intervención garantice cambios de fondo. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones por parte de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos.

No hay que olvidar tampoco que el retorno del Estado a sus funciones redistributivas se afianza sobre un tejido social diferente al de antaño, producto de las transformaciones de los años neoliberales, y en muchos casos en continuidad –abierta o solapada– con aquellas políticas sociales compensatorias, difundidas en los años noventa mediante las recetas del Banco Mundial. En este contexto y mal que le pese, el neodesarrollismo progresista comparte con el neodesarrollismo liberal tópicos y marcos comunes, aun si busca establecer notorias diferencias en relación al rol del Estado y a las esferas de democratización.

Por otro lado, al costado de las organizaciones y redes socioambientales existen grandes problemas. Uno de los más graves es la desconexión existente entre las redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, más ligadas al ám-

bito rural, a las pequeñas localidades y los sindicatos urbanos, que representan a importantes sectores de la sociedad, y que en varios países (México, Argentina y Brasil, entre otros) conservan un fuerte protagonismo social. Entre estos movimientos, la falta de puentes es total, y ello remite a la presencia de un fuerte imaginario desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades.

Así, gran parte de los megaproyectos se extiende sobre pequeñas y medianas localidades, cuyo poder de presión es más débil y su vulnerabilidad mayor, respecto de las grandes ciudades. En todo caso, la lejanía respecto de los grandes nodos urbanos ha contribuido a reforzar las fronteras entre el campo y la ciudad, entre la sierra, la selva y la costa, como en Perú y Colombia; o entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, como en Argentina, en la medida en que estos megaproyectos (mineras, agronegocios y represas, entre otros) sólo afectan de manera indirecta a las ciudades. Como corolario, esto se ve reforzado por los procesos de fragmentación territorial, producto de la implementación de proyectos extractivistas y de la consolidación de enclaves de exportación.

Fracturas del pensamiento crítico latinoamericano

Este escenario contrastante que presenta hoy América Latina abre un terreno de grandes acechanzas. Uno de los rasgos más notorios de la época es que el Consenso de los *commodities* abrió una brecha, una herida en el pensamiento crítico latinoamericano, que en los años noventa mostraba rasgos mucho más aglutinantes, frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así, el presente latinoamericano refleja diferentes tendencias políticas e intelectuales: por un lado, están aquellas posiciones que dan cuenta del retorno del concepto de *desarrollo*, en sentido fuerte, esto es, asociado a una visión productivista, que incorpora conceptos engañosos, de resonancia global (el desarrollo sustentable en su versión débil, la responsabilidad social empresarial, la gobernanza), al tiempo que busca sostenerse a través de una retórica falsamente industrialista.

Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (del neodesarrollismo neoliberal) como en el que apunta al control del excedente por parte del Estado (del neodesarrollismo progresista), el actual modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de “oportunidades económicas” o “ventajas comparativas” proporcionadas por el Consenso de los *commodities*, y despliega ciertos imaginarios sociales (“la visión ‘eldoradista’ en clave desarrollista”) desbordando las fronteras político ideológicas que los años noventa habían erigido. Así, por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político ideológicos y de los matices que podamos hallar, dichas posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo neocolonial de apropiación y explotación de los bienes comunes, que avanza sobre las poblaciones desde una lógica vertical (de arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa, e inaugurando un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos.

Asimismo, liberales y progresistas resaltan la asociación entre mega-proyectos extractivistas y trabajo, generando expectativas laborales en la población

que pocas veces se cumplen, puesto que en realidad se trata de proyectos capital-intensivos y no trabajo-intensivos, tal como lo muestra de manera emblemática el caso de la minería a gran escala⁸. Comparten la idea del “destino” inexorable de América Latina como “sociedades exportadoras de naturaleza”, en función de la nueva división internacional del trabajo y en nombre de las ventajas comparativas. Por último, el lenguaje progresista comparte con el lenguaje neoliberal la orientación adaptativa de la economía a los diferentes ciclos de acumulación. Esta confirmación de una “economía adaptativa” es uno de los núcleos duros que atraviesa sin solución de continuidad el Consenso de Washington y el Consenso de los *commodities*, más allá de que los gobiernos progresistas enfatizan una retórica que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional y postulen la construcción de un espacio político latinoamericano.

Ya hemos dicho que los escenarios latinoamericanos más paradójicos y emblemáticos de la visión “eldoradista” son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido pergeñando nuevos conceptos-horizontes como los de descolonización, Estado Plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza. Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación a la naturaleza (el “buen vivir”), inscriptas en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo y con la consolidación de dichos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista.

Más allá del neodesarrollismo imperante, en sus versiones progresistas y neoliberales, en América Latina existe una perspectiva crítica diferente, que hoy aparece ilustrada por diferentes organizaciones sociales y posicionamientos intelectuales que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico y su concepto de naturaleza. En sintonía con los cuestionamientos propios de las corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha venido retomando la noción de “post desarrollo” (elaborada en los noventa por Arturo Escobar), así como elementos propios de una concepción “fuerte” de la sustentabilidad. Desde este enfoque, en consonancia con el giro ecoterritorial de las luchas, se ha venido promoviendo una crítica a la ideología del progreso y otras valoraciones de la naturaleza, que provienen de otros registros y cosmovisiones.

En la actualidad, el pensamiento post desarrollista se asienta sobre tres ejes y/o desafíos fundamentales: el primero, el de pensar y establecer una agenda de transición hacia el post extractivismo. En razón de ello, en varios países de América Latina ha comenzado a debatirse sobre las alternativas al extractivismo y la necesidad de elaborar hipótesis de transición “desde una matriz de escenarios de intervención multidimensional” (GPTAD, 2011). Una de las propuestas más interesantes y exhaustivas ha sido elaborada por el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social) (Gudynas, 2011a), que plantea que dicha transición requiere de un conjunto de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la articulación entre la cuestión ambiental y la cuestión social. Asimismo, considera que un conjunto de “alternativas” dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo, lo cual exige pensar y elaborar “alternativas al desarrollo”. Por último, se subraya que se trata de una discusión que debe ser pensada

en términos regionales y en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de aquello que los pueblos originarios han denominado “el buen vivir”.

Un ejemplo de la importancia que comienza a cobrar este debate es el interesante ejercicio realizado por los economistas Pedro Franke y Vicente Sotelo (2011) para el Perú, que demuestra la viabilidad de una transición al post extractivismo, mediante la conjunción de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestos a las actividades extractivas o impuestos a las sobreganancias, la *supertax*) para lograr una mayor recaudación fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasífera, respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011.

El segundo eje se refiere a la necesidad de indagar a escala local y regional en las experiencias exitosas de *alterdesarrollo*. En efecto, es sabido que, en el campo de la economía social, comunitaria y solidaria latinoamericana existe todo un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar. Pero ello implica una previa y necesaria tarea de la valoración de esas otras economías, así como una planificación estratégica que apunte a potenciar las economías locales alternativas (la agroecología y la economía social, entre otras), que recorren de modo disperso el continente. Asimismo, también exige contar con un mayor protagonismo popular, así como con una mayor intervención del Estado (por fuera de todo objetivo o pretensión de tutela política).

Por último, el tercer gran desafío que enfrenta el pensamiento post desarrollista es el de proyectar una idea de transformación que diseñe un “horizonte de deseabilidad” (GPTAD, 2011), en términos de estilos y calidad de vida. Gran parte de la capacidad de resiliencia de la noción de desarrollo se debe al hecho de que los patrones de consumo asociados al modelo hegemónico permean al conjunto de la población. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de la idea dominante de progreso como de aquello que debe ser entendido como “calidad de vida”. Más claro: para muchas sociedades, la definición de qué es una “vida mejor”, aparece asociada a la idea de “democratización del consumo” antes que a la necesidad de realizar un cambio cultural, respecto de la producción, el consumo y la relación de cuidado con el ambiente.

No obstante ello, la discusión sobre el extractivismo y el post extractivismo está abierta, y muy probablemente será uno de los grandes debates de nuestras sociedades y del pensamiento latinoamericano del siglo XXI.

A modo de conclusión

En el marco del Consenso de los *commodities*, son numerosos los movimientos campesinos indígenas, las organizaciones y las redes socioambientales que han venido generando un espacio común caracterizado por un saber experto independiente y alternativo. Asistimos así a la estructuración de temas, consignas, conceptos límites, que operan como marcos de acción colectiva contestatarios respecto de la modernidad dominante, al tiempo que alimentan los debates sobre la salida al extractivismo y una modernidad alternativa.

Por otro lado, lo que resulta incontestable es que, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, tanto los gobiernos progresistas como aquellos más conservadores tienden a aceptar como “destino” el nuevo consenso

de los *commodities*, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, sin considerar los enormes efectos socioambientales, las consecuencias en términos económicos (los nuevos marcos de la dependencia y la consolidación de enclaves de exportación) y su traducción política (nuevas formas de disciplinamiento y coerción sobre la población).

En este escenario, el avance del extractivismo es muy vertiginoso, y en no pocos casos las luchas se insertan en un espacio de tendencias contradictorias, que ilustran la complementariedad entre el lenguaje progresista y el modelo extractivista. Sin embargo, la colisión entre, por un lado, gobiernos latinoamericanos y, por otro lado, movimientos y redes socioambientales contestatarias en torno a la política extractiva, no ha cesado de acentuarse. Asimismo, la criminalización y la sucesión de graves hechos de represión se ha incrementado notoriamente y ya recorre un amplio arco de países y regiones, que incluye desde México y Centroamérica, pasando por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina. En este marco de fuerte conflictividad, la disputa por el modelo de desarrollo deviene entonces el verdadero punto de bifurcación de la época actual.

Finalmente, todo ello abre un gran interrogante acerca del futuro de la democracia en América Latina. Pues no se trata solamente de una discusión económica o ambiental sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia: se trata de saber si es posible debatir lo que se entiende por desarrollo y sustentabilidad; si se apuesta a que esa discusión sea informada, participativa y democrática; o bien, se acepta la imposición de los gobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre del nuevo Consenso de los *commodities*.

Bibliografía

- Acosta, Alberto 2011 “Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Reflexiones para la acción” en *Alta Alegremia*. En <www.altaalegremia.com.ar>.
- Acelard, Henri (org.) 2004 *Conflitos ambientais no Brasil* (Río de Janeiro: Relume Dumará/Fundación Heinrich Böll).
- Albo, Xavier 2009 “Suma Qamaña = el buen convivir” en *Obets* (Alicante: Instituto Universitario de Desarrollo Social) N° 4, diciembre, “Buen Vivir, Desarrollo y Maldesarrollo”.
- Bárcena, Alicia (coord.) 2011 *Balance de una década en América Latina: brechas por cerrar y caminos por abrir* (CEPAL). En <segib.org>.
- Bollier, David 2008 “Los bienes comunes: un sector soslayado de la riqueza” en Helfrich, Silke (comp.) *Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía* (México: Fundación Heinrich Böll).
- CEPAL 2010 *Estudio Económico en América Latina y el Caribe 2009-2010* en CEPAL (Santiago: Naciones Unidas) sección “Publicaciones”, área temática “Desarrollo Económico”. En <www.eclac.cl>.
- CEPAL 2011 *Balance de una Década en América Latina: brechas por cerrar y caminos por abrir* en <www.eclac.cl>.

- Colectivo Voces de Alerta 2011 *15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina* (Buenos Aires: Herramienta).
- De Echave, José et al. 2009 *Minería y conflicto social* (Lima: CBC/CIPCA/CIES/IEP).
- Di Chiro, Giovanna 1998 "La justicia social y la justicia ambiental en los Estados Unidos: La Naturaleza como comunidad" en Goldman, Michael (comp.) *Privatizing Nature. Political Struggles for the Global Commons* (Londres: Pluto Press/Transnational Institute).
- Escobar, Arturo 2005 "El post-desarrollo como concepto y práctica social" en Mato, Daniel (coord.) *Políticas de Economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización* (Caracas: FCES/Universidad Central de Venezuela).
- Esteva, Gustavo 2000 "Desarrollo" en Wolfgang, Sachs (coord.) *Diccionario del desarrollo*. En <www.ivanillich.org.mx>.
- Esteva, Gustavo 2007 "Commons: más allá de los conceptos de bien, derecho humano y propiedad". Entrevista realizada por Anne Becker en el marco de la *Conferencia Internacional sobre Commons y Ciudadanía*, Ciudad de México, diciembre.
- Farah, Ivonne y Vasapollo, Luciano (coords.) 2011 "Introducción" en *Vivir Bien: ¿Paradigma no Capitalista?* (La Paz: CIDES-UMSA/Sapienza Università di Roma/Oxfam/Plural).
- Francke, Pedro y Sotelo, Vicente 2011 "¿Es económicamente viable una política post extractivista en el Perú?" en Alayza, Alejandra y Gudynas, Eduardo (eds.) *Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú* en (Lima: CEPES).
- Goffman, Erwing 1991 *Les cadres de l'expérience* (Paris: Minuit).
- Grupo Permanente de Trabajo: Alternativas al Desarrollo (GPTAD) 2011 *Más allá del desarrollo* (Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala).
- Gudynas, Eduardo 2009 "La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador" en *Estudios Sociales* (Bogotá) N° 32, abril.
- Gudynas, Eduardo 2011a "Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo" en Wanderley, Fernanda (ed.) *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina* (La Paz: Oxfam/CIDES-UMSA).
- Gudynas, Eduardo 2011b "Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Vivir Bien" en Farah, Ivonne y Vasapollo, Luciano (coords.) *Vivir Bien: ¿Paradigma no Capitalista?* (La Paz: CIDES-UMSA/Sapienza Università di Roma/Oxfam/Plural).
- Harvey, David 2004 "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión" en *Socialist Register* (Buenos Aires: CLACSO). En <bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>.
- Leff, Enrique 2006 "La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción" en Alimonda, Héctor (comp.) *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana* (Buenos Aires: CLACSO).
- León, Magdalena 2009 "Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una economía para la vida" en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comp.) *El buen vivir. Una vía para el desarrollo* (Quito: Abya Yala).

- Martínez Allier, Joan 2004 *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración* (Barcelona: Icaria Antrazo/FLACSO).
- Martínez Allier, Joan 2009 "El ecologismo de los pobres, veinte años después: India, México y Perú" en *Ecoportal*. En <www.ecoportal.net>.
- Meyer, David y Gamson, William 1999 "Marcos interpretativos de la oportunidad política" en Mc Adam, Dough, Mc Carthy, John y Zald, Mayer (eds.) *Movimientos Sociales, perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (Madrid: Ediciones Istmo).
- OCMAL 2011 *Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina* (Quito: OCMAL/Acción Ecológica).
- Ospina Peralta, Pablo 2010 "Significados de la radicalización" en *Comité Ecuménico de Proyectos* (Quito) <http://www.cepecuador.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=114>.
- Ospina, Pablo 2012 "La minería en la revolución ciudadana" en *La Línea de Fuego*. En <lalineadefuego.info>.
- Oxfam 2011 *El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú* (Lima: Fundación para el debido proceso legal/Oxfam).
- Pedraglio, Santiago 2012 "Espinar: ¿gobierno minero-militar?" en *Perú21* (Lima: Prensa Popular). En <peru21.pe>.
- Perelmuter, Tamara 2011 "Bienes comunes vs. mercancías: las semillas disputas. Un análisis sobre del rol de la propiedad intelectual en los procesos de cercamientos". Ponencia presentada en las IX Jornadas de Sociología de la UBA *Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones, luces y sombras en América Latina*, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires del 8 al 12 de agosto.
- Porto Gonçalves, Carlos Walter 2001 *Geografías, movimientos sociales. Nuevas territorialidades y sustentabilidad* (México: Siglo XXI).
- Rivas, Antonio 1998 "El análisis de marcos: Una metodología para el estudio de los movimientos sociales" en Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín (eds.) *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambios culturales* (Madrid: Trotta).
- Sack, Robert 1986 *Human Territoriality: Its Theory and History* (Cambridge: University Press).
- Santos, Milton 2005 "O retorno do território" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, N° 16, enero-abril.
- Sassen, Saskia 2007 *Una sociología de la globalización* (Buenos Aires: Katz).
- Schuldt, Jürgen y Acosta, Alberto 2009 "Petróleo, rentismo y subdesarrollo. ¿Una maldición sin solución?" en AA.VV. (eds.) *Extractivismo, política y sociedad* (Quito: CAPP/CLAES).
- Slipak, Ariel 2012 "Las relaciones entre China y América Latina en la discusión sobre el modelo de desarrollo de la región: hacia economías reprimerizadas" en *Iberoamérica Global* (The Hebrew University of Jerusalem) Vol 5, N° 1. En <iberoamericaglobal.huji.ac.il>.
- Snow, David 2001 "Analyse de cadres et mouvements sociaux" en Cefai, Daniel y Trom, Danny (eds.) *Les formes de l'action collective* (París: L'ÉHESS).

- Sola Álvarez, Marian 2011 "Las valoraciones sobre los territorios en resistencia: explorando una tipología" en *Arena* (Catamarca: UNC) Año 2, N° 1.
- Svampa, Maristella 2011 "Modelo de desarrollo y cuestión ambiental en América Latina: categorías y escenarios en disputa" en Wanderley, Fernanda (comp.) *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina* (La Paz: CIDES/Oxfam/Plural).
- Svampa, Maristella 2012a "Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?" en AA.VV. del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (comps.) *Más allá del desarrollo* (Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo).
- Svampa, Maristella 2012b "Pensar el desarrollo desde América Latina" en Massuh, Gabriela *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina* (Buenos Aires: Mardulce).
- Svampa, Maristella y Sola Álvarez, Marian 2010 "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en Argentina" en *Ecuador debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 79, abril.
- Vía Campesina 2004 "Qué es la soberanía alimentaria" en *Ecoportal*, sección "Desarrollo sustentable", 13 de febrero. En <www.ecoportal.net>.
- Zavaleta Mercado, René 2009 (1986) *Lo nacional-popular en Bolivia* (La Paz: Plural) 1° edición.

Notas

1 Goffman definió a los marcos como "esquemas de interpretación que capacitan a los individuos y grupos para localizar, percibir, identificar y nombrar los hechos de su propio mundo y del mundo en general" (1991). Desde una perspectiva constructivista e interaccionista existen sin embargo diferentes enfoques sobre los "procesos de enmarcamiento". Para el tema, véase Meyer y Gamson (1999), Rivas (1998) y Snow (2001).

2 Retomamos aquí lo desarrollado en otros trabajos (Svampa, 2011; 2012a y 2012b).

3 Para un análisis de las diferentes concepciones de territorios, véase: Svampa y Sola Álvarez (2010) y, de modo más detallado, Sola Álvarez (2011).

4 Pueden consultarse los siguientes sitios: <www.olca.cl> y <www.justiciaambiental.org.br>.

5 Además, una revisión del "Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto Conga", por parte del Ministerio del Medio Ambiente, señaló serios problemas técnicos con el proyecto y su justificación. Poco tiempo después de la publicación de este informe, el viceministro del Ambiente, José de Echave, renunció por serias discrepancias con el manejo del caso por parte del gobierno. Agradezco la información enviada por Raphael Hoetmer.

6 Recordemos que, en 2008, la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi había amnistiado a unas 700 personas procesadas.

7 El conflicto del TIPNIS tiene, empero, un carácter multidimensional. El gobierno defendía la construcción de la carretera, porque ayudaría a la integración de las diferentes comunidades y les daría las facilidades necesarias para mejorar la salud, la educación y el comercio de sus productos. Sin embargo, la carretera abriría la puerta a numerosos proyectos extractivos, que traerían consecuencias sociales y ambientales negativas (con Brasil u otros socios detrás).

8 "La minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Con cada millón de dólares invertido, se crea apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital". Para el tema, véase: *15 mitos de la minería transnacional en Argentina* (op. cit.).

Descaminhos do “ambientalismo consensualista”

HENRI ACSELRAD

Doutor em Economia pela Universidade de Paris I, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq e da FAPERJ. Tem pesquisas desenvolvidas na área de conflitos ambientais e desenvolvimento, apropriações sociais da sustentabilidade urbana e cartografia social.

Resumen

Para certos analistas, ter-se-ia desenvolvido, a partir dos anos 1990, um processo de “substituição” do ambientalismo contestatário por um pragmatismo tecnicista e paliativo, compatível com os pressupostos do chamado “ambientalismo multissetorial” propugando por certos autores da sociologia ambiental brasileira. O presente artigo questiona os pressupostos consensualistas dos que entendem a causa ambiental como intrinsecamente universalista e supraclassista e destaca a emergência de conflitos ambientais que exprimem ações de resistência à imposição da desigualdade ambiental associada a um modelo de desenvolvimento fortemente baseado na expropriação dos “ambientes” de trabalhadores das periferias urbanas, grupos camponeses, povos e comunidades tradicionais.

Abstract

For certain analysts, a process of “substitution” through which rebellious environmentalism was replaced by a palliative and technically-oriented pragmatism, consistent with the assumptions of the so-called “multisectoral environmentalism” advocated by certain Brazilian environmental sociologists, may have taken place during the 1990s. This article questions consensual assumptions of those who understand the environmental cause as inherently universalist and supra-classist, and notes the emergence of environmental conflicts which resist the imposition of an environmental inequality associated with a development model which is highly contingent on dispossessing the “environment” of workers in urban peripheries, peasant groups, small towns and traditional communities.

Palabras claves

Ambientalismo, ecologismo de resultados, ambientalismo multissetorial.

Key words

Environmentalism, results environmentalism, multisector environmentalism.

Cómo citar este artículo

Accelrad, Henri 2012 “Descaminhos do ‘ambientalismo consensualista’” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, noviembre.

Desde o início dos anos 1990, o movimento ambientalista¹ no Brasil viu-se confrontado a uma leitura sociológica de si próprio segundo a qual a diversidade interna do ambientalismo exprimiria a adesão cooperativa gradualmente crescente dos diferentes “setores” de um mesmo ambientalismo, definido, por alguns autores, como “multissetorial” (Viola e Leis, 1992: 23). Segundo esta análise, o movimento ambientalista seria caracterizado por seu caráter trans-classista e o fenômeno do ecologismo resultaria da emergência gradual de múltiplos segmentos da sociedade compartilhando uma mesma visão de mundo dita “ambientalista”². Assim, ao que chamavam de um “ambientalismo propriamente dito”, somar-se-ia um ambientalismo acadêmico, um empresarial, um governamental, um religioso, etc. Diziam então os representantes deste pensamento que não se deveria considerar o movimento ambientalista como um movimento social *stricto sensu*, mas como “um movimento histórico, por ser multissetorial” e por “voltar-se para valores universais, que ultrapassam as fronteiras de classe, raça, idade e sexo” (Silva-Sanchez, 2000: 50-52). A questão ambiental teria, nesta ótica, “a capacidade de obter ressonância entre os diferentes grupos sociais, promovendo uma espécie de ‘consenso’ quanto à urgência de medidas que visem a preservação do meio ambiente” (Silva-Sanchez, 2000: 54). Segundo Viola e Leis, autores de referência desta interpretação, o ambientalismo brasileiro teria evoluído, a partir dos anos 1980, gradualmente, da “unissetorialidade” para a “complexidade multissetorial”.

O pressuposto visível desta perspectiva é a remissão a um meio ambiente único, ao qual corresponderia uma consciência ambiental também única, relativa a um mundo material fetichizado e reduzido a quantidades de matéria e energia, um meio ambiente do qual não se evidenciaríamos as múltiplas formas sociais de apropriação e as diversas práticas culturais de sua significação. As estratégias associadas a este tipo de diagnóstico –consensualista– tendem, por certo, a esvaziar o próprio conteúdo político do debate que envolve a definição das problemáticas do meio ambiente. O debate assim configurado tende, consequentemente, a ser substituído pela simples busca dos indicadores técnico-científicos mais apropriados a evidenciar a crise ambiental e a conquistar adesão pública a seu enfrentamento³.

O ambientalismo é, nesta perspectiva, definido como uma “preocupação pública com a deterioração ambiental” –uma preocupação, ressalte-se, e não uma luta social–, uma causa sem conflito. Tratar-se-ia de uma mesma “preocupação” passível de afligir diferentes estratos do mundo social –o Estado, as Igrejas, as empresas... A oposição dar-se-ia entre “consciência” e “prática” e não

entre interesses e projetos no interior da sociedade. “Com sua visão ecológica do mundo”, afirmam os representantes desta corrente, “os agentes do ambientalismo seriam, potencialmente, todos os cidadãos do planeta, todos aqueles que se sensibilizam e que de alguma forma adquirem uma ‘consciência’ em relação à crise ambiental e à necessidade de reverter o processo de devastação da biosfera”. E continuam: “O nosso conflito principal está se dando entre o homem e a natureza e não entre os homens” (Crespo, 1995). De um lado, estaria o discurso ambiental amplamente aceito; de outro, a sua ainda limitada materialização em práticas “pautadas na eficiência energética, reciclagem de materiais, redução de consumo suntuário e participação voluntária em tarefas de limpeza ambiental” (Viola e Leis, 1992). Portanto, o conflito, para estes autores, temporário e dependente da percepção considerada crescentemente inevitável da gravidade dos indicadores da crise ambiental, dar-se-ia entre os que têm consciência ambiental (os “sustentabilistas”) e os que não consideram a necessidade de proteção ambiental (os “predatórios”).

Sabemos que este é um dos discursos fortemente presentes em certas correntes do debate ambiental acadêmico contemporâneo. Porém, cabe considerar que seu eventual sucesso enquanto prática classificatória (Bourdieu, 1994) na vida social depende da força persuasiva que o mesmo obtenha junto aos próprios atores sociais. A sua pertinência sociológica refletirá, portanto, a maior ou menor adesão dos atores sociais à capacidade de persuasão de sua fundamentação básica – a de que existiria um meio ambiente material único, comum a todos, etc. Ora, uma tal compreensão não é imediata e depende, certamente, de um trabalho de unificação simbólica dos múltiplos ambientes relativos aos diferentes sujeitos sociais. A propósito, a sociologia que propugna a tese do “ambientalismo multissetorial” participa não por acaso deste esforço de unificação, embora o sucesso dos que se empenham neste esforço não esteja, em absoluto, pré-determinado. Ele é pautado por distintas estratégias pelas quais especialistas, consultores, órgãos de imprensa e publicitários procuram despolarizar a questão ambiental, esvaziando sua potência conflitiva.

Caberia pois tentar examinar as relações que parecem estar se estabelecendo entre a construção das teorias consensualistas e as condições concretas de vigência de um campo ambiental atravessado por conflitos por apropriação material e simbólica dos recursos ambientais. Tentaremos identificar, a seguir, três distintos entendimentos do arrazoado fornecido pelos defensores do “multissetorialismo ambientalista supraclassista”, tal como apresentados no debate brasileiro.

Visão 1: Tratar-se-ia de uma leitura compatível com o projeto emergente de um “ecologismo de resultados”

Segundo Crespo, ao longo dos anos 1990 emergiu no Brasil um “ecologismo profissional de resultados”, contrastando com o pré-existente “ecologismo ideológico e sectário”. O sucesso performativo do primeiro e a crise do segundo atestaria o encontro do pragmatismo com o sentido profundo das entidades ambientalistas. Isto porque, diz esta autora, contrariamente aos movimentos sociais

tradicionais, referentes a conflitos entre capital e trabalho, proprietários e não proprietários dos meios de produção, o ambientalismo constituiria um movimento de novo tipo, a tratar do “conflito” particular que oporia o conjunto dos homens à Natureza. Tal entendimento do movimento tem evidentemente implicações estratégicas no que respeita às relações com o Estado e o empresariado.

No que se refere às relações com governos, afirma Crespo:

fala-se das ‘Ongoves’, as ONGs que vivem com verbas governamentais. Ora, o dinheiro do governo não é dele; são recursos públicos. Existem em todo o mundo ONGs que vivem de dinheiro público. Em se tratando de políticas públicas, pergunto: por que não poderíamos utilizar esse dinheiro, já que é público e não do governo? (Crespo, 1997: 95).

Para alguns adeptos do entendimento do ambientalismo enquanto movimento “multissetorial”, o mesmo encontrar-se-ia em crise de identidade, dadas as dificuldades de concretizar sua dimensão supra-classista

E continua:

A relação ao Estado não se pauta pelo conflito, mas por intensa interação”, pois “em 1995, vinte secretários municipais de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro eram militantes ambientalistas, algo positivo, pois passam a exercer poder, embora ruim por trazer dificuldade de reposição de quadros nas entidades (Crespo, 1995: 27).

Trata-se, assim, de esvaziar o embate político e atribuir caráter técnico às atividades das entidades dedicadas à “proteção do meio ambiente”, mesmo que as mesmas, numa dinâmica recorrente de circulação de quadros entre ONGs e Estado, sejam desenvolvidas explicitamente como parte de ações governamentais.

No que diz respeito à relação com o empresariado, sustenta Crespo:

a questão dos recursos é crucial. O cenário dos recursos é de escassez. [...] Neste sentido, o preconceito em contar com o segmento empresarial é um preconceito que se volta contra nós mesmos e age a favor do empresariado, porque é ele quem polui ou desenvolve atividades de impacto ambiental, mas não arca com nenhum custo; enquanto isso, nós achamos que não podemos nos misturar (Crespo, 1997: 94).

Confunde-se, assim, o recurso público passível de ser obtido com a penalização das atividades poluidoras –as multas– com a transferência direta de recursos privados dos agentes poluidores para entidades que afirmariam, sem maior controle social, pretender “proteger o meio ambiente”. Ou seja, tais entidades, financiadas por empresas poluidoras, contribuiriam para a retirada do meio ambiente da esfera política, legitimando a poluição ou as declarações de intenção “ambientalmente responsáveis” daqueles que lhes repassam recursos num circuito alheio ao controle da sociedade política.

Quanto à estratégia propriamente política, o recurso a instrumentos jurídicos seguidos de negociação de fundos para projetos ambientais constituiria, para a

mesma autora, um exemplo de “profissionalização” e de “competência política”. A este respeito, a propósito de um episódio polêmico da retirada, em 1995, de uma Ação Civil Pública aberta contra a Prefeitura do Rio de Janeiro após a obtenção de recursos do governo municipal para o financiamento da entidade ambientalista denunciante, sustenta Crespo:

“Vemos aqui um caso de competência política - mobilização, capacidade de ser reconhecido como interlocutor e de negociar acordos que satisfazem todas as partes. A denúncia evoluiu para a formulação de uma alternativa” (Crespo, 1995: 27).

A teoria do “ambientalismo multissetorial” supraclassista, expressa aqui na apologia do “ecologismo profissional de resultados”, é evocada, neste caso, para justificar a pertinência da busca de recursos viabilizadores de projetos ditos “ambientais” junto a governos e empresas, por parte de certas entidades prestadoras de serviços, supostamente capazes de dar tratamento tecnicamente adequado ao problema ambiental.

Visão 2: tratar-se-ia de um projeto problemático de unificação de sujeitos em torno a uma só consciência ambiental, cujas dificuldades configurariam o que entendem ser uma “crise do ambientalismo”

Para alguns adeptos do entendimento do ambientalismo enquanto movimento “multissetorial”, o mesmo encontrar-se-ia em crise de identidade, dadas as dificuldades de concretizar sua dimensão supra-classista. Segundo Ferreira,

as dificuldades em realizarem sua principal promessa de constituírem-se como um único ator, multissetorial, através da capacidade de diálogo entre categorias diferenciadas de sujeitos, inegavelmente o princípio constitutivo da própria ação ambientalista, frustraram em muito suas próprias expectativas” (Costa Ferreira, 1997: 41). “Para que o ambientalismo brasileiro seja reconhecido como tal, seria necessário compreendê-lo como fruto contingente de uma tensão permanente entre a realidade das peculiaridades dos vários segmentos que o compõem e sua promessa de universalidade, entre sua vocação para a contemporaneidade e a concretude da democracia e do bem estar no país” (Costa Ferreira, 1997: 48). “Eternamente em crise, escravo da contingência, o ambientalismo brasileiro, tal qual outros novos movimentos sociais, padeceu, por uma década, do sentimento inconfesso de suspeitar-se incompleto e parcial (Costa Ferreira, 1997: 42).

Nesta mesma perspectiva, Leis afirma que “a lógica do confronto e o facciosismo são fonte de impasse”. Segundo ele,

o movimento não pode continuar se comportando como quando se encontrava isolado. O ambientalismo empresarial precisa aumentar sua responsabilidade em relação ao sócio-ambientalismo e vice-versa” (Leis, 1994: 37). “O Estado não é mais o ator privilegiado que era nos anos 60 e 70. As empresas e ONGs devem promover alianças e incentivar a emergência de novas instituições globais capazes de governar a complexa dinâmica econômico-ambiental existente (Leis, 1994: 37).

Viola e Leis, por suas vez, afirmam igualmente sua estranheza de “que o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais tenha resistido a aceitar em seu interior o ‘ambientalismo empresarial’ e ‘governamental’”. Sugeriam eles, conseqüentemente, que o “ambientalismo brasileiro abandone definitivamente o

utopismo e procure sua substituição por uma perspectiva ‘realista utópica’, que deixe de lado os preceitos igualitários de tipo puramente material” (Viola e Leis, 1992: 36). Héctor Leis (1994) completava:

é necessário que o ambientalismo assuma posições moderadas e realistas, politicamente associadas à social-democracia e ao social-liberalismo, que facilitem alianças entre seus vários setores.

Segundo estas análises, portanto, os atores sociais do ambientalismo não estariam entendendo a dimensão –por eles considerada objetivamente supraclassista– do movimento, o qual não comportaria nenhuma diferenciação substantiva entre seus “setores” integrantes, fossem eles unidades de produção de lucro econômico, estruturas de poder de Estado ou movimentos em luta no campo dos direitos. Portanto, para tais analistas, a desconsideração do “multissetorialismo” estaria na base da crise do “ambientalismo brasileiro”⁴.

Visão 3: o “ambientalismo multissetorial” configuraria uma leitura tida por responsável pela perda de radicalidade do movimento ambientalista

Para certas correntes do movimento ambientalista, “pensar a evolução do movimento ambientalista brasileiro em termos de complexidade e multissetorialização foi o que contribuiu para a perda de radicalidade do movimento, principalmente pelo fato de haver também uma perda ao nível do entendimento conceitual-teórico” (Alexandre, 2000: 23). Para Agripa Alexandre, é um “êrro sociológico” considerar a multissetorialização como ampliação da capacidade política do movimento e não como perda de tal radicalidade. Um movimento pré-existente, sob uma forma menos complexa e menos multissetorial seria, para ele, expressivo do correto “entendimento teórico-conceitual” do ambientalismo⁵.

Em consonância com esta ótica, vários depoimentos de militantes de um ambientalismo crítico destacam a crescente diferenciação interna observada no interior do ecologismo no Brasil, a partir dos anos ’90, entre pragmatismo de mercado e ação crítica:

O ecologismo filosófico foi superado por um ecologismo mais pragmático. [...] O movimento ambientalista entrou em declínio porque instalou-se uma certa confusão: a nossa luta original era por um novo modo de desenvolvimento e não por buscar soluções paliativas (Loureiro, 2000: 210).

As ONGs ambientalistas de combate são constituídas por cidadãos voluntários que têm por objetivo principal a denúncia e o enfrentamento da poluição e da degradação ambiental” (Loureiro, 2000: 213). “Não somos consultores, queremos mudar a sociedade” (Loureiro, 2000: 212). “Nosso papel não é de trabalhar para o governo; não é de ocultar o conflito, mas de dar-lhe visibilidade” (Loureiro, 2000: 217). “O poder público deve atender às demandas da sociedade civil e não a sociedade civil atender as demandas do poder público (Loureiro, 2000: 220).

[Mas] “assim como no sindicalismo, há o pelego na questão ambiental: houve uma proliferação de ONGs que na verdade são empresas de consultoria que se travestem de ONGs para ocupar espaços (Loureiro, 2000: 232).

“O grupo de entidades combativas cresceu menos que das que se voltam para o mercado” (Loureiro, 2000: 239). “A maioria dos dirigentes de ONGs está vendendo serviços, está fazendo consultoria, principalmente para as empresas poluidoras”. “Está havendo uma certa chantagem de quem detém o conhecimento da questão ambiental, utilizando-o para receber recursos das empresas que devem alguma coisa, que têm um passivo ambiental”.

Quanto ao episódio de 1995, quando uma entidade ambientalista retirou a Ação Civil Pública que abria contra o licenciamento de uma obra viária da Prefeitura do Rio de Janeiro, em troca de recepção de recursos para a execução do programa de educação ambiental no contexto da referida obra, o procedimento foi entendido, pelo ambientalismo crítico, como “uma traição, onde a sobrevivência financeira contou mais do que a luta em si” (Loureiro, 2000: 234).

Clarifica-se melhor o embate quando menciona-se o fato de que “as ONGs de mercado tentam não só ocupar o espaço da prestação de serviço, mas também os espaços institucionais, os canais de participação popular” (Loureiro, 2000: 212). Ou seja, não é a prestação de serviços técnicos para o Estado e para as empresas propriamente o objeto da crítica. O que se está a recusar aqui é que se questione a legitimidade da ação política em nome do imperativo da cooperação consensualista. Tratar-se-ia, portanto, para o ecologismo “de combate”, de tentar preservar o espaço da crítica ambientalista do modelo de desenvolvimento e de fazer com que a questão ambiental conste substancialmente na elaboração de um projeto político contra-hegemônico.

Considerações finais

É fato, como vimos, que, entre certos analistas, desenvolveu-se, ao longo dos anos noventa, a impressão de que teria havido um processo de “substituição” do ambientalismo contestatário por um pragmatismo tecnicista e paliativo, compatível com os pressupostos do chamado “ambientalismo multissetorial”. No entanto, essa impressão não é generalizada, como o atestam as preocupações dos próprios teóricos do “multissetorialismo” com a permanência do que chamam de “facciosismo igualitarista”, que estaria a impedir a efetivação da pretendida unidade transclassista. O que sem dúvida ocorreu, desde meados dos anos 1990, foi um claro esforço de neutralização das lutas ambientais, empreendido por organismos multilaterais, empresas poluidoras e governos. Este esforço foi, por certo, bastante bem sucedido junto ao “ecologismo desenraizado”, desprovido de vínculos com os movimentos sociais⁶. Não foi, porém, de modo algum, bem sucedido junto ao ecologismo crítico e socialmente enraizado, cuja elaboração e ação deram mostras de um desenvolvimento lento embora consistente, neste mesmo período. Uma mostra deste desenvolvimento foi, por exemplo, a vitória, ainda que temporária, da Rede Alerta contra o Deserto Verde, reunindo entidades ambientalistas, sindicatos rurais e urbanos, associações profissionais, movimento indígena e Movimento dos Sem Terra, que conseguiu fazer aprovar, em 2002, uma lei estadual impedindo a continuidade da expansão da monocultura do eucalipto no estado do Espírito Santo, enquanto não viesse a ser elaborado o Zoneamento Agro-ecológico do estado. Nesta

mesma direção apontou também a criação, em 2001, da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que pretende organizar a luta contra “a lógica perversa de um sistema de produção, de ocupação do solo, de destruição de ecossistemas, de alocação espacial de processos poluentes, que penaliza as condições de saúde da população trabalhadora, moradora de bairros pobres e excluída pelos grandes projetos de desenvolvimento”⁷. O MST, por sua vez, adentrou o campo ambiental evocando que a função social da terra requer práticas de conservação de sua fertilidade “para as gerações futuras”, justificando a derrubada de eucaliptais em áreas ditas “produtivas”, acusando as monoculturas de empobrecer os solos; também engajou-se no combate à transgenia, denunciando o risco de contaminação e de perda de autonomia do pequeno produtor, assim o como combateu a lei de patentes incorporando os princípios de que “não se deve privatizar as formas de vida”.

Os sujeitos das lutas por justiça ambiental denunciam, portanto, a vigência, por parte das forças hegemônicas, de uma “irresponsabilidade organizada”, como diria Ulrich Beck (1992), mas “classista”, posto que os grandes projetos hidrelétricos, minerários e monoculturas expropriam de seus recursos aos grupos sociais mais despossuídos, ao mesmo tempo em que pouca atenção governamental é destinada a proteger ou remediar o risco sofrido particularmente por grupos sociais menos capazes de se afastar das fontes de risco –trabalhadores e moradores pobres residindo ou trabalhando em áreas onde o preço da terra é mais barato para o mercado, apoiado na omissão política do Estado– quando não os próprios projetos financiados e promovidos pelo Estado destinam-se sistematicamente às atividades geradoras de risco.

Assim é que a idéia, sustentada por alguns adeptos do chamado “ambientalismo multissetorial”, de que teria ocorrido uma “substituição” do ecologismo “de combate” pelo “de resultados” ignora o processo crescente de ambientalização das lutas sociais. Mas ela reflete também a intenção, presente na estratégia dos organismos multilaterais, de alguns governos e empresas poluidoras, de “confundir”, como assinalado acima por um ambientalista crítico, os “espaços de prestação de serviços com os espaços de participação política”. Pois, como vimos, a presença do “ecologismo de resultados” no mercado de consultorias não impediu que seus promotores disputassem legitimidade no campo ideológico, procurando apresentar-se como mais aptos a obter “efetivas vitórias políticas” e, supostamente, “fazer pagar aos empresários” por seus impactos danosos. A busca desta legitimidade deu-se no interior da figura híbrida do que poderíamos chamar de um verdadeiro “mercado da participação”, cujos negócios se foram ampliando, tanto mais quanto alguns de seus agentes tenham conseguido se apresentar como representantes da sociedade e não como prestadores de serviços remunerados.

Em contrapartida, muitos movimentos sociais construíram, a seu modo, neste período, aquilo que constitui a dimensão ambiental específica às suas lutas, convergindo na denúncia da desigualdade ambiental⁸ própria a um modelo de desenvolvimento que baseia-se na expropriação das condições de existência de trabalhadores urbanos, grupos camponeses, povos e comunidades tradicionais (Acselrad, 2010). Estes atores sociais entendem-se, assim, como sujeitos

da resistência à produção de desigualdades ambientais; eles emergem, por um lado, entre as vítimas da contaminação de espaços não diretamente produtivos –entorno de grandes empreendimentos portadores de risco e periferias das cidades onde são localizadas instalações ambientalmente indesejáveis como lixões, oleodutos, depósitos de lixo tóxico, etc. A desigualdade ambiental que caracteriza sua condição social e locacional resultaria, neste caso, da menor capacidade dos moradores destas periferias escaparem das fontes de risco e se fazerem ouvir nas esferas decisórias; por vezes pode ocorrer mesmo algum consentimento por parte dos setores menos organizados destas comunidades –dada a carência de emprego, renda e serviços públicos de saúde e educação– na expectativa de que tais empreendimentos tragam algum tipo de benefício localizado, via de regra prometido. Outros sujeitos da resistência constituem-se entre as vítimas da contaminação “produtiva” interna aos ambientes de trabalho industrial e agrícola, pela qual interesses econômicos lucram com a degradação dos corpos dos trabalhadores, via desinformação, contra-informação, mascaramento de informação e chantagem do emprego. Um terceiro grupo de sujeitos encontra-se entre as vítimas da despossessão de recursos ambientais –fertilidade dos solos, recursos hídricos e genéticos, assim como territórios essenciais à reprodução identitária de comunidades e grupos sócio-culturais– por grandes projetos infra-estruturais e empreendimentos produtivos de grandes corporações que desestabilizam as práticas espaciais de grupos camponeses, povos e comunidades tradicionais.

A crítica dos movimentos sociais incide, pois, tanto a montante e a jusante dos processos produtivos, como também no lócus mesmo da produção de mercadorias

A crítica dos movimentos sociais incide, pois, tanto a montante e a jusante dos processos produtivos, como também no lócus mesmo da produção de mercadorias. Neste âmbito, a leitura da questão ambiental por grupos operários pode levar, inclusive, a um questionamento da fronteira jurídica entre o interior e o exterior das unidades produtivas, oferecendo novas possibilidades de alianças entre trabalhadores que lidam com substâncias perigosas e moradores do entorno das unidades poluentes⁹.

As lutas por justiça ambiental, tal como caracterizadas no caso brasileiro, têm combinado assim: a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos –de comunidades tradicionais situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas e de mercado–; a defesa dos direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação sócio-territorial e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado e sancionadas pelo Estado; a defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado. Cabe ressaltar igualmente, que, ao lutar pelo respeito à função social da terra, das águas, da atmosfera e dos sistemas vivos, estes sujeitos não deixam

de buscar assegurar igualmente –por formas concretas e socialmente definidas, alheias às retóricas genéricas como aquelas presentes no relatório Brundtland– a defesa dos direitos das populações futuras.

Bibliografia

- Acselrad, Henri 2010 “Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento de justiça ambiental” em *Estudos Avançados* (São Paulo) Vol. 24, N° 68, janeiro-abril.
- Acselrad, Henri; Mello, Cecília e Bezerra Gustavo das Neves 2008 *O que é Justiça Ambiental* (Rio de Janeiro: Garamond).
- Alexandre, Agripa Faria 2000 *A Perda a Radicalidade do Movimento Ambientalista Brasileiro – uma contribuição à crítica do movimento* (Florianópolis: Edifurb/UFSC).
- Arnt, R. A. e Schwartzman, S. 1992 *S.Um Artífício Orgânico – transição na Amazônia e ambientalismo (1985-1990)* (Rio de Janeiro: Rocco).
- Beck, Ulrich 1992 “From Industrial Society to Risk Society: questions of survival, social structure and ecological enlightenment” em *Theory, Culture & Society*, V. 9.
- Bourdieu, Pierre 1994 “Qué es lo que hace una clase social. Acerca de la existencia teórica y práctica de las clases” em *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos) N° 89, março-abril.
- Calderoni, E. 2006 *Anexos, Trabalho de Campo* (São Paulo: PUC-SP) mimeo.
- Costa Ferreira, Lúcia da 1997 “Confronto e Legitimação” em *Ambientalismo no Brasil. Passado, presente, futuro* (São Paulo: SMA/ISA).
- Costa Ferreira, Lúcia da 1999 “Conflitos sociais contemporâneos: considerações sobre o ambientalismo brasileiro” em *Ambiente & Sociedade* Ano II, N° 5.
- Costa Ferreira, Lúcia da 2000 “Contemporary social conflicts: considerations about the Brazilian environmentalism” (Rio de Janeiro: International Sociology Association) mimeo.
- Crespo, Samyra 1995 “Verdes que Amadurecem: os desafios da especialização e da profissionalização das organizações e dos militantes ambientalistas no Brasil” apresentado no XIX Encontro da ANPOCS (Caxambu).
- Crespo, Samyra 1997 “Do ativismo à institucionalização” em *Ambientalismo no Brasil - passado, presente, futuro* (São Paulo: ISA).
- Instituto Socioambiental (ISA) 1997 *Ambientalismo no Brasil - passado, presente, futuro* (São Paulo).
- Leis, Héctor 1994 “Sociedade Civil e Meio Ambiente” em *Diretrizes de Ação para o meio Ambiente no Brasil, Relatório Final* (Brasília: Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados).
- Loureiro, C. 2000 “A Assembléia Permanente de entidades de Defesa do Meio Ambiente-RJ e o Pensamento de Esquerda: análise crítica do coletivo organizado a partir do depoimento de suas históricas lideranças históricas estaduais”, Tese de Doutorado, Escola de Serviço Social-UFRJ, Rio de Janeiro.

- Nogueira, D. 2005 *Perigo: a contaminação da Shell em Paulínia*, Trabalho de conclusão de curso em Jornalismo, PUC-Campinas, Campinas.
- Silva-Sanchez, Solange S. 2000 *Cidadania Ambiental: novos direitos no Brasil* (São Paulo: Humanitas e Annablume).
- Viola, E., e Boeira, S 1990 "A Emergência do Ambientalismo Complexo-multissetorial no Brasil nos anos 80" em *IV Seminário sobre Universidade e meio Ambiente* (Florianópolis) novembro.
- Viola, E., e Leis, H. 1992 "O Ambientalismo Multissetorial no Brasil Para Além da Rio-92: O desafio de uma estratégia globalista viável", Seminário Diretrizes de Ação para o Meio Ambiente no Brasil, Câmara dos Deputados, janeiro, mimeo.

Notas

1 A noção de "movimento ambientalista" tem sido evocada, no Brasil, para designar um espaço social diversificado de circulação de discursos e práticas associados à "proteção ambiental", configurando uma nebulosa associativa formada por um conjunto diversificado de organizações com diferentes graus de estruturação formal, desde ONGs e representações de entidades ambientalistas internacionais a "seções ambientais" de organizações não especificamente "ambientalistas" e grupos de base com existência associada a conjunturas específicas.

2 Na perspectiva de Viola e Leis, está em questão o que eles consideram uma "visão de mundo ambientalista", portadora de "valores pós-materialistas". No que é apresentado em seus trabalhos como "ambientalismo" estariam mais propriamente delineados os traços de um corpo doutrinário, da emergência de um tipo de pensamento dotado de certa uma unidade que não corresponde às formas concretas pelas quais a questão ambiental veio sendo construída por atores sociais dotados de determinada historicidade e que se situam de forma relacional no espaço dos discursos e das práticas. Ou, de outro modo, tal noção de "ambientalismo" não dá conta de todas as mediações que fazem com que uma tal "visão de mundo", ou elementos dela, em uma trajetória complexa, seja reinterpretada, reapropriada e integrada a discursos e práticas concretos e contraditórios dos atores sociais.

3 Não é demais lembrar que a solução desta crise, nesta perspectiva, pode terminar comportando uma abertura para soluções autoritárias (de ordem cientista) ou meritocráticas (à maneira da chamada "Ética do Bote Salva-vidas" do biólogo Garret Hardin).

4 Em 1992, os promotores da concepção unitarista da questão ambiental não hesitavam em afirmar: "Hoje são poucos os que colocam em dúvida o caráter multissetorial do ambientalismo brasileiro, embora quando ele começou a manifestar-se isto não era percebido assim pelos membros mais conspí-

cuos do ambientalismo strictu sensu" (Viola e Leis, 1992: p. 34).

5 Cabe assinalar, nesta assertiva, uma identificação algo equivocada entre erro sociológico e escolha política de atores sociais. Ou seja, seria o caso, antes, de ressaltar que o verdadeiro erro sociológico seria o de não considerar o trabalho de classificação mais ou menos abrangente efetuado pelos próprios atores sociais dos diferentes ambientalismo.

6 Arnt e Schwartzman (1992: 125) lembram que "no ambiente social rarefeito, o alcance da crítica ecológica é curto". "A idéia ambientalista desenraizada revela a verdade torta de sua falsidade: a modernização que exprime é a do sistema que obedece aos interesses que contempla".

7 *Declaração de Fundação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental*, fundada na cidade de Niterói em setembro de 2001.

8 Entende-se por desigualdade ambiental o estado da distribuição de benefícios e males ambientais do desenvolvimento resultante da operação dos mecanismos pelos quais destina-se a maior carga dos danos ambientais a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, povos e comunidades tradicionais e grupos étnicos marginalizados e mais vulneráveis (Acselrad, Mello e Bezerra: 2008).

9 Depoimentos de trabalhadores mobilizados em lutas ambientais mostram as condições restritivas do acesso à informação e ao reconhecimento dos riscos ambientais na indústria. Eis como se exprimiu um operário em luta contra a poluição no trabalho industrial: "Se eu não tivesse sido contaminado, ainda estaria trabalhando, sem consciência nem participação no processo político, sem acesso ao conhecimento"; entrevista com membro da ACPO – Associação de Combate aos Poluentes– (Calderoni: 2006). Em relação aos riscos de acidentes, afirma um diretor da ATESEQ – Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas–: "Nós estávamos muito bem treinados para não morrer dentro da fábrica", (Nogueira, 2005: 102).

Los dolores de *Nuestra América* y la condición neocolonial

Extractivismo y biopolítica de la expropiación

HORACIO MACHADO ARÁOZ

Docente de la Universidad Nacional de Catamarca e integrante del Laboratorio Tramas, del Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades de la UNCA. Coordinador del Espacio de Investigación Acción Participativa de la Asociación Civil Be. Pe. Integrante de la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (ASANOA), de Catamarca, y de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Resumen

Horacio Machado inspecciona detalladamente los elementos del actual sistema capitalista, en clave neocolonial, para dar cuenta del auge que tiene actualmente el modelo extractivista en las economías latinoamericanas. Para el autor, la lógica imperial colonial del extractivismo se ha instalado en nuestra región como el resultado de un proceso de largo aliento, que comenzó en los años setenta con la aniquilación de los proyectos “nacional populistas” y continuó con la imposición de la deuda externa, los ajustes estructurales y con la ola de privatizaciones y desregulación financiera durante los años ochenta y noventa. Así, el autor propone estudiar dicha lógica extractivista tomando en cuenta sus implicaciones, no sólo económicas, sino biopolíticas; sin olvidar las graves consecuencias que tienen sobre las comunidades y sus territorios.

Abstract

Horacio Machado explores the components of the current capitalist system in great depth, and from a neocolonial perspective, to account for the extractivist model boom in Latin American economies. According to Machado, the imperial and colonial logic has taken hold in our region as a result of a long-drawn process which started in the 1970s with the annihilation of “national and populist” projects, and was followed by the imposition of foreign debt policies, structural adjustments, the wave of privatisations and financial deregulation during the 1980s and 1990s. Thus, Machado examines this extractivist logic considering both the economic and bio-political implications, with special attention to the severe consequences for communities and their territories.

Palabras clave

Neoliberalismo, extractivismo, desastre ambiental, neocolonialismo.

Key words

Neoliberalism, extractivism, environmental disaster, neocolonialism.

Cómo citar este artículo

Machado Aráoz, Horacio 2012 "Los dolores de *Nuestra América* y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

La particularidad del cuerpo no se puede entender independientemente de su inserción en los procesos socioecológicos. [...] Uno de esos determinantes clave es el proceso de trabajo, y la globalización describe cómo ese proceso está siendo modelado por fuerzas políticas y económicas y por fuerzas culturales asociadas de maneras específicas. De ahí se deduce que el cuerpo no se puede entender, de manera teórica o empírica, sin comprender la globalización. A la inversa, sin embargo, reducida a sus determinaciones más simples, la globalización trata de las relaciones socioespaciales existentes entre miles de millones de individuos. Aquí radica la conexión básica que se puede establecer entre dos discursos que generalmente se mantienen segregados en detrimento de ambos (David Harvey, 2003:29).

Tras la crisis estructural de los años setenta que acabó con el "orden" mundial de posguerra, la vorágine de las políticas neoliberales dio inicio a un drástico proceso de reorganización neocolonial del mundo. La globalización del capital impulsada por las reformas político institucionales –monopólicamente sancionadas por las grandes potencias y verticalmente impuestas al resto del mundo–, involucró una profunda reestructuración de los patrones de dominación y jerarquización social. El neoliberalismo significó, en tal sentido, una verdadera refundación del sistema mundo moderno, colonial, capitalista.

Nuevas formas de explotación y subalternización emergieron, se instalaron y alteraron todos y cada uno de los niveles y ámbitos de la compleja realidad social: el del escenario geopolítico global tanto como el de la infinita diversidad de comunidades locales, atravesando, por cierto, las estructuras de los estados nacionales y las configuraciones regionales preexistentes; el ámbito del universo social objetivado en la institucionalidad de las estructuras políticas, económicas y culturales; y el de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y la esfera de la subjetividad.

Como en sus orígenes, la refundación neoliberal del orden colonial tuvo su espacio socioterritorial privilegiado de experimentación y construcción en América Latina. La recolonización de *Nuestra América* estuvo trágicamente signada por diferentes ciclos de violencia imperialista: la violencia extrema del terrorismo de estado en la década del setenta, que apagó con sangre y fuego los intentos "nacional populistas" de emancipación o, al menos, de "autonomía periférica" ensayados en los años previos; luego por la violencia disciplinadora racionalizadora de la economía de la expropiación, iniciada con la deuda externa y los ajustes estructurales de los años ochenta; prolongada y completada con la ola de privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera y flexibilización laboral de los noventa (Machado, 2010a).

Aquella violencia imperial, desatada por la guerra de conquista neoliberal, rige aún en nuestros días bajo las formas fetichizadas de la fantasía desarrollista que alienta y alimenta la voracidad del extractivismo primario exportador en alza (Gudynas, 2009; Acosta, 2010; Svampa, 2010; Machado, 2010b). Como gravosa herencia de décadas y etapas pasadas, la lógica imperial colonial del extractivismo se ha instalado fuertemente sobre América Latina, haciendo de la vasta riqueza y diversidad ecológica de nuestra región uno de los más preciados –y necesarios– botines de guerra en épocas de “crisis ambiental global” y de “escasez crítica de recursos naturales”. Una vez más, con la complicidad activa de las élites locales, los renovados designios imperiales coloniales han dirigido su violencia explotadora hacia las poblaciones, territorios y recursos de nuestra América para convertirla –como otras tantas veces en la historia–, en reserva de subsidios ecológicos “destinada” a sustentar la asimétrica voracidad consumista del mundo del capital (Machado, 2010a; 2010b).

El extractivismo expresa su eficacia transformadora (colonizadora) en la expansión de las fronteras territoriales del capital, así como en la reversión de la matriz socioproductiva de la región

Como rostro invisible del imperialismo de nuestro tiempo, el extractivismo avanza a un ritmo frenético, al compás del renovado auge de las explotaciones petroleras y mineras, con la expansión de la superficie territorial ocupada por monocultivos forestales, forrajeros y del agronegocio en general. Avanza con la intensificación de las capturas pesqueras; la privatización y patentado de las reservas genéticas de biodiversidad en manos de las grandes corporaciones que controlan las “industrias de la vida”; la radicación de fases industriales altamente contaminantes y/o intensivas en agua y energía (fábricas de pasta de celulosa; plantas de aluminio y de concentrado de minerales en general; maquilas textiles, etc.); el diseño y extensión de megainfraestructuras hídricas, viales y energéticas para “viabilizar el destino exportador” de las mencionadas explotaciones (Plan Puebla-Panamá, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Suramericana, IIR-SA); y hasta con la comercialización de los saldos remanentes de “bosques” como bonos de carbono canjeables en el aparentemente ilimitado “mercado mundial”.

El extractivismo expresa su eficacia transformadora (colonizadora) en la expansión de las fronteras territoriales del capital, así como en la reversión de la matriz socioproductiva de la región. Sólo en las dos últimas décadas, los monocultivos forestales y de agronegocios –principalmente de caña, soja y maíz transgénicos– llegaron a ocupar 680 mil km² de la Amazonia, 140 mil km² en Argentina y más de 20 mil km² en Paraguay y Bolivia respectivamente (CEPAL, 2002; Cifuentes, 2006). Por su parte, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras llegó a cubrir el 10% del territorio de la región hacia fines del año 2000: en el caso de Chile, 80 mil km²; en el Perú, 105 mil km²; y en Argentina, 187.500 km² (Cifuentes, 2006).

A la par de la expansión de las superficies territoriales intervenidas por este tipo de megaproyectos, se fue consolidando una profunda reversión en la economía

latinoamericana, caracterizada por la reprimarización, concentración y extranjerización del aparato productivo regional. A medida que avanzaban y se consolidaban grandes núcleos transnacionalizados de extracción de materias primas, fue retrocediendo el perfil industrial de la región y la importancia del mercado interno como factor dinamizador de la economía (Arceo, 2007; Martins, 2005). La exportación de productos primarios pasó a ser la clave de la nueva ecuación macroeconómica de la región, verificándose un virtual “retorno” al siglo XIX. En términos generales, el peso de la exportación de materias primas sobre el total de exportaciones llegó a alrededor del 90% en países como Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia; y a entre el 70 y el 60% en países como Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil (CEPAL, 2010). Las exportaciones de bienes primarios de la región (agricultura, silvicultura y pesca) saltaron de 16.700 millones de dólares en 1990 a 72.250 millones de dólares en 2008, en tanto que las exportaciones de recursos minerales –excepto los hidrocarburos– pasó de 27 mil millones de dólares a más de 140 mil millones de dólares durante el mismo período (CEPAL, 2010).

Esos miles de millones de dólares exportados pueden verse, en términos de la economía ecológica, como miles de millones de toneladas de nutrientes, materia y energía, que se extraen de nuestros suelos y se transfieren para ser procesados y consumidos por otros grupos poblacionales. Se trata de bienes generados y localizados en determinados ecosistemas –el agua, el suelo, el aire, la energía, la biodiversidad–, que son apropiados privadamente y desterritorializados para abastecer dinámicas “económicas” localizadas en otros territorios.

Centrada en el valor de cambio, la mirada “racional” de la economía clásica no puede ver más allá del sistema de precios que asigna el mercado. No puede, por tanto, dimensionar el valor de uso de esos bienes ecosistémicos, ni evaluar la destrucción de la naturaleza que implica esa ingente extracción y transferencia de “recursos”. Muchos menos es capaz de visualizar las abismales desigualdades ecológicas que se producen a través de ese fenomenal flujo de materia que se dibuja en una geografía de la extracción, bastante diferente de la geografía del consumo. Así, la ceguera de la episteme dominante, que anida en los oficialismos del poder (del poder académico, empresarial y gubernamental), alienta el viejo y remanido extractivismo como “nueva” vía al “desarrollo”; profundizando así las desigualdades estructurales y las injusticias históricas, renovando y redefiniendo los dispositivos sistémicos, eco-biopolíticos, de la dominación moderna-colonial-capitalista.

Síntoma de la profunda derrota geopolítica que significó el neoliberalismo para la ola de resistencia del “tercer mundo” en los años sesenta y setenta, los gobiernos de la región –otrora defensores del patrimonio natural, interesados en disputar al capital “extranjero” el control y usufructo de sus riquezas y la soberanía efectiva sobre su territorio–, emergen ahora como sus principales aliados e impulsores. Extrañamente también, el extractivismo del presente parece no tener fronteras ideológicas, abarcando de modo paradójico desde los extremos de la derecha recalcitrante y represiva (Colombia, Honduras, Perú, México) hasta los gobiernos autoproclamados revolucionarios (Venezuela, Ecuador y Bolivia), pasando por derechas “adecentadas” (por caso, Chile) y progresismos tibios (tal y como los actuales gobiernos del Mercosur).

Bajo un ropaje de retóricas antagónicas, gobiernos de uno y otro tinte se empeñan en impulsar los mismos monocromáticos planes “desarrollistas”, unos prometiendo el ingreso al “primer mundo” (del capital); otros la revolución y el “socialismo del siglo XXI”. Algunos en nombre del “desarrollo”, otros en el de la “inclusión social” y la “dignidad”, los distintos gobiernos de la región emprenden nuevamente el (viejo) sueño sacrificial de la modernidad, dando impulso a una nueva era de explotación intensiva de la naturaleza; pero esta vez en una época de decisiva crisis ecológica planetaria, cuando los síntomas de “agotamiento” del mundo se han hecho patentes y las amenazas a la sobrevivencia humana se han instalado definitivamente en el suelo del “realismo” del presente.

Así, los primeros años del siglo XXI encuentran a nuestra América, una vez más, bajo las profundas garras opresivas del imperialismo. Un imperialismo renovado, de nuevo cuño, aunque crónicamente asentado en los gruesos cimientos del colonialismo o colonialidad (Scribano, 2008). En los paisajes renovados del imperialismo de nuestro tiempo, la devastación y el saqueo se confunden con ánimos exitistas de celebración del crecimiento, expansión del consumo, y hasta “recuperación” de históricas conquistas y demandas sociales. Grandes mayorías aglomeradas en megalópolis insustentables, expuestas a diversas formas de violencia y riesgo social y ambiental; poblaciones rurales y urbanas del “interior” también expuestas, fumigadas algunas con glifosato, otras con las nubes tóxicas de voladuras mineras, o con las emanaciones de plantas concentradoras, ingenios o pasteras; muchas, con el agua racionada y la electricidad restringida. Los costos sacrificiales del “desarrollo” dejan sus huellas sobre los territorios y los cuerpos: la deforestación y la ingente pérdida de biodiversidad; la destrucción de ecosistemas enteros; erosión de los suelos y contaminación de fuentes de agua; pérdida de reservas energéticas y de bienes naturales estratégicos; poblaciones enfermas y discapacitadas por contaminantes y etiologías ambientales; erosión de la seguridad hídrica y alimentaria; degradación de las dietas y recorte drástico de los horizontes de vida; e incremento incesante de desplazados y refugiados ambientales. Pese a tales síntomas, la mayoría de nuestra sociedad parece “inmutable” todavía, propiamente insensible frente a las nuevas formas de explotación de nuestros tiempos.

Pero las postales de los nuevos paisajes coloniales no se agotan allí. Como el colonialismo mismo, se presentan insoslayablemente antitéticos. Así, del otro lado, pueblos originarios, comunidades campesinas, estudiantes, trabajadoras y trabajadores, pobladores de los círculos extremos de las periferias internas, artistas, educadoras y educadores y lo que la episteme moderna llama “intelectuales”, se alzan como los nuevos renegados de la “modernidad”. Este heterogéneo coro de voces se aúna para oponerse y denunciar abiertamente esta etapa “desarrollista” del colonialismo. Con sus cuerpos y sus artes toman camiones y cortan rutas; impugnan los “informes de impacto ambiental” de las empresas y todos los demás artilugios del eco-capitalismo tecnocrático; escrachan a funcionarios cómplices y rechazan “leyes ambientales” a la medida de los inversionistas. No demandan “planes sociales” ni “puestos de trabajo”, sino “apenas” el derecho a decidir sobre sus territorios.

Todavía minoritarias, estas poblaciones que resisten este nuevo ciclo de “modernización neocolonial” son vistas con una mezcla de rareza, desconfianza y

aprensión. Frecuentemente ignorados y sistemáticamente descalificados por los grandes medios, y muchas veces perseguidos y reprimidos por sus propios gobiernos “representativos”, estos “nuevos” colectivos emergen como los “bárbaros” de nuestros tiempos, los que se oponen al “desarrollo”; los que, en los territorios militarizados de los gobiernos de derecha, son considerados “terroristas”, y en los de izquierda, fracciones “fundamentalistas” que obstruyen el avance de los procesos revolucionarios.

La expropiación colonial es sistémica y sistemática; es expropiación integral de las energías vitales. Expropiación de la vida como tal, en todas sus formas y en todas sus dimensiones

Extraños escenarios los del colonialismo presente, donde la voluntad imperial se reviste de retórica emancipatoria, donde aún las propias energías revolucionarias no hallan todavía salida al atolladero de la “modernidad” deseada, y las mayorías siguen bajo el hechizo de la fantasía colonial desarrollista esa que precisamente está socavando y horadando las bases materiales, ecológicas y biopolíticas de sus propias posibilidades de futuro. Un futuro otro, necesariamente otro. Radicalmente *otro*.

Los paradojas y perplejidades de los escenarios contemporáneos de Nuestra América dan cuenta de la complejidad del fenómeno colonial. Esta complejidad se manifiesta en la brecha abismal existente entre las formas de ver, pensar y sentir la realidad que se dan en uno y otro bando de los antagonismos coloniales, en los contrastes en los discursos y las lecturas que, de uno y otro lado, se esgrimen sobre los procesos sociopolíticos en curso: para unos, una etapa de promisoría “recuperación”; para otros, una gravosa fase –probablemente la más–, de recolonización de nuestras sociedades.

Tal vez, esa complejidad intrínseca de la dominación colonial sea parte de los “secretos” de su trágica vigencia histórica. Probablemente, la eficacia epistémica y política del imperialismo-colonialismo de nuestros días resida en su capacidad para generar nuevas formas, cada vez más sofisticadas, de ocultar e invisibilizar los dispositivos de la expropiación. Nuevas formas de expropiación que pasan –todavía– desapercibidas para las mayorías sociales, y que sin embargo se sienten con toda crudeza en las subjetividades –individuales y colectivas– que, justamente desde el dolor de la expropiación, se alzan en resistencia.

En las voces de esas subjetividades en resistencia, la expresión “saqueo” alude y sintetiza la lógica práctica de esta nueva arremetida colonial. La lógica del saqueo define y resume, a nuestro entender, la esencia del colonialismo: está en sus raíces históricas. El colonialismo del presente es igualmente saqueo, sólo que bajo nuevos modos de producción. Una hermenéutica de ese grito decolonial –¡saqueo!– puede ayudarnos en la comprensión de la naturaleza y alcance de los dispositivos expropiatorios del presente.

Colonialismo/colonialidad y naturaleza de la expropiación

El primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación: qué queremos hacer nosotros como comunidad. Lamentablemente, a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera [...]. Somos una comunidad membrillera, aceitera, dulcera [...]. Al principio nos catalogaban como ‘los loquitos’. Después ya éramos los sediciosos, terroristas, fundamentalistas, los que no queríamos el progreso... Pero después el pueblo empezó a despertar [...]. La gente empezó a ver, a escuchar, a tomar conciencia. La comunidad dice “¡ya basta!” (Dito Salas, Autoconvocados de Andalgalá, 2005).

Los conflictos que enfrentan las comunidades y poblaciones frente a las transnacionales en estas últimas décadas de expansión explosiva no siempre son conflictos ambientales en el estricto sentido de la palabra. Las comunidades son agredidas multidimensionalmente: sufren usurpación, expropiación coactiva de tierras, saqueo y degradación de recursos, desplazamientos forzados; espacios que luego terminan militarizados, contaminados, agotadas sus fuentes de agua y canales de riego [...]. Son desmembrados, divididos y enfrentados entre sí al interior de las comunidades [...] (Mario Palacios Panéz, Presidente de CONACAMI, Perú, 2009).

El colonialismo es saqueo, el saqueo es expropiación. La lógica práctica de la expropiación condensa –en toda su complejidad– la realidad histórico-geográfica del colonialismo/colonialidad. El colonialismo, como tal, es violencia expropiatoria que se ejerce, literalmente, sobre el mundo de la vida. Se trata de un fenómeno radical, que opera desde los cimientos mismos de la realidad. La expropiación colonial es sistémica y sistemática; es expropiación integral de las energías vitales. Expropiación de la vida como tal, en todas sus formas y en todas sus dimensiones.

Como hecho fundacional y generador de realidad, productor de un “nuevo mundo” (el mundo colonial), el colonialismo es violencia brutal expropiatoria, que se ejerce primeramente sobre los componentes esenciales de la vida: los territorios y los cuerpos. Elementos básicos, materias primas de la realidad social, los territorios y los cuerpos se constituyen como los “blancos” y objetivos primeros del saqueo. La violencia colonial originaria se propone, ante todo, producir una separación radical entre determinados cuerpos de sus respectivos territorios.

Es preciso comprender en qué medida la vida misma emerge y depende de los flujos existenciales que anudan vitalmente a los territorios y los cuerpos para dimensionar en toda su complejidad los alcances y efectos de este originario acto expropiatorio. El territorio es el espacio geográfico estructurado por y a partir del trabajo, que es energía psíquica, corporal y social, inseparablemente material y simbólica. El proceso de trabajo se apropia, de-signa y transforma el espacio para producir, de allí en más, el territorio, el espacio habitado (Santos, 1996; Porto-Gonçalves, 2006). No hay territorio antes o por afuera de esa relación pragmática que se entabla entre sujetos colaborando en y con un determinado espacio geográfico, para así convertirlo en “entorno propio” –apropiado. Es decir, no hay territorio sin sujeto político que lo constituya como tal. Pero, de la misma manera, no hay sujeto sin la materialidad del cuerpo-individuo viviente, cuyo proceso de vida, a su vez, no puede prescindir de los flujos energéticos que lo atan a un determinado espacio geofísico biológico proveedor. De tal modo, hay un proceso mutuamente constitutivo y constituyente entre los flujos energéticos que van de los cuerpos a los territorios en forma de trabajo, y que retorna de los territorios a los cuerpos en

forma de alimentos. La vida misma emerge, por tanto, de estos flujos y procesos vitales que conectan unos cuerpos a ciertos territorios.

La escisión que la expropiación colonial provoca en este fluir es una expropiación dialécticamente productiva/destructiva. Opera aniquilando un mundo-de-vida preexistente, instituyendo, simultáneamente, un "mundo nuevo". La eficacia histórica de la dominación colonial reposa justamente en la capacidad performativa que la violencia expropiatoria tiene y ejerce recíprocamente sobre los cuerpos y los territorios. Violencia performativa con la capacidad de diseñar territorios por y mediante la "inversión": inversión del capital que opera la sustitución radical del mundo-de-vida para crear un entorno completamente hecho a su imagen y semejanza, un mundo de, por y para el capital. La "inversión" produce territorios "nuevos", configurados funcionalmente para ajustarse a los requerimientos del capital, es decir, para ser territorios eficientes, productivos, rentables, competitivos. En suma, territorios de acumulación.

No obstante, debido a los flujos existenciales que los atan a los cuerpos, no hay territorios competitivos sin poblaciones igualmente estructuradas bajo esa misma lógica. Y el capital, a la vez que ejerce su capacidad performativa sobre los territorios, moldea también los cuerpos que lo habitan, tanto en su interioridad como en su exterioridad. Así, inversión colonial es igual al saqueo violento de las energías corporales, es violencia performativa que se ejerce sobre la complejidad material y simbólica, individual y social que son los cuerpos. Formatea su capacidad de trabajo, sus conocimientos y "competencias", pero también, y de forma decisiva, sus emociones y sentimientos. La capacidad destructiva/productiva del capital coloniza los deseos de los cuerpos, para convertirlos así en sujetos sujetos a la lógica de la inversión.

Desde esta mirada podemos esbozar una hermenéutica de la noción actual de saqueo, que los movimientos socioterritoriales de Nuestra América ponen como grito de resistencia en el centro de la agenda política contemporánea. El "no al saqueo" suena como grito decolonial que, en su grave sonoridad, denuncia la profundidad, intensidad y extensión de los alcances y efectos de la expropiación colonial de nuestros días. Denuncia las expropiaciones del presente como expropiaciones de vasto alcance. Dice "saqueo" como acto y proceso expropiatorio complejo. Es un fenómeno inseparablemente ecológico, económico, político, cultural, semiótico, epistémico, biopolítico. Da cuenta de la expropiación geográfica e histórica, del arrebato de los territorios y los bienes naturales, así como de la colonización de los cuerpos y las almas.

Contrariamente a la desconsideración de las "cuestiones materiales" que se suele hallar en los sofisticados desarrollos de ciertas teorías poscoloniales, excedidas de posmodernismos y posmarxismos, la dominación colonial es básicamente expropiación geográfica, ecológica, económica, biopolítica. No se llega a la esfera de la colonialidad sin la mediación de un proceso de apropiación/expropiación territorial. Es cierto, el capital impone nuevos lenguajes, nuevos códigos y sentidos, pero controla y dispone materialmente de los territorios y los cuerpos.

Lo que estamos viendo y viviendo en América Latina es precisamente un proceso de expropiación, en primer lugar, geográfica ecológica. Es decir, son los flujos del capital los que usan y disponen del espacio geográfico, los que destruyen las

viejas territorialidades e imponen las nuevas, los “territorios en red”, fragmentos locales verticalmente subordinados a cadenas de valor diseñadas y controladas por el capital transnacional. La “radicación de inversiones” involucra un proceso de reapropiación y resignificación total del espacio geográfico: el espacio local pasa a ser un vector más de la “economía-mundo”, y la producción explotación que da lugar a esa radicación de la inversión provoca una alteración completa de las formas locales de valoración, ocupación y uso del espacio. Así, el territorio local pierde sus huellas comunales y pasa a ser “territorio mundo”, fragmento de un complejo productivo global: ya minero, ya pastero, ya sojero, ya forestal, ya turístico, ya “reserva natural”. Nuevas infraestructuras y tecnologías alteran los flujos, la estructura y la dinámica del espacio geográfico. Ante todo, las mega-infraestructuras que precisan construir la “conectividad” (global vertical) del territorio (Santos, 1996). A medida que el territorio se conecta cada vez más a los flujos de la economía-mundo, se torna –recíprocamente– más extraño a los circuitos, formas y usos locales preexistentes. Las megainfraestructuras cambian la morfología y la estructura de los territorios, intervienen y modifican completamente los paisajes. Crean paisajes invertidos. Las poblaciones locales asisten a la implantación de un territorio nuevo, extraño; expropiado. Apropiado por y para la inversión.

Ahora bien, lo que define la radicación de la inversión es la localización de determinados “recursos naturales”. Objetos de deseo, recursos requeridos por el poder imperial para sostener la dinámica de ese tal poder. Recursos energéticos vitales, nutrientes y bienes ecosistémicos que son arrancados de sus entornos para ser dispuestos como *commodities* en y para el mercado mundial. La inversión viene con su mirada selectiva a extraer agua, fertilidad del suelo, minerales, hidrocarburos, proteínas, oxígeno, germoplasma, diversidad biológica. Se trata de una expropiación propiamente ecológica: el interés selectivo de la inversión opera destruyendo, en el proceso extractivo, la unidad estructural-funcional-convivencial que con-forma los ecosistemas locales y regionales. El extractivismo provoca un literal desgarramiento de los territorios, en tanto entornos proveedores de bienes y nutrientes. Así, la expropiación ecológica es expropiación de la vida en sus mismas bases naturales, es expropiación de las fuentes y medios de vida que hacen materialmente posible la existencia. Sin esas fuentes y medios de vida, los cuerpos se ven carentes de las energías que hacen posible su hacer, expropiados de sí en la raíz misma de su ser, que es el obrar. La expropiación ecológica es expropiación de los “recursos” que nos hacen “cuerpos”, y es expropiación de la capacidad de obrar de esos cuerpos. Desgarramiento simétricamente territorial-corporal que está, por tanto, en la base de la dominación biopolítica.

La expropiación ecológica es también, inevitablemente, expropiación económica, en múltiples sentidos. Tanto en el plano del mundo hegemónico de la economía clásica como en el de la economía ecológica (Leff, 1994; Naredo, 2006). La expropiación económica es saqueo de recursos, apropiación de plusvalía, acumulación extractiva de valores de cambio, y acumulación por desposesión (Harvey, 2004; 2007). Con la inversión, una ingente masa de activos físicos y materiales transmuta de propietarios y son creados entornos de “ganancias extraordinarias” para y por la explotación extractiva de riquezas naturales. Las grandes corporaciones transnacionales son, por lo general, el sujeto político clave de

este fenomenal proceso de apropiación-extracción y transferencia de recursos ecológicos económicos.

A la mencionada plusvalía ecológica que se extrae mediante la apropiación y transferencia de bienes y servicios ambientales (valores ecológicos que se incluyen en el precio de los *commodities*), se suma la plusvalía social que se extrae a través de la explotación de la fuerza de trabajo y la transferencia de la renta financiera. Pero las extraordinarias tasas de ganancia que acumulan las megaempresas que operan estos nuevos dispositivos extractivos son un indicador muy parcial y bastante deficitario del proceso de expropiación económica que acontece. Es que el capital, al disponer del territorio y los medios de vida, dispone también inexorablemente de los medios de trabajo. Las poblaciones locales se ven expropiadas de sus fuentes y medios de trabajo: pasan a ser mano de obra, de ahora en más, puesta en disponibilidad por y para el capital extractivo que altera la economía local en su conjunto, integralmente. El capital transforma medios de trabajo y escala de precios, produce una devaluación general de determinadas prácticas laborales-económicas, productos, bienes y usos, y revalúa fuertemente otros. Impone nuevos patrones de consumo y nuevas formas de explotación (“gestión de recursos humanos”). Los cuerpos, como fuerza de trabajo, pasan a ser reexaminados por el nuevo mercado laboral que se abre: ciertas capacidades, conocimientos y aptitudes pierden valor, se devalúan y afectan su “*empleabilidad*”; otras, en cambio, se cotizan bastante bien.

En conjunto, la población local se ve completamente extrañada de su propia base de sustentación material; expropiada de sus medios de vida, de sus fuentes y formas de trabajo; los modos de uso y de producción; la tecnología; los conocimientos y aptitudes; los modos de consumo y las formas de asignación de valor a las cosas y a las prácticas. Todo se ve completamente alterado, colonizado por las nuevas megainversiones que se “radican” en los territorios del saqueo. Asimismo, desde este punto de vista, la expropiación económica es, insoslayablemente, expropiación cultural. No hay ni puede haber valorización del capital sin la creación de un entorno cultural apropiado. La lógica del capital anida en las prácticas sociales consideradas integralmente, como totalidad de sentido. Así, es posible visualizar que no hay expropiación de los medios de vida y del trabajo sin una radical transformación-adaptación-sujeción de las formas de vida, es decir, de las culturas. Los nuevos dispositivos de subalternización del capital crean modalidades sumamente complejas y totalizantes de “*disponibilización*” de las comunidades. La radicación de la inversión, allí donde se asienta, crea comunidades completamente nuevas; comunidades que pasarán de allí en adelante a identificarse con la “*explotación estrella*”, en función de la cual gira toda la vida del “pueblo”. Será una comunidad “*sojera*”, o “*pastera*”, o tal vez “*minera*”. Porque es esa explotación la que “*da trabajo*”, la que “*paga*” impuestos, la que “*provee*” de servicios públicos, la que “*aporta*” recursos para los clubes, las escuelas, los hospitales y los templos.

Con los tentáculos de la “*responsabilidad social empresarial*”, las corporaciones que operan los mega emprendimientos extractivos colonizan hasta los aspectos más íntimos de la vida de las comunidades; invaden la cotidianeidad de la vida y crean un imaginario estructurado desde la centralidad de dicha explotación. Lo hacen de modo tal que se vuelve difícil imaginar la vida de la comunidad sin

esa explotación. Hasta, paradójicamente, la recreación ritual de las festividades y costumbres típicas de los lugares son completamente resignificadas y usadas como medios de colonización cultural por y a través del *sponsorio* que proveen las empresas.

Nuevas prácticas, nuevas formas de vida, nuevas mentalidades. Nuevas formas de “definirse e identificarse” como comunidad. El saqueo –territorial, ecológico, económico– es, correlativamente, un proceso de expropiación cultural. Y como la cultura es la forma de habitar y significar la historia, la expropiación cultural acontece junto a un proceso de expropiación del tiempo; del tiempo histórico y del tiempo cotidiano. La expropiación del tiempo histórico tiene que ver con la recodificación del pasado, el presente y el futuro de la comunidad intervenida. La expropiación del pasado es una faceta de la colonización de la identidad: la radiación del capital requiere –como se dijo– una plena identificación de la población con la explotación de que se trate, ya sea agrícola, forestal, turística o minera. El perfil productivo del territorio local que el capital precisa explotar se convierte, se recodifica como “destino manifiesto” del lugar, como “identidad histórica” de la población: “siempre fuimos un pueblo minero; o turístico; o agrícola”. La expropiación histórica es el presente que resignifica el pasado y que expropia literalmente las posibilidades de futuro. Al horadar la base ecológica de sustentación de los lugares, –agotando los nutrientes, contaminando las aguas, destruyendo cuencas y erosionando la biodiversidad– el extractivismo del presente es disposición y expropiación del futuro de esas colectividades-territorialidades.

La expropiación del tiempo cotidiano es, en cambio, la colonización del ritmo de la vida local; una reconfiguración íntegra de la cronología de las prácticas. Y es que, para los tiempos del capital global, todos los ritmos locales son demasiado lentos, demasiado cansinos. El carácter de una población atrasada es precisamente aquel donde los tiempos de la gente nunca llegan a estar “a la altura” del tiempo de los negocios. La incesante aceleración de la rotación del capital interviene y altera los tiempos de la vida cotidiana local. Exige una correlativa sincronización de las prácticas, de los modos y los usos locales, para así poder ser territorios-comunidades competitivos, “en desarrollo”. Porque el subdesarrollo sigue siendo atraso; y el atraso es una variable temporal.

Forma emblemática de representación evolucionista del tiempo, el tiempo del capital se mide por y a través del “conocimiento”. La historia es progreso y este es avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Por eso, otra dimensión insoslayable del saqueo es la de la expropiación epistémica.

Se trata de una expropiación de los saberes y conocimientos locales. En realidad hay una recolonización que opera en el ámbito del conocimiento. Los saberes y conocimientos que rigen y regulan la vida dentro del territorio se ven profundamente trastocados, alterados. El desembarco de grandes capitales, la “radicación de inversiones”, va necesariamente acompañado –y viabilizado– por la correlativa imposición de una discursividad tecnocientífica sobre la naturaleza; sobre la naturaleza exterior (tierra-territorios-recursos naturales) tanto como sobre la naturaleza interior (cuerpos-fuerza de trabajo). En nuestros días, la colonización epistémica opera mediante la implantación de toda la institucionalidad desarrollada al amparo del ambientalismo tecnocrático-capitalista contemporáneo, el del mundo de

los estudios de impacto ambiental, las Normas ISO, y los protocolos universales de manejo de riesgos, planes de contingencia y accidentología, etcétera.

La expropiación epistémica da cuenta de los movimientos de sustitución de saberes y modificación del sistema de valoración social de los mismos; y con ello, de la sustitución y valoración asimétrica de los sujetos portadores de esos saberes. Los saberes locales se ven desplazados, devaluados y hasta sustituidos por los saberes expertos. El conocimiento técnico sustituye y coloniza los espacios socioterritoriales intervenidos por el capital. Con sus ejércitos de “especialistas” en disciplinas cada vez más específicas, los expertos crean un nuevo entorno epistémico: un nuevo régimen de producción de verdad.

Esos mismos saberes expertos son los que, además, están ligados a los dispositivos epistémicos de “limpieza” de la expropiación, es decir, los saberes jurídicos que borran las huellas delictivas de las empresas y los funcionarios. Estos construyen el estado de impunidad en el que precisan operar, elaborando las leyes que regirán el nuevo “entorno de negocio” y manejando diestramente los artilugios *juridicistas* ante cualquier eventual proceso judicial emergente. Saberes expertos dispuestos a mostrar que las empresas siempre operan dentro de la ley. Conocimientos científicos en el campo de la economía para operar el “borramiento” del saqueo, para mostrar científicamente las “conveniencias económicas” de los proyectos: cómo “aportan” a la economía local, y cuán sustentables son como “generadores” de fuentes de ingresos futuros. Conocimientos expertos en el campo propiamente “ambiental” para operar el mismo mecanismo en el caso de la contaminación; para demostrar científicamente que las “explotaciones modernas y con tecnología de punta” han reducido significativamente todos los “costos ambientales”: reducción de agua y energía por unidad de producto, reducción y hasta tratamiento de efluentes, etc. Más todavía, los programas ambientales que las empresas realizan (cursos de capacitación ambiental para las poblaciones locales, apoyos a programas de tratamiento de residuos, planes de forestación y más) hacen que el ambiente intervenido no sólo “no sufra” los efectos de la contaminación, sino que queda en mejores condiciones. Son los técnicos y expertos –reclutados indistintamente en esferas académicas, empleados en consultoras, empresas, organismos oficiales– los que “saben” y los que dicen si hay o no contaminación; si hay o no impacto económico; si hay o no delito. Frente a ellos, los saberes de las comunidades, de campesinas y campesinos, indígenas, simples vecinas y vecinos de a pie, de los habitantes de los territorios intervenidos, no valen, no cuentan. Las poblaciones locales directamente no saben, los que realmente saben son los técnicos contratados. Expropiación epistémica.

Por último, como corolario de todas las expropiaciones, la noción de saqueo alude a la expropiación (bio)política que acontece a las comunidades sometidas a la lógica de la inversión, del extractivismo. La expropiación política tiene, también, múltiples dimensiones. En la superficie de la realidad político-institucional, la expropiación política se manifiesta como “secuestro de derechos” y “secuestro de la democracia”. Los derechos de las poblaciones intervenidas pasan a ser subalternizados en función de los requerimientos legales y materiales de las inversiones. El ámbito del ejercicio de los derechos ciudadanos se restringe a la escueta órbita de aquellos que no afecten el clima de negocios requerido.

Fundamentalmente, las ciudadanas y ciudadanos de los nuevos territorios-en-proceso-de-expropiación no tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos. Y, como señala el dirigente diaguita calchaquí, Marcos Pastrana, “si no se nos respeta ese derecho, ningún otro derecho se puede ejercer”. Son los inversionistas los que disponen de los territorios, y por tanto, de la vida que acontece en esos territorios. Son ellos –o se hace en su nombre– los que dictan y administran la ley. Esto muchas veces significa la creación de un régimen de impunidad para las empresas y de un correlativo régimen de represión y criminalización de las protestas, en particular de aquellas directamente dirigidas a impugnar las explotaciones. Institucionalmente, la expropiación política implica este régimen de juridicidad asimétrica (Machado, 2010b). El paisaje institucional de Nuestra América está superpoblado de estos casos. A la contabilidad política del extractivismo hay que sumar un luctuoso saldo de cruentas represiones y matanzas: de la masacre de Bagua (5 de junio de 2009) al asesinato de Betty Cariño (27 de abril de 2010), por mencionar sólo algunos de los más flagrantes y recientes.

La expropiación biopolítica es la expropiación de derechos, de la vida política de los pueblos y de la vida como tal. Expropiación que es secuestro de derechos como corolario de la disposición de los cuerpos. Una disposición material y simbólica, disposición de su fuerza de trabajo; de sus emociones y sentimientos; de sus aptitudes y conocimientos; y de sus ideas, valores y deseos. Aniquilación de derechos que es correlativa de la aniquilación corporal, porque los cuerpos expropiados de sus territorios-alimentos; las poblaciones fumigadas, sometidas a nuevos contaminantes y riesgos ambientales; las poblaciones deshidratadas y desnutridas, son cuerpos sin las energías requeridas para la resistencia. Expropiación de los cuerpos que genera acostumbramiento al dolor, al hambre, a la muerte. En el umbral último de las expropiaciones acontece la expropiación de la sensibilidad corporal: las poblaciones colonizadas de nuestro tiempo son poblaciones in-sensibles, expropiadas de la misma capacidad de sentir sus propias emociones, sus propias sensaciones; poblaciones educadas para desconocer sus propias dolencias y afectividades. Territorios desmembrados; poblaciones desafectadas. Tal es la naturaleza de la expropiación eco-biopolítica.

Extractivismo: amputaciones, anestesias y sensibilidades rebeldes

Territorio significa mucho para mí, porque imagínate que te quiten tu territorio, así, abusivamente, ilegalmente. Es como si te quitaran alguna parte de tu cuerpo [...] (Margarita Pérez Anchiraico, Integrante del Comité de Afectados por la Minería de San Marcos, Perú, 2009)¹.

Acá estamos los que sufrimos el territorio, los que sentimos las agresiones al territorio, no otra cosa es lo que nos une [...]. Gran parte de esta sociedad ya ha perdido el contacto con el territorio [...]. Esta sociedad vive de la góndola del supermercado, del cajero automático y de la computadora [...]. Está desconectada de su territorio. Por eso no siente las agresiones que se le hacen. En cambio nosotros, sabemos y sentimos que sin territorio no somos nada [...] (Marcos Pastrana, dirigente diaguita calchaquí, Valles Calchaquíes, Argentina, 2009).

La primera década del nuevo siglo encuentra a Nuestra América, una vez más, bajo las garras del colonialismo. La devastación extractivista es el nuevo rostro del

poder imperial. Éste ha hecho de América Latina un territorio privilegiado para la acumulación por desposesión, ámbito socioterritorial donde se recrea un nuevo ciclo de una economía de rapiña especialmente dirigida a esquilmar sus reservas estratégicas de bienes y servicios ecológicos, energías naturales y sociales, *disponibilizadas* por el capital global para abastecer la dinámica de consumo/acumulación sin fin, en tiempos de “agotamiento de mundo”.

El coloniaje del presente opera, así, devastando territorios-cuerpos. Ecosistemas literalmente esquilgados, territorios amputados; tal es el objeto y el efecto del extractivismo. Esa brutal expropiación ecológica no sería políticamente posible sin un adecuado tratamiento de las afecciones y los sentimientos. Y el coloniaje de nuestro tiempo opera decisivamente anestesiando los cuerpos en proceso de expropiación. Su eficacia política reside, hoy más que nunca, en el arte de administrar la dosis de violencia eficaz y apropiada. El coloniaje se ejerce como el arte del despojo dosificado, aplicado en la justa medida de lo soportable (Scribano, 2007; Machado Araújo, 2009).

Si la época de los “ajustes” en tiempos del estallido de la deuda externa fue una época de cirugía mayor sin anestesia, la época neocolonial del extractivismo es de una cirugía mayor con anestesia. Vastas mayorías urbanas participan insensibles a la devastación eco-biológica del extractivismo de nuestro tiempo. Viven con ilusión una fantasía desarrollista del auge primario exportador. La cotización de las materias primas y la voracidad exportadora alimentan planes sociales, sostienen el salario de los pobres y el consumismo depredador de las élites... El consumo, efecto fetichista de las mercancías en circulación, opera como letal anestesia social de nuestros días.

El coloniaje del presente se ejerce y reproduce en la colonización de las sensibilidades, corporales y sociales. Vastas mayorías se hallan aún adormecidas, anestesiadas, insensibles a la violencia brutal del saqueo. Sin embargo, estratégicas porciones poblacionales son inmunes a los efectos anestésicos del consumismo. Sienten en carne propia las desgarraduras de los territorios. Se trata de las poblaciones afectadas: nuevas y viejas identidades socioterritoriales que no han perdido su ligazón con la tierra y que sienten en la propia piel el dolor de la expropiación colonial. Expropiación eco-biológica. En su andar, en el movimiento de estos movimientos, despierta *Nuestra América*, y con ella, despiertan también las esperanzas. La esperanza de los pueblos, la de la humanidad; las esperanzas de Vida.

Bibliografía

- Acosta, Alberto 2010 “Maldiciones que amenazan la democracia” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 229, septiembre-octubre.
- Arceo, Enrique 2007 “El Fracaso de la Reestructuración Neoliberal en América Latina. Estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares” en Arceo, Enrique y Basualdo, Eduardo (comps.) *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales* (Buenos Aires: CLACSO).
- Arceo, Enrique y Basualdo, Eduardo (comps.) 2010 *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales* (Buenos Aires: CLACSO).

- CEPAL 2002 *La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades* (Santiago de Chile: CEPAL/PNUMA/ORPALC).
- CEPAL 2010 *Indicadores Ambientales de América Latina y el Caribe 2009* (Santiago de Chile: CEPAL).
- Cifuentes, Ricardo 2006 "Transnacionales, saqueo de recursos y conflicto ambiental en Latinoamérica" en *Globalización. Revista mensual de Economía, Sociedad y Cultura*, agosto-septiembre. En <<http://rcci.net>>.
- De Echave, José; Hoetmer, Raphael y Palacios, Mario (coords.) 2009 *Minería y Territorio en el Perú: Conflictos, Resistencias y Propuestas en Tiempos de Globalización* (Lima: CooperAcción/Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería/UNMSM).
- Gandásegui, Marco 2005 "América Latina y el Imperialismo en el Siglo XXI" en Estay Reyno, Jaime (comp.) *La economía mundial y América Latina. Problemas y perspectivas* (Buenos Aires: CLACSO).
- Gudynas, Eduardo 2009 "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual" en AA.VV. *Extractivismo, política y sociedad* (Quito: Centro Andino de Acción Popular/ Centro Latinoamericano de Ecología Social).
- Harvey, David 2003 *Espacios de Esperanza* (Madrid: Akal).
- Harvey, David 2004 "El 'nuevo' Imperialismo: acumulación por desposesión" en *Socialist Register* (Buenos Aires: CLACSO) N° 40.
- Harvey, David 2007 *Espacios del Capital* (Madrid: Akal).
- Leff, Enrique 1994 *Ecología y Capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable* (México: Siglo XXI).
- Machado Aróz, Horacio 2009 "Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbra" en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta A. (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Machado Aróz, Horacio 2010a "'El agua vale más que el oro'. Grito de resistencia decolonial contra los nuevos dispositivos expropiatorios" en Delgado, Gian Carlo (comp.) *Ecología política de la Minería en América Latina* (México: UNAM).
- Machado Aróz, Horacio 2010b "Desarrollismo extractivista y conflictos socioterritoriales. De la depredación ecológica a la degradación de la democracia", ponencia presentada en las *IX Jornadas de Humanidades*, Universidad Nacional de Catamarca, del 6 al 8 de octubre.
- Martins, Carlos Eduardo 2005 "Neoliberalismo e desenvolvimento na América Latina" en Estay Reyno, Jaime (comp.) *La economía mundial y América Latina. Problemas y perspectivas* (Buenos Aires: CLACSO).
- Naredo, José Manuel 2006 *Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas* (Madrid: Siglo XXI).
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter 2006 "A Reinvenção dos Territórios: a experiência latinoamericana e caribenha" en Ceceña, Ana Esther (comp.) *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (Buenos Aires: CLACSO).

- Santos, Milton 1996 *De la Totalidad al Lugar* (Barcelona: Oikos/Taurus).
- Scribano, Adrián 2007 "La sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación de las sensaciones" en Scribano, Adrián (comp.) *Mapeando interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones* (Córdoba: Sarmiento/UNC).
- Scribano, Adrián 2008 "Bienes Comunes, Expropiación y Depredación Capitalista" en *Estudios de Sociología* (Recife: Brasil) Vol. 12, N° 1.
- Svampa, Maristella 2010 "Entre la obsesión del desarrollo y el giro eco-territorial. Luces y sombras de una Problemática" en AA.VV. *Resistencias Populares a la Recolonización del continente* (Buenos Aires: Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos/Fundación Rosa Luxemburgo/América Libre).

Entrevistas

- A Edgardo "Dito" Salas, integrante de Vecinos Autoconvocados por la Vida, Andalgalá, Argentina, s/f.
- A Mario Palacios Panez, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), de Perú, s/f.
- A Marcos Pastrana, dirigente diaguita-calchaquí, integrante de la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (ASANOA), de los Valles Calchaquíes, Argentina, s/f.

Notas

- 1 Entrevista realizada por Claudia Denegri, publicada en De Echave; Hoetmer y Palacios (2009).

Movimientos comprometidos con la vida

Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina

ALBERTO ACOSTA

Economista ecuatoriano. Profesor investigador de la FLACSO, Ecuador. Ministro de Energía y Minas, de enero a junio de 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta de octubre de 2007 a julio de 2008.

DECIO MACHADO

Sociólogo y periodista de origen hispano brasileño. Cofundador y miembro del consejo de redacción del periódico español Diagonal. Miembro investigador de la Fundación Alternativas Latinoamericanas para el Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos.

Resumen

La historia de la humanidad es la historia del dominio del hombre sobre la naturaleza. Durante siglos, la relación de las sociedades con el medio ambiente ha estado marcada por el utilitarismo y la explotación de recursos. Bajo el orden capitalista, los efectos de este tipo de relación, ampliamente respaldada por las ideas de progreso y desarrollo económico, están adquiriendo características preocupantes (contaminación, escasez de recursos, cambio climático) que apuntan hacia una terrible catástrofe ambiental. En este artículo, Alberto Acosta y Decio Machado, dan cuenta de la separación entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia, así como de las posibilidades de reencuentro entre ambos, a partir del surgimiento del pensamiento ambientalista y de iniciativas orientadas hacia una nueva relación con el medio natural. De esta manera, los autores describen las circunstancias que marcaron el

Abstract

The history of humankind is the history of man's power over nature. For centuries, the relationship between societies and the environment has been marked by utilitarianism and the exploitation of resources. Under the capitalist system, the effects of this type of relationship, which lies largely on the idea of economic progress and development, create alarming problems (pollution, scarcity of resources, climate change), all leading to a terrible environmental catastrophe. In this paper, Alberto Acosta and Decio Machado refer to the separation of man from nature throughout history and the possibilities that they reunite on the basis of environmental thinking and initiatives aimed at fostering a new relationship with the natural environment. Thus, Acosta and Machado describe the circumstances underlying the origin of political ecology and criticism of the development-driven model, and explore the current

nacimiento de la ecología política y de la crítica al modelo desarrollista, e indagan cuáles son las implicaciones actuales de los distintos tipos de ambientalismo en América Latina.

implications of the different types of environmentalism in Latin America.

Palabras clave

Ambientalismo, ecología política, movimientos socioambientales, gobiernos progresistas.

Key words

Environmentalism, political ecology, socio-environmental movements, progressive governments.

Cómo citar este artículo

Acosta, Alberto y Machado, Decio 2012 "Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismo y conflictos actuales en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Cuando los ricos talaron sus bosques, construyeron fábricas que vomitan veneno y recorrieron el mundo en una búsqueda insaciable de recursos baratos, los pobres no dijeron nada. En realidad pagaron el desarrollo de los ricos. Ahora los ricos reclaman tener derecho a regular el desarrollo de los países pobres... Como colonias fuimos explotados. Ahora, como países independientes, debemos ser igualmente explotados (Mohamad Mahathir. Discurso ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 13 de junio de 1992).

La Naturaleza tironeada entre la amenaza y la preocupación

En la medida que el ser humano encontró formas sedentarias de organización social, su deseo y su necesidad por intervenir conscientemente en los espacios naturales fueron creciendo. Con el surgimiento de la agricultura, la vegetación silvestre comenzó a ser domesticada. Con este importante paso civilizatorio se amplió el número de habitantes del planeta y paulatinamente comenzaron a incrementarse las presiones sobre la Naturaleza.

El ser humano mantenía una estrecha relación de temor y utilidad con la Naturaleza. El miedo a sus impredecibles elementos estaba siempre presente en la vida cotidiana, hasta que la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un desesperado esfuerzo por dominarla. Paulatinamente, con sus formas de organización social antropocéntricas, el ser humano se puso, figurativamente hablando, *por fuera* de la naturaleza. Así, se llegó a definir a la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla.

Francis Bacon, célebre filósofo renacentista, plasmó esta ansiedad en un mandato, cuyas consecuencias vivimos en la actualidad, al reclamar que "la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos"¹. No fue el único. René Des-

cartes, uno de los pilares del racionalismo europeo, consideraba que el universo es una gran máquina sometida a leyes. Todo quedaba reducido a materia (extensión) y movimiento. Con esta metáfora, él hacía referencias a dios como el gran relojero del mundo, encargado no sólo de “construir” el universo, sino de mantenerlo en funcionamiento. Y al analizar el método de la incipiente ciencia moderna, decía que el ser humano debe convertirse en dueño y poseedor de la naturaleza. De esta fuente cartesiana se han nutrido otros filósofos notables que han influido en el desarrollo de las ciencias, técnicas y tecnología.

Por cierto que esta visión de dominación tiene también profundas raíces judeo-cristianas. Recordemos aquel pasaje del Génesis en que se establece este mandato: “creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Génesis 1.26). Pero también la *Biblia* en varios otros pasajes establece relatos que conminan a los humanos a ser responsables con la naturaleza.

A partir de 1492, cuando España invadió nuestra *Abya Yala* (América) con una estrategia de dominación para la explotación, Europa impuso su imaginario para legitimar la superioridad del europeo, el “civilizado”, y la inferioridad del otro, el “primitivo”. En este punto emergieron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y colonialidad del ser. Dichas colonialidades, vigentes hasta nuestros días, no son sólo un recuerdo del pasado. Explican la actual organización del mundo en su conjunto, en tanto punto fundamental en la agenda de la modernidad. Ya a finales del siglo XIX, el pensador, político y periodista cubano José Martí indicaba que la independencia política de “nuestra América mestiza” no conllevó la liquidación de la dependencia colonial ni en términos económicos ni culturales. Citándole textualmente: “la colonia continuó viviendo en la República”.

Para cristalizar este proceso expansivo, Europa consolidó aquella visión. Se sentaron las bases para la división del trabajo capitalista: unos países se especializaron en producir manufacturas y a otros se los especializó en producir materias primas, sobre todo recursos naturales; los primeros importan naturaleza para procesarla, los segundos la exportan. Así surgió el extractivismo que convirtió a Nuestra América en suministradora de recursos primarios para atender las demandas del capital. No era casualidad que Cristóbal Colón, en su diario de viaje, mencionara 175 veces la palabra “oro”.

Es cierto que también se han registrado, desde tiempos inmemoriales, acciones de protección de la naturaleza, inclusive en aquellas sociedades que se colocaron al margen de ella. El cuidado de la naturaleza tiene mucha historia, no sólo la destrucción de la misma. Sobran los registros sobre reservas naturales protegidas por diversos motivos. Por ejemplo, Pausanias, historiador griego del siglo dos, nos cuenta sobre la existencia de un bosque sagrado junto al templo de Apolo en Atenas. No faltaron procesos de conservación inspirados por los privilegiados, pues más de un monarca en Europa protegió sus territorios de caza y pesca, trasladando este concepto también a sus colonias. En muchos lugares, terratenientes marginaban para su uso exclusivo bosques y amplias áreas silvestres.

A finales del siglo XIX se desarrollan concepciones románticas sobre la naturaleza, y es fácil encontrar literatura de viajeros en el continente americano que hicieron referencia a la sensualidad de sus paisajes e impulsaban a protegerlos en razón estricta de su belleza. El parque nacional Yellowstone, creado en 1872, es

considerado como el primero en su género. Jurídicamente quizás sea así. La realidad, empero, contradice esa afirmación. A lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez, en distintas regiones, diversas comunidades de seres humanos establecieron reservas naturales e inclusive espacios sagrados, y defendieron la naturaleza. Pero será más adelante cuando esta preocupación cobre fuerza social.

En ese contexto, los orígenes del ambientalismo en tanto movimiento social, se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo sus raíces en la *crítica naturalista*², que nació como respuesta a las agresiones producidas sobre el paisaje por el industrialismo, manifestándose en el marco de un *proteccionismo aristocrático*, expresado en asociaciones naturistas y conservacionistas.

Siglo XX: auge del capitalismo, mayor depredación de recursos y deterioro ambiental

Con la llegada de la fase inicial de la revolución industrial, a través del carbón y de la máquina de vapor, se provocaron efectos ambientales negativos aunque limitados al ámbito local sobre una población planetaria siete veces menor a la actual³. Las transformaciones del capitalismo en sus ondas largas (determinadas inicialmente por el economista ruso Nikolai Kondratieff), en el ciclo que el economista belga Ernest Mandel (1978) definiría como “largo período de la segunda revolución tecnológica”, de 1894 a 1940, forzaron aún más la explotación de la naturaleza. Su creciente mercantilización fue la tónica dominante. Así, el paso a la producción y consumo en masa fundamentados sobre el taylorismo-fordismo y la generalización de los motores de combustión (uso especialmente de recursos fósiles como el carbón y luego el petróleo como fuentes energéticas), que caracterizó al mencionado ciclo capitalista, determinó un uso acelerado de los recursos naturales.

Tras la segunda guerra mundial, el Plan Marshall (al menos 13 mil millones de dólares inyectados por los Estados Unidos en la economía europea entre 1947 y 1952), aplicado en el período de postguerra para reconstruir los países devastados por el conflicto bélico y por el cual, a través de la apertura de los mercados y la demanda europea, la economía estadounidense obtuvo un superávit en su balanza comercial por un valor de aproximadamente 12,5 billones de dólares, fue otro notable esfuerzo por dominar los recursos naturales a nivel planetario, siempre bajo el paraguas del “progreso”. La vertiginosa transferencia de la industria bélica estadounidense hacia la producción industrial masiva para el consumo vino a significar que la modernidad se identificase ineludiblemente con el concepto de desarrollo. Particularmente el petróleo fue la base energética de uno de los períodos de más acelerado crecimiento económico.

Al otro lado del “Telón de Acero”, aunque desde esquemas sociales diferentes, la URSS desarrolló una política de crecimiento basado en la aceleración sin precedentes del ritmo de la industrialización, en el autoabastecimiento energético⁴ y en la producción metalúrgica⁵. La explotación de los inmensos recursos naturales de los que disponía la Unión Soviética, incluido el petróleo, el gas y la minería, fue el sustento de esta política. Si bien en los países del “socialismo real” no se estimuló el consumo (no había interés por el aumento de la tasa de retorno del

capital privado ni necesidad de utilizar mecanismos de ampliación de mercados), el centralismo burocrático ninguneó cualquier lógica enfocada en la sustentabilidad, basando sus objetivos en el desarrollo del crecimiento de la producción, en el marco de una competencia creciente con el mundo desarrollado capitalista. Dicha industrialización se desarrolló a costa del sector agrario, y por consiguiente se generó la imposibilidad de atender las necesidades biológicas de la población⁶. El “socialismo real” optó por el Marx desarrollista inspirador de *El Capital*, para quien la futura sociedad se construye bajo la transformación de las relaciones sociales, con la finalidad de desarrollar el crecimiento de las fuerzas productivas; en decremento del joven Marx, para quien la finalidad de la historia es la desalienación del hombre, y no el desarrollismo productivo. Para Marx, “con su triunfo el proletariado no se erige en clase universal de la sociedad, puesto que no triunfa más que suprimiéndose él mismo y suprimiendo, a la vez, a la clase adversa”; en la URSS el obrero y el campesino continuaron existiendo y la burocracia ocupó el lugar de la burguesía y su papel controlador, convirtiéndose en la beneficiaria de la plusvalía (Marx y Engels, 1974). El socialismo no vale más que el capitalismo si no cambia de herramientas (Gorz y Bosquet, 1975), y si no da paso a una gran transformación desde visiones antropocéntricas a visiones (socio)biocéntricas.

Esta metáfora del desarrollo, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en una meta a ser alcanzada por toda la humanidad. Se convirtió, esto es fundamental, en un mandato que implicaba la difusión del modelo de sociedad norteamericana

En el mal llamado Tercer Mundo, en esos años, se consolidó cual mandato universal la búsqueda del desarrollo. Los Estados Unidos y las otras naciones industrializadas estaban “en la cima de la escala social evolutiva” (Sachs, 1996). Y desde su visión, propuesta en enero de 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y aspirarían a una sola meta: el desarrollo. Y, por cierto, se sentaron las bases conceptuales de otra forma de imperialismo.

Esta metáfora del desarrollo, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en una meta a ser alcanzada por toda la humanidad. Se convirtió, esto es fundamental, en un mandato que implicaba la difusión del modelo de sociedad norteamericana, heredera de muchos valores europeos. Aunque Truman seguramente no estaba consciente de lo que hablaba, esta llegaría a ser una propuesta con historia, por decir lo menos.

De todas maneras, sin negar los valiosos aportes de la ciencia, la voracidad por acumular el capital forzó a las sociedades humanas a subordinar a la naturaleza. El capitalismo, en tanto “economía-mundo” (Wallerstein, 1988), la transformó en una fuente de recursos aparentemente inagotable⁷. Como sabemos, esto no es sostenible. Los límites biofísicos, en algunos casos peligrosamente superados, están a la vista. Y sus consecuencias comienzan a ser funestas. De las cerca de 1,8

millones de especies a las que se les ha asignado un nombre científico (sólo la mitad de las existentes en el planeta), se estiman como extinguidas 1.159, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si tenemos en cuenta que el 60% de las selvas húmedas tropicales del planeta ya se han perdido, es de considerar que el 25% de los mamíferos y el 11% de las aves están amenazados (Mittermeier *et al.*, 1997), llegándose a la cifra de 17 mil especies en peligro de extinción⁸. Por otro lado, basta ver los efectos del mayor recalentamiento de la atmósfera o del deterioro de la capa de ozono; de la pérdida de fuentes de agua dulce; de la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre; de la degradación de suelos; o de la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades locales para entender el nivel de gravedad por el que atraviesa el planeta. El cambio climático, más allá de los efectos sobre la población mundial (migraciones, empobrecimiento, alimentación y transmisión de enfermedades) y la economía de los países, pueden afectar en breve al 30% de las aves no amenazadas, al 51% de los corales no amenazados y al 41% de los anfibios no amenazados, dado que sus características los hacen susceptibles a ese fenómeno⁹.

En síntesis, la acumulación material mecanicista e interminable de bienes, apoltronada en el aprovechamiento indiscriminado y creciente de la naturaleza, no tiene futuro (Gudynas, 2009). En la actualidad, todo indica que el crecimiento material sin fin culminará en un suicidio colectivo.

A pesar de esta constatación, el capitalismo busca ampliar espacios de manobra mercantilizando cada vez más a la naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales asoman como la más reciente frontera de expansión para sostener la acumulación del capital. Se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, los bosques y la tierra misma. Al parecer no importa que la serpiente capitalista continúe devorando su propia cola, poniendo en riesgo su propia existencia y la de la Humanidad misma.

El capitalismo, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos espacios de explotación, está colonizando el clima (Lohman, 2012). Este ejercicio neoliberal extremo, del cual no se libran los gobiernos “progresistas” de América Latina, convierte la capacidad de la *Madre Tierra* en un negocio para reciclar el carbono. Y lo que resulta más preocupante es que la atmósfera se transforma cada vez más en una nueva mercancía diseñada, regulada y administrada por los mismos actores que provocaron la crisis climática y que reciben ahora subsidios de los gobiernos con un complejo sistema financiero y político. Recordemos que este proceso de privatización del clima se inició en la época neoliberal, impulsado por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y otros tratados complementarios.

Estos instrumentos de la denominada “economía verde” no evitarán la destrucción ambiental. En el mejor de los casos, apenas posponen la solución de los problemas. Eso sí, garantizando al capital nuevos mecanismos de acumulación mientras el deterioro ambiental aumenta. Bajo esta realidad, el decrecimiento en los países desarrollados se ha convertido en un imperativo de supervivencia, mientras que para los países del sur, el diseñar una salida posextractivista se convierte en una necesidad inmediata para detener el sesgo depredador del actual

modelo. El extractivismo, modalidad de acumulación primario exportadora, responde a las ideas contemporáneas de un modelo de desarrollo que se demuestra inviable ante los límites ecológicos del planeta y la catástrofe climática. En su conjunto, ambas condiciones suponen otra economía, otro estilo de vida, otra civilización con otros valores y unas relaciones sociales notablemente diferentes a las que conocemos hoy en día.

Un complejo y hasta contradictorio proceso de concientización

A pesar de que el crecimiento económico ha dominado y domina aún el escenario de la política real, en esta época, desde la posguerra, paulatinamente se desarrollaron preocupaciones y acciones respecto a la protección del medio ambiente, fruto a su vez de la transformación de las relaciones internacionales en su contexto global. Pero no será hasta la década del sesenta que el ambientalismo asume como tema central la supervivencia de la especie humana, superando sus iniciales postulados estéticos y la conservación del entorno natural y de la vida salvaje. Igualmente empieza a preocupar en el mundo la amenaza de una destructiva confrontación nuclear y los niveles de contaminación en los países más desarrollados, lo que provocaría diversas respuestas desde sociedades cada vez más conscientes de los riesgos globales. Entonces emerge la noción de catástrofe ecológica en el seno de la contracultura subversiva que critica el crecimiento económico, la sociedad de consumo, la crisis del productivismo tecnocrático y el agotamiento de los recursos naturales. Se llega, incluso, a pronosticar la crisis civilizatoria hoy en curso.

Sin embargo, el ambientalismo no se conforma como una corriente de pensamiento homogénea. En él existen diversas posturas ideológicas y lógicas de intervención política, lo cual genera diferentes tipos de ambientalismo o luchas ambientales. Básicamente podríamos resumir estas en dos grandes grupos: un ambientalismo “reformista” y otro “radical”. En el caso del ambientalismo reformista no se contempla una descripción actualizada de la sociedad, se carece de propuestas alternativas y agenda de intervención política (Dobson, 1997). A grandes rasgos, los objetivos de esta corriente podrían resumirse en el control de lo peor de la contaminación aérea y acuática, y de los usos ineficientes de los suelos en los países industrializados, con el fin de salvar lo que queda de naturaleza bajo criterios de “áreas designadas naturales” (Devall y Sessions, 1985). Por su parte, el ambientalismo radical, sí contempla los elementos referenciados con anterioridad, bifurcándose a su interior entre antropocentristas –el interés humano es el eje sobre el que se articula la toma de decisiones y la acción política– y biocentristas –pasa a ser la vida, en sus diferentes expresiones quien define y determina (Bellver Capella, 1997). Su diferencia fundamental con el ambientalismo reformista tiene que ver con sus métodos de acción y, fundamentalmente, con el hecho de que se busca una nueva visión del mundo que vuelva a integrar al ser humano y la naturaleza. El ambientalismo radical, al contrario del reformista, no es un movimiento pragmático; todo lo contrario: cuestiona y desarrolla alternativas a las formas convencionales de pensamiento occidental moderno. Busca la transformación de valores y la organización social, planteándose de forma antagónica con respecto al capitalismo.

Estaría incompleta esta rápida revisión del surgimiento del movimiento ambientalista si no se deja constancia de que la defensa de la naturaleza es inherente a muchas de las nacionalidades y pueblos ancestrales de nuestra región. Sin considerarse ambientalistas o ecologistas, inclusive sin necesidad de conocer y comprender su significado y alcances, estos grupos humanos han sido portadores permanentes de la defensa de la vida.

El final de la década del sesenta marcará una ruptura en los ámbitos de la izquierda mundial. Las revueltas estudiantiles y sociales de 1968, que tendrán su origen en París, pero que serán fuertemente reprimidas a “bala y sangre” en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México y con la Primavera de Praga, generarán una nueva visión de la emancipación social. Se irá conformando un ámbito de acción en el cual convergerán nuevos movimientos sociales compuestos por ambientalistas, feministas, pacifistas, libertarios, autónomos y marxistas democráticos, cuestionando el dogma del progreso ilimitado, el consumo desenfrenado, las sociedades jerárquicas y la opresión patriarcal. Vislumbrar otra economía con otros modos de producción, otras formas de relacionamiento social y otro modo de vida, diferenciado del capitalismo y del socialismo que hemos conocido, ha significado para los movimientos sociales precursores de tal idea la acusación, desde ambos lados de la política convencional y en el más benévolo de los casos, de “irrealistas” o “utópicos”.

La expansión por doquier del capitalismo, así como su poder en todos los planos de la sociedad a escala planetaria, se debe al control sobre la producción y el consumo, ejercido a lo largo de todo el pasado siglo y lo que llevamos del actual. Se comenzó despojando a los manufactureros de sus medios de trabajo y por lo tanto de sus productos, asegurándose el capital el monopolio de los medios de producción y el control del mercado laboral. La especialización de la producción volvió imposible la reapropiación de los medios de producción por parte de los productores. Neutralizando el poder de los productores sobre la naturaleza y el destino de sus productos, el capital se aseguró el control de la oferta, enfocando la producción y el consumo bajo criterios estrictamente de rentabilidad económica. El control de la comunicación en su vertiente publicitaria permitió de igual manera transformar los gustos, moldear los deseos de los consumidores y generar falsas necesidades, haciendo que los productos dejaran de aparecer como simples mercancías para asumir cualidades inmateriales (se pierde el patrón para el establecimiento de una relación de equivalencia). La innovación deja de crear valor, pierde su lógica de proporcionalidad con respecto al trabajo que contenían y su utilidad, transformando la competencia empresarial sobre la base de incentivar nuevos deseos, con mercancías de valor simbólico, asociadas a la “cultura del consumo”. Todo ello se articula en decremento de la autonomía de los individuos y de su capacidad de reflexión colectiva. El capitalismo abstrae las diferencias cualitativas entre las necesidades, reduciéndolas todas a necesidades económicas, es decir, a necesidades socialmente formadas de la existencia biopsicológica (Heller, 1983).

Sin embargo, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, el mundo enfrentó un mensaje de advertencia. La naturaleza tiene límites. En 1972 se publica el informe “Los límites del crecimiento”¹⁰, que fue encargado por el Club de Roma en 1970 al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual aparece poco antes de la pri-

mera crisis del petróleo y dará pie en Estocolmo a la primera conferencia mundial sobre medioambiente¹¹.

La realidad de los límites del crecimiento, escamoteada por la voracidad de las demandas de acumulación del capital, no logra consolidarse por la firme y dogmática creencia en el imperio todo poderoso de la ciencia. Así, el informe Meadows, que desató diversas lecturas y suposiciones, aunque no trascendió mayormente en la práctica, dejó plantado en el mundo por un lado una señal de alerta, y por otro lado, una demanda: no podemos seguir por la misma senda, al tiempo que requerimos análisis y respuestas globales.

A pesar de las resistencias en las corrientes políticas de la izquierda tradicional, la sensibilidad sobre el tema ecológico se reforzará tras la primera crisis del petróleo de 1973. Cuando los países árabes dentro de la OPEP emplean el petróleo como arma estratégica, se pone en evidencia la brutal dependencia de los países “desarrollados” al oro negro. Por vez primera, se ponen en marcha planes energéticos para ahorrar energía y diversificar sus fuentes, medidas en gran medida archivadas una vez superada la crisis.

En 1984, el *thinktank* ultraconservador The Heritage Foundation auspiciará la publicación de “La Tierra repleta de recursos” (Simon y Kahn, 1984), donde se niega la existencia de límites en la utilización de los recursos naturales necesarios para la expansión económica y el crecimiento progresivo de las economías del planeta. Sin embargo, accidentes como el de Seveso, en 1976, Three Miles Island, en 1979, Bhopal en diciembre de 1984, Chernobyl en abril de 1986 o el hundimiento del Exxon Valdez en marzo de 1989, entre otros, evidenciaron ante la sociedad planetaria la degradación ambiental y la emergencia de los nuevos movimientos sociales ambientalistas.

Algunas organizaciones ambientalistas se hicieron tan molestas que incluso los departamentos de espionaje y seguridad de los Estados más poderosos emprendieron acciones contra ellas. Uno de los incidentes más sonados fue el hundimiento del *Rainbow Warrior*¹² (buque insignia de Greenpeace) por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, en 1985, para impedir sus acciones de protesta ante las pruebas nucleares que periódicamente realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en el sur del océano Pacífico.

Enmarcando el análisis en lo estrictamente ambiental, podríamos decir que el metabolismo del capitalismo global no es comprensible sin el consumo creciente de recursos de todo tipo (*inputs* biofísicos), en concreto materiales y energía que son obtenidos de la Naturaleza. Estos materiales y recursos son procesados masivamente por un sistema tecnológico y organizativo –capital productivo–, con la participación del trabajo humano –asalariado o dependiente–, que provoca una producción que en parte es acumulada –infraestructuras–, al tiempo que produce también una diversidad de mercancías que son destinadas al consumo (Fernández Durán, 2009). Este sistema hace que en ambos procesos se generen a su vez importantes residuos o emisiones de muy diversa naturaleza (*outputs* biofísicos) que son devueltos al medio natural (Murray *et al.*, 2005). Todo esto genera notables impactos sobre el entorno, algo por lo demás propio del capitalismo, un sistema en esencia depredador y explotador. Un sistema que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida” (Echeverría, 2010).

El sistema mundo capitalista ha vivido hasta hace muy poco negando un hecho incuestionable, la creciente degradación ambiental planetaria. En gran medida todavía lo sigue haciendo a través de las herramientas de control del pensamiento que el propio sistema genera. Sin embargo, ha sido la cruda realidad la que ha obligado a asumir, tanto a gobernantes como a corporaciones, los límites biofísicos al modelo de desarrollo, una de las causas principales de la actual crisis global multifacética¹³ (Tortosa, 2011). Sin embargo, las soluciones propuestas, como veremos más adelante, se enmarcan en la lógica de mercado, es decir dentro del mismo capitalismo.

El sistema mundo capitalista ha vivido hasta hace muy poco negando un hecho incuestionable, la creciente degradación ambiental planetaria

A esto hemos de añadir que los impactos ambientales propiciados por el sistema mundo capitalista se recrudescen en las áreas periféricas, mientras su impacto suele ser relativamente menor en las áreas centrales, fruto de las relaciones de poder existentes. Es de esta manera que los países centrales se especializan en las actividades de mayor valor añadido, tercerizando progresivamente sus economías, mientras que los países periféricos perpetúan su rol tradicional respecto a los procesos industriales, de manera especial en aquellos de menor valor añadido, y fundamentalmente en actividades extractivas (Fernández Durán, 2009). Así, se incrementa la ya existente e incuestionable asimetría mundial. Además, cada vez se trasladan más actividades contaminantes e incluso desechos tóxicos desde el norte global al sur global.

Hacia finales del siglo XX, era evidente que el capitalismo global estaba modificando nocivamente el clima planetario. Dicho “mérito”, cuya responsabilidad recae de manera principal sobre países industrializados del norte global, encuentra en la actualidad nuevos aliados, como son los grandes Estados emergentes, liderados por China, que avanza de forma acelerada a su propio desastre ecológico.

Es por ello que el informe “Nuestro futuro común”, más conocido como informe Brundtland¹⁴, introdujo en 1987 la noción de desarrollo sustentable, bajo el criterio de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987); buscando “amortiguar” el cuestionamiento creciente al esquema clásico de desarrollo basado sobre el crecimiento permanente. Así, el objetivo del informe era acercar y tejer alianzas entre ambientalistas y agentes del crecimiento económico.

En ese contexto, tiene lugar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la cual se da poco después de la primera Guerra del Golfo y del derrumbe soviético. Uno de sus resultados fue dar pie al proceso que daría lugar, en 1997, al frustrante y frustrado Protocolo de Kyoto¹⁵. En Río de Janeiro se aprobó la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, ambas impregnadas del nuevo discurso sobre desarrollo sostenible, el cual pocas novedades ofrecía, dado que planteaba resolver la pobreza mundial y la problemática ambiental nuevamente

a través del crecimiento económico. En 1994 se aprobaron los Convenios de la Biodiversidad y el de la Lucha contra la Desertificación. El primero de ellos terminó por abrir el camino hacia el acceso comercial a los recursos provenientes de la biodiversidad, que en principio decían defenderse, mientras el segundo no ha tenido aplicación real y ha quedado como letra muerta.

Desde entonces hasta hoy apenas ha cambiado el panorama internacional de las Cumbres Ambientales al respecto. Mientras se agudiza la degradación planetaria, el desarrollo sostenible (concepto híbrido fruto de una combinación entre la economía neoclásica y desarrollo, con una idea vinculada a la modernización y al predominio de la técnica y la tecnología sobre la naturaleza) no deja de ser un posicionamiento ideológico que implica que la única vía civilizatoria para sociedades en desarrollo es el capitalismo, en algunos casos con un rostro algo más humano, y por lo tanto el desarrollo-progreso no puede ser otra cosa que crecimiento económico¹⁶.

Desde la mitad del siglo XX empezaron a aparecer varias instancias preocupadas por la Tierra: la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 1948, la Conferencia para la Conservación y Utilización de los Recursos, en 1949, el Convenio de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en 1958, o el Tratado Antártico, en 1959, por citar a algunas de las organizaciones más destacadas. Como se puede apreciar, la toma de conciencia a nivel mundial sobre los problemas ambientales globales (o la simple constatación de que estos problemas son cada vez más frecuentes y costosos) tiene historia.

Es en ese contexto en donde una parte de los movimientos ambientalistas, devenidos ecologistas, se radicalizan planteando nuevas lógicas de vida y alternativas globales a la sociedad industrial, presentándose como un paradigma ideológico autónomo respecto a la vieja izquierda tradicional. Estos procesos de radicalización se acentúan y plantean un nuevo pensamiento crítico, global y transformador: la ecología política. Y es que partiendo de la crítica del capitalismo es como se llega inevitablemente a la ecología política, que con su crítica indispensable de las necesidades lleva a radicalizar una vez más la crítica del capitalismo (Gorz, 2008). Si queremos y necesitamos pasar del “producir y consumir cada día más” al “producir mejor y con menos”, estaremos hablando de otro modelo civilizatorio antagónico sin dudas respecto al capitalismo.

A nivel mundial y con todo y sus limitaciones, la ecología política se ha ido afirmando como un planteamiento capaz de generar confluencias entre la mayoría de los movimientos sociales y políticos que luchan por la transformación social y económica del planeta, haciendo vigente la consigna alter globalización de “piensa global, actúa local”.

En la base del ecologismo actual hay una comprensión científica de la naturaleza y al mismo tiempo una admiración, una reverencia, una identidad con la Naturaleza, muy lejos de sentimientos de posesión y dominación, muy cerca de la curiosidad y del amor.

Desarrollismo, deterioro ambiental y contradicciones

En América Latina, algunas organizaciones ambientalistas surgieron a partir de la década del cincuenta, y la mayoría de ellas enfocaron su eje de acción hacia la

conservación de la naturaleza. En la década del setenta, dichos movimientos tuvieron fuerte implantación en países como Brasil, México y Venezuela. Su desarrollo ha sido constante y en la actualidad podríamos cartografiar la existencia de dicho movimiento en cada uno de los países latinoamericanos aunque con diferentes formas organizativas.

El ambientalismo latinoamericano, en la actualidad, se caracteriza por preocuparse por el medio ambiente y el ser humano inserto en él. Sobre todo, considera la articulación ambiente/desarrollo, la generación de alternativas productivas a escala ecológica, la armonía del ser humano con la naturaleza, la vinculación de los problemas sociales con los ambientales. Particularmente reniega del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico. Este movimiento tiene un aceptable dinamismo organizativo y también en el ámbito académico, al tiempo que reniega de la neutralidad ética para situarse en el compromiso por la vida (Gudynas, 1992).

La reducción del Estado a su mínima expresión durante la etapa neoliberal hace que este abandone muchas de sus funciones históricas, lo que ha originado la intensificación de conflictos entre grandes empresas versus comunidades y movimientos sociales. La privatización —en muchos casos vergonzosa— de las empresas de servicios públicos se da de forma paralela a la disminución de la importancia relativa de la industria productora de bienes de consumo durables, reforzándose las industrias productoras de bienes cuya demanda no depende directamente de la capacidad de consumo de grandes masas de la población. El empobrecimiento de la población latinoamericana conllevó el agotamiento de la “sociedad de consumo”, lo que se compaginó con un marcado deterioro de la situación ambiental, formándose así un círculo perverso por el cual la primera genera efectos negativos en el ambiente y, a la par, la pérdida de la calidad del ambiente genera pobreza. Esta situación alcanzó en diversos lugares niveles de degradación social y ambiental que se creían superados desde el siglo XIX.

En la década del noventa, tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992, varias constituciones latinoamericanas hicieron la ligera inclusión de la garantía de los derechos ambientales. La aprobación de la Agenda 21 en dicha cumbre significó también que ingresaran a la política institucional algunas temáticas ambientales, acordándose, al menos desde el ámbito formal, una metodología para actuar frente a los conflictos ambientales.

En América Latina, la propuesta de desarrollo sustentable, sobre todo en los últimos años, ha sido un factor permanente de discrepancias. Varias son las explicaciones. Por un lado, la creciente degradación ambiental, que ha ocasionado y ocasiona cada vez más respuestas y resistencias sociales. Por otro, la indefinición o incluso manipulación de tal concepto, lo que explica que este tema ni siquiera se plasma en las políticas de integración que se están desarrollando actualmente en la región, a pesar del discurso ambientalista de los dirigentes latinoamericanos en general, y el especial énfasis que realizan, en este aspecto, los mandatarios supuestamente más radicales de la región del territorio andino.

Los medios de comunicación latinoamericanos, por su parte, a pesar del ferviente debate social existente en la actualidad, se limitan a enumerar las con-

secuencias de los impactos ambientales en la actual etapa desarrollista. Omiten las causas de tales políticas y el porqué de la existencia de la crisis global multifacética, hecho que sin duda tiene relación con el criterio mercantilista que domina en dichos medios de comunicación, los cuales responden a intereses empresariales con conexiones a grandes grupos de capital nacional y en diversos casos internacional.

En la actualidad, nuestra América se enmarca en un contexto sociopolítico donde el desarrollo económico pretende encaminarse hacia sociedades modernas constituidas sobre criterios de eficacia, eficiencia, capacidad productiva, modernización tecnológica e interconexión de diversa índole. Todo ello articulado bajo el falso criterio de que la sociedad moderna es igual a racionalidad. De hecho, el cambio político acontecido en gran parte de los países sudamericanos, a pesar de los avances existentes en materia de erradicación de la pobreza¹⁷, no está significando la transformación del modelo de acumulación heredado de etapa anterior, ni tampoco la eliminación del amplio esquema de exclusión social existente, a pesar de los actuales discursos acentuadamente populistas en la región¹⁸.

Desde esa perspectiva, la creciente demanda de bienestar por parte de las sociedades latinoamericanas pretende ser paliada a base de productividad, competitividad, sustitución de las personas por máquinas y el control social en todas sus vertientes. Esto implica, entre otras cuestiones, mayor depredación de recursos naturales y fuerte impacto ambiental en el territorio, consecuencia de la puesta en marcha de numerosos megaproyectos. En este sentido, cabe destacar que gran parte de estos megaproyectos tienen financiamiento chino: la dirección de la obra y las empresas ejecutantes suelen ser chinas, lo que genera un fuerte deterioro en el ámbito de los derechos laborales para los trabajadores locales contratados en dichas obras. El conjunto de estas situaciones se da bajo el argumento de la necesidad de mayor generación de recursos económicos con la finalidad de paliar demandas sociales y construir infraestructuras.

Se posiciona así el progreso tecnológico como un elemento al servicio de la Humanidad, ignorándose las contradicciones que se generan en el ámbito de la inequidad social, la degradación ambiental, el desempleo y subempleo, y otros elementos que ponen en peligro la continuidad de la vida en el planeta. En ese sentido cabe recordar la célebre frase de uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza, quien nos indicaría hace ya más de trescientos años y en contraposición a la actual teoría sobre la racionalidad, que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.

Los gobiernos progresistas no han sido en este sentido una excepción. Mientras articulan una retórica antimperialista, nacionalista y populista, enfocada hacia el consumo interno de sus respectivas sociedades, fomentan la expansión del capital extractivo internacional a través de iniciativas conjuntas con los nuevos Estados rearticulados tras dos décadas y media de neoliberalismo, así como con una nueva burguesía creciente a nivel nacional (Petras, 2012). Mientras nuevos y poderosos aparatos de propaganda estatales en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador o Uruguay hacen apología del socialismo –en algunos casos del llamado socialismo del siglo XXI–, su realidad práctica es que fomentan políticas

de desarrollo vinculadas a la concentración de capitales en decremento de la participación social y la democracia directa, manteniendo fuertes conflictos con las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales, indígenas y políticas que ejercen su resistencia ante las lógicas políticas en curso.

En este sentido, a pesar del discurso emancipador que en la actualidad se articula desde muchos gobiernos del subcontinente, la región sigue siendo un territorio estratégico para la economía capitalista global, incrementándose su potencial como proveedora de recursos hacia los países centrales. Esto tiene afectación también en el ámbito de las infraestructuras donde se desarrollan importantes inversiones cuyo objetivo es reducir costos y tiempos de transporte de las materias primas, particularmente.

El motor de crecimiento para el conjunto de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos es la apuesta por el extractivismo en todas sus vertientes –minería, petróleo y productos para la industria agropecuaria–, sin hacer asco a los biocombustibles (soja, caña de azúcar y otros) especialmente por parte de los dos gigantes sudamericanos¹⁹.

Desde una perspectiva ideológica podríamos afirmar que las políticas neoextractivistas²⁰ que desarrollan los gobiernos latinoamericanos están en línea con la lógica de la globalización, donde la exportación de corte extractivo es un medio privilegiado para el crecimiento económico y donde la premisa del crecimiento material no está en cuestión.

En paralelo, la situación ambiental en América Latina empeora a ritmos acelerados, consecuencia de un acelerado proceso de apropiación de recursos naturales. En la investigación realizada por Bradshaw y colaboradores (2010), se elaboró un *ranking* de impacto ambiental entre 228 países. En dicho estudio Brasil ocupa el primer puesto por sus impactos ambientales absolutos –por delante de EE.UU. y China–, debido a su alta tasa de pérdida de bosques, deterioro de hábitats naturales, índice de especies amenazadas y el exagerado uso de fertilizantes. Entre los primeros veinticinco países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel global, también se encuentran Perú (puesto 10), Argentina (11), Colombia (20), Ecuador (21) o Venezuela (22); y una situación similar se repite si consideramos los impactos ambientales relativos a la extensión de áreas silvestres y recursos disponibles dentro de cada país, donde el país sudamericano con el más alto nivel de impacto relativo es Ecuador (en el puesto 22), seguido por Perú (25).

Los efectos del cambio climático que en la actualidad se producen en América Latina encuentran al subcontinente en condiciones de total desamparo. El aumento de fenómenos naturales extremos como huracanes, inundaciones y sequías, así como los cambios en la temperatura, transformarán drásticamente las condiciones de vida y las condiciones económicas de una región con unos gobiernos que demuestran escasa capacidad de reacción hasta el momento. Según un informe del *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2007), estamos abocados a que la frecuencia de extremos climáticos aumente (tormentas de viento, tornados, granizo, olas de calor, precipitaciones intensas, temperaturas extremas); a que la frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe también aumente; a que el crecimiento del nivel del mar (más los huracanes) afecte notablemente a las zonas costeras; a que suframos un fuerte extinción de especies en muchas partes de

América tropical (por ejemplo, en bosques nebulosos por cambio en la altura de nubes); a que desde 2020 el número neto de personas sufriendo estrés por falta de agua probablemente aumente entre 7 y 77 millones (y desde 2050 entre 60 y 150 millones); a que tengamos una reducción significativa de nuestros glaciares y suframos puntos de inflexión (“*tipping-point*”) en las que áreas extensas podrían cambiar a otro estado permanente.

...la región sigue siendo un territorio estratégico para la economía capitalista global, incrementándose su potencial como proveedora de recursos

Esta realidad tendría notables impactos. En el caso de las mujeres, su impacto sería mayor dada su vulnerabilidad (el 67% de la población pobre es de mujeres, tiene una mayor condición de exclusión social, un mayor grado de desnutrición, poco acceso a títulos de tierra, un mayor endeudamiento en caso de falla de la cosecha y un menor acceso a la educación), a pesar de ser las responsables del aprovisionamiento de recursos vulnerables (agua y combustible). Bajo el efecto de las migraciones, las mujeres tienen una mayor responsabilidad y un mayor peligro.

El IPCC nos alerta de que corremos el riesgo de una notable reducción de disponibilidad de agua (incremento de la evapotranspiración, pérdida de glaciares y disminución de la cobertura de nieve, así como agudización de conflictos entre las formas de uso del agua). De igual manera, los cambios de temperatura conllevarán que la producción de carne y leche disminuya ostensiblemente. El aumento de riesgos de incendios en la región vendrá de la mano del sumatorio entre el calentamiento y los cambios de uso de la tierra, que es la causa de grandes emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina. Sufriremos un mayor riesgo de salinización y de desertificación de tierras hoy agrícolas, que pasarán a ser tierras secas, y se reducirá el rendimiento de los cultivos que están al borde de su tolerancia al calor.

No deja de ser curioso que varios de nuestros gobiernos mantengan planteamientos estratégicos que identifican como una fase transitoria al actual momento de desarrollismo y neoextractivismo, entendiéndola como una primera etapa para posteriormente llegar al posextractivismo. Por poner un ejemplo, en la actualidad Ecuador fomenta la megaminería y estima su potencial –con cifras proporcionadas por las propias empresas mineras– en “más de 50 millones de toneladas en cobre fino, más de 100 millones de onzas de oro y más de 300 mil toneladas de plata fina”²¹, los cuales pretende explotar de la mano de grandes transnacionales del sector, fundamentalmente de capital chino y canadiense, recursos que serán exportados en forma de materia prima.

De igual manera, Ecuador exporta en la actualidad unos 500 mil barriles de crudo diario, lo cual financia el 35% del presupuesto estatal. Una vez puestas en marcha las explotaciones de la onceava ronda petrolera, la cual tendrá afectación sobre 3,8 millones de hectáreas de bosque primario y varias nacionalidades indígenas²², se estima que dicha producción pudiera incrementarse. En resumen,

es tan difícil de entender como a través de multiplicar la extracción de recursos naturales se pretende llegar al posextractivismo, como difícil es imaginar que el socialismo en América Latina se construye alimentando el sistema mundo capitalista de sus principales necesidades, sobre todo de acumulación especulativa.

Citando a Marx, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 2003).

En este sentido es destacable el hecho de que lejos de los postulados de Mariátegui (1928) –“no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. [...] Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano”–, el conjunto de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha roto desde la crítica la visión eurocéntrica y el modelo heredado de la modernidad, mostrándose ellos incapaces de generar una nueva matriz civilizatoria que conlleve a la necesaria transformación el mundo. Progreso, crecimiento y desarrollo son los pilares en los cuales incluso los gobiernos considerados más radicales de la región basan sus esquemas de futuro.

Momento actual del ecologismo en América Latina

Históricamente, el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convertido en generador de conflictos socioambientales, donde confluyen causas estructurales en el orden político, económico, jurídico, ambiental, social, cultural, etcétera. Estas circunstancias encuentran como características comunes la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales, –dado el tipo de relación impuesta entre las empresas versus las comunidades–, la marcada ausencia del Estado en los territorios afectados y los problemas y daños ambientales que se ocasionan en dichos territorios y que han de sufrir sus poblaciones.

Los conflictos socioambientales involucran a diferentes tipos de actores: las compañías extractivas, el Estado y las comunidades, en donde aparecen los actores sociales organizados (organizaciones vinculadas a la comunidad –en muchas ocasiones indígenas– y organizaciones sociales).

El concepto de desarrollo sustentable en estos casos es objeto de interpretaciones contradictorias entre las partes en conflicto. Para las comunidades y organizaciones sociales el desarrollo se interpreta desde la perspectiva de que debe estar subordinado a la voluntad de las poblaciones locales, mientras que, para el Estado, el desarrollo está basado en el ámbito de las políticas enfocadas en la lucha contra la pobreza, con el fin de satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, careciendo de importancia si hay víctimas locales en dicha estrategia nacional.

Así, en muchas ocasiones las comunidades indígenas involucradas en un conflicto ambiental, más allá de defender su entorno, defienden su práctica cotidiana y sus formas de organización y de vida, articuladas en una lógica de relación entre la comunidad y el ambiente (Folchi, 2001), mientras las organizaciones ambientalistas defienden una apuesta de carácter éticopolítico, la empresa su inversión y beneficio y, en el caso del Estado, esto se expresa en supuestos términos

de orden, control y racionalidad cuyo objetivo final es hacer factible su proyecto económico nacional.

El espacio político abierto por la crisis ambiental genera la necesidad de que los Estados se doten de ordenamientos jurídicos que permitan la expresión y concertación de estos actores sociales emergentes, propiciando la resolución pacífica de los conflictos a través de la democracia participativa con sostén en procedimientos legales adecuados (Demirovic, 1989).

La cuestión ambiental no concierne solamente a los órganos administrativos del Estado y a sus aparatos ideológicos –la escuela, la universidad, el sistema jurídico y los medios de comunicación–, pues trasciende hacia una amplia participación de la sociedad civil en la configuración de nuevos estilos de vida, relaciones de poder y modos de producción (Leff, 1986). A la vez que ha ido emergiendo una nueva conciencia social al respecto, los problemas ambientales van apareciendo en toda su dimensión. En el ámbito de los conflictos socioambientales podríamos utilizar la clasificación hecha por Bebbington y Humphreys (2009) para clasificar a los ambientalistas en torno a los conflictos mineros en Perú. Esto sirve para posicionar a los diferentes tipos de organizaciones y a las lógicas de conflicto que se dan en el entorno ambiental latinoamericano. Así encontraríamos:

Un primer ambientalismo de carácter conservacionista, cuyo enfoque tiende hacia las necesidades de proteger los ecosistemas existentes. También tiende a la resolución de conflictos con base en la negociación con los actores (empresas y organizaciones sociales) implicados, llegando inclusive a generar marcos de colaboración en el ámbito de asesoramiento para una adecuada gestión del proyecto.

Una segunda categoría de ambientalistas englobaría lo que podríamos llamar organizaciones de perfil nacional populista, las cuales buscan un mayor control nacional sobre los recursos naturales y su rentabilidad económica, con el fin de destinarlo a proyectos populares y subsidios sociales dirigidos a los sectores históricamente excluidos. La resolución en torno a los conflictos que se generan con este tipo de ambientalistas tiende a la solución negociada, habitualmente sobre sistemas impositivos más rigurosos para las compañías o través de medidas de nacionalización con correspondencia para las transnacionales articuladas sobre justiprecios.

En tercer lugar estaría el ambientalismo que se identifica con el “ecologismo de los pobres” (Martínez Alier, 2005), el cual se encuentra fuertemente enraizado en las formas de vida de las poblaciones humildes donde prima el deseo de mantener dichas formas de vida y sostener los medios con los que dichas comunidades han subsistido históricamente ante las amenazas e impacto generados por el desarrollismo neoextractivista. En estos casos, la envergadura del conflicto toma mayor cariz dado que la población afectada requiere acceso al mismo recurso sobre el cual se aplica la explotación intensiva, lo cual genera un “pulso” de difícil salida negociada.

La cuarta categoría reconocible es definida por los Bebbington como “ambientalismo de justicia socioambiental”, y tiene su eje fundamental en la desigualdad, enfocando su interés sobre quienes quedan más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de la actividad relacionada con el neoextractivismo. Este tipo de ambientalismo prioriza la defensa de los derechos humanos y reivindica prácticas de

consentimiento previo libre e informado, zonificación ecológica socioeconómica, participación de las comunidades en la toma de decisiones que le son de interés y endurecimiento de la regulación aplicable a las corporaciones y los Estados con el fin de garantizar los derechos de las poblaciones afectadas. Estos sectores suelen ser calificados desde gobiernos y empresas transnacionales como extremistas, o más recientemente como “ecologistas infantiles”.

La quinta y última categoría es definida como “ecologismo profundo”, el cual se articula a grandes rasgos sobre la tesis de que la naturaleza tiene el mismo derecho a la existencia que los seres humanos. En la medida que el extractivismo desarrollista, en cualquiera de sus vertientes y formas, destruye la naturaleza, el conflicto se convierte en irreversible y sin vías para la solución.

Cabe indicar a este respecto que la clasificación no tiene un carácter estanco, y que a pesar de que unas apunten al conservacionismo y otras a los temas ambientales ampliados a sus dimensiones sociales, estas tendencias en la práctica están superpuestas sobre cómo entienden la sustentabilidad; en resumen, si esta se articula sobre conceptos de reforma del actual sistema capitalista y el orden social que este genera, o si lo cuestionan desde la perspectiva de que las soluciones pasan por cambios transformadores del actual orden constituido, y por ende de la vida. Sin embargo, y en parte por el conjunto de las diferencias descritas con anterioridad, se hace difícil hablar de un movimiento social ambientalista coordinado y estructurado orgánicamente en los diferentes países del subcontinente, a pesar de que la conflictividad socioambiental cada vez es más relevante a nivel regional.

Los diversos gobiernos nacionales de la región, empezando por los considerados “progresistas”, han ido desarrollando en los últimos años estrategias encaminadas a doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política no es lejana a su historia. De igual manera se han construido, desde los diferentes gobiernos, políticas de criminalización que tienen como objetivo el resquebrajamiento al interior de las resistencias al proyecto neoextractivista a escala regional, lo que habitualmente suele coincidir con territorios de identidad indígena.

Y es aquí, como anotamos brevemente con anterioridad, donde el movimiento indígena, sin ser representado por organizaciones estrictamente socioambientales, ejerce un papel predominante en la defensa de la naturaleza, el control de los territorios frente a la embestida transnacional y la resistencia frente a las políticas desarrollistas impulsadas por los actuales gobiernos. Es por ello que se convierte en un referente a ser abatido desde los poderes institucionales, tengan estos el perfil político que tengan.

Apenas por citar un par de casos puntuales y actuales de estas tensiones auspiciadas desde los gobiernos en contra de las organizaciones indígenas y las resistencias locales a los proyectos de expansión desarrollista, cabe recordar que en mayo de 2012 el gobierno de Evo Morales auspició la convocatoria a una reunión no orgánica de presidentes de organizaciones regionales afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz, con el fin de desarticular y debilitar tanto a la confederación indígena como a la novena marcha que estos protagonizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional “Isiboro Sécore” (TIPNIS), los cuales han sido definidos por el gobierno boliviano como

movimientos que responden a lógicas desestabilizadoras y golpistas. De forma paralela, el gobierno de Rafael Correa, en Ecuador, mantiene una política fuertemente agresiva contra el movimiento indígena, al que considera junto al ecologismo e izquierdismo infantil como “los peores enemigos del progreso”, y propició que dirigentes a nivel nacional del Pachakutik (agrupación política vinculada a la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE) hayan sido agredidos recientemente en la provincia de Chimborazo por minoritarios sectores indígenas afines al oficialismo bajo la dirección de líderes expulsados del propio movimiento, a la par que fomenta la ruptura al interior de sus organizaciones más importantes a través de la captación de líderes indígenas con un controvertido pasado político (los casos de Miguel Lluco, Antonio Vargas y otros).

Y es en este ámbito de conflicto entre las centroizquierdas burocratizadas en el poder y los movimientos sociales alternativos, en especial el movimiento indígena, donde se visualiza con claridad hasta dónde están llegando las contradicciones de la izquierda institucional latinoamericana. Esta, enmarcada en una contienda de tal magnitud contra el movimiento indígena que ni el neoliberalismo llegó a protagonizar, ignora de manera intencionada que el movimiento indígena latinoamericano es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad subcontinental contemporánea. Desconoce que dicho movimiento asumió una dimensión regional y se dotó de un profundo contenido universal y de una visión global de los procesos sociales y políticos a escala internacional. Y que dicho movimiento explica, en muchos casos, por ejemplo en Ecuador, que se hayan podido configurar, inclusive, los gobiernos de centroizquierda en la actualidad.

Desde la crítica y ruptura con la visión eurocéntrica, sus lógicas y el modelo filosófico, historiográfico y sociológico derivado de la modernidad, el movimiento indígena latinoamericano recupera los legados de civilizaciones originarias para reelaborar las partes de las diferentes identidades existentes en el subcontinente. Desde el movimiento indígena, a pesar de sus respectivas crisis internas, expresadas de diferentes maneras en cada uno de los países donde tienen realidad, se plantea el rescate de todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la larga noche colonial que sigue muy vigente en nuestros días y posteriormente al imperialismo en la región. Sus organizaciones abarcan un amplio espectro del territorio latinoamericano, el cual se extiende a través de la Cordillera de los Andes y aledaños, por territorios y países como Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador o Perú; con singular importancia política en varios de ellos, así como en los diferentes países centroamericanos y México.

Es aquí donde vale recuperar un elemento que fue de fundamental importancia en la reconfiguración de las izquierdas alternativas mundiales al posestalinismo: el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que aparece públicamente en 1 de enero de 1994 con la toma de San Cristóbal en Chiapas, el mismo día por cierto que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese actualizado zapatismo, que se configuró con inspiración política en la vieja lucha de Emiliano Zapata por la Tierra y la Libertad, el marxismo y el socialismo libertario, se constituyó con el objetivo de subvertir el orden hegemónico y construir una sociedad más justa en México. El neozapatismo planteó una forma diferente de llegar al “socialismo”, vía que fue despreciada por

la izquierda institucional y convencional posiblemente por temor a un proceso que aunque se configuraba como más auténtico, era imposible de ser controlado por parte de la institucionalidad, es decir, estaba fuera de las “reglas de juego” marcadas por la democracia burguesa²³. Desde esta perspectiva, y más allá de la realidad actual de México, se abre un mundo de desencuentros entre los gobiernos latinoamericanos, incluidos entre ellos los considerados más progresistas, y el movimiento indígena. Los principales ejes de desencuentro son tres:

1. La demanda por parte del movimiento indígena de Estados plurinacionales (modelo ya incorporado en las Constituciones de Bolivia y Ecuador aunque con escasos avances en materia de políticas concretas). Frente a este reclamo histórico, la izquierda tradicional evidencia su incapacidad para entender de qué se trata esta cuestión. Hablar de Estado plurinacional significa poner en cuestión el Estado-nación y con ello la tradición política occidental de la que derivan estas izquierdas de América Latina, un listón demasiado alto para los actuales gobiernos latinoamericanos, los cuales se encuentran muy lejanos del anteriormente mencionado “socialismo indoamericano” propugnado por Mariátegui.
2. La defensa por parte del movimiento indígena de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. Esta vertiente ambiental del conflicto de los Estados *versus* el movimiento indígena, genera un enfrentamiento de raíz con las políticas desarrollistas y por ende neoextractivistas, alzadas como bandera del desarrollo y de la lucha contra la pobreza. Y en el caso de los gobiernos progresistas del continente, es precisamente este el eslabón que les engarza a las políticas aplicadas en las décadas del neoliberalismo.
3. Las demandas del movimiento indígena sobre los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Sin duda, otro reto imposible de superar para una izquierda que, en su ya largo recorrido, nunca entendió sobre semejante reivindicación, a pesar de que la constitución de 1924 de la Unión Soviética fuera la primera en el mundo en reconocer dicho derecho para sus repúblicas, aunque no para las regiones autónomas²⁴. Esto explica las deportaciones de chechenos, ingushes y tártaros de Crimea y otras poblaciones a las entonces repúblicas socialistas de Kazajstán y Siberia en la década del cuarenta en la Unión Soviética de Stalin; o como en la Nicaragua sandinista de los años ochenta, cuando el gobierno revolucionario intentó vincular a la costa atlántica a su estructura administrativa siguiendo los mismos lineamientos que en el resto del país, ignorando sus particularidades étnicas, sociales, idiomáticas e incluso religiosas. La demanda de los miskitos en torno a la asociación étnica fue definida en aquel entonces por el comandante Tomás Borge como una “resistencia sectaria”, lo que conllevó a la represión sobre las comunidades alzadas, derivando a la postre en que los “contras” de la Fuerza Democrática Nicaragüense generaran bases de apoyo en territorios miskitos con la aquiescencia de sus moradores.

Además de estas, otras demandas indígenas también se convierten en elementos de difícil comprensión para los actuales gobiernos de América Latina. Entre otros

puntos podemos señalar: la reivindicación de respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y lo diverso; la extinción de toda forma de discriminación racista o étnica; la reivindicación de formas colectivas de decisión sobre la producción, los mercados y la economía; la decolonialidad de las ciencias y las tecnologías; y la reivindicación de una nueva ética social alternativa a la del mercado.

Es así que, volviendo a Bolivia y a Ecuador, los países con textos constitucionales más avanzados en los cuales incluso se incorpora el objetivo del Buen Vivir – *suma qamaña* y *sumak kawsay*, respectivamente–, se terminan aplicando políticas que están en esencia en contra de dicho concepto. Esta es una propuesta civilizatoria que emerge desde la periferia de la periferia, proviniendo del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados (Tortosa, 2011), no como una alternativa de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo (Acosta, Galeano *et al.*, 2009).

Expresión partidista ecologista en la región

Por último y en el ámbito de las estructuras políticas que consideran lo socioambiental como de fundamental importancia, se hace necesario radiografiar de forma básica los referentes de los Partidos Verdes latinoamericanos. La red internacional de partidos verdes, la Global Greens²⁵, federa a doce partidos verdes en América Latina y el Caribe, incluyendo el partido Puertorriqueños por Puerto Rico, primer y único partido político portorriqueño de base ambiental.

Sobre esta realidad valoraremos a las tres organizaciones de mayor importancia: el Partido Verde de Brasil, donde en la última elección y con la ex ministra lulista Marina Silva se obtuvieron casi 20 millones de votos; Colombia, donde el Partido Verde alcanzó en el último sufragio 4 millones de votos; y México, donde la opción verde se estima que cuenta con 2 millones de votos, pero que en las últimas elecciones presidenciales, montados sobre caballo ganador, han corrido de la mano en alianza electoral con el tan cuestionado Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Partido Verde brasileño, con 26 años de historia, recibió un 19,55% de los votos en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales –el voto del Partido Verde fue el que impidió que Dilma Rousseff ganara en primera vuelta–, convirtiéndose de esta manera en la tercera fuerza electoral del gigante del sur. Sin embargo, el Partido Verde brasileño no ha tenido históricamente gran fuerza electoral, siendo Fernando Gabeira su único representante en el congreso nacional durante dos legislaturas, diputado por el Estado de Río de Janeiro (1995-1998 y 1999-2002)²⁶.

El Partido Verde fue una de las organizaciones políticas que apoyaron al gobierno lulista, rompiendo dicha alianza en la segunda mitad del mes de mayo de 2005, fruto de divergencias en la política ambiental. En 2008, los verdes brasileños habían presentado 10.540 candidatos para las elecciones municipales en listas verdes autónomas, consiguiendo entonces 2,6 millones de votos (hasta un 23% en Río de Janeiro). La incorporación de una líder emblemática como Marina Silva les permitió acercarse a los 20 millones de votos en las últimas presidenciales, recibiendo tanto los votos del ambientalismo conservador como los de una parte del electorado del Partido de los Trabajadores decepcionada por la política

desarrollista de Lula, plasmada en cuestiones tales como el reinicio del programa nuclear, la apertura de Brasil a los transgénicos, la destrucción de la Amazonía a favor de los agrocombustibles y la nefasta política dirigida a los pueblos indígenas, entre otras cuestiones.

Fruto de los resultados en las últimas elecciones, pudimos ver cómo en los diferentes estados federales los cabezas de listas “verdes” transaron alianzas carentes de contenidos ideológicos o programáticos con la derecha y el oficialismo, indistintamente, en busca de cargos políticos e institucionales.

En el caso del Partido Verde colombiano, su construcción lleva apenas dos años y medio, careciendo de historia propia aunque provenga de la refundación de la antigua organización política de centroderecha Partido Verde Opción Centro. En septiembre de 2009 se adhieren al Partido Verde colombiano tres notables figuras de la política nacional, los ex alcaldes de Bogotá Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. El Partido Verde sirvió como plataforma electoral a Mockus para la disputa de la presidencia frente al conservador Juan Manuel Santos, o a Peñalosa para disputarle la alcaldía de Bogotá al Polo Democrático Alternativo, aunque en ninguno de los dos casos tuvo éxito. De esta manera, el Partido Verde colombiano presentó en los últimos comicios electorales programas poco vinculados a la problemática ambiental y a los efectos de las políticas desarrollistas aplicadas por el gobierno de Uribe Vélez y reforzadas en la actualidad por Juan Manuel Santos. El partido quedó limitado a una plataforma electoral a través de la cual se agruparon políticos de diferentes tendencias ideológicas con la finalidad de postular a cargos públicos en la actual legislatura.

En la actualidad, tanto el Partido Verde brasileño como el colombiano ya no cuentan en sus filas con sus candidatos presidenciales en los comicios anteriores, Marina Silva y Antanas Mockus²⁷, lo cual muestra a dichas organizaciones como herramientas básicamente electorales al servicio de determinados personajes públicos.

En el caso del Partido Verde Ecologista de México, organización fundada en 1986 que llegó a ser la cuarta agrupación política mexicana en cuanto al número de representantes en el congreso del país, basta observar sus últimas alianzas electorales para entender su lógica política vital. En las elecciones del año 2000, formó junto al conservador Partido Acción Nacional (PAN) la Alianza por el Cambio, la cual posicionaría a Vicente Fox como presidente; en 2003 hizo alianza electoral con el PRI, situación que se repitió en las elecciones del presente año, que le dieron el triunfo a Peña Nieto.

Como conclusión, cabe indicar que las estructuras políticas articuladas en torno a la Global Greens y al mundo verde institucional carecen de posicionamientos programáticos que incorporen coherentemente alternativas a las realidades anteriormente descritas y a la problemática existente en la situación actual. La mayoría de los partidos verdes no son actores de cambio ni agentes de transformación social; en definitiva, no son herramientas de transformación del sistema capitalista. Su existencia responde a lógicas electoralistas y su desconexión con el frente social ambiental es evidente.

Más allá de estos partidos, la irrupción de gobiernos progresistas en Latinoamérica ha generado la aparición de alternativas, la mayoría de ellas en cons-

trucción desde la izquierda política y social, en muchos casos fruto de rupturas desde el mismo oficialismo en diferentes países. La novedad de estas nuevas izquierdas es la incorporación en sus actas fundacionales y programas en elaboración de un fuerte contenido socioambiental que pretende ser rupturista con las lógicas actuales.

La ruptura con sus correspondientes gobiernos, o bien el distanciamiento, se ha ido haciendo mayor en función del ejercicio gubernamental, que ha significado para algunas de estas nuevas agrupaciones un factor de aislamiento sociopolítico. Este podría ser el caso del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)²⁸, una organización política de 11 mil miembros constituida en 2004 a partir de la expulsión del Partido de los Trabajadores de varios de los dirigentes de una tendencia interna trotskista, denominada Democracia Socialista.

En contraposición a este hecho está la experiencia ecuatoriana. Bajo el nombre de Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas se han articulado hasta ahora siete organizaciones y frentes políticos, algunos provenientes de rupturas con el correísmo, que articulan en este momento un candidato único y un programa común junto a los movimientos sociales combativos del país (mujeres, indígenas, ambientalistas, campesinos, organizaciones barriales, sindicatos y organizaciones estudiantiles). Esta agrupación pretende ser una conformación transformadora de cara a la renovación de las actuales izquierdas latinoamericanas y un elemento referencial ante la disputa electoral que tendrá lugar en Ecuador el próximo mes de febrero. Lo fundamental de este proceso en construcción es entender que no habrá una izquierda con capacidad de cambiar el sistema si no aborda también el tema ambiental, entre otras cuestiones fundamentales como son por supuesto las cuestiones políticas, culturales, sociales y económicas, así como las demandas de género, étnicas e intergeneracionales, entre otras.

A modo de conclusión

El conflicto irresoluble entre los gobiernos de América Latina y las izquierdas sociales y políticas no puede devenir en otra cosa que no sea la reconfiguración de una nueva izquierda social y política que incorpore en sus programas las alternativas a las políticas que han significado su distanciamiento del oficialismo y de los “teóricos” gobiernos revolucionarios existentes en la actualidad.

En el caso de los gobiernos de perfil progresista de nuestro continente, la miopía avanzada, cercana ya a la ceguera total, respecto a la problemática ambiental, podría resumirse en las palabras del mandatario ecuatoriano Rafael Correa, cuando en una entrevista el pasado mes de mayo a un medio de comunicación chileno, declaraba: “¿Dónde está en el *Manifiesto Comunista* el no a la minería? Tradicionalmente los países socialistas fueron mineros. ¿Qué teoría socialista dijo no a la minería? Son los pseudointelectuales postmodernistas los que meten todos estos problemas en una interminable discusión. No hay dónde dudar: salir del modelo extractivista es erróneo”²⁹. Así, el presidente ecuatoriano olvidaba que si de hecho hay un error en la “ley del valor”, desarrollada por primera vez por Marx en su obra *Miseria de la filosofía* (1847) –texto que se desarrolló como respuesta a la *Filosofía de la miseria* de Proudhon–, es precisamente no haber contemplado en dicha ley

el impacto ambiental de la producción sobre el planeta. En descargo del viejo intelectual, filósofo y pensador alemán, podemos alegar que dicha obra se remonta a 165 años atrás, cuanto era aún difícil prever la situación actual del planeta.

Dicha reconstrucción de la izquierda se hace fundamental al momento de refundar alternativas y resistencias a políticas que no dan solución al problema global (no sólo ambiental) y que por sus estilos, formas y contenidos actúan en decremento de la participación social, la democracia directa y el respeto al conjunto de pueblos y nacionalidades indígenas existentes a lo largo y ancho del subcontinente.

Para concluir, citando nuevamente a Bolívar Echeverría (2010), “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida. Ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital sólo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”. Lo que equivale a afirmar que no habrá alternativas a la crisis global multifacética en el interior del sistema capitalista.

Bibliografía

- Acosta, Alberto; Galeano, Eduardo *et al.* 2009 *Derechos de la Naturaleza* (Quito: Abya-Yala).
- Acosta, Alberto 2012 *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi* (Quito: PolicyPaper 9/Fundación Friedrich Ebert/FES-ILDIS).
- Acosta, Alberto 2012 “El retorno del Estado. Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas” en *Tendencia* (Quito) N° 13, abril-mayo.
- Bebbington, Anthony y Humphreys, Denise 2009 “Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú” en *Íconos* (Quito: FLACSO) N° 35.
- Bradshaw, Corey; Giam, Xingli y Sodhi, Navjot 2010 “Evaluating the relative environmental impact of countries” en *Plos One* <www.plosone.org>.
- Brailovsky, Antonio Elio 2009 *Historia ecológica de Iberoamérica II* (Buenos Aires: Capital Intelectual).
- Bellver Capella, Vicente 1997 “Las ecofilosofías” en Ballesteros, Jesús y Pérez Adán, José *Sociedad y medio ambiente* (Barcelona: Trotta).
- Calixto Flores, Raúl 2007 “Contribuciones para la formación de una conciencia planetaria en el siglo XXI” en *Tiempo de Educar* (Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México) N° 16, julio-diciembre.
- Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo 1992 (1987) *Nuestro Futuro Común* (Madrid: Alianza).
- Dobson, Andrew 1997 *Pensamiento político verde* (Barcelona: Paidós/Ibérica).
- Demirovic, Alex 1989 “Ecological crisis and the future of democracy” en *Capitalism, Nature, Socialism* (Nueva York) N° 2, Vol. 1.
- Devall, Bill and Sessions, George 1985 *Deep Ecology: Living as if Nature Matters* (Layton: Peregrine Smith).
- Echeverría, Bolívar 2010 *Modernidad y blanquitud* (México: Era).
- Fernández Durán, Ramón 2009 *El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial* (Madrid).

- Folchi, Mauricio 2001 "Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas" en *Ecología Política* (Icaria) N° 22.
- Gadotti, Moacir 2002 *Pedagogía de la tierra* (México: Siglo XXI).
- Ghione, Soledad y Loretto, Valentina 2010 *Situación ambiental de América del Sur* (Lima: REDGE).
- Gorz, André y Bosquet, Michel 1975 *Ecologie et Politique* (Paris: Seuil).
- Gorz, André 2008 *Ecológica* (Paris: Galilée).
- Gudynas, Eduardo 1992 "Los múltiples verdes del ambientalismo latinoamericano" en *Nueva Sociedad* (Friedrich Ebert Stiftung) N° 122, noviembre-diciembre.
- Gudynas, Eduardo 2009 *Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo* (Montevideo: CLAES).
- Heller, Agnes 1983 "The Dissatisfied Society" en *Praxis International* (Londres) N° 2.
- Hobsbawm, Eric 1998 *Historia del Siglo XX* (Buenos Aires: Crítica).
- Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2007* en <www.ipcc.ch>.
- Leff, Enrique 1986 *Ecología y Capital* (México: Siglo XXI).
- Lohman, Larry 2012 "Mercados de carbono. La neoliberalización del clima" (Quito: Abya-Yala).
- Machado, Decio 2011 "Apoyemos que se ponga el cascabel al gatopardo", ponencia en la presentación del libro *El Cascabel del Gatopardo* de Mateo Martínez Abarca, Quito, 5 de enero.
- Machado, Decio 2012 "Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios del Gobierno de Rafael Correa" en *R* (Quito) N° 9, enero-marzo.
- Machado, Decio 2012 "¿Una nueva etapa de los movimientos sociales en Ecuador?" en *La Tendencia* (Quito) N° 13, abril.
- Mandel, Ernest 1980 *Long Waves of Capitalist Development* (Londres: Cambridge University).
- Martí, José 1991 *Nuestra América* (La Habana: Casa de las Américas).
- Martínez Alier, Joan 2005 *El Ecologismo de los Pobres* (Barcelona: Icaria).
- Mariátegui, José Carlos 1928 "Aniversario y balance" en *Amauta* (Lima) año II, N°17, septiembre.
- Marx, Karl 2003 (1852) *El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte* (Madrid: Alianza).
- Marx, Karl y Engels, Federico 1974 *Obras Escogidas* (Moscú: Progreso) Tomo II.
- Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. y Behrens, W. 1972 *Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad* (México: FCE).
- Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G. y Robles Gil, P. 1997 *Megadiversidad. Los países biológicamente más ricos del Mundo* (México: Cemex).
- Murray, I.; Rullán, O.; y Blázquez, M. 2005 "Los Cambios en la Cobertura de la Tierra" en *Geocrítica* (Madrid) Vol. X, N° 571.
- Petras, James 2012 "El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista" en *Rebelión* (Madrid: Iepala) 8 de mayo.

- Sachs, Wolfgang 1996 *Diccionario del Desarrollo: una guía del conocimiento como poder* (Lima: PRATEC).
- Simon, J.L. y Kahn, H. 1984 *The Resourceful Earth: A Response to Global 2000* (Nueva York: Basil Blackwell).
- Tortosa, José María 2011 *Mal desarrollo y Mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial* (Quito: AbyaYala/Fundación Rosa Luxemburg).
- Wallerstein, Immanuel 1988 *El capitalismo histórico* (Bogotá: Siglo XXI).

Notas

1 Sobre esta afirmación, se puede consultar la conferencia dictada por Manfred Max Neef en la Universidad EAFIT, de Medellín, Colombia, en <www.umanizales.edu.co>.

2 La crítica naturalista se asentó sobre tres principios básicos: la reivindicación del higienismo, que reclama mejores condiciones de vida para los trabajadores y su entorno urbano; el naturismo como reivindicación de un reencuentro entre el ser humano y la Naturaleza; y el conservacionismo que se plasma en las primeras asociaciones proteccionistas de animales y hábitats naturales.

3 Para el año 1800 se estima una población mundial de mil millones de habitantes con respecto a los 7 mil millones censados a finales de 2011.

4 La capacidad de producción energética de la URSS pasó de 46 millones de toneladas en 1913 (dependiente básicamente del carbón) a 238 millones de toneladas en 1940. Las hidroeléctricas generaron 6 millones de kilovatios en 1955 y 33 millones en 1971 (quedando el combustible vegetal reducido al 6% del total). La extracción de petróleo del Cáucaso y del gas natural tomó fuerza a partir de 1950, lo que situó a la URSS como un país puntero en la producción petrolera. El desarrollo energético de la URSS se asentó sobre la explotación de su riqueza en recursos naturales, lo que le convirtió en el único país desarrollado con capacidad de autoabastecimiento energético.

5 La URSS desarrolló una importante industria siderúrgica con base en la explotación de sus importantes reservas del material ferroso, hulla y manganeso, convirtiéndose en el país líder de la producción mundial de hierro y uno de los más importantes productores de acero del planeta.

6 Fue Nikita Krushev, responsable de la desestalinización parcial de la URSS, quien revelaría, entre otras cuestiones, el estancamiento y en algunos casos retroceso de la producción agrícola soviética entre 1913 y 1950. Aunque entre el año 1950 y el de 1965 la producción agropecuaria aumentó a un ritmo de 1.5% al año, se mantuvo por debajo del índice de crecimiento poblacional. Posteriormente, Brezhnev y Kosyguin reformularon métodos de producción socializada y de distribución de mercado. La reforma de 1965 amplió las primas y los estímulos individuales para incentivar la producción, y posteriormente, durante el mandato de Gorbachov, se

impulsó una política de apertura sobre los rígidos esquemas del estalinismo. A la llegada de la Perestroika, la URSS producía el doble de fertilizantes químicos que EE.UU., cuadruplicaba el número de vacas lecheras respecto a los estadounidenses y utilizaba cinco veces más tractores en labores agrarias que su rival, sin embargo su producción se mantenía estancada, el sector rural en crisis y se importaban cada vez más alimentos.

7 El “socialismo realmente existente”, en realidad, formaba parte de dicha economía-mundo. Nunca logró erigirse como una alternativa en términos civilizatorios.

8 Datos de la *Lista Roja de Especies Amenazadas*, que publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos datos apenas realizan una “mirada general” sobre lo que está ocurriendo respecto a las diferentes formas de vida en el planeta, pues sólo analizan el 2,7% de las especies conocidas, lo que significa que el número de especies en peligro de extinción puede ser mayor. Según el informe, en relación a las especies de agua dulce, el 38% de los peces están amenazados en Europa, mientras que en África oriental se encuentran en peligro el 28%. “En los océanos, el panorama es igual de sombrío. Muchas especies marinas están sufriendo una pérdida irreversible debido a la sobrepesca, el cambio climático, las especies invasoras, el desarrollo costero y la contaminación”, destaca la publicación. Además, señala que “las aves marinas están mucho más amenazadas que las terrestres, con un 27,5% en peligro de extinción, frente al 11,8% de las aves terrestres en la misma situación”.

9 Todas las plantas y los animales que habitan en el planeta tienen un papel específico y sirven para conseguir alimentos, medicamentos, oxígeno y agua pura, y para la polinización de los cultivos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la fertilización.

10 La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue la estadounidense Donella Meadows, biofísica y pionera científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas.

11 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente de Estocolmo, de junio de 1972, que permitió la creación del Programa de las Naciones Unidas por el Medioambiente (PNUM-UNEP, son sus siglas en inglés).

12 El *Rainbow Warrior* era utilizado como barco soporte para las manifestaciones de protesta organizadas por *Greenpeace* contra diferentes actividades realizadas por diversos países contrarias a la protección del medio ambiente y de las especies marinas.

13 La Crisis Global Multifacética es fruto de la combinación e interconexión de siete crisis: la económica, la ideológica, la energética, la alimentaria, la medioambiental, la democrática y la de hegemonía.

14 Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, una política noruega miembro del Partido Laborista que ocupó el cargo de primera ministra de Noruega en tres ocasiones (1981, 1986-1989 y 1990-1996).

15 El "Protocolo de Kyoto" sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tenía por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO₂), gas metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF₆), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.

16 Hay visiones alternativas del concepto de sustentabilidad, como la del pedagogo y filósofo brasileño Moacir Gadotti (2002), quien indica que "el desarrollo podría ser un proceso integral que incluyera dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales y ambientales, y no sólo económicas".

17 Utilizando como ejemplos los datos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, podemos indicar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), la pobreza se redujo en dicho país del 49% en 1998 al 27%, mientras la pobreza extrema pasó del 22% al 7%. De igual manera, según datos de la CEPAL, desde 2007 la pobreza en Bolivia bajó del 61 al 49%, mientras la pobreza extrema bajó del 34 al 25,4%. Por último, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Ecuador, entre los años 2006 y 2011, la pobreza se redujo del 37,6 al 28,6%, mientras la extrema pobreza se redujo del 16,5 al 13,2% en 2010.

18 Tres casos significativos son los de Venezuela, Bolivia y Ecuador: a) Venezuela: la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) definió el pasado mes de abril a este período como "el mejor momento de su historia", haciendo referencia a la situación actual de la banca. Así, los primeros siete bancos privados, en ganancias, para abril de 2012, obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un 81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasando de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pe-

sar de que la economía se había contraído un 7,1%; de igual manera, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no sólo es que más crece el sector privado, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano, concepto que comprende los pagos a la propiedad (intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02 en 1999 al 61,30% en el 2010. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela, y a pesar de las mejoras respecto al índice de Gini en el país, tras más de una década de gobierno "revolucionario", el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso; b) Bolivia: en Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio de 2011 fueron de 172,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano. Paralelamente, hasta noviembre de 2011, las recaudaciones fiscales lograban un récord histórico. El ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa prácticamente un cuarto de los ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, se congratulaba de dicha situación indicando que "le está yendo muy bien al sector privado, porque están pagando grandes cantidades por el IUE. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo [...] a las recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas"; y c) Ecuador: el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años del gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15,4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010, aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares. Tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% el PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de los gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal.

19 Brasil es el segundo productor de bioetanol del mundo, con 33,2% de participación en el mercado detrás de Estados Unidos, responsable del 54,7% de la producción mundial, según datos de 2009. Co-

lombia, a su vez, figura en el décimo lugar de los países productores, con el 0,4%. Argentina, por su parte, es el segundo productor mundial de biodiesel, con el 13,1% del mercado, también después de Estados Unidos, que lidera con el 14,3%. Brasil se ubica en quinto lugar, con el 9,7% de la participación (datos de la CEPAL, 2011).

20 El neoextractivismo difiere del anterior extractivismo respecto al papel otorgado al Estado y a su legitimación social y política, lo que implica resultados económicos sustancialmente diferentes para los países.

21 Extraído de la conferencia dictada por el experto Dr. José Frutos, geólogo chileno, invitado al Seminario Internacional *Adelantos de la Exploración de Yacimientos Auríferos*, el 27 de noviembre de 2009, en Quito.

22 La onceava ronda petrolera afectará al 100% de los territorios de los indígenas andoas, záparas y shivias, al 93% del de los achuar, al 73% del de los kichwas amazónicos y al 38% del de los shuar.

23 Utilizamos la perspectiva de la “democracia burguesa” definida por Rosa Luxemburg (*bürgerliche Demokratie*), para quien dicho término significaba lo mismo que para Engels y Marx, “democracia pura” (*reine Demokratie*), a saber: no el nombre de un régimen político institucionalmente establecido y epocal, sino la caracterización de una corriente sociopolítica.

24 Lenin defendió el derecho de libre determinación de las naciones, entendido como derecho a la secesión, aunque desde su visión, subordinándolo a la lucha de clases. Cuando los bolcheviques alcanzaron el poder tras la Revolución de Octubre, el principio de autodeterminación se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y en virtud de la misma se reconoció la independencia de Finlandia.

25 Global Greens nació en abril de 2001 en Canberra, Australia, y engloba a distintas federaciones de partidos verdes en los cinco continentes.

26 Gabeira fue uno de los miembros fundadores del Partido Verde de Brasil, pero abandonó la agrupación en 2002 para unirse al Partido de los Trabajadores, volviendo posteriormente al primero debido a conflictos con el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva. Conocido por su libro *O Qué é Isso, Companheiro?*, escrito en 1979, donde se narra la historia de la resistencia contra la dictadura militar en Brasil y se enfoca en el secuestro del embajador estadounidense Charles Burke Elbrick en 1969 (un evento en el que Gabeira participó como miembro del MR-8), fue candidato a la alcaldía de Río de Janeiro durante las elecciones municipales de Brasil de 2008, pero perdió frente a Eduardo Paes.

27 Mariana Silva salió, a mediados del año pasado, del Partido Verde brasileño con la intención de conformar un movimiento social ciudadano de la misma naturaleza que los “indignados” españoles; mientras que Antanas Mockus salió a mediados del año pasado del Partido Verde colombiano consecuencia del conflicto interno que se generó en el partido por el apoyo recibido por Peñalosa de parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

28 El PSOL, en las elecciones generales de 2006, consiguió, con la histórica candidatura presidencial de Heloisa Helena, un 6,85% de los votos. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales y con Helena en las filas del Partido Verde apoyando la candidatura de Marina Silva, el PSOL apenas logró el 0,87% de los votos (888 mil).

29 Véase la revista *Punto Final* N° 758, en <www.puntofinal.cl>.

“Porque juntos somos muchos más”

Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados¹

NORMA GIARRACCA

Profesora titular de la cátedra de Sociología Rural e investigadora principal del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

DANIELA MARIOTTI

Profesora de la cátedra de Sociología Rural de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET en el IIGG-UBA.

Resumen

La lucha por la defensa del territorio, protagonizada mayoritariamente por los pueblos originarios en toda América Latina, ha llegado a involucrar a diversos tipos de actores que no necesariamente habitan en los lugares amenazados por el saqueo, pero que colaboran con los que sí resultan afectados. Estos actores son conocidos como “terceros sujetos”, y su actuación en relación a los movimientos socioterritoriales es explorada por Norma Giarracca y Daniela Mariotti en este artículo. A través de un breve recorrido por algunos de estos movimientos, las autoras dan cuenta de las estrategias que siguen los actores comprometidos con la defensa del territorio para seleccionar a sus interlocutores y para tejer alianzas con otros actores. De esta manera, muestran la importancia que tienen las redes de aliados para la coordinación de acciones de protesta, denuncia y solidaridad entre quienes se comprometen, en mayor o menor medida, con los movimientos sociales.

Abstract

The struggle for the defence of territory, mostly led by indigenous peoples throughout Latin America, has come to involve several players who need not live in areas which are under threat of dispossession, but who aid those which are actually affected. These players are known as “third actors”, and their participation in social and territorial movements is explored by Norma Giarracca and Daniela Mariotti in this paper. Through a brief review of some of these movements, the authors refer to how the players involved in territorial defence choose their interlocutors and how they forge alliances with other players. Thus, the authors stress the importance of the networks of allies for the organisation of protests, the pursuit of grievances, and solidarity among those who are, to a greater or lesser extent, committed to social movements.

Palabras clave

Movimientos socioterritoriales, redes, terceros sujetos, alianzas.

Key words

Social and territorial movements, networks, third actors, alliances.

Cómo citar este artículo

Giarracca, Norma y Mariotti, Daniela 2012 "Porque juntos somos muchos más". Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Introducción

En este trabajo nos proponemos abordar a los movimientos socioterritoriales (Fernandes, 2005) que se verifican en mundos sociales diversos de la Argentina, desde pequeños asentamientos, mundos rururbanos o espacios agrarios hasta, incluso, involucrar a miembros de las grandes ciudades. Tenemos una larga tradición de estudios de estos movimientos (Giarracca, 2001), pero en esta ocasión deseamos mostrar los apoyos y colaboraciones de terceros sujetos a los movimientos, tanto en los espacios artísticos, periodísticos, como en los de mayor institucionalidad, como el universitario, el legislativo, el educativo o el ámbito religioso.

Desde finales del siglo XX y lo que va de este siglo, muy pocas veces se registraron transformaciones de la magnitud actual en los territorios y en las relaciones políticas, económicas, sociales y mundos de vida de las poblaciones de toda América Latina. Más allá del conocimiento de las estrategias geopolíticas, militares y económicas de los centros de poder global, existe una forma sencilla de poner en imágenes esta situación de nuestro continente. El Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, dirigido por la economista mexicana Ana Esther Ceceña, elaboró una serie cartográfica donde se demuestra cómo se superponen las regiones de recursos naturales disponibles con las nuevas bases militares extranacionales y los proyectos de infraestructura continental. Un ejemplo es la iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) para nuestra región².

Raúl Zibechi (2006) sostiene que el sur de América Latina es una de las pocas regiones del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos de esta etapa: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y lo mismo decimos nosotras sobre este "sur del sur", que es nuestro territorio nacional. De allí que podamos advertir fácilmente no sólo la presencia de las corporaciones transnacionales interesadas en los bienes comunes (Repsol, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sino los diseños políticos, jurídicos y legales que se realizaron para habilitar la modificación de la geografía, así como los cordones de infraestructura para sacar los recursos naturales y profundizar la dependencia a los grandes centros de poder internacional.

En los países centrales existen regulaciones o controles que tienden a limitar estas actividades extractivas, lo que implica un aumento de sus costos y una reducción de las ganancias. Como consecuencia, sea por la escasez o por sus efectos contaminantes, las empresas que utilizan los recursos naturales "a escala global" tienden a instalarse en países distintos a los de sus orígenes, donde los mundos sociales de quienes toman las decisiones están a salvo y, como dice Ceceña (2004), "el otro nacional" pierde expresión e importancia. En mayo de 2010, por ejem-

plo, el parlamento europeo recomendó la prohibición de actividades mineras que impliquen el uso de cianuro, recogiendo medidas similares a las que se habían producido en la República Checa, Alemania y Hungría.

Terceros actores, formación de redes

Las relaciones entre los movimientos sociales y terceros actores, la conformación de aquella "red o espacio de movimiento social" como fenómeno en desarrollo, aún más reciente que los momentos de conformación de los movimientos, no han sido suficientemente estudiadas todavía. Algunos autores europeos han analizado la dinámica de las relaciones interorganizativas intentando reconstruir los mecanismos mediante los cuales los grupos comparten recursos y militantes para alcanzar objetivos comunes; otros han propuesto resaltar la naturaleza reticular de los movimientos, pero sin precisar sus características ni los factores que condicionan su formación. El que más nos interesa para los fines de este trabajo es Mario Diani (1998), quien lleva más lejos el papel de las articulaciones y propone definir al movimiento social mismo como "un conjunto de redes de interacción informales entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones, comprometidas en conflictos de naturaleza política o cultural, sobre la base de una específica identidad colectiva" (Diani, 1998: 13). Desde el estudio de la movilización, las redes de los movimientos son analizadas como precondiciones para la acción colectiva: la densidad de las relaciones entre los diferentes actores y de su articulación interna orienta la circulación de los recursos esenciales determinando las oportunidades y los vínculos necesarios para la acción. Las redes de los movimientos también pueden analizarse como un producto de la acción: como el resultado de una serie innumerable de actos a través de los cuales los actores comprometidos en una causa seleccionan a sus propios interlocutores y aliados.

Las redes sociales no son solamente un simple canal para la circulación de recursos materiales de información sino que, a través de ellas, se transmiten símbolos y significados para la construcción de representaciones compartidas para la acción. Según Diani (1998), dos dinámicas analíticamente independientes se deben tener en cuenta: 1) la creación de vínculos efectivos de cooperación y de intercambio entre distintos actores; y 2) el desarrollo de la identidad colectiva. Esta última acción es fundamental para distinguir a los actores de un movimiento de sus aliados externos y sus apoyos ocasionales.

La activación de alianzas comportará normalmente mayores costos organizativos y cautelas; asumirá, en otras palabras, formas diferentes cuando se trate de relaciones o cooperaciones con sujetos considerados extraños a la propia identidad. Es el caso, por ejemplo, de las relaciones con partidos políticos o con sectores de las instituciones, hacia las que los actores de los movimientos son normalmente críticos (Diani, 1998: 251).

Se podrían identificar varios factores para la elección de aliados: 1) los que ponen el acento en las mismas problemáticas; 2) los que colocan su atención en las bases estructurales del conflicto, ya sea por el tipo de solidaridad o por el esquema de interpretación (que en América Latina está influenciada por los distintos paradigmas emancipatorios); 3) un factor vinculado con la perspectiva del *proceso*

político que se centra en las características de la atmósfera política en que los actores operan. Esta cuestión no orienta directamente las elecciones de cooperación o de pertenencia múltiple, sino que favorece la activación de determinados criterios de elección en detrimento de otros.

En un contexto de oportunidades políticas favorables, los criterios con que los actores de los movimientos seleccionan a sus aliados serán más laxos e incluso que en los momentos políticos más restringidos. Durante las fracturas y las solidaridades en los "ciclos de protesta" puede ocurrir que en las fases iniciales del ciclo se refuerce la solidaridad y la cooperación entre los actores que comparten las mismas visiones del conflicto, mientras que aumenta la distancia entre los que se colocan en posiciones ideológicas opuestas, a pesar de que se movilicen en relación con temas específicos similares. Por otro lado, en la fase de latencia puede ocurrir que la mayor estabilidad política y social dificulte el desarrollo de nuevas identidades y de nuevas fracturas, y que los movimientos tiendan a asumir los códigos y las identidades formadas en las fases precedentes; sin embargo, esto puede variar sensiblemente. Algunos son más flexibles que otros, transformándose entonces en redes de grupos orientados fundamentalmente hacia la producción cultural y la experimentación de las prácticas de vida alternativas. De esta manera, es posible reconstruir los procesos de formación de una red de movimiento, identificando las diferentes lógicas, "instrumental" y "expresiva", capaces de orientar las elecciones de los propios actores.

Un concepto fundamental en este abordaje es el acuñado por Alberto Melucci (1980), que refiere a la "red, área o sector de movimiento" que compromete no sólo a organizaciones de pobladores que son las que han irrumpido en el espacio físico (los territorios) para anunciar que nuevas problemáticas merecen atención, sino a muchos y variados tipos de actores que se articulan alrededor del mismo problema. El "sector (red o espacio) de movimiento" se transforma en el convocante de distintos actores con mayor o menor grado de compromiso con la causa central, pero dispuestos a emerger —otorgando acciones, solidaridades— cuando se requiera. La red sumergida, compuesta por grupos separados, conforma un sistema de intercambios (personas, información que circula por dicha red, algunas agencias tales como radios, librerías, revistas, etc.), sostiene el autor. Son multidimensionales, pueden ocupar sólo una parte de su tiempo a determinada causa pero generan la solidaridad efectiva que les permite mantenerse en red con una o varias organizaciones territoriales. Las redes son importantes en los momentos de visibilidad de las acciones de protestas territoriales pero también en los de latencia, cuando cierta calma reaparece en los territorios.

La "red o sector de movimiento" tiene un sentido espacial y no territorial, es decir, se trata de actores situados en distintos lugares geográficos y en distintos niveles en ese continuo entre lo local, lo nacional y lo global. Con el surgimiento de los movimientos socioterritoriales latinoamericanos disputando la apropiación de los recursos naturales, las articulaciones regionales entre países limítrofes y hasta globales son también prácticas frecuentes.

Nos arriesgamos a sostener que a mayor capacidad del movimiento y otros actores sociales de generar "redes" y actuar coordinadamente respetando la autonomía de cada uno, mayor será la capacidad para obtener logros en la persecución

de los fines propuestos. La generación de alianzas fortalece a los movimientos, los ubica en una posición de negociación y acuerdos que pone en juego sus capacidades de producir internamente espacios de democracia (reconocimiento del otro, tomas de decisiones consensuadas, etc.) que, al fin de cuentas, es lo que exigen hacia afuera en cualquier tipo de confrontación.

La sola presencia de estos movimientos es un revés para el orden establecido, para el sistema simbólico dominante, dice Alberto Melucci, pero si nos planteamos que lo que esperan los movimientos socioterritoriales de América Latina, y de la Argentina en particular, supone siempre un cambio en la “gramática del poder” que modifica el pacto fundante del modelo “extractivista”, puede comprenderse mejor porque las alianzas estratégicas son de primer nivel. Las demandas particulares son generalizadas en el *espacio público* y es entonces cuando aparecen dos clases de “terceros actores”; unos son meros espectadores con diferentes niveles de información y otros son los que se involucran a través de acciones, recursos, formas e interpretaciones en el espacio *conflictual*. Este último tipo de actores es el que abordamos nosotros.

Comprender las condiciones que deben darse para “salir del territorio” –de modo simbólico– y habilitar el paso de movimientos antagónicos a otros que puedan articular equivalencias (en el sentido de Mouffe y Laclau) alrededor de un objetivo común y donde sea posible expandir espacios democráticos, supone un proceso de profundización y reflexión de aquello que se busca. La posibilidad de salir de la demanda particular para ir a la búsqueda de un objetivo más universal (lo que caracteriza a la política emancipadora y da sentido de sujeto político al movimiento) es uno de los principios caracterizadores de Melucci y de la mayoría de los investigadores latinoamericanos como Raúl Zibechi, Luis Tapia, Gustavo Esteva y nosotras mismas. El interrogante plantea en qué medida los “terceros comprometidos” coinciden con estas búsquedas o poseen las propias explicitadas o, en algunos casos, no explicitadas.

En esta etapa de la indagación contamos con un mapeo de movimientos socioterritoriales, con caracterizaciones generales de los mismos y abordajes de profundización de algunos. Daremos cuenta de ellos en una primera parte, actualizando sus niveles de conflictualidad en estos últimos tiempos. Luego intentaremos un mapeo de “terceros comprometidos”, actores con los que los movimientos han establecido algún tipo de contacto, y que pueden ir de alianzas coyunturales hasta aquellas más estratégicas y de largo plazo. Algunos de estos actores mantienen relaciones tanto con las *asambleas* de autoconvocados contra la minería como con el movimiento campesino y los movimientos indígenas con los que trabajamos. No obstante el tipo de relación y de acuerdos de corto y largo plazo, difieren mucho unos de otros.

Los movimientos socioterritoriales

Utilizamos este concepto para diferenciar a estas acciones colectivas de otras donde, si bien siempre existe un territorio ocupado (barrios, fábricas), el mismo no es el centro de la disputa. El uso del concepto “movimientos sociales” es a esta altura simplemente una convención, puesto que se ha generalizado en la población no

especializada; de ellos hablan los políticos, los periodistas, el público en general. Si quisiéramos utilizar la conceptualización en todo su rigor teórico-metodológico sobre estas poblaciones resistiendo por sus territorios, estaríamos más cercanos a un conjunto de "acciones colectivas" sistemáticas y sostenidas en el tiempo que a "movimientos sociales". Recordemos que para los referentes teóricos de este concepto, el "movimiento social" es un nivel de análisis y no una entidad empírica (Melucci, 1994), y supone una serie de requisitos en cuanto a la posición en el campo político, es decir aquel configurado alrededor del poder, que no es tan fácil de hallar en estas organizaciones. El poder político tiende a ignorar, judicializar o reprimir a estas organizaciones. Por esta misma limitación es que indagamos el potencial crecimiento político de estos movimientos socioterritoriales (para retomar la denominación que todos les dan) desde la mirada de una estrategia de articulación y ocupación de espacios más amplios dentro de los mundos sociales y culturales contrahegemónicos (para denominarlos de alguna forma) que les permita aquella posición en el campo político.

El tipo de disputa por el territorio que nos interesa incluye, por un lado, recursos naturales con alto potencial económico y por lo tanto posibilidades de altas rentas; incluye, además, poblaciones asentadas desde hace mucho tiempo en estos territorios; empresas o inversores interesados en ellos; y el Estado en varios de sus niveles (municipal, provincial, nacional). No obstante, en nuestros trabajos centramos el análisis básicamente desde el tipo de sujeto de la acción colectiva en juego; es decir, indagamos quiénes están asentados en cada territorio y desde allí intentamos caracterizarlos y observar el juego de confrontaciones y de alianzas que realizan. ¿Por qué el abordaje desde los sujetos? Porque consideramos que en estos procesos de protestas que se remontan a fines de los años ochenta, la presencia de la Argentina no urbana, o por lo menos la de pequeñas ciudades del interior junto a sujetos residentes en las mismas o relacionados con la ruralidad, fue la que mantuvo una mínima continuidad en las situaciones de resistencias y luchas hasta el presente. Por supuesto no es lo mismo que ha ocurrido hasta finales del siglo XX y desde entonces; no obstante la delimitación cada vez más nítida de "actores sociales" capaces de no aceptar el estado de cosas, de no naturalizar la perversidad del neoliberalismo se remonta a comienzos de los noventa, momentos anteriores tanto de las luchas del movimiento urbano de desocupados como de la clara disputa por los recursos naturales desatada en este siglo. Las comunidades indígenas aunando voces con sus hermanos latinoamericanos en la fuerte demanda de la reparación histórica de sus territorios ancestrales (básicamente Kolla del norte y Mapuche del sur), empezaron a emerger lentamente en los noventa; luego la presencia campesina frente al avance de inversores sojeros a partir de mediados de esa misma década y finalmente los pueblos cordilleranos negándose a la instalación de la minería a cielo abierto desde 2003. Por supuesto hay comunidades indígenas que disputan sus tierras a terratenientes, agronegocios, empresas mineras o petroleras, lo mismo con las organizaciones campesinas y muchas poblaciones cordilleranas que se ven amenazadas por la falta de agua a partir del descomunal uso de mineras y agronegocios. El extractivismo cruza y lleva el hilo conductor del proceso, pero los sujetos en resistencia son su clave y razón de existencia, en referencia a nuestras preocupaciones, y son quienes, como veremos, imprimen las particularidades en las resistencias.

Durante los años noventa, en un contexto de incipiente extractivismo y la consiguiente aparición de conflictos en torno a los recursos naturales, comenzaron a vislumbrarse resistencias de las poblaciones afectadas, que se irán profundizando hacia finales de la década. En efecto, comunidades indígenas reclamando territorios, haciendo uso del dispositivo legal internacional integrado a la constitución de 1994; la formación del Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) con una fuerte raíz en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCA-SE), que se irá expandiendo e integrando a Vía Campesina, así como la aparición de otras organizaciones y federaciones campesinas, es otra novedad de la época. Por último, si bien la Asamblea de Autoconvocados por el No a la Minería (u otros nombres similares según las provincias y regiones) es un fenómeno que aparece en toda su magnitud en 2003, con el histórico Plebiscito de Esquel³, en la segunda mitad de la década del noventa (1995-1998) se pudo registrar una importante resistencia de una cadena de pueblos en el sur de la provincia de Tucumán enfrentándose a una empresa transnacional a la que se le había entregado la operación del agua provincial (Giarracca y Del Pozo, 2004). Es decir, es un proceso que se va constituyendo a medida que el neoliberalismo deja de estar centrado en la privatización de los activos de la nación (privatización de empresas públicas) para pasar a centrarse en el despojo de los recursos naturales en una transición donde ambos procesos se imbrican (el ejemplo más claro es el petróleo y otro más es el de la privatización del agua en Tucumán). Los procesos legales fueron de suma importancia: leyes de privatización de YPF, de las compañías estatales de agua, las legislaciones que autorizan el uso de la *transgenia* en la agricultura, el paquete de leyes para implantar en el país la actividad de la megaminería, etcétera.

Sujetos de la acción y sus alianzas

Hemos abordado, en varios trabajos, los momentos fundacionales, desarrollos y formas de acción de cada uno de estos tipos de movimientos socioterritoriales (Giarracca, 2007; GER-GEMSAL, 2010). En el presente artículo nos detendremos en las estrategias de alianzas con terceros comprometidos a lo largo de los últimos años y el potencial actual para desarrollarlas y sostenerlas. Podemos en principio incluir las prácticas de articulación entre organizaciones de un mismo movimiento (por ejemplo Organizaciones de Kolla con Diaguita, la formación del MNCI, o lo que fue en sus primeros tiempos la Unión de Asambleas Ciudadanas para el movimiento asambleario contra el extractivismo), pero nos enfocaremos en las alianzas con todo ese otro mundo exterior a las organizaciones asentadas en territorios. Como veremos más adelante, existen alianzas con cierto grado de permanencia en el tiempo y otras de tipo coyuntural (en el espacio público, tal como un corte o una marcha, por ejemplo), existen aquellas que se llevan a cabo con otro actor que puede brindar un servicio (asociaciones de abogados ambientalistas, por ejemplo) o simplemente por afinidad de ideas.

A lo largo de estos últimos veinte años, las situaciones y los procesos que involucran resistencias socioterritoriales han cambiado en muchos sentidos. El equipo de investigación al que pertenecemos ha llevado registros desde fines de los años ochenta para determinadas coyunturas, y por lo tanto podemos ir observando al-

gunos de esos cambios. En el "subciclo" de protesta de finales de los noventa, que terminaría en las rebeliones de 2001-2002 (Mariotti, 2007), detectábamos la presencia con frecuencia significativa de "indígenas", "productores agrarios" (pequeños productores que podríamos suponer que incluyen a los "campesinos") junto a "trabajadores de agroindustrias" y por supuesto "desocupados" (el sujeto emergente de aquellos tiempos) y veíamos, además, que para los años de referencia (1997, 1998, 1999) se habían manifestado a través de "movilizaciones", "cortes de ruta", "ocupaciones", "reuniones abiertas", "petitorios escritos". Mientras las "comunidades indígenas" se expresaban con mayor frecuencia por medio de los "petitorios" a las autoridades y "caravanas" hasta las ciudades donde estas residían, los "desocupados" fueron los que mayor número de "cortes de ruta" llevaron a cabo y las "movilizaciones" masivas estaban más usadas por los "pequeños productores" (Giarracca, 2001). Es interesante contar con estos datos ya que, como veremos más adelante, las "comunidades indígenas", en los años siguientes a las entregas de petitorios, sumaron "grandes marchas", mientras los "pequeños productores" comenzaron a usar "carpas" para demostrar su descontento. En el listado de expresiones o formas de protesta aparece la categoría "reuniones abiertas", con la que registrábamos aquellos encuentros o asambleas donde, además del sujeto en cuestión, aparecían otros actores involucrados de modo indirecto con el conflicto. Es decir, que desde los mismos tiempos fundacionales de este tipo de protestas, encontramos estas alianzas a las que nos referimos e indagamos en este trabajo. El caso más contundente es el de la alianza de las "comunidades indígenas" con las organizaciones ecologistas (Domínguez y Mariotti, 2006).

...al repertorio clásico de acciones de protesta se le agrega otro tipo de expresiones, que si bien no configuran protestas por sí mismas, sí abonan el escenario de conflicto

En el estudio⁴ que estamos realizando sobre las acciones de protesta de algunos movimientos socioterritoriales –organizaciones campesinas: Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASEVC); Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza (UST); la Comunidad Mapuche Mellao Morales de Neuquén; Comunidades Indígenas de Río Negro; Comunidades Indígenas de Salta y las Asambleas Ciudadanas contra la minería de La Rioja– podemos destacar, de acuerdo con la información organizada en una base de acciones de protesta que toma el período 2009-2011, que al repertorio clásico de acciones de protesta se le agrega otro tipo de expresiones, que si bien no configuran protestas por sí mismas, sí abonan el escenario de conflicto, y en estos contextos particulares cuestionan también el orden estatuido al igual que las protestas sociales. Además, colaboran en el desarrollo de las instancias comunicativas que ponen en marcha procesos de persuasión indirecta a través de los medios de comunicación y de otros actores influyentes, para lograr los efectos deseados (Della Porta y Diani, 1999: 168-169). Es decir que este tipo de expresiones intenta construir e incrementar la audiencia pública a través de la información y la comunicación de las

demandas. Entre ellas hemos registrado las “volanteadas” (repartir volantes informativos), “ciclos de cine”, “encuentros culturales”, “festivales”, “charlas debate”, “jornadas contra-culturales”, entre otras. El objetivo fundamental de este tipo de expresiones es dar a conocer la situación problemática que se vive en los territorios defendidos por los movimientos (fundamentalmente las consecuencias del modelo extractivista); también dar a conocer el no cumplimiento de los derechos de las comunidades de los pueblos originarios sobre sus territorios y los desalojos cotidianos que padecen los campesinos de Mendoza y Santiago del Estero por parte de los actores del agronegocio. Es decir que el escenario de conflicto de los movimientos en estudio se nutre del repertorio clásico de acciones de protesta, pero también es muy importante el conjunto de expresiones (mayormente informativas, comunicados y denuncias, artísticas y culturales) a través de las que se comunica y da a conocer la problemática a la sociedad local y general. Obtuvimos un total de 99 registros, de los cuales 57,6% son acciones de protesta y 42,4% son otras expresiones. En ambos tipos de acciones hemos hallado aliados estratégicos, y en el caso de las *asambleas riojanas*, muchas de estas expresiones han sido directamente protagonizadas por los “terceros actores”, sobre todo cuando se realizan por fuera de los territorios en disputa.

Un segundo elemento que podemos observar de nuestra base es que el 46,5% de las acciones tuvieron lugar en La Rioja, es decir que fueron realizadas por las *asambleas* ciudadanas de esa provincia. Esta frecuencia tan elevada respecto de los otros movimientos socioterritoriales podría explicarse porque hemos unificado en la denominación “Asambleas ciudadanas de La Rioja” a las asambleas de los distintos departamentos de la provincia (Chilecito, Famatina, Aminga, Otta, Chamental, Aguas Claras), que si bien conforman un colectivo en cuanto a la demanda y la denuncia contra la minería y el modelo extractivista en general, se manifiestan públicamente con independencia. Sin embargo, también hemos unificado a las distintas comunidades de pueblos originarios de Salta y Río Negro, y las frecuencias son bastante más bajas (13% y 10%, respectivamente). Es decir que durante el periodo de tiempo analizado, las asambleas ciudadanas protagonizaron un *subciclo de protesta*, en términos de Tarrow (1997), es decir un momento histórico de intensificación de las confrontaciones, con una rápida difusión de las acciones de los sectores que van de los más a los menos movilizados. En suma, un momento de creatividad social en el que los actores en contienda reciclan formas de expresión, símbolos, repertorios, ideologías, las resignifican y/o inventan nuevas. Este subciclo de protesta alcanzó su punto máximo de expresión en enero y febrero de 2012, cuando las Asambleas de Famatina y Chilecito cortan la ruta al cerro Famatina para impedir las operaciones de la Osisko Mining Corporation. Esta nueva empresa canadiense que, aun sabiendo las historias de resistencias de esta provincia (dada la nacionalidad argentina de su cara visible), insiste en cumplir con un convenio que firmó conociendo la imposibilidad de contar con la licencia social de la comunidad, necesaria para comenzar sus operaciones. La mentada licencia social la deben dar las comunidades que rodean los emprendimientos y lo establece una ley nacional y pactos internacionales que involucran instituciones de las Naciones Unidas (“responsabilidad social empresarial”). Si bien enero y febrero fueron el punto más alto y de visibilidad del conflicto, el corte en Alto Carrizal se mantiene hasta esta mitad de 2012.

La visibilidad de este movimiento se ancla tanto en el uso del repertorio clásico de protesta (26 registros) como en el uso de otro tipo de expresiones (20). Pero es de destacar la participación de aliados estratégicos en el desenvolvimiento de todo el proceso del conflicto.

El otro movimiento socioterritorial en estudio que se expresa en contra de la explotación minera, en el cerro Campana Mahuida, es el protagonizado por la comunidad Mapuche Mellao Morales conjuntamente con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Lonco Pué (AVAL), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM) y la Asociación de Fomento Rural Huecú-co. Las distintas organizaciones conformaron una alianza territorial para lograr que se determinara la prohibición de la actividad minera en la zona, teniendo en cuenta que se trata de territorio de pueblos originarios y por tanto este tipo de emprendimientos supone la violación de sus derechos. Durante el periodo estudiado registramos 8 acciones de protesta y 6 expresiones de otro tipo.

Tal como expresamos anteriormente, el conflicto sostenido por la comunidad Mellao Morales entrelaza una demanda sobre el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios con una demanda sobre la defensa del territorio y los bienes naturales. Es por esta razón que las alianzas estratégicas se dieron sobre todo con distintas instituciones y representantes de derechos humanos de la provincia y de la nación.

Pero fundamentalmente la alianza con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), y el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) y su representante Elena Picasso, abogada de la comunidad, y Cristian Hendrickse, letrado de la Asamblea de Loncopué, logró que con la comunidad y las asambleas, el Superior Tribunal de Justicia denegara el pedido del gobierno de Neuquén para extraer cobre en la zona de Campana Mahuida, con la intervención de una compañía de origen chino, donde ya en 2009 se había logrado prohibir la actividad. Esta nueva decisión del tribunal reafirmó el cese de la actividad minera y remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos (Picasso y Millan, 2011).

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero de Vía Campesina (MOCASE-VC) y la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST), son organizaciones campesinas, que como las organizaciones indígenas mapuches de Río Negro, en especial el Consejo Asesor Indígena (CAI) y las comunidades kollas de Tinkunaku que venimos estudiando, poseen una muy larga trayectoria de trabajo de base en los territorios (vinculada a cuestiones productivas, educativas, de salud, organizacionales, entre otras), así como de defensa de los territorios, de sus derechos y sus modos de vida a través de las acciones colectivas de protesta, y otras expresiones. Si bien el nivel de la conflictualidad es permanente, estas organizaciones transitan fases de visibilidad y de latencia, en términos de Melucci. Hacen su aparición en el espacio público, y a través de una serie de acciones explicitan sus demandas y la fuerza social que la sustenta. Asimismo, en esta fase los sistemas de redes contribuyen a expandir las luchas del movimiento o contribuyen "protegiéndolos" en contextos políticos desfavorables. Se amplían las alianzas y los intercambios con otros actores y movimientos sociales dando como resultado, en general, la consolidación,

expansión y legitimidad de los movimientos y sus demandas. Por otra parte, la fase de latencia es aquella en la que se pueden ubicar las redes subterráneas de los movimientos, en la que se construyen los códigos culturales alternativos que luego sustentan las demandas públicas del movimiento social. La latencia no es un momento de inactividad o de disolución, sino por el contrario es allí donde va forjándose el potencial de resistencia o de oposición (Melucci, 1980: 71).

De acuerdo a nuestra base, hemos registrado para el MOCASE-VC, 4 acciones de protesta, complementadas con 3 registros de otro tipo de expresiones; y en el caso de la UST, fueron 3 protestas y 6 expresiones. En ambos casos las protestas y las otras expresiones tuvieron que ver con la defensa de familias campesinas que fueron desalojadas de sus predios por empresarios del agronegocio y los desmontes en territorios campesinos. La forma de la protesta elegida para defender a dichas familias fueron las denuncias, las marchas y los "acampes" en los que centenas de campesinos permanecieron resguardando el territorio.

La UST además protagonizó una serie de acciones, por fuera del campo conflictual, pero vinculadas a la generación de formas alternativas de comercialización de la producción campesina, en vinculación con la Red de Comercio Justo y el Mercado Solidario de Mendoza.

Sin embargo, el periodo comprendido en nuestra base no registra el momento en que ambas organizaciones emergieron nuevamente en el espacio público ante el trágico asesinato del dirigente campesino del MOCASE-VC, Cristian Ferreyra, el 18 de noviembre de 2011. Este suceso ocurrió en Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero, donde de acuerdo a las declaraciones del movimiento "Javier y Arturo Juaréz, sicarios del empresario Ciccioli, oriundo de Santa Fe, dispararon a sangre fría contra los dos campesinos". Inmediatamente, las organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), conjuntamente con sus redes de aliados, llevaron adelante distintas expresiones en repudio al gravísimo suceso y exigieron la promulgación de una ley contra los desalojos de las familias campesinas. Durante 10 días corridos se organizaron movilizaciones en el país que contaron con la adhesión y solidaridad de todo tipo de organizaciones sociales y políticas, nacionales e internacionales. El día 25 de noviembre, como cierre de la semana de movilización se organizó una marcha en Monte Quemado, en la que se denunció la complicidad y connivencia del juez y de los intendentes con los empresarios. Simultáneamente, en Buenos Aires se organizó una movilización en la plaza Congreso y luego el MNCI entregó el proyecto de ley contra los desalojos, que realizaron junto a otras organizaciones campesinas como el Frente Nacional Campesino y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar.

La celeridad y la contundencia con la que el MNCI desplegó una semana completa de movilización expresa también la capacidad del mismo para tejer alianzas, sobre todo con las organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores rurales, nacionales e internacionales. El MNCI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a su vez de la Vía Campesina. Esto implica un gran espectro de aliados en una gran cantidad de países.

Finalmente, tanto las comunidades kollas de Tinkunaku en Salta, como el Consejo Asesor Indígena en Río Negro, hicieron muy pocas apariciones en el espacio público durante el periodo estudiado. En la provincia de Salta registramos 13 ac-

ciones de protesta y expresiones generales provenientes de distintas comunidades de Pueblos Originarios: wichis, diaguitas calchaquí, guaraníes, comunidad indígena de Lules, entre otras. Las demandas fueron por la explotación hidrocarburífera o gasífera en territorio indígena; por el apropiamiento ilegal de territorio por parte de privados como el Jockey Club de Salta; contra los desmontes; por los incumplimientos de acuerdos como el caso del Ingenio San Martín del Tabacal; y por falta de cumplimiento de los derechos indígenas, específicamente por el no reconocimiento de sus territorios. Todas las comunidades se manifestaron también contra los desalojos. En este contexto, Tinkunaku realizó un piquete contra Norandino, empresa que construyó un gasoducto que atraviesa su territorio para transportar gas a Chile y durante este tiempo se concentró principalmente en el ordenamiento territorial en tanto parte "Qullamarka". Esta organización de reciente creación reúne a los pueblos kolla de la provincia de Salta, con el objetivo de conformar un sistema de gobierno de esta nación indígena. El territorio del Qullamarka abarca alrededor de un millón de hectáreas de la región y está formado por organizaciones como la Comunidad Aborígen Victoreña (UCAV), la Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno y el Consejo Indígena Kolla de Iruya, entre otras. El objetivo es conformar una figura representativa del Pueblo Kolla que ayude a resolver las problemáticas vinculadas con la autonomía en el territorio y la protección de los bienes naturales, así como el cumplimiento del derecho indígena.

Como se mencionaba anteriormente, Tinkunaku fue una de las comunidades indígenas que rápidamente estableció alianzas estratégicas con organizaciones ambientalistas no gubernamentales, cuando se desarrolló el conflicto por el gasoducto que atravesó el territorio indígena en 1997. También es una alianza estratégica la que han mantenido durante muchos años con el Municipio de Roeser de Luxemburgo, con quienes se han "hermanado" en el año 1992. Y por supuesto, se sobreentiende la alianza territorial con los actores que conforman el Qullamarka.

Las comunidades mapuche de Río Negro se han manifestado a través de 10 expresiones de protesta, contabilizadas en nuestros registros, fundamentalmente contra emprendimientos privados que forestan para la industria sobre territorio ancestral indígena. En este marco, el Consejo Asesor Indígena demandó que se dispusiera el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional y que se conforme una comisión investigadora sobre el despojo y robo de tierras para que se restituyan a sus legítimos dueños. Ambas organizaciones indígenas, además, han mantenido estrechos contactos con cineastas alemanes a través de quien fuera durante muchos años otro "aliado de apoyo": el Instituto Goethe de Buenos Aires.

Si se observa el Cuadro de terceros actores (ver anexo), donde hemos organizado a los aliados que surgen de nuestra base de datos, apreciamos la diversidad de los "terceros actores", lo que nos sugiere pensar que los movimientos conforman distintos tipo de alianzas⁵. Por un lado, podemos detectar *Alianzas Territoriales* entre distintos actores que pueden ser organizaciones ya constituidas, o que van conformándose como tales en la dinámica del conflicto. Comparten no sólo la definición y defensa del territorio, sino que hasta en algunos casos habitan en el mismo. Entre ellos crean un nivel de asociación que les permite producir una definición conjunta del problema y de los antagonistas. Deciden y llevan adelan-

te tanto las acciones de protesta como las otras expresiones y comparten en ese sentido los costos y beneficios de las acciones colectivas. En La Rioja, este tipo de alianzas se hace evidente en las Asambleas Ciudadanas, en los vecinos autoconvocados de toda la provincia y en las asambleas de otras provincias. También se observa este tipo de alianzas en Loncopué, Neuquén, y entre las organizaciones que conjuntamente a Tinkunaku conforman el Qullamarka.

Un segundo tipo de vínculos que podemos observar es el de las *Alianzas Estratégicas*. Estas son relaciones que se entablan con otras organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, instituciones, representantes de partidos políticos, entre otras, que acompañan la dinámica del conflicto. Pueden o no protagonizar con los movimientos las acciones colectivas de protesta o las otras expresiones. Lo que aporta este tipo de alianzas es la conformación de un espacio político, una arena de comunicación intercultural y de acción política conjunta, en la que las políticas son fundamentalmente simbólicas; no de identidades comunes o intereses económicos, sino elementos que movilizan ideas políticas a través de amplias brechas espaciales, lingüísticas y culturales (Conklin-Graham, 1995). Estas alianzas permiten que las luchas simbólicas que llevan a cabo los movimientos socioterritoriales se nutran y conjuguen elementos provenientes de distintos órdenes, posibilitando de esta manera la construcción de marcos de significados más amplios y comprensibles en los distintos sectores de la población. A estas alianzas las hemos evidenciado fuertemente entre los movimientos socioterritoriales y las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, tanto en el caso de las comunidades indígenas como en las asambleas ciudadanas; y también con los grupos de abogados que acompañan las reivindicaciones ambientales y de los derechos de las comunidades. Son alianzas que si bien emergen de motivaciones diferentes en cada actor, potencian los momentos de visibilidad, conducen a los movimientos y al contenido de las demandas a nuevas arenas de interlocución y vías posibles de resolución.

Finalmente distinguimos las *Alianzas de Apoyo*, que remiten a aquellas relaciones coyunturales en las que distintos actores acompañan o manifiestan su apoyo al movimiento socioterritorial. Pueden o no participar de las acciones de protesta u otras expresiones, pero no las protagonizan. Pueden o no estar presentes en todo el proceso del conflicto, o aparecer esporádicamente y de diversas maneras (por ejemplo, manifestar una adhesión a través de un comunicado, o explicitar su apoyo al movimiento socioterritorial en festivales, por citar algunos ejemplos). Estas alianzas otorgan legitimidad a los movimientos y sus reclamos y expanden también su visualización. Muchas de las intervenciones de los artistas que aparecen en La Rioja pueden comprenderse en el marco de este tipo de alianzas. El mayor momento de expresión de este tipo de relaciones se produce durante el desarrollo de las acciones de protesta, en la que los otros sujetos manifiestan sus adhesiones a las diversas luchas territoriales.

Algunas reflexiones a modo de conclusión

La presencia de los movimientos socioterritoriales en la Argentina, como en toda América Latina, constituye un fenómeno social y político que impregna la vida

institucional de la región. A partir de la expansión del modelo de actividades extractivas (petróleo, minería, agronegocios) y de lo que Harvey (2004) denomina “acumulación por desposesión”, las resistencias se han incrementado año tras año. En trabajos anteriores mostramos algunas paradojas de estos procesos: la primera, la de la abundancia, de países ricos en recursos naturales que se mantienen en la pobreza (por lo menos de gran parte de sus poblaciones); la segunda, tanto los gobiernos conservadores (Colombia, México, Chile, etc.) como los denominados “progresistas” (Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, etc.) siguen el mismo patrón de acumulación basado en la explotación de la naturaleza y presentan modos de respuestas semejantes a quienes marcan y resisten este modelo de desarrollo. De allí la necesidad de fortalecer las respuestas de las poblaciones, y sobre todo expandir el discurso de respeto a la naturaleza (derechos de la naturaleza) y derechos a intervenir en la elección de las actividades económicas. En países como la Argentina, esto último es muy necesario por la marca positivista y desarrollista que ha tenido la historia económica y social del país. El surgimiento de los movimientos socioterritoriales fue conocido por las poblaciones de las grandes ciudades con mayor facilidad que los derroteros de otras luchas en décadas anteriores, sobre todo por el adelanto en las tecnologías comunicacionales (Internet, redes sociales, listas temáticas) que informan al ciudadano interesado sobre lo que ocurre en La Rioja o Mendoza. Por eso una cuestión clave es “interesar” a esos ciudadanos de las grandes ciudades, quienes cuentan con la capacidad de influir relativamente mucho más en los poderes políticos centrales, tanto en los momentos electorales como en sus propias protestas o apoyos a protestas de otros en el “corazón del poder”. Por tanto, las posibilidades de alianzas con terceros sujetos comprometidos con estas causas alrededor de la oposición al modelo extractivista, fortalecen las luchas en los territorios. Algunos de esos terceros sujetos tienen mayor llegada a medios nacionales, que saben cómo desactivar ese mecanismo de “producción de ausencias” (De Sousa Santos, 2006) que tan bien manejan los poderes.

Como tratamos de mostrar en este trabajo, las organizaciones de territorios (asambleas, comunidades indígenas y campesinas) están abiertas a recibir apoyos aún cuando son muy reticentes a que se hable en nombre de ellas. Y aquí encontramos una primera cuestión que necesita ser profundizada, que reside en las novedades de los vínculos entre las organizaciones y los terceros sujetos aliados. Interrogantes que nos conducen al tipo y cobertura de las demandas de las organizaciones, por ejemplo, a la capacidad para democratizar las relaciones sin subordinarse ni pretender subordinar al otro, es decir respetando las autonomías mutuas; las situaciones intermedias de aquellos que sin ser residentes en los territorios se identifican como integrantes de esos movimientos y mucho más.

En las entrevistas a estos terceros sujetos surge una rica diversidad de motivaciones, historias, maneras de relacionarse, apreciación de lo que tienen para ofrecer (sobre todo los grupos de “educación popular”) o el descubrimiento de nuevos sentidos para una determinada profesión (los abogados, por ejemplo). En algunos casos se trata de la intervención de organizaciones o instituciones que preceden al sujeto entrevistado, en otros es ese mismo sujeto (junto a otros) quien funda una organización para hacer más orgánica la relación. Entre los tres tipos de organizaciones territoriales (asambleas por la cuestión minera, comunidades

indígenas y campesinos) se observan marcadas diferencias en la construcción del vínculo con sus aliados. El MNCI mantiene relaciones de largo tiempo con otros actores sociales, intelectuales y artistas) y es la misma organización quien los convoca a reuniones, por ejemplo los encuentros con los “académicos” (que llevan dos eventos nacionales, en Santiago del Estero y Córdoba). El movimiento indígena conserva desde el comienzo modos de relación con sus aliados que suponen un ir y venir de las decisiones de sus asambleas. Cada vínculo para establecerse lleva mucho tiempo pero también se presenta como duradero desde las comunidades. Los encuentros entre comunidades y “terceros”, generalmente de origen no indígena, suponen un aprendizaje para estos últimos: el manejo de los tiempos, el manejo de los silencios, y sobre todo el sentido de lo que para ellos representa la autonomía de las decisiones. El hecho de que para estas poblaciones existan pactos internacionales con rango constitucional facilita el entendimiento con sus abogados (no es un “derecho” totalmente exterior a ellos) y, por otro lado, muchas de las organizaciones de letrados indigenistas tienen un profundo compromiso con ellos.

Los encuentros entre comunidades y ‘terceros’, generalmente de origen no indígena, suponen un aprendizaje para estos últimos: el manejo de los tiempos, el manejo de los silencios, y sobre todo el sentido de lo que para ellos representa la autonomía de las decisiones

En cuanto a las asambleas de poblaciones bajo el peligro minero se pueden marcar tres niveles en las relaciones con los “terceros sujetos”: uno en los territorios donde incluso los periodistas, los abogados, los artistas y los universitarios son “asambleístas”, lo que indica que en el territorio pueden cumplir un doble papel; otro nivel es donde se encuentran aquellos que no son del territorio y mantienen relaciones específicas con las asambleas (el equipo de un documental, el de una investigación universitaria participativa, o una nota periodística convenida); y el tercero, donde ubicamos a los que se han relacionado a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Esta última comenzó como un encuentro de asambleas mineras con la de Gualguaychú en 2006. Con el tiempo, al reunirse tres veces por año en distintas provincias del país, ha adquirido una dinámica que integró otras organizaciones territoriales (MOCASE, por ejemplo), un importante número de organizaciones no gubernamentales, estudiantiles, referentes políticos de izquierda, intelectuales e investigadores. Algunos van a una o dos UAC y tienen presencia en los actos de Buenos Aires, otros más mantienen un vínculo orgánico en la comisión de prensa, de formación, o en la preparación de los encuentros. En una entrevista, un miembro de una de las organizaciones narra cómo esos encuentros en muy poco tiempo se convirtieron en un dispositivo de organización importante. Intervienen para que esto ocurra los conocimientos previos entre las personas y el tipo de experiencia que se otorga (organizativa, de medios, etc.). Una parte importante de estas organizaciones, junto a asambleas de la provincia

de Buenos Aires, ha asumido el nombre de UAC-Buenos Aires, y es muy activa en los apoyos capitalinos de coyunturas conflictivas en los territorios.

Para quienes seguimos los derroteros de algunas de estas organizaciones desde décadas atrás (por ejemplo la lucha campesina arrinconada por el modelo sojero en los noventa) valoramos mucho los avances para colocar este tipo de problemáticas en los espacios públicos, en los medios, en las poblaciones ciudadanas. En parte porque el extractivismo, la desposesión y la contaminación han aumentado y es difícil que se desconozcan en las ciudades sus consecuencias; pero también por este importante espacio en formación que denominamos, siguiendo a Melucci, "sector de movimiento". Esto configura, a nuestro juicio, uno de los fenómenos novedosos de la última década, que alienta la posibilidad de articular con mayor facilidad estas resistencias al conjunto de las que se dan en América Latina.

Bibliografía

- Ceceña, Ana Esther (comp.) 2004 *Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO).
- Ceceña, Ana Esther; Aguilar, Paula y Motto, Carlos 2007 *Territorialidad de la dominación: La Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)* (Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica).
- Conklin, Beth y Graham, Laura 1995 "The Shifting Middle Ground: Amazonian Indians and Eco-Politics" en *American Anthropologist* (AAA) Vol. 97, N° 4, Nueva Serie.
- De Sousa Santos, Boaventura 2006 *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Encuentros en Buenos Aires* (Buenos Aires: CLACSO).
- Della Porta, Diana y Diani, Mario 1999 *Social Movements. An introduction* (EE.UU.: Blackwell).
- Diani, Mario 1998 "Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis" en Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín (eds.) *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (Madrid: Trotta).
- Domínguez, Diego y Mariotti, Daniela 2006 "El campo de negociación: la apropiación del discurso ambientalista por las comunidades campesino-indígenas en el noroeste argentino" en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE).
- Fernandes, Bernardo Mançano 2005 "Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, N° 16.
- GER-GEMSAL y Cátedra de Sociología Rural 2010 "Recursos Naturales/ Bienes Comunes: planes hegemónicos/disputas y resistencias" en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 249.
- Giarracca, Norma 2001 *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).
- Giarracca, Norma 2007 "La tragedia del desarrollo. Disputas por los recursos naturales en la Argentina" en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA) N° 26.
- Giarracca, Norma y Del Pozo, Norma 2004 "To make water... Water privatization and social Protest in Tucuman, Argentina" en Bennett, Vivienne et

- al. *Opposing Currents: The Politics of Water and Gender in Latin America* (EE.UU.: University of Pittsburgh Press).
- Giarracca, Norma y Petz, Inés 2007 "La asamblea de Gualaguaychú: su lógica de nuevo movimiento social y el sentido 'binacional' artiguista de sus acciones" en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 226.
- Harvey, David 2004 "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión" en Pantich, Leo y Leys, Colin (eds.) *El Nuevo desafío Imperial* (Buenos Aires: Merlin Press/CLACSO).
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1985 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una mirada radicalizada de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- Mariotti, Daniela et al. 2007 *Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos": Calles y Plazas en la Argentina: 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia).
- Melucci, Alberto 1980 "The new social movements: A theoretical approach" en *Social Science Information*, N° 19.
- Melucci, Alberto 1994 "Asumir un compromiso: Identidad y movilización en los movimientos sociales" en *Zona Abierta* (Buenos Aires) N° 69.
- Picasso, Elena y Millán, Adriana 2011 "Otra historia de los tiempos del Bicentenario en la Patagonia argentina. Mapuches y poblaciones patagónicas cordilleranas en resistencia" en Giarracca, Norma (comp.) *Bicentenarios (otros). Transiciones y resistencias* (Buenos Aires: Una Ventana).
- Tarrow, Sidney 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza).
- Zibechi, Raúl 2006 *IIRSA: la integración a la medida de los mercados* en <www.ircamericas.org>.

Siglas

- ATE: Asociación Trabajadores del Estado.
CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales.
CTA: Central Trabajadores de la Argentina.
ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
EDIPA: Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen.
FANA: Frente Amplio por una Nueva Agronomía.
FAEA: Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía.
INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
IIGG: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
MEDH: Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos.
MNCI: Movimiento Nacional Campesino Indígena.
SERPAJ: Servicio, Paz y Justicia.
UAC: Unión de Asambleas Ciudadanas.
UBA: Universidad de Buenos Aires.
UCR: Unión Cívica Radical.
UNC: Universidad Nacional de Córdoba.
UN Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca.

Anexo

Cuadro de terceros actores				
	La Rioja	Neuquén	Mendoza	Santiago del Estero
	Asambleas Ciudadanas contra la minería	Comunidad Mapuche Mellao Morales	UST	MOCASE - Vía Campesina
Organizaciones	Asambleas de Nuevo Cuyo, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Miembros de la Posta Comunitaria Inti Llancaj Tambu; Asambleas de Andalgalá y Catamarca; Madres del Dolor	Otras organizaciones mapuches: <i>Kaxipayiñ</i> , Felipín, Paichil-Antreao, <i>Huenctru Trawel Leufu</i> ; Confederación Mapuche de Neuquén; Madres de Plaza de Mayo; Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén, Obreros de Zanón.	Vía Campesina; Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Organizaciones del Campo (CLOC); Organización de Trabajadores Rurales de Mendoza (OTRAL); Red de Comercio Justo de Mendoza; El Almacén Andante; El noticiero Popular; El Espejo; Asamblea por el Agua; radios comunitarias.	Vía Campesina; CLOC; Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA); Asamblea de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC); Confederación de Pueblos Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI); Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); UAC.
Organizaciones No Gubernamentales	Taller Ecologista; Voces de Alerta; Conciencia Solidaria; Greenpeace; Contramina; Foro Popular del Agua.	Coordinadora por la Vida Red Jarilla de plantas saludables de la Patagonia; Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén; Asociación Ambientalista “Rincón Limay” de Plottier; Asociación Civil “Cristian González” de San Martín de los Andes; Asociación de Fomento Rural “Huecúco”.	Grain - Biodiversidad.	Grain - Biodiversidad.
Referentes y Partidos Políticos	Intendente de Famatina; jefe comunal de Famatina; diputado de Frente Cívico; diputado Nacional y senador nacional de la UCR; Juventud Radical; Legislatura de La Rioja; legisladoras nacionales de Libres del Sur; Proyecto Sur; dirigentes de izquierda y de centro-izquierda; Autonomía y Libertad.	Diputado provincial del Movimiento para la Unidad de los Neuquinos (MUN); diputada provincial por Libres del Sur .	Legisladores provinciales.	Adolfo Pérez Esquivel.

	La Rioja	Neuquén	Mendoza	Santiago del Estero
Instituciones	<p>Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) - Nacional; Amnistía Internacional; ATE Chilecito; ATE Capital Federal; Consejos de Abogados de La Rioja; Instituto de Derecho Ambiental; abogado Tomás Yoma; docentes y alumnos de la escuela normal y los trabajadores contratados en educación de La Rioja; Federación Argentina de Estudiantes de Geografía; Centro Polivalente de Arte; estudiantes terciarios; universitarios y docentes de la provincia.</p>	<p>Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén; Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI); dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN); INADI; ATE y CTA.</p>		<p>Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA) – Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía (FAEA).</p>
Periodistas	<p>Diario <i>MU</i>; <i>TN</i>, del Grupo Clarín; <i>Radio Famatina</i>, en cadena con radios de todo el país; radios de Córdoba; <i>FM La Tribu</i>.</p>			<p>Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA); Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) - Argentina ; Indymedia.</p>
Intelectuales	<p>Grupo de investigación de la UBA (IIGG); grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); grupo de investigación de Universidad Nacional de Catamarca; Universidad Nacional de Gral. Sarmiento</p>			<p>Grupo de Investigación de la Universidad de Luján.</p>

	La Rioja	Neuquén	Mendoza	Santiago del Estero
Referentes religiosos	Cura Párroco de Famatina.	Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); ENDEPA; Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA); Pastoral Social.		Obispo de Añatuya, Monseñor Uriona.
Vecinos Autoconvocados	Vecinos Autoconvocados de Chilecito; Vecinos Autoconvocados en Defensa de la Vida de Famatina; Vecinos Autoconvocados de Pituil; de Chañarmuyo; de Campanas; del Valle del Bermejo; del Norte Famatinese; UAC.	Vecinos de San Patricio del Chañar, Centenario, Cutral Co y Añelo; Asamblea Popular de Zapala; Asambleas de Vecinos Autoconvocados de distintas localidades: Lonco Pué, Campana Mahuida, Las Lajas y Varvarco.		
Artistas	Nacha Guevara, Guillermo Bonetto, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Lalo Mir, Marcelo Corvalán, Soledad Pastorutti, Suna Rocha, Soledad Villamil, Natalia Oreiro, Guillermo Novellis, Mex Urtizberea, Coti Sorokin, Juanchi Baleirón, Los Tipitos, Artesanales, Juanito el Cantor, Rescate, Los Cafres, Axel, Ramón Navarro, Miguel Cantilo, Cantata Riojana, Soledad Villamil.			Rally Barrionuevo

Fuente: GER-GEMSAL del IIGG-UBA (2011 y 2012).

Notas

1 Este trabajo es resultado de la investigación que venimos desarrollando con un proyecto financiado por la UBA y realizado en el IIGG: “Movimientos socioterritoriales en disputa por recursos naturales: terceros actores y alianzas estratégicas. El caso argentino en el contexto latinoamericano”. Directora Norma Giarracca.

2 Para más información, consultar: <www.geopolitica.ws>.

3 En esos años aparece también otro conflicto ambiental por la instalación de un par de pasteras en Uruguay que conduce a una lucha paradigmática en la ciudad de Gualaguaychú, que forma su *asamblea* (Giarracca y Petz, 2007).

4 Para el estudio, hemos realizado una base de datos sobre protestas, en el marco de la denominada “pasantía de investigación” del Seminario de Inves-

tigación sobre Movimientos Sociales latinoamericanos. La base de datos fue construida por los alumnos de la pasantía. La misma toma como periodo de referencia los años 2009 hasta 2011, y se sustenta en la información provista por los diarios provinciales *El Tribuno* (Salta), *El Liberal* (Santiago del Estero), *Los Andes* (Mendoza), *Río Negro* (Río Negro y Neuquén) y los nacionales (*Página 12*, *La Nación* y *Clarín*); además de fuentes de información alternativas como

Indymedia, *Grain* y *Anred*, entre otros. El trabajo con esta variedad de fuentes de información nos permite controlar algunos sesgos que provienen de los medios de comunicación.

5 En el cuadro de “aliados” que se encuentra al final del artículo no incluimos a las comunidades indígenas, dadas ciertas dificultades para recoger esta información, por lo que consideramos que aún es un mapeo incompleto.

Razones de un distanciamiento político

El Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana¹

PABLO OSPINA PERALTA

Historiador, antropólogo y politólogo. Trabaja como profesor e investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

RICKARD LALANDER

Politólogo, doctor y catedrático en Estudios Latinoamericanos. Investigador y profesor en las universidades de Helsinki y Estocolmo.

Resumen

A pesar de compartir inicialmente las mismas posturas políticas, las relaciones entre el movimiento indígena ecuatoriano –principalmente representado por la CONAIE– y el gobierno progresista de Rafael Correa y el Movimiento PAIS se han caracterizado por conflictos y distanciamientos. Entender esta paradoja es el tema de este artículo. El objetivo del estudio es explorar analíticamente las razones que se encuentran detrás de estas relaciones conflictivas desde el inicio del gobierno de Correa a principio de 2007. Cuatro temáticas interconectadas se enfatizan como explicaciones de los desacuerdos y distancias entre ambos actores políticos. Estas diferencias programáticas son la oposición a la explotación minera, las actitudes hacia la movilización social, la política agraria y, finalmente, la política estatal que llamamos de “desectorización”.

Abstract

Despite sharing common initial political concerns, the relationship between the Ecuadorian Indigenous movement –mainly represented by the CONAIE confederation– and the Progressist government of Rafael Correa and his PAIS movement has been characterized by conflicts and disagreements. This is the central contradiction behind this article. The objective of the study is to analytically explore particular reasons behind this conflictive relationship since the establishment of the Correa government from 2007 onwards. Four interconnected thematic fields are emphasized as likely explanations to the disagreement and distance between the indigenous organizations and the government. These programmatic differences are the opposition against resource exploitation, attitudes towards social mobilization, agrarian politics, and lastly, the state policy we label of de-sectorization.

Palabras clave

Movimiento indígena, gobiernos progresistas, Ecuador.

Keywords

Indigenous movement, progressive governments, Ecuador.

Cómo citar este artículo

Ospina Peralta, Pablo y Lalander, Rickard 2012 "Razones de un distanciamiento político: el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Introducción

En agosto de 2011, la socióloga y periodista chilena Martha Harnecker publicó un libro de entrevistas sobre el proceso político de las izquierdas ecuatorianas. El texto recopila un conjunto de testimonios, ordenados temáticamente, de dirigentes políticos de Pachakutik (PK) y de Alianza PAIS², como parte de un proyecto más amplio de investigación sobre los nuevos "instrumentos políticos" para la transformación social en el siglo XXI. El texto deja entrever que, al empezar la investigación, la autora pensaba que Pachakutik era ese nuevo "instrumento político" hasta que el fenómeno de Rafael Correa cambió los ejes de su reflexión. En cierto modo, el libro puede considerarse un esfuerzo por explicar las razones por las cuales estas dos fuerzas no están unidas y tienden a distanciarse cada vez más.

Muchas de las izquierdas del continente se preguntan lo mismo que Martha Harnecker: ¿por qué el gobierno ciudadano está alejado del movimiento político que representa a la mayor parte del movimiento indígena? ¿Por qué la CONAIE está en la oposición? ¿Por qué Rafael Correa y la CONAIE no están unidos, considerando que tenían reivindicaciones políticas similares? El objetivo del presente artículo es identificar algunas razones de este conflicto y de las tensas relaciones entre el gobierno de Rafael Correa y la principal organización indígena, la CONAIE.

Inicialmente hubo varias posibilidades de acuerdo y una cierta cercanía en la acción política. En efecto, la llegada al gobierno ecuatoriano del economista Rafael Correa Delgado estuvo precedida por intensas negociaciones que consideraron la posibilidad de una alianza entre PK y Alianza PAIS. Rafael Correa, en efecto, forma parte del conjunto de gobiernos llamados "progresistas" que han proliferado en América Latina desde inicios de la década del dos mil y que incluye, además del Ecuador, a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Cuba, Argentina y Uruguay. Esta inicial cercanía de ambos movimientos políticos es, por tanto, perfectamente comprensible dada esta tradicional relación entre la izquierda y las organizaciones indígenas. De hecho, el *Partido Socialista Ecuatoriano* (PSE), antiguo apoyo de las primeras organizaciones indígenas del Ecuador, se ha mantenido como uno de los soportes políticos de Alianza PAIS desde que llegó al gobierno en 2007.

Una vez posesionado el nuevo presidente, en enero de 2007, se dio curso a un proceso constituyente, por el que mediante un referéndum y la elección de asambleístas se redactó una nueva Carta Constitucional. En septiembre de 2008, se aprobó la nueva Constitución, en referéndum, con más del 64% de los votos emitidos. Mientras que la Constitución de 1998 definía al Estado ecuatoriano como "pluricultural y multiétnico", la nueva Carta Magna de 2008 declara que Ecuador

es un Estado plurinacional e intercultural, es decir, reconoce y valida las reivindicaciones indígenas que se hicieron públicas desde el levantamiento indígena de 1990. Progresivamente, sin embargo, luego de la aprobación de la Constitución de 2008, la CONAIE y el gobierno de Alianza PAIS fueron distanciándose políticamente hasta el punto de que el día de hoy las organizaciones indígenas, una parte del PSE (la llamada “Corriente Socialista Revolucionaria”) y las principales organizaciones sindicales se declaran abiertamente en la oposición al gobierno.

En tal virtud, nuestro objetivo en este artículo es explorar algunas de las principales razones de ese distanciamiento, que no ha cesado de ampliarse. Planteamos que existen importantes diferencias programáticas entre las principales organizaciones indígenas y el gobierno de Alianza PAIS. Llamamos “programáticas” a las acciones de gobierno (o a la demanda de acciones de gobierno) sobre temas sectoriales (agrarios, mineros, educativos, etc.) y sobre la construcción del Estado que *en conjunto* indican una orientación política determinada más allá de posibles ambigüedades, fallas o contradicciones. Una definición “programática” implica entonces una cierta coherencia en la acción pública. Esta coherencia puede ser otorgada explícitamente por los propios actores *antes* de adoptar tales acciones o puede ser *el resultado final observado de ellas* (desde la opinión del analista o de los otros actores) independientemente de lo que los protagonistas pensaron que estaban haciendo. Estas diferencias “programáticas” se hacen más visibles y agudas conforme hay que transitar desde consignas y referencias generales hacia programas, proyectos y definiciones más precisas de la práctica gubernamental.

Nuestro argumento central es que existen cuatro temas que han llevado al distanciamiento entre Alianza PAIS y la CONAIE: la política gubernamental de promoción de la minería, las diferentes concepciones frente a la movilización social, diferencias en cuanto a la política agraria y el énfasis en una política de “dessectorización” del Estado. Desde el inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero más claramente luego de la aprobación de la Constitución de 2008 y conforme crecía su poder personal, Rafael Correa se volvió cada vez menos dispuesto a aceptar ambigüedades o transacciones en los temas centrales de la política del gobierno. Así, sus definiciones programáticas se fueron alejando cada vez más de aquellas que había venido construyendo el movimiento indígena en su historia reciente. La distancia no podía sino seguir creciendo.

Promoción de la minería a gran escala

El 5 de marzo de 2012 el gobierno de la Revolución Ciudadana firmó el primer contrato de minería metálica a gran escala en el Ecuador con la empresa Ecuacorriente SA por 25 años (*El Tiempo*, 2012). Tres días después, el 8 de marzo, una movilización social convocada por la CONAIE empezó su recorrido en Zamora y lo terminaría triunfalmente en Quito, con el recorrido de una gigantesca marcha cifrada conservadoramente en 20 mil personas. El primer punto de los 19 que formaron la agenda de la marcha fue precisamente la oposición a la minería metálica a gran escala y la demanda de reversión del contrato con Ecuacorriente. Estos episodios son apenas la última entrega de una zaga que empezó con el inicio del gobierno.

La posición de principio que tiene el presidente ante la explotación minera choca con el creciente movimiento social de oposición de las poblaciones y comunidades rurales afectadas por sus estragos

Este es el primer tema de desencuentro de fondo entre la CONAIE y Rafael Correa: el desarrollismo extractivista en los planes económicos del gobierno. La mayoría de las organizaciones no pide la suspensión inmediata de la explotación petrolera ni la abolición de toda minería. Exigen que el extractivismo tradicional no sea reforzado con un *nuevo* extractivismo minero, que sólo empeoraría las cosas y que contradice el propósito enunciado por el Plan del Buen Vivir (SENPLADES, 2009) de ir hacia una sociedad de servicios basados en el bioconocimiento y el turismo.

Recordemos, en efecto, que la Constitución ecuatoriana de 2008 (igual que la boliviana) considera que el objetivo del régimen de desarrollo no es el crecimiento económico o el bienestar sino el *Sumak Kawsay*, definido de la siguiente manera en el Artículo 275:

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del *Sumak Kawsay*. [...] El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.

Las nuevas constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008) han sido consideradas como los textos constitucionales más radicales del mundo con respecto a la provisión de protección legal de la naturaleza. En el caso ecuatoriano se llega incluso a considerarla como sujeto de derechos. En los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, los elementos identitarios de etnicidad, prácticas culturales, territorialidad y medio ambiente están íntima y complejamente integrados. En ambos países, el principio indígena del *Sumak Kawsay* (buen vivir o vivir bien) está establecido constitucionalmente. Bolivia y Ecuador tienen algunos de los biosistemas más ricos del mundo, los cuales están amenazados por la contaminación y deforestación provocadas por la extracción industrial de recursos naturales. Así que, en la práctica, poderosos intereses económicos y políticos chocan con los derechos indígenas y ambientales en el contexto de la nacionalización de industrias vitales (principalmente hidrocarburos y minería).

Es muy importante enfatizar el valor estratégico y simbólico en la aplicación de los símbolos del movimiento indígena –*Sumak Kawsay* y el *buen vivir*– que el gobierno de Rafael Correa ha incorporado e institucionalizado como *sus políticas y principios*, “neutralizando de esta manera al grupo opositor indígena” y buscando legitimidad para su política desarrollista. Como diría Marlon Santi, ex presidente de la CONAIE (2008-2011):

El desarrollo que plantean desde el gobierno nacional está sujeto a un desarrollo agresivo, a un desarrollo sin ver a la madre tierra como un espacio de vida o como un espacio que genera vida; entonces es ahí donde que rompemos y entramos a conjugar dos posiciones, nosotros un desa-

rollo alternativo, progresista, que respete los derechos ambientales, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza; y el gobierno o el poder económico. ¿No? Entonces, en las actuales circunstancias, el modelo de desarrollo es el que no entiende al modelo de la vida que el movimiento indígena plantea (Santi, entrevistado por Lalander, 2009).

Otro rasgo propio del desarrollismo clásico que se reproduce en la Revolución Ciudadana es el papel protagónico del Estado y sus inversiones en la dirección y el impulso al crecimiento económico. La aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas que entró en vigencia a fines de septiembre de 2009, y todas las disposiciones constitucionales que refuerzan el papel exclusivo del Estado en las áreas estratégicas de la economía son evidencias de este rasgo. Aunque ese reforzamiento no es el que genera mayores desencuentros, sí lo es el de las reivindicaciones de ecologistas e indígenas respecto a la explotación petrolera y minera, sobre los que Rafael Correa lanzó serias advertencias públicas a la Asamblea Nacional Constituyente. Renunciaría, antes de aceptar limitaciones en la promoción de estas actividades:

Por otro lado, siempre hemos dicho que uno de los mayores peligros es el izquierdismo y ecologismo infantil. Como ya se expresó anteriormente, una postura insensata de moratorias petroleras, prohibición de explotación petrolífera en parques nacionales –cuando todo el país debería ser parque nacional– o la prohibición de la minería abierta sin beneficio de inventario, sólo podría interpretarse con las mismas palabras con que el genial Simón Bolívar, en su manifiesto de Cartagena [1812], explicó el desmoronamiento de la Caracas independiente: “Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios... Por manera que tuvimos filósofos por jefes; filantropía por legislación; dialéctica por táctica; sofistas por soldados”. En todo caso, de aprobarse este tipo de cosas, las respetaré como el que más, pero sí les solicitaré encarecidamente que acepten mi renuncia, ya que probablemente alguien con más talento podrá dirigir el país en esas condiciones, pero, sencillamente, el suscrito no (Correa, 2007).

Conforme pasa el tiempo, el presidente de la República se vuelve cada vez más entusiasta con las potencialidades económicas de la minería y menos preocupado por sus efectos ambientales, ampliando cada vez más el foso programático que lo separa de la CONAIE:

Y luego vienen los deshonestos que no hacen nada más que mentir y, como les decía al principio, presentarnos falsos dilemas: “El agua vale más que el oro”, y arrancan nuevamente los aplausos del respetable asumiendo que si explotábamos oro, que si aprovechábamos la minería, se perjudica el agua, y esto es otra falsedad. Las nuevas técnicas mineras de la minería a gran escala, precisamente, permiten reciclar el agua (Correa, 2012).

Aquí está la oportunidad para salir de la miseria [muestra el primer lingote de oro de la empresa minera estatal] para sacar de la pobreza a nuestro pueblo, sacar de la pobreza a los shuar, sacar de la pobreza al Ecuador. [...] Dios nos ha premiado con abundancia de recursos naturales. [...] Aquí está la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la pobreza. [...] Morona Santiago puede tener la segunda mina de cobre más grande del mundo. La primera está en Chile, que es el país más desarrollado de América Latina, básicamente gracias a la minería. [...] Eso nos saca de la pobreza, compatriotas (Correa, 2011).

La posición de principio que tiene el presidente ante la explotación minera –una posición muy cercana al “desarrollismo” del período previo a la toma de conciencia sobre la crisis ambiental contemporánea– choca con el creciente movi-

miento social de oposición de las poblaciones y comunidades rurales afectadas por sus estragos.

Movilización social

El segundo factor que ha reforzado el distanciamiento entre el gobierno y la CONAIE es la decidida hostilidad del ejecutivo a la movilización social independiente. No es sólo un discurso agresivo. Son no menos de 204 los enjuiciados por participar en protestas, 170 de ellos con juicios penales, y en 12 de los 31 procesos penales la acusación es de terrorismo y sabotaje³.

Tanto el presidente como sus ministros han justificado el recurrir a esta figura desproporcionada contra toda manifestación callejera de oposición, diciendo que es la única figura prevista en la legislación ecuatoriana:

Y cuando frente al secuestro de maquinaria, cierre de caminos, secuestro de personas, etcétera, como corresponde en un Estado de derecho, se quiere aplicar la ley, nos quedamos en la forma: se ha acusado de sabotaje y terrorismo, porque así llama nuestro Código Penal a esos delitos. Y por un nombre impreciso, pretendemos dejar todo en la impunidad. ¿Es ese el país en el que queremos vivir? (Correa, 2010).

El argumento puede considerarse insólito. Es evidente que la legislación ecuatoriana tiene otras figuras legales más proporcionales al tipo de “delito” que se achaca a los manifestantes⁴. La protesta callejera no está considerada en las leyes ecuatorianas como un delito lo suficientemente execrable y grave como el presidente piensa que es.

La función de esa judicialización de la protesta social es evitar nuevas movilizaciones porque, como dijo el presidente en la entrevista de Marta Harnecker (2011: 227-8), no hay que confundir autoritarismo con “principio de autoridad”. Los pesados juicios a los dirigentes, algunos de los cuales han terminado con sentencias acusatorias, disuaden mediante el miedo la participación en acciones de protesta. A fines del año 2011, Marco Guatemala, presidente de la federación departamental de la Sierra Norte de la CONAIE, fue arrestado y acusado de terrorismo por haber conducido una manifestación callejera contra el gobierno en la ciudad de Otavalo en 2009. Sin embargo, luego de 17 días en la cárcel, Guatemala fue liberado como resultado de la presión, las movilizaciones callejeras de las organizaciones indígenas y las críticas en los medios de comunicación.

Ahora bien, la propuesta de su gobierno para la selección de “representantes ciudadanos”, en lugar de representantes de organizaciones sociales, nos da una pista de su idea de democracia. El elemento crucial de su propuesta es la selección basada en méritos individuales, posgrados y exámenes. Rafael Correa contrapone explícitamente este criterio meritocrático al de participación en la lucha social:

Por elemental responsabilidad no puedo creer en novelorías tales como que en determinados concursos aquellos que se autoproclamen miembros de minorías sexuales tengan puntos adicionales, o que para conformar el Consejo de Participación Ciudadana, con todo respeto a los miembros, el

tirapiedras que empezó a los quince años tiene puntos adicionales y el abanderado no, [aplausos] sacrificándose lo esencial, la meritocracia (Correa, 2010).

Es evidente que esta postura no puede más que generar rechazo entre quienes provienen de movimientos sociales acostumbrados a “moverse” mediante manifestaciones en las calles, toma de vías y huelgas. Para el presidente, quien protesta en las calles es un anarquista y un vago que hace daño al país. Para los movimientos sociales es una forma de participación consustancial con la democracia. La distancia en las concepciones políticas es inmensa.

Política agraria

Según el Plan del Buen Vivir, una política de redistribución de agua y tierras es esencial para el cambio del modelo de acumulación y para el éxito de la estrategia nacional general prevista por él. La redistribución es el énfasis principal de los cuatro primeros años. Al menos, así está expresado en los documentos oficiales:

La primera fase es de transición en términos de acumulación en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía; no así, en términos de redistribución, considerada como el centro del cambio en este período y en general de la estrategia en su conjunto (SENPLADES, 2009: 96).

El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua y los activos productivos que no cumplen su función social. [...] La presente estrategia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en el que los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente nocivos al intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización creciente entre campo y ciudad (*Ibíd.*: 101-102).

Luego de dos años de políticas agrarias convencionales (entre 2007 y 2009), con la aprobación del Plan del Buen Vivir se diseñaron propuestas específicas para avanzar en la redistribución de tierras. Entre la SENPLADES y el MAGAP se diseñó un “Plan Tierras” cuyo diagnóstico identificaba cerca de medio millón de productores familiares sin tierra y un poco más de medio millón que necesitarían mejorar su acceso a la misma (SENPLADES y MAGAP, 2010: 8). Los objetivos del plan fueron ambiciosos. El Plan del Buen Vivir menciona que su meta es reducir el índice de concentración de la tierra en un 22%, del 0,78 al 0,61 en 2013 (SENPLADES, 2009: 151 y 155). Para lograrlo, los voceros del MAGAP propusieron el traspaso de 2 millones 500 mil hectáreas a campesinos mediante tres procedimientos: primero, la entrega de 69 mil hectáreas en manos del Estado⁵; segundo, la creación de un Fondo Nacional de Tierras, previsto en la Constitución (Artículo 282) para la compra de tierras y la expropiación; y tercero, la compra a los propietarios de tierras “improductivas” sujetas a afectación por no cumplir su función social (de las cuales sólo se mencionan, específica-

mente, las tierras improductivas de la provincia de Santa Elena, en la Costa, que debían expropiarse hasta mayo de 2011)⁶.

Otras versiones más modestas del plan se plantearon ocho resultados medibles: distribuir en cuatro años (hasta diciembre de 2013) 20 mil hectáreas de tierras en poder de instituciones del Estado, titular 1 millón de hectáreas, comprar mediante el Fondo de Tierras 550 mil hectáreas, expropiar un poco más de 1 millón y catastrar otros 2 millones. El costo estimado del Plan Tierras era de 38 millones de dólares en cuatro años, al parecer, sin contar los costos de implementar la compra del medio millón de hectáreas ni el pago de las expropiaciones del otro millón porque, de otro modo, estaría claramente devaluado (SENPLADES, MAGAP, 2010: 11-12 y 26).

Es mérito incuestionable del gobierno haber señalado la necesidad y la deseabilidad de la distribución de la tierra y el agua, algo que prácticamente ningún gobierno de los pasados treinta años había vuelto a mencionar. Fuera del mérito discursivo innegable, no hubo nada nuevo. De las tierras del Estado que debían entregarse hasta fines de diciembre de 2011, para febrero de ese año habían sido entregadas 2.881 hectáreas, 2 mil de las cuales correspondían a un predio de propiedad comunal; es decir, muy pocas tierras estatales. Ninguna propiedad provenía de las incautaciones a los bancos que entraron en crisis a fines de siglo (Landívar y Yulán, 2011: 34 y 42). Una reciente evaluación del intento de entregar a cuatro organizaciones de campesinos de la Costa algunas propiedades rurales de buena calidad que quedaron en manos del Estado por efectos del rescate de bancos en crisis, muestra que la maraña legal y judicial, que impide la resolución de los conflictos entre el Estado y los banqueros se combina con complicaciones provocadas por la presencia de traficantes de tierras, llenos de expectativas por las propiedades a ser entregadas, y de grupos armados en manos de los antiguos dueños (*Ibid.*: 43-58).

Los límites del intento redistributivo fueron muy pronto establecidos por una comparecencia pública del presidente Rafael Correa, cuando comentó la propuesta de ley de tierras de las organizaciones campesinas. Allí, el presidente contrapuso la política de redistribución de tierras a la política de promoción de la productividad, desconociendo el potencial productivo que tiene la pequeña producción agropecuaria:

Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de cien hectáreas y, ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio! [Pero] lo importante es la propiedad, y lo importante que se esté produciendo... Primera idea de fuerza: cuidado, por hacer un bien hacemos un daño mayor. Para que todos seamos propietarios partamos estas 2 mil hectáreas en mil familias a 2 hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2 mil familias más pobres que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiado baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2 mil hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora, se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es lo que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen sólo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la justicia, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres (Correa, 2011)⁷.

En síntesis, los primeros dos años de Revolución Ciudadana consistieron en políticas agrarias convencionales y los siguientes dos años consistieron en *plantearse* una política agraria redistributiva como elemento clave para el cambio en el modelo de acumulación, pero no avanzar un sólo milímetro en la ejecución de las muy moderadas medidas diseñadas para concretarla en la vida real. Muy al contrario, la redistribución aparece en su concepción como contraria al objetivo de aumentar la producción.

El 20 de marzo de 2012 las organizaciones campesinas vinculadas a la red agraria (la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN; la Coordinadora Nacional Campesina, CNC y otras) presentaron una propuesta de ley por iniciativa ciudadana y respaldada por más de 40 mil firmas que fue aceptada para trámite dentro de la Asamblea Nacional, que tiene seis meses para considerarla. Dicho proyecto de ley es, voluntariamente, moderado en su propuesta de redistribución: propone un límite máximo al tamaño de la propiedad rural (500 hectáreas en la Costa y la Amazonía y 200 hectáreas en la Sierra), pero abre la posibilidad de evitar la expropiación si se forman sociedades anónimas que democratizan el capital de los propietarios de la tierra (tal como piensa el presidente Correa que debe hacerse). Sin embargo, el 13 de junio de 2012, la CONAIE, la FENOCIN y la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) hicieron público un manifiesto conjunto en el que respaldaban la Ley de Tierras pero se planteaban defender la expropiación de las tierras productivas o improductivas superiores a 200 hectáreas en la costa, a 300 hectáreas en la Amazonía y a 100 hectáreas en la Sierra. Al momento de escribir estas líneas la Asamblea y el presidente no han zanjado todavía el debate, pero está muy claro que la posición final del gobierno no será la misma que la de las organizaciones indígenas y campesinas.

Desectorización

Un factor fundamental de distanciamiento entre las organizaciones indígenas y el gobierno es su concepción del Estado y de la participación social en la toma de decisiones sobre política pública. Como se mencionó, el proyecto de Revolución Ciudadana en Ecuador incluye el componente de *desectorización* de la sociedad, es decir, la meta de abolir las estratificaciones sociales configuradas en clivajes étnicos, religiosos, de género, etcétera, y en cambio, valorar a todos como ciudadanos⁸.

En la opinión de un segmento del movimiento indígena, esta meta de PAIS, de "ciudadanización", podría chocar con lo que dice el primer artículo de la nueva Constitución Ecuatoriana del 2008, donde se define al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, es decir, con reconocimiento explícito a las reivindicaciones indígenas. Desde la visión de una corriente fuerte en el movimiento indígena, la *desectorización* que impulsa la Revolución Ciudadana es una espada de doble filo, ya que políticamente Movimiento PAIS y el presidente Correa necesitan de la representación indígena para alimentar una imagen de unidad intercultural y de "legitimidad étnica". De hecho, una gran cantidad de dirigentes y militantes, que anteriormente estaban en Pachakutik, ha participado

en diferentes niveles y posiciones de PAIS (Lalander, 2010). Uno de los eslóganes centrales del gobierno ha sido “la Patria ya es de todos”⁹. Pero esto choca con la interpretación que hacen varias de las facciones indígenas –y también analistas como quienes suscriben– de la declaración de Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural en el primer Artículo de la nueva Constitución (*Ibíd.*: 104-106).

El discurso oficialista sobre la ciudadanía igualmente se refleja en la nueva Constitución. Hay más de 100 referencias a *ciudadanía/poder ciudadano* y similares en la Constitución de 2008. Aún más, el concepto de *participación ciudadana* se menciona 38 veces (en comparación con 6 referencias en la Constitución de Venezuela y 4 en la de Bolivia). Por ejemplo, el Artículo 95 de la Constitución ecuatoriana de 2008 declara:

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

No obstante, en el Ecuador de Rafael Correa se ha establecido un ente burocrático central para la participación –el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social– lo que conlleva el riesgo de que se desarrolle en un escenario de participación ciudadana/colectiva controlada desde arriba. Asimismo, Marc Becker destaca que activistas radicales –incluso representantes de las organizaciones indígenas– reclaman que el nuevo esquema de participación popular prioriza proyectos liberales e individualistas y que marginaliza las oportunidades de participación colectiva y la construcción de un Estado plurinacional (Becker, 2011: 152).

Cuando el presidente Correa, a fines de marzo de 2008, recibió en Quito a una marcha de la FENOCIN y de la FEINE, se refirió a la demanda de la CONAIE de un Estado plurinacional:

[No se permitirán] sectores radicales que quieren defender su poder, que buscan entender a la plurinacionalidad como una alianza de territorios en donde tengan su sistema de justicia, salud y educación, en la que pretenden mandar ellos y no el legítimo gobierno del Estado ecuatoriano. Eso no podemos aceptar, compatriotas (Presidencia de la República, 2008).

En pocas palabras, las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas, disponer de grados importantes de autogobierno en sus territorios y de autonomía en las instituciones estatales que definen las políticas hacia esos pueblos, no son, para la Revolución Ciudadana, la forma apropiada de entender la plurinacionalidad¹⁰. En esa misma ocasión, el presidente aludió a que las demandas de autonomías territoriales indígenas eran similares a las autonomías reclamadas por la derecha política guayaquileña, de la misma forma que en otros discursos identificó a la representación de todo tipo de organizaciones privadas en los consejos estatales encargados de la definición de políticas públicas con

la privatización del Estado (*ídem*). ¿Sobre qué base institucional debe entonces construirse la plurinacionalidad según el gobierno ciudadano? En lugar de “instituciones paralelas” de los indígenas, el modelo institucional que las reemplaza establece claramente que la plurinacionalidad se construye a partir de la recuperación de toda la autoridad estatal en manos del presidente de la República, única persona cuya legitimidad democrática proviene de haber sido elegido por todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Aunque hay ecos ideológicos de un liberalismo clásico en el proyecto de Estado, es decir, anterior al multiculturalismo del estilo de Will Kymlicka (1996), lo esencial aquí es un problema de poder: el presidente no está dispuesto a ceder poder ante ninguna organización indígena en el Estado central. Se entiende, entonces, por qué hay una contradicción y alejamiento sensible entre las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa.

Sin embargo, no todos los indígenas están en la oposición. Hay algunos dirigentes que se mantienen más cercanos al gobierno, sin necesariamente apoyar la dessectorización y la ciudadanización. Un ejemplo es Carlos Viteri, importante intelectual y ex dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, que actualmente forma parte del gobierno como director ejecutivo del Fondo de Ecodesarrollo de la Región Amazónica. Asimismo, Pedro de la Cruz, kichwa originario de Cotacachi y ex presidente de la FENOCIN, es uno de los asambleístas nacionales más cercanos al presidente dentro de PAIS. A nivel de alcaldías gobernadas por PAIS, igualmente pueden mencionarse los casos de Mario Conejo y Alberto Anrango, destacados luchadores indígenas con trayectorias en el socialismo ecuatoriano, quienes a partir de las elecciones de 2009 son alcaldes de Otavalo y Cotacachi respectivamente¹¹. Otro de los casos importantes es el de Mariano Curicama, el primer alcalde indígena de Ecuador (en Guamote, 1992-2000), así como también ex funcionario en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003) y actual prefecto de la provincia de Chimborazo. Curicama, sin embargo, no considera su relación con AP y con Rafael Correa como una “alianza”:

Las alianzas, o sea, yo no llego por alianzas a la prefectura. Yo llego a la prefectura de nuevo esta vez por el apoyo de Pachakutik, por las organizaciones indígenas, campesinas y también la parte urbana. [...] A mí me habían pedido que pongamos la lista 35 del señor presidente, porque son mis amigos, no porque sea alianza. Y lo mismo con la lista 34, porque es el actual alcalde de Riobamba. Él es del Movimiento Municipalista. Entonces nosotros llegamos por nuestro trabajo, por nuestra capacidad y porque tengo el apoyo mayoritario de Chimborazo. [...] Yo no debo agradecer a Alianza PAIS, sino al señor presidente de la República, porque él es amigo, amigo de los indígenas, y me ha apoyado mucho. Me apoyó con recursos económicos para que yo pudiera hacer mucha vialidad, asfaltos de vialidad, canales de riego, forestación, reforestación, o sea, muchas obras hicimos con recursos que apoyó el señor presidente (Curicama, entrevistado por Lalander, 2009).

Respecto al tema de la *dessectorización*, hay que decir que algunos dirigentes indígenas que colaboran con el gobierno de Rafael Correa, especialmente aquellos que provienen de la FENOCIN, no de la CONAIE, niegan que las conquistas obtenidas por la CONAIE en el período ubicado entre 1995 y 2007, de instituciones estatales autónomas manejadas por las organizaciones indígena, sean avances hacia el Estado plurinacional. Germán Flores –indígena cotacacheño

que en la actualidad es gerente regional del Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad— es uno de ellos. En palabras de Flores:

¿Ahora qué es lo que sucede en estos momentos en donde el presidente ha cogido todos los postulados del movimiento indígena y comienza a aplicarlos? También se quedan sin discurso, porque no es posible generar o comenzar a construir un Estado plurinacional generando instituciones paralelas, donde tú comienzas a defender la educación bilingüe, donde comienzas a defender la salud intercultural, donde comienzas a defender al CODENPE, donde comienzas a defender una serie de situaciones, que sí es cierto, estaban construidas como parte de un proceso de inclusión [para superar] la exclusión que nosotros vivimos; pero, que en este nuevo gobierno comienza con una Revolución Ciudadana, se incluyen todos estos aspectos y esto va a licuar todo el Estado y reorganizar el Estado, reestructurar todo el Estado. Eso implica, nuevos procesos de construcción del Estado plurinacional y esto implica en educación cambiar el *pensum* de estudios pertinentes, social y culturalmente, de acuerdo a la realidad nacional (Flores, entrevistado por Lalander, 2009).

Flores recoge la argumentación gubernamental según la cual las “instituciones paralelas”, es decir, instituciones estatales con autonomía, manejadas por las organizaciones indígenas, no son avances hacia un Estado plurinacional. Aunque Flores habla de “licuar todo el Estado”, no especifica la forma institucional que tendría esta nueva construcción del Estado plurinacional. Varias decisiones gubernamentales respecto al manejo de las instituciones dedicadas a temas indígenas aclaran cómo entiende la Revolución Ciudadana la construcción de la plurinacionalidad.

Como corolario de este distanciamiento político, durante la ceremonia de entrega del proyecto de nueva Constitución al ejecutivo el 26 de julio de 2008, en su discurso al país, el presidente Correa expresó:

Paradójicamente los principales peligros no han venido de una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contradicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debíamos combatir, de Caballos de Troya que llevaban en su vientre aspiraciones, y hasta frustraciones, por las que no había votado el pueblo ecuatoriano. [...] Lo dije el 29 de noviembre de 2007 en la inauguración de esta Asamblea: el mayor peligro para nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil (Correa, 2008).

Por supuesto, como se mencionó anteriormente, hay organizaciones sociales en alianza con PAIS—como la FENOCIN y la organización campesina de la Costa, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE)— que hasta cierto grado perciben que son considerados como socios organizativos del proyecto oficialista. Hay algunos sectores que buscan una reconciliación. Hay, en efecto, conciencia sobre esta problemática dentro de Alianza PAIS. Como sugieren los politólogos Virgilio Hernández y Fernando Buendía (los dos ex Pachakutik y, en la actualidad, de PAIS):

[Alianza PAIS] tendría que recomponer su política de alianzas con los distintos sectores de la sociedad, en particular con los movimientos indígena, campesino, obrero y con los grupos sociales que demandan reconocimiento, mayor participación e interacción, rompiendo la lógica de “aliado o adversario” (Hernández y Buendía, 2011: 142).

Pero, las distancias parecen ya demasiado grandes para que este llamado a “recomponer la política de alianzas” parezca viable. A pesar de la participación individual en PAIS por parte de algunos dirigentes indígenas, el conjunto de la organización indígena se ha pronunciado en contra del gobierno. Un hecho revelador es que en el Congreso de la CONAIE realizado en la ciudad de Puyo en mayo de 2011, que debía elegir al nuevo presidente de la organización, se presentaron tres candidatos, ninguno de los cuales se pronunció a favor del gobierno. De hecho, los tres candidatos, Auki Tituaña, de Imbabura; Humberto Cholango, de Cayambe; y José Acacho, de la Amazonía sur, competían unos con otros sobre cuál tenía el discurso más radical en contra del gobierno.

Más claramente, con motivo de la consulta popular convocada por el gobierno de la Revolución Ciudadana respecto a reformas constitucionales en temas de seguridad y reestructuración de la justicia, en mayo de 2011, se formó un colectivo electoral que promovió el voto por el “no” y que agrupó a la mayoría de grupos de izquierda, llamado Coordinadora Plurinacional “Esta Vez No”. En agosto, este colectivo publicó un manifiesto por la unidad y la acción permanente de las izquierdas que actualmente están en la oposición. Este nuevo polo político a la izquierda del gobierno está conformado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Pachakutik, Montecristi Vive (un grupo de ex asambleístas constituyentes de Alianza PAIS liderados por Alberto Acosta), la Corriente Socialista Revolucionaria (fracción disidente del Partido Socialista Ecuatoriano, todavía aliado al gobierno) y el movimiento Participación (el grupo político de Gustavo Larrea, ex ministro de gobierno de Rafael Correa). Al mismo tiempo, la mayoría de las centrales sindicales molestas con la aprobación de un decreto que instauro la “renuncia obligatoria” de funcionarios públicos, la CONAIE y las organizaciones del Frente Popular (entre las más grandes, la Federación Única Nacional del Seguro Social Campesino, FEUNASSC y la Unión Nacional de Educadores, UNE) firmaron en Quito un acuerdo para coordinar su resistencia frente a las políticas de criminalización de la protesta social y de promoción de políticas económicas extractivistas, el 9 de agosto de 2011.

Entre el 8 y el 22 de marzo de 2012, la CONAIE y otras organizaciones sociales realizaron la *Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos*, con una agenda de 19 puntos: oposición a la megaminería a cielo abierto, defensa del agua y rechazo a la criminalización social, entre otros. Exigían el respeto de los derechos constitucionales, que según ellos no se han cumplido ni respetado por parte del gobierno de PAIS. Asimismo, el movimiento indígena demandaba un diálogo constructivo con el gobierno. Por su parte, el gobierno convocó contramovilizaciónes y, al culminar en Quito el 22 de marzo, el presidente reafirmó que no dialogaría con grupos violentos y que no lo haría con los indígenas mientras siguieran aliados con el MPD¹².

Reflexiones finales

La histórica relación entre la izquierda política y el movimiento indígena ecuatoriano auguraba que la llegada a escena de Rafael Correa y Alianza PAIS se saldaría con una alianza mutuamente beneficiosa. Hubo muchas posibilidades

de que esa alianza se consolidara porque los ejes programáticos, forjados en una lucha prolongada en contra de las políticas de ajuste neoliberal, eran inicialmente muy parecidos. La alianza, sin embargo, no fue posible. En el proceso electoral de 2006, el grueso de la estructura organizativa de la CONAIE y de Pachakutik apoyó a su principal dirigente del momento, Luis Macas, en la primera vuelta electoral. Luego, en la segunda ronda electoral e igualmente en el referéndum sobre la nueva Constitución, las organizaciones indígenas en su mayoría apoyaron (críticamente) las tesis impulsadas por Alianza PAIS. Al mismo tiempo, algunas organizaciones indígenas no pertenecientes a la CONAIE, como la FENOCIN, y algunos dirigentes locales y figuras nacionales del movimiento, decidieron sumarse al Movimiento PAIS.

Sin embargo, como se ha retratado en el presente estudio, los distanciamientos programáticos entre la CONAIE y Alianza PAIS no han cesado de profundizarse, especialmente luego de la aprobación de la Constitución en octubre de 2008. Podría postularse que el momento de mayor convergencia entre las dos fuerzas sociales y políticas ocurrió precisamente durante el proceso constituyente. Este artículo sostiene que tal distanciamiento tiene que ver, esencialmente, con diferencias programáticas que se acentuaron una vez que había que convertir la oposición al neoliberalismo en un programa positivo de gobierno. Esto quiere decir que la CONAIE y el Movimiento PAIS se distanciaron porque el programa político de acciones gubernamentales que ambos imaginaron y construyeron para la superación del neoliberalismo era, en realidad, distinto.

Algunas de estas diferencias programáticas tienen raíces en diferentes tradiciones ideológicas, como las que sustentan distintos modelos de Estado. Esto es, por un lado, el modelo de la representación liberal, y por otro, el de las múltiples formas de la democracia plurinacional. Muchas veces estas diferencias programáticas se entrelazaron con consideraciones y conflictos de poder e influencia en el escenario político. Cada actor buscaba mantener su influencia sobre sus propios seguidores, preservar su integridad organizativa o guardar su libertad de maniobra. Pero el corazón de las diferencias políticas, que explica en última instancia el distanciamiento entre la CONAIE y Alianza PAIS, reside en distintas propuestas programáticas de cambio social.

Propusimos cuatro factores fundamentales e interconectados para comprender mejor el distanciamiento entre los protagonistas del estudio. Primero, se destacó el tema de la oposición al extractivismo. Para el gobierno la promoción de la minería metálica a gran escala es una de las estrategias fundamentales para afrontar el reto de una economía pospetrolera. La CONAIE, por el contrario, se opone a esta estrategia porque la concibe como una prolongación de la economía petrolera y por el peso que le atribuye a los impactos ambientales y sociales que la gran minería tendrá en zonas campesinas y de pequeña minería.

En segundo lugar, hay una gran distancia en cuanto a la valoración de la movilización social. El gobierno juzga que la movilización social en las calles y en las carreteras es una forma de anarquía y de presión indebida sobre la autoridad. La CONAIE, por el contrario, interpreta a la movilización social como un componente fundamental de la participación ciudadana y de la democracia participativa. En tercer lugar, se presentó el panorama de los diferendos en la política

agraria. El gobierno reconoce la necesidad de una política agraria que ponga el acento en la redistribución de tierras improductivas y aguas, así como en la promoción de la pequeña y mediana producción parcelaria, pero sus programas han mantenido una orientación convencional hacia la agricultura comercial de grandes productores y prácticamente no ha iniciado la redistribución anunciada. La CONAIE, en cambio, arguye que a pesar de los conflictos y las complicaciones que implica una política de redistribución de las tierras productivas es necesario avanzar decididamente en ellas, si se quiere resolver el problema de la pobreza rural y de las bases para un desarrollo económico equitativo.

...el corazón de las diferencias políticas, que explica en última instancia el distanciamiento entre la CONAIE y Alianza PAIS, reside en distintas propuestas programáticas de cambio social

En cuarto lugar, finalmente, resaltamos la importancia del concepto de la *dessectorización* de la Revolución Ciudadana, que inclusive tiene repercusiones en la comprensión de las reivindicaciones indígenas de la plurinacionalidad. El gobierno sostiene que el fortalecimiento del Estado consiste en recuperar para el ejecutivo la autoridad sobre todas las decisiones relevantes de política pública. La CONAIE opina que el fortalecimiento del Estado debe ir de la mano con una democratización de la toma de decisiones mediante la participación directa de organizaciones civiles en espacios colegiados de definición de la política pública. Para el gobierno eso significa “sectorizar” o “corporativizar” el Estado.

El resultado final es un desencuentro político que no deja de profundizarse. Si alguna vez hubo una posibilidad de acuerdo programático entre las estructuras formales de la CONAIE y el gobierno de Alianza PAIS, en los momentos actuales está totalmente descartado. Puede haber algunas coincidencias en algunos temas; pero las trayectorias, los proyectos y las estrategias políticas parecen ya definitivamente distanciadas.

Bibliografía

- Acción Ecológica, CEDHU e INREDH 2011 “Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador” en Chérrez, Cecilia *et al.* (eds.) *Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina* (Quito: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina/Acción Ecológica/Broederlijk Denle).
- Anónimo 2012 “El Estado negocia el contrato de Río Blanco” en *El Tiempo* (Ecuador) 16 de marzo. En <<http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/92934-el-estado-negocia-el-contrato-de-ra-o-blanco>> acceso en mayo de 2012.
- Asamblea Nacional del Ecuador 2011 *Proyecto de Ley del Código Orgánico Penal Integral* (s.d.).
- Becker, Marc 2011 *Pachakutik! Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador* (Plymouth: Rowman & Littlefield).

- Berry, Albert y North, Liisa 2011 "Los beneficios de la pequeña propiedad en el campo. Respuesta al Presidente Correa" en *La Línea de Fuego*, 24 de octubre. En <<http://lalineadefuego.info/2011/10/24/los-beneficios-de-la-pequena-propiedad-en-el-campo-por-albert-berry-y-liisa-north>> acceso en mayo de 2012.
- Correa, Rafael 2007 "Discurso del Presidente de la República", presentado en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, 30 de noviembre.
- Correa, Rafael 2008 "Los que vinieron con agendas propias se equivocaron", discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, 26 de julio. En <<http://www.presidencia.gob.ec>> acceso mayo de 2012.
- Correa, Rafael 2010 "Lo que nos falta por hacer, es mucho más de lo que ya hemos hecho", informe del presidente a la Nación presentado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, 10 de agosto, Quito.
- Correa, Rafael 2011 "Cadena radial de los sábados", discurso del 8 de noviembre. En <<http://www.youtube.com/watch?v=drjw8TogiOM>> acceso en mayo de 2012.
- Correa, Rafael 2012 "Proyecto Mirador. Suscripción del contrato", discurso del 5 de marzo en Quito. En <<http://www.presidencia.gob.ec/download/2012-03-05-ContratoMINER0.pdf>> acceso mayo de 2012.
- Dávalos, Pablo 2012 "Los movimientos sociales en el posneoliberalismo: de la resistencia a la esperanza" en *La Línea del Fuego*, 30 de marzo. En <<http://lalineadefuego.info/2012/03/30/los-movimientos-sociales-en-el-posneoliberalismo-de-la-resistencia-a-la-esperanza-por-pablo-davalos>> acceso en mayo de 2012.
- Harnecker, Marta 2011 *Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud* (Madrid: El viejo topo).
- Hernández, Virgilio y Buendía, Fernando 2011 "Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAIS" en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 234, julio-agosto.
- Kymlicka, Will 1996 *Ciudadanía multicultural* (Barcelona: Paidós).
- Lalander, Rickard 2010 *Retorno de los Runakuna. Cotacachi y Otavalo* (Quito: Abya-Yala).
- Landívar, Natalia y Yulán, Milton 2011 *Monitoreo de políticas de redistribución de tierra estatal y el derecho a la alimentación de posesionarios. Informe 2010* (Quito: FIAN/Tierra y Vida/CEDOCUT).
- Maldonado Ruíz, Luis 2009 "El país ya es de todos, menos de los Indios" en *Boletín digital ILAWI* (Quito: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador-ESGOPP-E).
- Ospina Peralta, Pablo 2011 "Corporativismo, estado y revolución ciudadana: el Ecuador de Rafael Correa" en Buschges, Christian; Kaltmeier Olaf y Thies, Sebastian (eds.) *Culturas políticas en la región andina* (Frankfort: Iberoamericana Editorial Vervuert/Biblioteca Ibero-Americana).
- Ospina Peralta, Pablo 2012 "Promesas temporales. Cambio del régimen de acumulación en Ecuador, propuestas y realizaciones de la revolución

ciudadana" en López, Luisa et al. (comps.) *¿Otros Mundos Posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad* (Medellín: Fundación Rosa Luxemburg/Universidad Nacional de Colombia).

Presidencia de la República del Ecuador 2008 "Las organizaciones indígenas y campesinas respaldan la gestión del Presidente Rafael Correa" en *Boletín de prensa*, 27 de marzo. En <<http://www.presidencia.gob.ec>> acceso en mayo de 2012.

República del Ecuador 2008 *Constitución de la República del Ecuador* (Montecristi: Asamblea Constituyente).

Rosero, Fernando 2011 "Tierra y conflicto social en tiempos de Rafael Correa" en *La Tendencia. Revista de Análisis Político* (Quito: FES-Ildis/CAFOLIS) N° 11.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2009 *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural* (Quito: SENPLADES-República del Ecuador).

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2010 "Plan de fomento del acceso a tierras de los productores familiares en el Ecuador. Plan Tierras" (inédito).

Entrevistas

A Mariano Curicama, Riobamba, 2 de julio de 2009.

A Germán Flores, Ibarra, 14 de diciembre de 2009.

A Marlon Santi, Riobamba, 2 de julio de 2009.

Notas

1 Una primera versión de este artículo se publicó como "Movimiento Indígena y Revolución Ciudadana en Ecuador" en 2012 en la revista venezolana *Cuestiones Políticas* (Universidad del Zulia: Maracaibo) Vol. 28, N° 48. Ambos autores quieren reconocer la importancia de una beca de la Fundación Sueca para la Internacionalización de la Investigación y la Enseñanza Superior (STINT), la cual posibilitó una estadía de Ospina Peralta en Estocolmo entre agosto y septiembre del 2011. Asimismo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo dio apoyo parcial a una visita de Lalander a Ecuador en marzo de 2012.

2 Movimiento PAIS es el movimiento político electoral de una organización más amplia –Alianza PAIS (Patria Altiva I Soberana)– que por su parte es una coalición de diferentes organizaciones políticas y sociales que promovieron a Rafael Correa a la presidencia de la República.

3 Los datos refieren a la última valoración disponible sobre criminalización de la protesta social entre los años 2008 y 2010 (Acción Ecológica, CEDHU e INREDH 2011: 94-95).

4 Tan consciente es el gobierno de que otras figuras existen, que ya en julio de 2010 remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas legales

que prevé el aumento de prisión de hasta tres años a quienes cierran las vías públicas, equiparando la pena a la de tortura. La propuesta de reforma integral al código penal presentada por el gobierno de Rafael Correa en octubre de 2011 mantiene dicha proposición. Cf. Proyecto de Ley Código Orgánico Penal Integral, Asamblea Nacional del Ecuador, 2011.

5 Aunque en el Plan Tierras se mencionaron 69 mil has, luego se habló de 95 mil y luego de 120 mil, hasta que el presidente Correa mencionó la existencia de 200 mil has en manos del Estado. La verdad es que nadie sabe cuántas son las tierras en manos del Estado.

6 Hemos seguido el relato de datos de Fernando Rosero (2011: 83-4).

7 Para una crítica a las declaraciones del presidente Correa desde una perspectiva que revaloriza el papel de la pequeña producción agropecuaria en los procesos de desarrollo de los países del sudeste asiático, y en varias regiones de América Latina y del propio Ecuador, cfr. Berry y North (2011).

8 Los orígenes ideológicos liberales de esta idea son bastante transparentes. El discurso gubernamental no apela a la organización, sino a la persona individual que actúa en la política. Este "ciudadano" tiene o debe tener una visión universalista y de largo

plazo de la gestión gubernamental y de sus propias responsabilidades. Las fuentes de esta postura no son sólo las doctrinas liberales de la representación política, sino sobre todo el hecho político objetivo de que con los difusos “ciudadanos” no hay que negociar un programa político, mientras que con las organizaciones sociales la negociación se vuelve indispensable, compleja e incesante. Mantener la libertad de acción frente a las organizaciones sociales exigentes fue y sigue siendo una norma de conducta política de Alianza PAIS.

9 Como respuesta a este mensaje, en una atmósfera de diferendos entre el gobierno y las organizaciones indígenas en 2009, Luis Maldonado Ruíz escribió el documento “El país ya es de todos, menos de los indios” (2009).

10 Así mismo, en febrero de 2009, mediante el decreto ejecutivo 1585, el gobierno suprimió la autonomía política de que gozaba la *Dirección Nacional de Educación Bilingüe* (DINEIB). Este decreto atribuyó al ministro de Educación no sólo la definición de toda la política educativa, sino la autoridad para nombrar al subsecretario de diálogo intercultural, al director nacional de la DINEIB y a sus directores provinciales. Estas atribuciones estaban, antes del decreto, en manos de las organizaciones indígenas. También fue suprimida la

mayoría que las organizaciones tenían en el directorio del *Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos* (CODENPE), donde ahora existe una mayoría gubernamental (paridad y voto dirimente para el gobierno), tal como reza la nueva Constitución (artículos 156 y 157). Estos artículos afectan también la conformación de los órganos directivos del *Consejo Nacional de las Mujeres*, del *Consejo de la Niñez y la Adolescencia* y del *Consejo de Discapacidades*, donde las organizaciones civiles pierden la mayoría que tenían.

11 Mario Conejo fue electo alcalde de Otavalo por Pachakutik en el 2000 y re-elegido en el 2004. En 2006 salió de Pachakutik y se formó un movimiento político cantonal (la Minga Intercultural) antes de concretarse la alianza con PAIS. Alberto Anrango fue co-fundador del movimiento indígena de la provincia Imbabura en los años 70 y de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), vinculada históricamente al Partido Socialista Ecuatoriano - Frente Amplio de Izquierda (PSE-FADI) (Lalander, 2010).

12 Los dos autores de este escrito observaron la marcha indígena de cerca. Para una reflexión sobre la marcha, incluso con comparaciones entre las relaciones movimiento indígena-Estado en Ecuador y Bolivia, véase Dávalos (2012).

La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile

CÉSAR ENRIQUE PINEDA

Sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Maestrante en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resumen

En el presente artículo se describen las principales formas de acción colectiva del movimiento mapuche en Chile alrededor de la disputa por la tierra, el territorio y los bienes naturales. Se analiza la respuesta del movimiento mapuche a la industria forestal a través de lo que llamamos el movimiento mapuche “de recuperación de tierras”, así como se brinda una visión panorámica de los procesos de resistencia local a los procesos extractivos mineros y a la desposesión de tierras por la construcción de proyectos hidroeléctricos, entre otros. Finalmente, se concluye con una breve reflexión sobre los ejes de antagonismo y subjetivación del movimiento mapuche en torno de la conflictividad, que contiene claramente una dimensión ambiental.

Abstract

This paper describes the main forms of collective action of the Mapuche movement in Chile in matters concerning territorial disputes, the territory and natural goods. The paper also analyses the Mapuche response to the forestry-based industry through what we have come to call the Mapuche movement of “land recovery”, and provides a panoramic view from local resistance processes to mining processes and dispossession on account of, among others, hydropower projects. The paper ends with a brief reflection on the notions of antagonism and subjectivisation of the Mapuche movement around conflict, which clearly involves an environmental dimension.

Palabras clave

Movimiento mapuche, industria forestal, industria minera, Coordinadora Arauco Malleco, conflictos socioambientales.

Key words

Mapuche movement, forestry-based industry, mining industry, Coordinadora Arauco Malleco, socio-environmental conflicts.

Cómo citar este artículo

Pineda, César Enrique 2012 "La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

"Planteamos la resistencia mapuche al sistema capitalista en el territorio ancestral mapuche. [...] Las inversiones forestales, energéticas, turísticas no tendrán contemplación de nuestras formas de vida. [...] El exterminio de nuestro Pueblo es un hecho si no luchamos".

Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco Malleco (CAM).

La conflictividad ambiental en Chile tiene como uno de sus actores principales al pueblo mapuche, pueblo originario que en los últimos quince años ha protagonizado un intenso antagonismo frente al Estado y diversas empresas nacionales y trasnacionales. El objeto de disputa en esta interacción antagónica es prioritariamente –aunque no de manera exclusiva¹– el territorio y los bienes naturales. Es a la vez un conflicto material y simbólico. Por un lado, se juega la desposesión de las bases materiales de reproducción social de dicho pueblo ante agresivas políticas desarrollistas y extractivistas, especialmente en el movimiento mapuche en lucha por la tierra y el territorio. Existe también, por otro lado, un campo de conflicto por cómo se distribuyen los costos, efectos y beneficios² debido al desbordamiento de las externalidades de los proyectos forestales, energéticos, mineros, de la industria salmonera y de proyectos de infraestructura y comunicaciones. Esta segunda dimensión puede entenderse como un movimiento mapuche de afectados ambientales. Por último, un tercer ámbito de lucha es aquel en que se enfrentan diversos paradigmas y racionalidades societales, donde existe un choque entre las formas de organización social orientadas a la máxima ganancia y otras formas de reproducción social no basadas en el valor de cambio. Aunque intrínsecamente interrelacionadas, trataremos de analizar estas tres dimensiones de conflicto donde el protagonismo está a cargo del pueblo mapuche, de la "gente de la tierra"³.

La industria forestal frente al pueblo mapuche: la disputa por el territorio

"Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio".

Eduardo Matte Pérez, 1889, ascendiente del grupo económico Matte, de propietarios forestales en el Chile contemporáneo.

El eje del crecimiento chileno, basado desde la dictadura pinochetista en un proceso de expansión del sector primario y de las industrias intensivas en el empleo

de recursos naturales hacia los mercados de exportación, es parte de una tendencia continental que podríamos considerar incluso como un crecimiento hipertrófico –en términos ambientales– de sectores como la industria forestal y la minera.

La industria forestal, basada en la sustitución de bosques nativos húmedos de la región templada fría (en Argentina y en Chile) por plantaciones de monocultivos forestales (especialmente de pinos y eucaliptos), se explica por el enorme capital con que cuentan las empresas forestales, que les permite adquirir impresionantes extensiones de tierras y bosques con débiles regulaciones ambientales y poderosos incentivos fiscales. En el caso argentino, el crecimiento de esta industria, a partir de la vigencia de la Ley Forestal 25.080, permitió que de una producción de 4,7 millones de toneladas de madera de plantaciones en 1999 se pasara en 2006 a 7,9 millones de toneladas, y en 2010 a 9,3 millones⁴. La implantación industrial de árboles (destinados mayoritariamente a aserraderos y fábricas de celulosa) hizo que en 2007 en ese país se exportaran mil millones de dólares con casi 1,2 millones de hectáreas de monocultivo forestal (Aranda, 2009).

En Chile, la frontera forestal se extiende cada año cerca de 50 mil hectáreas. En ese país, sólo el 7,5% de las plantaciones forestales está en manos de pequeños propietarios, en tanto el 66% pertenece a grandes capitalistas. Sólo el grupo Angelini tiene 756 mil hectáreas, mientras el grupo Matte supera el medio millón (Zibechi, 2008:121). La evolución de los monocultivos forestales en Chile deja ver claramente cómo el programa de reordenamiento económico fue provocado directamente por las políticas de la dictadura y por su continuidad y profundización por los gobiernos democráticos. Para fines de 1974 –poco después del golpe militar– la masa de plantaciones existentes en Chile era de 450 mil hectáreas. En 1994, cubría ya un área de 1.747.533 hectáreas, el 78,8% de las cuales correspondía a pino radiata y el 13,6% a eucalipto (Montalba y Carrasco, 2005). Para 2009, el área cultivada llegaba a 2,1 millones de hectáreas (Gómez Leyton, 2010: 398). En 2010, el sector forestal fue el segundo sector exportador (sólo abajo del cobre) y el primero basado en un recurso natural renovable, con casi 2,3 millones de hectáreas⁵.

Este crecimiento invasivo requiere, por supuesto, de cada vez mayor disponibilidad de tierras en un ecosistema que ancestralmente había sido habitado por el pueblo mapuche, tanto en lo que hoy es Argentina como en Chile, correspondiente al territorio antiguo del Puelmapu y el Gulumapu, respectivamente⁶.

El crecimiento sostenido de la industria forestal, basado en la maximización de las ganancias, provoca una seria contradicción al perseguir un crecimiento infinito en territorios finitos, habitados además material y culturalmente por el pueblo mapuche, cuyas características étnicas están ancladas en el territorio. Existe aquí una contradicción que pareciera irresoluble: el capital forestal requiere de crecimiento constante que tarde o temprano invade, privatiza, cerca o presiona a las comunidades mapuches; por otro lado, los pueblos originarios necesitan el territorio como forma de reproducción socioétnica (material e inmaterial, productiva y simbólicamente) y como base de sus estructuras de autoregulación (estructuras e instituciones sociales, económicas, políticas y culturales existentes o parcialmente existentes). El conflicto es evidente por la posesión, regulación y propiedad de la tierra, y por el control territorial a partir de ellas.

El comportamiento de la industria forestal en Chile es coherente con la necesidad del capital de crear siempre nuevo espacio para la acumulación, una “solución espacial”, que pueda construir un nuevo plano de demanda efectiva (Harvey, 2001). Debemos agregar además que, a lo largo del desarrollo histórico de Chile, dicho crecimiento se ha caracterizado por la “acumulación por desposesión” (mercantilización y privatización de la tierra, conversión de varios tipos de propiedad –comunal, colectiva, estatal– en derechos de propiedad exclusiva, supresión del acceso a bienes comunes, entre otros) (Harvey, 2003); además de que “las exportaciones son el elemento más importante de la demanda agregada y por tanto las que transmiten el dinamismo al resto de la economía”, que depende absolutamente de sus recursos naturales (Villarino, 2006: 187). El crecimiento territorial, el historial de acumulación por desposesión y la dependencia de la economía de las exportaciones ancladas en los bienes naturales explican el interés del gobierno chileno en sostener el modelo forestal, a pesar de que ha sido ampliamente criticado por sus efectos socioambientales; y explica a la vez uno de los componentes del conflicto con el pueblo mapuche.

El proceso de la industria forestal tiene tres grandes componentes depredadores: las propias plantaciones de monocultivos, la fabricación de celulosa y los aserraderos. Los efectos naturales y sociales de la activación del ciclo de acumulación basado en la producción forestal son alarmantes. Existen muchos trabajos sobre estos efectos. Aquí nombramos sólo a los autores Montalba y Carrasco (2005), quienes los enumeran así: destrucción de bosque nativo, disminución de la biodiversidad, disminución de fuentes de agua superficiales y subterráneas, problemas de salud de comunidades circundantes, contaminación del agua y degradación de suelos como principales “externalidades” negativas asociadas a las plantaciones forestales en el territorio. A esto hay que sumar los efectos asociados a aserraderos y fábricas de celulosa como la polución atmosférica de papeleras, las partículas en suspensión por altos volúmenes de aserrín y los desechos sólidos y líquidos descargados en ríos.

La producción forestal afecta además el sistema cultural mapuche cuando se le prohíbe acceder a bosques y procesos de mediería con vecinos y familiares, se afecta a sus cultivos, la horticultura y la manutención de su ganado por la falta de acceso al agua, provocada por los monocultivos de pinos que agotan los mantos y fuentes acuíferas.

Si comprendemos que los distintos ciclos de acumulación de capital primero despojaron de su territorio ancestral al pueblo mapuche, para luego tratar de convertirlo en “el granero de Chile” con una expansión agroterritorial o de colonización agrícola que agotaría tierras y destruiría los bosques, podemos entender que los ciclos previos del mercado abrieron la necesidad y, a la vez, las condiciones para el surgimiento de la industria forestal, alentada y promovida por las políticas neoliberales de la dictadura. Vemos entonces que la tensión de los conflictos socioambientales tiene antecedentes de larga data, siendo contradicciones estructurales del modelo de crecimiento capitalista ya que, como lo plantea Jorge Veraza, “los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital. [...] Estas diferencias suscitan necesariamente una contradicción entre el dominio del capital industrial y los ciclos biológicos del planeta” (Veraza, 2007, 25). Esta línea de continuidad se explica con distintas formas de

acumulación y producción, ligadas indisolublemente a políticas y formas estatales de organización social, esencialmente en el territorio considerado como La Araucanía. Dichos elementos son sintetizados en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Ciclos de acumulación y sus efectos en el pueblo y territorio mapuche

Ciclo de acumulación	Efectos en el pueblo mapuche	Efectos en el territorio
Acumulación por desposesión 1861-1881-1927.	Desposesión de medios de reproducción social, tierras y ganado. Arreduccionamiento territorial, fragmentación de la sociedad mapuche. Conversión de sociedad "autosuficiente" a sociedad dependiente de la economía regional. Desarticulación de economía ganadera	Reconversión del territorio controlado por una sociedad de economía de subsistencia a control estatal y privado. Incorporación del territorio a la economía nacional y a la economía-mundo. Penetración territorial militar, fundación de puntos de acceso a través de fuertes.
Acumulación por colonización agrícola, expansión agroterritorial 1885-1930.	Sostenimiento dependiente. Concentración de la tierra, conversión a economía campesina minifundista. Nueva pérdida de tierras por colonos y fraudes.	Crecimiento basado en sectores agrícolas de monocultivos, ganadería y explotación maderera. Urbanización, ramales ferrocarrileros. Agotamiento de suelos y destrucción de bosque nativo.
Desaceleración y agotamiento productivo de la colonización agrícola 1940-1975. (Estancamiento).	Pauperización de la economía mapuche. Inicio de la migración del campo a la ciudad. Comienzo de la insuficiencia de tierras para la reproducción social mapuche.	Degradación de suelos. Degradación de bosques nativos. Desertificación. Necesidad socioambiental de reforestación e inicio de la forestación industrial controlada por el Estado.
Acumulación por capital forestal 1975-2012 (Crecimiento y expansión industrial forestal para el mercado global).	Privatización de la industria forestal, desposesión a comunidades mapuches. Concentración de la propiedad de la tierra en manos privadas primero y luego en corporaciones forestales. Afectaciones a los medios de reproducción social mapuches por el agotamiento de agua (ganadería de consumo familiar, cultivos, hortalizas); afectación de las actividades de pequeña comercialización mapuches; y afectación a la recolección de productos del bosque para consumo y venta.	Reconversión del control territorial a las corporaciones forestales. Destrucción del bosque nativo. Disminución de biodiversidad y de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, contaminación de agua, degradación de suelos. Polución atmosférica de papeleras, partículas en suspensión por altos volúmenes de aserrín; desechos y descargas sólidos y líquidos. Penetración del territorio por nuevas vías de comunicación y de proyectos energéticos y extractivistas (intensificación).

Fuente: elaboración propia.

Los mapuche frente a la industria: recuperación de tierras y control territorial

En la década del noventa, el crecimiento forestal y la sustitución de bosque nativo por plantaciones de monocultivos forestales hicieron reaccionar a distintos sectores con diversas formas de acción colectiva. Algunas organizaciones no gubernamentales, como Defensores del bosque chileno, Greenpeace Chile, la Fundación Terram, el Instituto de Ecología Política y Bosque Antiguo, integraron diversas campañas contra la destrucción del bosque nativo, así como acciones de incidencia en políticas públicas que lograron detener las posiciones de mayor desprotección impulsadas por los grandes empresarios. Por otro lado, ha surgido la oposición de habitantes, empresarios locales, organizaciones vecinales y comunidades a varios proyectos

derivados de la industria forestal. Tal es el caso del Comité en Defensa del Mar y las comunidades mapuche lafkenche, en oposición a la construcción de un vertedero de la empresa CELCO en Mehuín, con importante resonancia local y nacional.

Además de su radical repertorio de acciones colectivas, el cuestionamiento profundo y sofisticado de la Coordinadora al modelo económico y al sistema capitalista provocó una importante tensión con los grupos forestales

Sin embargo, frente a la multiplicación de conflictos ambientales en torno de la industria forestal, cabe destacar la movilización mapuche, que tuvo un proceso de ascenso y auge entre 1997 y 2003, en lo que podemos denominar un “movimiento de recuperaciones de tierras”. La diferencia con las otras formas de acción colectiva no sólo está centrada en el protagonismo del pueblo mapuche en ellas, sino en un despliegue organizativo y táctico contra las corporaciones forestales y latifundistas mucho más radical y con una sofisticada interpretación y agenda, que fue elaborada por comunidades mapuches en las regiones séptima, novena y décima de Chile.

Esta fase ascendente del movimiento mapuche de recuperación de tierras ocupadas por empresas forestales y latifundistas estuvo encabezada, sin lugar a dudas⁷, por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)⁸. La acción colectiva contra las forestales y latifundistas desde la CAM puede resumirse a grandes rasgos en tres ejes muy definidos de actuación: 1) recuperación de tierras ancestrales, que consistió en que las comunidades tomaron colectivamente fundos y terrenos considerados como mapuches, pero hoy en propiedad de las forestales y de otros propietarios privados; 2) defensa comunitaria de las tierras recuperadas –que resisten de manera organizada a la acción violenta de los cuerpos policíacos para desalojarlos de dichas tierras–, teniendo como resultado enfrentamientos comunitarios con las fuerzas del orden; y 3) acciones incendiarias y otras formas de destrucción de maquinaria, transportes, insumos e infraestructura de las corporaciones forestales y los propietarios privados.

Aunque cada comunidad mapuche tiene distintas reivindicaciones frente a las forestales, podemos sintetizar distintos niveles de demandas y de antagonismo ante las corporaciones, destacando que las demandas comunitarias no son homogéneas (ver Cuadro 2).

Por su forma de acción colectiva, el movimiento de recuperaciones de tierra alcanzó una visibilidad e influencia de carácter nacional. Además de su radical repertorio de acciones colectivas, el cuestionamiento profundo y sofisticado de la Coordinadora al modelo económico y al sistema capitalista provocó una importante tensión con los grupos forestales.

Los conflictos socioambientales entre comunidades mapuches e industria forestal tuvieron mayor visibilidad en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, en un periodo cuyo ascenso se origina a partir de la quema de camiones en la comuna de Lumaco en 1997 y que se extiende durante toda la década posterior.

El “movimiento mapuche de recuperación de tierras” es mucho más amplio que la Coordinadora Arauco Malleco. Otras organizaciones supra e intercomunitarias, como el Consejo de Todas las Tierras y la Identidad Territorial Lafkenche, además de numerosas comunidades que no participan en procesos de coordinación utilizaron la recuperación de tierras como táctica de lucha. Sin embargo, son las comunidades ligadas al proceso organizativo de la CAM quienes sostuvieron largos, intensos y polarizados conflictos en el tiempo frente a las forestales; y son estos conflictos donde la acción colectiva mapuche combinó la coordinación intercomunitaria, la recuperación de tierras y su defensa, así como las acciones incendiarias contra la industria. Es por ello que estos procesos de conflictividad tuvieron mayor resonancia, visibilidad e importancia. De aproximadamente cincuenta comunidades mapuches en conflicto, la mayoría de ellas, además de la disputa contra latifundistas, se enfrenta a la concentración y explotación de la tierra y los bosques por Forestal Mininco, Volterra y Bosques Arauco. Más de treinta comunidades tuvieron, en su momento, vínculos de articulación en distintas intensidades y duración con la Coordinadora Arauco Malleco. Los conflictos que comenzaron a emerger en el ciclo reciente aparecen con claridad en 1997 –y en algunos casos desde años antes– y se extienden con diversas salidas o soluciones hasta finales de la primera década del siglo XX (entre los años 2008 y 2010), aunque algunos de ellos se mantienen latentes.

Cuadro 2. Conflictividad socioambiental y demandas mapuche

Demandas mapuches frente a las forestales	Observaciones de la conflictividad socioambiental
Denuncia de usurpación de tierras ancestrales. Demanda de restitución de tierras ancestrales o basadas en títulos de merced.	Tensión antagónica por la propiedad y tenencia de la tierra como forma de reproducción étnica o como base de explotación industrial para la acumulación.
Repudio a la explotación de bosque nativo por las corporaciones y a los efectos derivados de la producción forestal industrial.	Tensión antagónica de distribución ecológica ⁹ , donde está en discusión quién debe utilizar el territorio y los bienes naturales así como las consecuencias de su explotación.
Exigencia de control y explotación forestal por las propias comunidades mapuches.	Tensión antagónica de distribución material y de beneficios. El contraste de ricos y pobres, junto con el énfasis de la situación desesperada y precaria de las comunidades mapuches crea un tercer nivel de conflicto y a la vez pone en cuestión la riqueza basada en la explotación del territorio considerado de los pueblos originarios.
Oposición a proyectos de inversión adicionales a la explotación forestal como las de capital turístico y minero. En numerosas ocasiones, los inversores de otros proyectos extractivos son los mismos del capital forestal.	La expropiación del territorio por capitales de diversa índole acelera la asfixia de las comunidades mapuches en su territorio, creando tensiones antagónicas frente a las corporaciones y el Estado en su conjunto.

Fuente: elaboración propia.

El movimiento de recuperación de tierras enfrentado a la industria forestal trató de reconstruir el control territorial a partir de los pueblos y comunidades, un control que está en manos de poderosas corporaciones y de capitales nacionales y transnacionales. Por ello, el conflicto, además de su componente étnico o etnonacionalista (cuya complejidad y extensión no podemos desarrollar aquí), está anclado en una

disputa por el control de los recursos y los bienes naturales, que politiza el campo de las externalidades del proceso de mercado y que disputa a través de la organización y coordinación mapuche el poder de decisión sobre el territorio. La radicalidad de la Coordinadora Arauco Malleco no puede medirse sólo por el número de tierras recuperadas o por las acciones incendiarias realizadas, debido a que su exigencia no se limita a la participación o la consulta dentro del orden establecido, sino por su firme intención de construir un nuevo orden social basado en la reconstitución de su pueblo, anclado en el territorio que hoy en buena medida es propiedad privada.

Si el conflicto mapuche tiene una dimensión socioambiental que se catapultó a la arena política nacional fue debido al proceso de coordinación entre comunidades con una estrategia y discurso radical encabezado (aunque no exclusivamente) por la Coordinadora Arauco Malleco. Las recuperaciones de tierras comenzarían a disminuir tanto en su extensión territorial como en su reiteración a partir de 2003, cuando el Estado chileno generó una importante estrategia de criminalización y persecución contra las organizaciones y comunidades mapuches que habían utilizado las recuperaciones y las quemas como eje de su acción colectiva. Tras una oleada de recuperaciones de menor intensidad y extensión entre 2008 y 2009, vino la decaída debido al encarcelamiento de numerosos integrantes de la coordinadora. Hasta hoy, tanto las recuperaciones como las acciones incendiarias continúan, pero están debilitadas e impulsadas por comunidades autónomas que no pertenecen al proceso de la coordinadora —como el conflicto vigente en la comunidad Wente Winkul Mapu— o impulsadas por posibles desprendimientos de dicha organización. En los últimos años, el surgimiento de nuevas coordinaciones intercomunitarias, como la Alianza Territorial Mapuche, ha reorientado el proceso de lucha frente a las forestales y la defensa del territorio. El “movimiento mapuche de recuperación de tierras” y su dimensión “etnonacionalista” provocaron una enorme proyección nacional e incluso internacional del pueblo mapuche y su acción colectiva. Sin embargo, a la par de esta forma de expresión mapuche se desarrollaron otros procesos de resistencia, que ahora intentaremos explicar panorámicamente.

Los procesos locales de resistencia mapuche

Una vez que hemos revisado la conflictividad con las empresas forestales, podemos afirmar que el movimiento mapuche ha tenido en los últimos quince años dos grandes expresiones: por un lado, el movimiento de recuperación de tierras hacia la reconstitución territorial como pueblo; y por el otro la defensa de la tierra y el territorio por comunidades afectadas por el crecimiento de inversiones mineras, de infraestructura energética, de comunicaciones, así como de la industria salmonera (destacando que estas expresiones socioambientales son sólo una parte de una pléyade de grupos y expresiones mapuche urbanas, estudiantiles, etnopolíticas, etnoproductivas, etnoculturales, etc.). Aunque la resistencia mapuche y la conflictividad socioambiental pueden encontrarse prácticamente en todo el sur de Chile, es claro que existen ciertas tendencias de crecimiento económico basadas en el territorio que han hecho reaccionar a los mapuches e iniciar las acciones de defensa de sus tierras y de los bienes naturales que ahí se encuentran. Así, en la zona de la cordillera, del Alto Bío Bío y otros acuíferos importantes, los conflictos emblemáticos han tenido que ver con los

proyectos de represas hidroeléctricas. Alrededor de las zonas urbanas, los proyectos de infraestructura como aeropuertos y carreteras han obtenido numerosos casos de oposición, así como la protesta por el crecimiento de los vertederos de basura en zona mapuche. Además, en las zonas costeras, el crecimiento de la industria salmoneera y de vertederos de las papeleras ha provocado de igual forma la movilización de comunidades mapuches. La extracción minera y los proyectos turísticos se extienden de manera discontinua por todo el territorio mapuche y más allá.

Esta compulsiva expansión económica basada en el territorio y los bienes naturales tiene su base –como hemos dicho– en el modelo económico primario exportador y en la aceleración de las inversiones nacionales e internacionales que intensifican el ordenamiento y la expropiación territorial de las zonas araucanas (y de otras regiones) como forma de crecimiento. Pero también se origina por diversos factores estructurales.

En el caso del sector energético, el gobierno chileno ha impulsado una agresiva política de suministro basada en recursos renovables como la energía eólica, la geotérmica y, en especial, la hídrica. El impulso por esta última se ha intensificado en el sur del país sobre territorios mapuche, pehuenche y huilliche, primordialmente. Sin embargo, el modelo de producción energética hidroeléctrico ha retomado megaproyectos de centrales y embalses de gran envergadura, que no pueden ser considerados como fuentes de energía renovable por su gran impacto ambiental, denunciado mundialmente. Además del desplazamiento masivo y la inundación de territorios mapuches, las grandes centrales hidroeléctricas han sido cuestionadas por la desertificación de tierras, la afectación grave a los ecosistemas y el control del agua orientado a fines productivos nacionales en desmedro de las comunidades locales afectadas.

En la década de los noventa, la oposición a los proyectos de Pangué y Ralco por comunidades mapuches –en especial a esta última– tuvo un fuerte impacto y solidaridad nacional e internacional que hicieron saltar los procesos de resistencia local al convertirse en verdaderos conflictos de carácter nacional. En el caso de la central Ralco, la emblemática resistencia pehuenche de apenas unas cuantas familias, lideradas por mujeres mapuches, que se vieron enfrentadas a la poderosa corporación ENDESA, recibió la atención mediática y el acompañamiento de numerosos sectores ambientalistas y organismos civiles. La aceptación del proyecto por las últimas familias en resistencia, después de un largo conflicto de diez años, y finalmente la construcción de la represa inaugurada en 2004, coincide con el inicio del reflujó del movimiento de recuperación de tierras. La represión y criminalización a distintas organizaciones mapuches (en especial a la Coordinadora Arauco Malleco) es simultánea al cierre del ciclo de resistencia pehuenche en Ralco.

Más recientemente, desde 2006, los proyectos hidroeléctricos promovidos por SN Power –de origen noruego– a través de su filial Trayenko SA, en Panguipulli, generaron la movilización de una docena de comunidades mapuches en coordinación con poblaciones y habitantes no mapuches que se opusieron a un complejo de tres proyectos hidroeléctricos en el valle de Liquiñe. La férrea oposición logró que la empresa retirara los proyectos en 2011, lo que se consideró un triunfo para el movimiento mapuche.

A pesar de este emblemático caso, donde una transnacional tuvo que retirarse, numerosos conflictos han surgido por nuevas iniciativas y proyectos hidroeléctricos. En el alto Bío Bío, de nueva cuenta se proyecta una central en el sector Cauñi-

cú, ante lo cual los mapuches, habitantes del Valle del Queuco y de la comunidad de Cauñicú, han comenzado su oposición al proyecto (financiado por la transnacional ENDESA en 2011). Por otro lado, la central Neltume, también en Panguipulli, para la cual se iniciaron trabajos de construcción del túnel de prospección, provocó la oposición y movilización de comunidades de esa zona, que calificaron a la empresa como extranjera invasora. La historia se repite en los proyectos de las hidroeléctricas en Colbún y en otro proyecto más en la localidad de Curarrehue.

Como puede observarse, las resistencias a los proyectos hidroeléctricos se han multiplicado en la misma medida en que las inversiones intentan instalarse en todo el territorio ancestral mapuche. La experiencia traumática de la realización de las represas de Pangué y Ralco es un fuerte ejemplo de las consecuencias de dichos proyectos sobre la población y comunidades mapuches.

Es de resaltar la resistencia a la hidroeléctrica en el río Pilmaiquén por diversos *Lof* que realizaron recuperaciones de tierras para impedir la realización del proyecto, junto a la elaboración de un discurso que reivindica de nueva cuenta el control territorial, la autonomía y la liberación mapuche. Ellas, las comunidades mapuche huilliche, llevan más de un año de ocupación (desde 2011) para defender los sitios sagrados que serían destruidos por el proyecto hidroeléctrico de Osorno.

Por otro lado, la minería metálica ha comenzado también a invadir los territorios mapuches. Chile es ejemplo de reforma neoliberal desde la aplicación de la Ley Minera de 1983 para inversiones en la industria de minería metálica, ya no sólo por el cobre, también por el oro y otros metales buscados de manera intensiva por toda la Araucanía. La extracción minera por parte del capital trasnacional o nacional, como se sabe, es la actividad extractivista por definición, ya que se realiza con pocos encadenamientos productivos locales, es depredadora y devastadora ambientalmente y provoca un alto impacto social. Chile, por su ubicación, cercana a los mercados asiáticos, es sumamente atractivo para las inversiones.

Desde 2004, diversas concesiones se otorgaron a empresas dentro del área de desarrollo indígena de Lleu Lleu, que afectan importantes segmentos de las riberas del lago del mismo nombre. La empresa Minera Santa Bárbara solicitó los permisos para la explotación en la Cordillera de Nahuelbuta, octava región, en el sector oriente del Lago Lleu Lleu, zona de intensa organización mapuche.

En Rucañanco, la explotación de escandio provocó las protestas mapuches, especialmente de la comunidad Juana Millahual –una de las diez comunidades que serían afectadas por el proyecto– que a su vez lucha contra las forestales. Las acciones mapuches obligaron al proyecto Manto Rojo a suspenderse en 2007. A pesar de que los inversionistas decidieron no arriesgarse, algunos empresarios exploran otros proyectos extractivos en la zona. Los mantos de hierro en los alrededores del gigantesco lago hacen aún más intensa la búsqueda y explotación de minerales, donde viven en distintas comunidades mapuches más de 2.500 personas. Durante 2011, una nueva compra de tierras de 240 hectáreas para la explotación de estroncio en el sector de Ponotro Tirúa hizo que setenta mujeres mapuches iniciaran una demanda legal colectiva contra el proyecto.

En 2012, comunidades mapuches y comuneros impulsaron diversas movilizaciones contra un proyecto minero en Carahue. La empresa Cooper Capital Minera La Montaña tuvo que desistir del proyecto en el sector río Colico, en la comuna de

Carahue. Los mapuches, junto con organizaciones ciudadanas (como la *Red de acción por los derechos ambientales*) y el apoyo de la municipalidad local, detuvieron un segundo intento de la empresa por empujar el proyecto extractivo que pretendía una explotación de oro de 5 mil toneladas mensuales.

Como podemos observar, existen numerosos procesos de resistencia mapuche anclados en la defensa de la tierra y el territorio considerado ancestral, ante los proyectos hidroeléctricos y de extracción minera. Si bien estos procesos son sumamente agresivos y evidentemente expoliadores –lo que explica la oposición mapuche a desalojos forzados y contaminación en cada caso– también es indispensable señalar que la reproducción étnica está en juego en dichos conflictos.

La dimensión ambiental, al igual que en el caso de las industrias forestales, representa por supuesto una disputa material por la tierra y el territorio como base agraria para las economías de subsistencia; pero también como lugares sagrados, como entorno etnoambiental de reproducción como pueblo y como reivindicación etnonacional en disputa con el Estado nación chileno.

La constelación de comunidades en resistencia genera coordinaciones microregionales para enfrentar los proyectos, y dependiendo de cada circunstancia y proceso local, la acción colectiva oscila entre la resistencia comunitaria con recuperaciones de tierras y cierre de carreteras hasta la defensa jurídica institucional, pasando por las reivindicaciones territoriales en el marco de los derechos humanos universales y los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos originarios.

Es importante destacar el gran número de alianzas, acompañamientos y coordinaciones también con sectores ambientalistas y de habitantes locales no mapuches que, en muchos casos, surgen en la defensa de lo que podemos nombrar como un movimiento mapuche de afectados ambientales, y que no tiene centro ni articulación, sino que se expresa como una multiplicidad de resistencias, estrategias y subjetivaciones políticas.

Aunque los principales procesos de expansión económica en el territorio mapuche son, como hemos visto, la industria forestal, la minera y los proyectos hidroeléctricos, es indispensable mencionar que los otros grandes ejes de afectación son los proyectos de infraestructura que han generado prolongados procesos de resistencia comunitaria. Tal es el caso de la oposición mapuche a la construcción del aeropuerto en la localidad de Quepe, en la comuna Freire, desde 2005 hasta la actualidad. De igual forma, la expansión urbana en la novena región ha generado un proceso que autores como Alfredo Seguel denominan “racismo ambiental” debido a la instalación de vertederos de basura en territorio mapuche donde se depositan los desechos urbanos. Los vertederos afectarían según organizaciones ambientalistas a unas cien comunidades mapuches.

Esta panorámica de procesos permite ver el compulsivo extractivismo y la explotación territorial que vive Chile en su conjunto –y en buena medida América Latina– como eje económico de crecimiento. Este recorrido, que de ninguna manera es exhaustivo, deja ver con sorpresa la magnitud, extensión y gravedad de los conflictos socioambientales y permite ubicar, por otro lado, la diversa oposición mapuche en disputa por el territorio con las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que son alentadas y protegidas por el Estado chileno. Sin embargo, esa disputa por tierra, territorio y bienes naturales se realiza desde muy distintas racionalidades.

Pueblo mapuche y poder económico: racionalidades antagónicas

En sintonía del movimiento de pueblos originarios del continente, el movimiento mapuche ha pasado en los últimos veinte años de centrarse en las demandas de reconocimiento, inclusión y reclamos de los derechos indígenas, a la defensa de la territorialidad como base de existencia de su pueblo. El movimiento mapuche de resistencia, con las dos grandes expresiones que hemos tratado de identificar, tiene su mayor fortaleza no sólo en la cantidad y radicalidad de acciones colectivas extendidas por todo el territorio araucano sino esencialmente en una creciente radicalización de su crítica al modelo productivo y de crecimiento, anclado en la explotación ambiental.

Los procesos de desposesión, presión extractiva, grandes obras, los impactos negativos sobre el tejido de reproducción étnico y sobre la *ñuke mapu* (la madre tierra) han obligado a las comunidades mapuches a generar rápidos procesos de autodefensa y autoorganización, que de manera insoslayable van acompañados de la deliberación y el análisis de su propia situación. Esto los lleva por un camino reflexivo para comprender su conflicto particular que, comparado con las decenas de casos similares en su territorio con otras comunidades de sus pares, rápidamente los lleva a estructurar un pensamiento complejo, antisistémico, que fortalece su propia identidad ante la invasión "huinca", es decir, la invasión mercantil y expoliadora. La preocupante situación de su pueblo en su dimensión ambiental se mezcla también con largos ciclos de lucha, donde la última fase se vivió desde finales de la dictadura, para tomar un auge en 1997 y multiplicarse por todo el territorio desde hace unos años. El pensamiento mapuche se ha venido complejizando y su dimensión socioterritorial, en abierto antagonismo frente al Estado, las industrias y corporaciones, construye un pensamiento cuyas características son dignas de resaltarse.

Surge la paradoja de que en tanto más se acelera e intensifican los procesos de desposesión y explotación territorial, más urgente se vuelve la necesidad de reconstitución ética; se vuelve una necesidad organizarse y resistir los procesos y efectos centrífugos del sistema-mundo capitalista. La autodefensa los obliga a reconstituirse como sujeto o ser desarticulados como pueblo y cultura. Aunque evidentemente está en disputa el territorio físico, el mayor conflicto es por la territorialidad social, es decir, aquellas construcciones socioétnicas que les han permitido sobrevivir en colectivo, material y simbólicamente. Así, continúa una serie de adaptaciones étnicas al proceso de agresión económico-territorial-socioespacial para poder enfrentar su condición y situación actual. Los mapuches, como otros pueblos originarios, constituyen progresivamente varios elementos de subjetivación política que les permiten no reconocer o aceptar el poder hegemónico de la reproducción económica, y menos sus reglas expoliadoras de los bienes comunes. Estos contradiscursos, anclados en identidades culturales ancestrales, pero también en procesos ideológicos contemporáneos y constructos cognitivos del pensamiento "occidental", permiten constituir un pensamiento híbrido sumamente complejo: la disputa por el control de la tierra y sus bienes se identifica con los procesos de colonialismo interno, con un fuerte e histórico antagonismo sobre los derechos, jurisdicción, posesión y explotación territorial. Los conceptos de Pueblo y Nación les permiten reconstituirse frente al Estado chileno reivindicando la legitimidad de su diferencia pero en especial sus derechos sobre los bienes naturales en disputa.

El intenso vínculo sociocultural de los mapuches con el territorio hace de su defensa un proceso dual: al defender a la *ñuke mapu* se defienden como pueblo, y viceversa. No sólo se trata de un ecologismo de sobrevivencia, de una autodefensa de los pobres cuidando recursos escasos; es mucho más que eso, ya que en los territorios y bienes del hábitat defendido se encuentran los espíritus, la fuerza, el *newen*¹⁰, la memoria, los antepasados, las identidades y las formas de reproducción social que como pueblo poseen y los hacen ser la “gente de la tierra”, los hacen ser mapuche.

...el mayor conflicto es por la territorialidad social, es decir, aquellas construcciones socioétnicas que les han permitido sobrevivir en colectivo, material y simbólicamente

Por ello, la invasión de la lógica mercantil en sus territorios no sólo es desposeedora, expoliadora, sino también una invasión desestructurante de su tejido socioétnico, una invasión (y de ahí su referencialidad al colonialismo interno) que los despoja de las decisiones sobre sus formas de vida. La desposesión material y física del territorio y sus bienes los convierte aún más en sujetos subalternos, en dominados por la lógica de poderosos conglomerados políticos y económicos. De ahí que la construcción, o mejor, reconstitución de un poder mapuche propio se vuelve urgente para defender el territorio y a la vez sostener procesos de libertad y autonomía ante la lógica, invasiva y mercantil, que choca con la forma de reproducción mapuche no anclada en la máxima acumulación.

Estos, entre otros elementos, hacen más compleja la dimensión ambiental del movimiento mapuche, indisociable de la construcción y reconstrucción de estructuras étnicas propias para el autogobierno. La autonomía, la reconstrucción del Pueblo nación mapuche, es la forma de proteger su territorio y a ellos mismos a la vez.

Los conflictos socioambientales, como en muchas otras partes del continente, no siempre son visibles a escala nacional. Son incomprensidos y menospreciados por ello. Sin embargo, si la escala de observación se enfoca en las localidades y espacialidades en disputa podemos observar claramente fuertes antagonismos sociales, pero a la vez, racionalidades alternativas como la mapuche, que sin lugar a dudas constituyen una riqueza enorme. Se hace evidente también la gravedad de los impactos ambientales de la reproducción y el crecimiento económico voraz. Ese antagonismo del mercado contra los pueblos y los ecosistemas es una contradicción que está lejos de resolverse. Es una batalla por la tierra, sus bienes, y también por la dignidad y por la vida que sobre ella se construyen.

Bibliografía

- Aranda, Darío 2009 “La invasión forestal que amenaza Puelmapu” en *Azkintuwe* <www.azkintuwe.org>.
- Gómez Leyton, Juan Carlos 2010 *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal. Chile: 1990-2010* (Santiago de Chile: ARCIS/CLACSO).

- Harvey, David 2001 *Espacios del capital: hacia una geografía crítica* (Madrid: Akal).
- Harvey, David 2003 *El nuevo Imperialismo* (Madrid: Akal).
- Montalba, René y Carrasco, Noelia 2005 “¿Desarrollo sostenible o eco-etnicidio? El Proceso de expansión forestal en territorio mapuche-nalche en Chile” en *AGER. Estudios sobre despoblación y desarrollo rural* (Universidad de Zaragoza) N° 4.
- Pairicán, Fernando y Álvarez, Rolando 2011 “La nueva Guerra de Arauco. La Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)” en Rebón, Julián y Modonesi, Massimo (comps.) *Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO/Prometeo).
- Veraza, Jorge 2007 *Leer El capital hoy. Pasajes selectos y problemas decisivos* (México: Ítaca).
- Villarino, Gonzalo 2006 “Evaluación del gobierno de Lagos: la dimensión ambiental” en Salazar Vergara, Gabriel (comp.) *Gobierno de Lagos: balance crítico* (Santiago: LOM).
- Zibechi, Raúl 2008 *Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento* (México: Bajo Tierra).

Notas

1 Desde nuestro balance, el movimiento mapuche tendría al menos cuatro procesos de expresión: a) un importante proceso de asociativismo local etnocultural; b) numerosos grupos estudiantiles mapuche representados en casas y organizaciones de estudiantes mapuche; c) coordinaciones etnopolíticas inter y supracomunitarias en busca de política de reconocimiento multicultural y plurinacional; d) comunidades en resistencia al despojo y en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales; y e) comunidades en conflicto por territorios ancestrales. El presente artículo se centra en estas dos últimas.

2 Ramachandra Guha denomina a los conflictos que disputan costos y efectos como de distribución ecológica.

3 Mapuche, en mapundungun (mapuzungun), lengua originaria de ese pueblo, significa literalmente “gente de la tierra”.

4 Cf. la estadística oficial de 2010 de la Dirección de Producción Forestal de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Ver: <www.minagri.gov.ar>.

5 Datos de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) disponibles en <www.corma.cl>.

6 El Puelmapu geográficamente corresponde al espacio ubicado al oriente de la cordillera de los Andes

hasta el océano Atlántico. El Gulumapu corresponde a la parte oeste del territorio mapuche, ubicado desde el océano Pacífico hasta la cordillera. Ambos son el territorio ancestral mapuche, el *Wallmapu*.

7 Compartimos la tesis del protagonismo central de la CAM en el movimiento contemporáneo mapuche defendida en Pairicán y Álvarez (2011: 45-68).

8 La Coordinadora Arauco Malleco no es la única organización mapuche que integró el movimiento de recuperaciones de tierras. El Consejo de Todas las Tierras y la Identidad Territorial Lafkenche en su momento utilizaron también la táctica de la recuperación, así como comunidades autónomas de cualquier organización intercomunitaria. Sin embargo, por la forma, profundidad y extensión de la acción colectiva y sus fines, podemos sostener que es la CAM quien representa con mayor nitidez una estrategia de control territorial basada en las recuperaciones. Por otro lado, han surgido comunidades autónomas que replican la forma de acción colectiva de la coordinadora, sin el impacto que esta tuvo.

9 El concepto de conflicto por distribución ecológica es desarrollado por Enrique Léf, además de por Ramachandra Guha.

10 En mapundungun, newen significa fuerza o energía.

Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple

MINA LORENA NAVARRO

Socióloga mexicana, maestra en Sociología Política por el Instituto Mora, y profesora de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Resumen

En este artículo, los movimientos socioambientales de los últimos años en México son estudiados por Mina Lorena Navarro a partir de una noción de lo común, que permite colocar en el centro del análisis la relación antagónica entre las diversas estrategias de despojo implementadas por el capitalismo y la defensa emprendida por quienes se ven afectados. Lo común, de acuerdo con la autora, es una dimensión que se materializa cotidianamente a través de las prácticas sociales colectivas, que no están sometidas a la lógica mercantil. El despojo capitalista, por su parte, se refiere al proceso de expropiación de las diversas formas en las que se manifiesta lo común, cuya política más visible es el extractivismo. En este sentido, las luchas socioambientales son la expresión más tangible de la relación antagónica entre el capital depredador y la defensa de los bienes comunes, protagonizada por hombres y mujeres que no están dispuestos a vender lo que para ellos no tiene precio.

Abstract

In this paper, Mina Lorena Navarro examines socio-environmental movements over the past years in Mexico. The starting point is the idea of what is common, which helps focus on the conflicting relationship between a variety of capitalist-driven dispossession strategies and the response by affected groups. What is common, according to the author, is a dimension which materialises on a daily basis through collective social practices, not bound by the mercantile logic. Dispossession, as promoted by capitalist approaches, entails the process of stripping of possessions of the different ways in which what is common is manifested, its most visible policy being extractivism. In this regard, socio-environmental struggles are the most palpable mark of the antagonistic relationship between destructive capital and the defence of common goods, led by men and women who are not ready to sell something which, in their view, has no price.

Palabras clave

Antagonismo, conflictividad socioambiental, bienes comunes, extractivismo.

Key words

Antagonism, socio-environmental conflict, common goods, extractivism.

Cómo citar este artículo

Navarro, Mina Lorena 2012 "Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

En recientes fechas es notable el ascenso de la conflictividad socioambiental en toda América Latina por diversos proyectos ligados a una renovada estrategia de despojo múltiple y expropiación de lo común. Es de nuestro interés presentar algunas claves de comprensión del antagonismo entre las variadas formas del capital y de lo común, a la luz de la emergencia de las luchas socioambientales en México¹. Para cumplir este cometido exponemos una serie de argumentos organizados a partir de los siguientes ejes: a) nociones en torno a lo común y sus diversas formas de existencia; b) el despojo múltiple y la caracterización de las formas variadas que adquiere el capital para la expropiación de lo común; c) las luchas socioambientales como expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple; e) la irradiación de las luchas socioambientales para hacer lo común.

Nociones sobre lo común

Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos del antagonismo entre el capital y lo común, resulta necesario partir de lo que entendemos por *lo común* y los *bienes comunes*. Desde nuestra perspectiva, lo común se manifiesta en el amplio y denso espectro de la vida y se materializa a través de una serie de prácticas sociales colectivas que producen y comparten lo que se tiene y/o se crea a partir de la cooperación humana, bajo regulaciones no derivadas y sometidas a la lógica mercantil y estatal. Esto significa que, si bien las diversas formas concretas de lo común tienen raíces ancestrales que se remontan desde toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, la mirada que proponemos en este trabajo destaca que la negación de esos modos de existencia colectiva por el capital es resistida por el despliegue de un proceso de defensa que tiende a derivar en su actualización, potenciación e irradiación.

En este sentido, pensamos que *lo común* es una categoría crítica en la que se sitúa la lucha contra el capital en el centro del análisis, lo que implica que lo común exista como negación del capital; en tanto su materialidad compartida es expresión de la inestabilidad y fragilidad de las relaciones capitalistas incapaces de mercantilizarlo todo. Esta categoría crítica ilumina el antagonismo entre lo común y las formas variadas del despojo capitalista.

Bajo esta mirada, consideramos que la defensa de lo común ante el despojo capitalista habilita un horizonte utópico y un nuevo paradigma de lo político

para gestionar la vida más allá del ámbito público, ligado a lo estatal, y del privado, en relación al mercado. Se trata de una política que actualiza, reinventa, prefigura e irradia un *hacer común* capaz de negar, subvertir y desbordar al capital y sus diferentes mediaciones orientadas a la valorización del valor.

Ahora bien, como parte del debate más general, entre las múltiples y diversas formas de existencia de lo común se encuentra la riqueza común del mundo material (Hardt y Negri, 2011: 10), específicamente de los bienes comunes ecológicos o naturales como el agua, la tierra y los bosques existentes en el ámbito local (Dyer-Witherford, 2007), también conocidos a nivel mundial como *global commons*, en los que se incluye la atmósfera o los océanos (Madrilonia, 2011: 57). Además están los bienes comunes sociales como la provisión pública de bienestar, la salud, la educación; o lo común en red, como el acceso a los medios de comunicación, el espacio electromagnético y la red de internet (Dyer-Witherford, 2007). Incluso, lo común existe en los saberes, lenguajes, códigos, información, afectos, como parte del resultado de la producción social necesaria para la interacción y la producción ulterior (Hardt y Negri, 2011: 10). En síntesis, lo común está asociado a lo que Dyer-Witherford reconoce como las esferas de lo ecológico, lo social y la red; pero también –agregaríamos– a la construcción de una nueva forma de lo político surgida del conflicto para generar y regenerar lo común (Simone y Giardini, 2012).

Para los fines de este trabajo, nos interesa detenernos con especial énfasis en el antagonismo entre las formas políticas y económicas del despojo múltiple y las luchas socioambientales en defensa de los bienes comunes naturales o ecológicos en México, en el marco del aumento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio nacional por la continuidad y profundización de las políticas extractivistas de las últimas dos administraciones panistas a cargo de Vicente Fox y Felipe Calderón, en colaboración con las otras dos fuerzas partidistas más importantes –el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– en el periodo 2000-2012.

Despojo múltiple y expropiación de lo común

Cuando hablamos de despojo múltiple nos referimos a las formas variadas que adopta el capital en un *mismo proceso*² para expropiar las diversas formas que adquiere lo común. Lo que a continuación se presenta recupera lo que diversos autores, incluido el propio Marx, han desarrollado en torno a las formas, niveles o estrategias de la acumulación del capital: a) *la acumulación originaria* entendida como la separación forzada y violenta de las personas de sus medios de subsistencia, dando pie al proceso de subordinación del trabajo concreto al trabajo abstracto, es decir, la valorización del valor a través de la subsunción del trabajo vivo al capital³; b) *la acumulación capitalista* como proceso expansivo e intensivo de expropiación del excedente convertido en plus valor. Se trata de la reiteración de la acumulación originaria y la consustancial separación de las personas de su capacidad de hacer bajo las reglas naturalizadas del mercado⁴; c) *el despojo de lo político* –entendido *lo político* como la capacidad de autodeterminación social– suplantado por el principio de representación bajo la forma

Estado. Las dos primeras expresiones –a y b– están relacionadas con las formas económicas de la acumulación del capital, mientras que esta última tiene que ver con las formas políticas.

Y es que aunque la economía de mercado dependa de la naturaleza y del hacer común, opera a través de su negación, desnaturalización, invisibilización, silenciamiento y prescindibilidad

La acumulación del capital y el proceso de separación de los productores y sus medios de subsistencia, implica que lo común sea expropiado y transformado en mercancía. La mercancía fetichiza lo común y los valores de uso anclados a él. A esa realidad contradictoria, subyace de manera inmanente el conflicto entre el valor de cambio y el valor de uso, o lo que se conoce como la “naturaleza dual del trabajo”, es decir, entre el trabajo abstracto y el trabajo útil o hacer concreto.

El trabajo útil en el capitalismo adquiere la forma de trabajo abstracto, en tanto se vuelven abstractas las cualidades específicas de lo producido y la actividad misma que lo produce. El trabajo no está orientado ya a producir valores de uso, sino valores de cambio para el intercambio de mercancías. El trabajador se relaciona con lo producido de forma ajena e indiferente. “El trabajo abstracto significa un impulso hacia la determinación de nuestra actividad por el dinero, mientras que el trabajo útil conlleva un impulso hacia la autodeterminación social” (Holloway, 2011: 225). Como comenta un joven comunero de Cherán⁵: “En el capitalismo la gente no trabaja para sobrevivir, sino para ganar dinero”.

De la mano del cercamiento de lo común y la expropiación de las capacidades de sustento a través de la abstracción del trabajo útil, viene la imposición de la economía formal como una nueva forma de socialización en la que las personas comienzan a relacionarse entre sí a través del mercado, es decir, mediante el intercambio de mercancías (Holloway, 2011: 141). De ahí que la economía de mercado se implante y expanda mediante la separación de las personas de la naturaleza, destruyendo sus capacidades para autogenerarse las condiciones materiales necesarias para la reproducción, y produciéndoles heteronomía con respecto a su hacer. Y es que aunque la economía de mercado dependa de la naturaleza y del hacer común, opera a través de su negación, desnaturalización, invisibilización, silenciamiento y prescindibilidad.

Además de la alienación del hacer concreto, de forma aparejada se produce el despojo del territorio y de los bienes comunes naturales. Desde la gramática del despojo, la naturaleza se mira como “tierra vacía” o “territorio baldío” –esta expresión fue planteada por Alan García, ex mandatario de Perú y responsable de la masacre de Bagua–, con la cual no sólo se niega la existencia de los derechos previos de los habitantes originales, sino también se despoja a la naturaleza de su derecho de autoconservación, regeneración y sostenibilidad (Shiva, 2006: 32).

Históricamente, el conjunto de políticas de cercamiento de lo común ha estado asociado a la transformación de la naturaleza en objeto de dominio de

las ciencias y en materia prima del proceso productivo. De aquí la concepción instrumental de “recursos naturales” incorporada al lenguaje mercantil estatal que disuelve a la naturaleza en una mercancía, como mera aglomeración de recursos útiles o materias primas susceptibles a ser clasificadas en valorables y no valorables (Altvater, 2009: 2-4; Marín, 2009: 185).

A contracorriente de la concepción instrumental de la naturaleza, siguiendo a Enrique Leff podemos hablar de una racionalidad ambiental, entendida no como “la *ecologización* del pensamiento ni un conjunto de normas e instrumentos para el control de la naturaleza y la sociedad, para una eficaz administración del ambiente”, sino como “una teoría que orienta una *praxis* a partir de la subversión de los principios que han ordenado y legitimado la racionalidad teórica e instrumental de la modernidad” (Leff, 2009: 339). Ciertamente, la visión de los bienes comunes naturales proviene de las racionalidades que niegan y subvierten al capital y la forma mercancía en el proceso metabólico de reapropiación social de la naturaleza. Se trata de variadas formas de mirar el mundo que conciben a la naturaleza como la base común de la vida humana y no humana, una totalidad sumamente compleja de relaciones hombre-mujer/naturaleza que no puede ser convertida en mercancía, como lo determina la lógica instrumental o de exterioridad con la que opera el capitalismo.

Hasta aquí podemos afirmar que las formas económicas del despojo se manifiestan mediante la abstracción del hacer útil y la expropiación territorial para la generación de plusvalía, como condiciones necesarias para la acumulación intensiva y extensiva del capital.

Ahora bien, la enajenación que el proceso de abstracción produce en la capacidad de producir valores de uso para la satisfacción de necesidades, comprende la pérdida de la capacidad política para la autodeterminación social. La enajenación de lo producido va de la mano con la expropiación de la capacidad de decisión y conducción de la cosa pública. La capacidad soberana que cada individuo detenta es cedida, total o parcialmente, para construir un poder político que lo deglute, una soberanía abstracta. De aquí provienen los inicios de la forma liberal de la política basada en la enajenación de la soberanía social en manos del representante-mandante. Lo político queda, entonces, reducido a una competencia por el mandar y gobernar, y no como la capacidad de gestionar el asunto común (Gutiérrez, 2009: 11-13).

Dicho lo anterior, consideramos que en América Latina las políticas más recientes del extractivismo están constituidas por las continuidades estructurales del proyecto histórico de colonialidad, despojo y dependencia estructural en la región desde la Conquista española y portuguesa, pero también por las novedades y actualizaciones de la estrategia de despojo múltiple del capital. Se trata de un inseparable movimiento de despojo y violencia que forzosamente vive de disminuir y arrebatar la riqueza común de otros, dejándolos en una condición de desposesión y miseria. La apropiación privada de lo común, como parte del antagonismo entre trabajo abstracto y hacer útil, enfrenta resistencias y desemboca en conflictos, ante lo cual empresas y gobiernos han desplegado un profuso repertorio de estrategias de dominación⁶.

Estas políticas de despojo, y específicamente las del llamado (*neo*) *extractivismo*⁷ son promovidas en el subcontinente como producto de una orientación

de la economía capitalista para la superación de la crisis de los setenta por la caída tendencial de la tasa de ganancia y el régimen de acumulación fordista keynesiano. Si bien este desarrollo conceptual elaborado por Eduardo Gudynas ha servido principalmente para pensar los rasgos distintivos que este modelo adopta en los países de América Latina con “gobiernos progresistas”, consideramos que es pertinente recuperarlo para pensar otros modelos sociopolíticos latinoamericanos⁸, como es el caso de los gobiernos neoliberales y, específicamente, el de México⁹.

En términos generales, podemos decir que la articulación de las novedades de las políticas extractivistas reside principalmente en la confluencia de cuatro características que han cobrado clara relevancia en las últimas décadas: 1) la vertiginosa aproximación hacia el umbral de agotamiento planetario de bienes naturales no renovables fundamentales para la acumulación de capital y la reproducción de las sociedades modernas –tales como el petróleo, el gas, y los minerales tradicionales–; 2) el salto cualitativo en el desarrollo de las técnicas de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas para el medio ambiente–, que está permitiendo el descubrimiento y extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales raros, disputados mundialmente por su formidable valor estratégico en los planos económico y geopolítico de largo plazo; 3) la progresiva transformación de los bienes naturales renovables básicos para la reproducción de la vida –tales como el agua dulce, la fertilidad del suelo, los bosques y selvas, etc.– en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos, dado que se han constituido en los nuevos objetos privilegiados del (neo) extractivismo o en sus insumos fundamentales; y, por último, 4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en *commodities*, esto es, un tipo de activos financieros que conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de lucro que movilizan “mercados futuros”, en tanto responsables directos del aumento ficticio de los precios de los alimentos y de las materias primas registrado en el mercado internacional”.

Las luchas socioambientales como expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple

Las novedades de las políticas extractivistas son parte de un proceso de actualización de las formas del capital para la valorización del valor, lo que necesariamente produce resistencias y deriva en conflictos. Desde esta perspectiva, consideramos que las experiencias sociales contra las diferentes formas del despojo capitalista –incluidos los primeros cercamientos de tierras comunales en Europa o los regímenes comunales de las civilizaciones indígenas del continente americano–, son parte de un mismo proceso de resistencia de larga duración, al que –entre muchísimos otros– se suma la familia más reciente de luchas socioambientales o del ecologismo popular. En este sentido, consideramos que los sujetos que históricamente han luchado contra las formas variadas del despojo son parte de un proceso de resistencia que tiene diversas expresiones. Las luchas socioambientales, justamente, aparecen como uno de los rostros de ese antagonismo que enfrenta al capital.

En el caso de México, este reciente ciclo de luchas socioambientales ha estado encabezado, principalmente, por los pueblos indios y comunidades campesinas, aunque también han emergido procesos de resistencia de vecinos, habitantes o afectados ambientales de las ciudades u otras espacialidades urbanas, acompañados de activistas, redes y organizaciones sociales.

El ascenso de la conflictividad socioambiental se expresa en la lucha de comunidades campesinas e indígenas por la cancelación de presas hidroeléctricas, que no sólo les forzarán a emigrar, sino que, además, amenazan con destruir sus bosques y tierras de cultivo. También en la resistencia de muchas otras frente a las miles de concesiones que el gobierno mexicano ha otorgado para el emprendimiento de proyectos de minería a cielo abierto, o ante la autorización de los campos de siembra “experimental” de maíz transgénico y la reciente aprobación del primer cultivo de transgénicos, específicamente de soya. Hay otro conjunto de resistencias que pelean contra proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, vinculados a la maximización de los beneficios con la consecuente reducción de costos y tiempos para la circulación de materias primas extraídas o producidas. Por otro lado, los megaproyectos turísticos están generando enormes presiones sobre comunidades de campesinos y pescadores que defienden sus tierras y la biodiversidad terrestre y acuática. En las ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, existen decenas de movimientos en los barrios y pueblos que luchan para impedir el proceso de urbanización y desarrollo de infraestructura para la movilidad urbana sobre tierras de cultivo y de conservación. Muchas otras comunidades, colonias o barrios, ya sufren algún tipo de afectación ambiental relacionada con su contigüidad a rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto, confinamientos de residuos tóxicos, descargas industriales y residuales a ríos y otros cuerpos de agua, o las catástrofes derivadas de la explosión de ductos de petróleo en el centro del país, o las comunidades aledañas a los campos de exploración, perforación y extracción en el sureste mexicano¹⁰.

Frente a la multiplicación de resistencias socioambientales en todo el territorio nacional, ahondaremos en la emergencia de este protagonismo social, específicamente en los entramados comunitarios indígenas y campesinos con los que primordialmente hemos tenido contacto. Particularmente, nos interesa rastrear y profundizar en los impulsos de autodeterminación política que nacen de la resistencia a conflictos socioambientales, escudriñando formas de autorregulación social basadas en la solidaridad y la sostenibilidad para hacer común la vida¹¹.

Las luchas socioambientales, a diferencia de los movimientos ecologistas de 1960 y 1970 en Europa y Estados Unidos, se conciben como parte de un movimiento de justicia ambiental o de ecologismo popular –término desarrollado por Joan Martínez Allier y Ramachandra Guha–, que nace de conflictos suscitados por transformaciones ambientales que ponen en riesgo formas de relación con la naturaleza para la sobrevivencia humana. De aquí la recuperación de lo socioambiental y la relación humanidad/naturaleza como eje constitutivo y particular de la subjetividad de estas luchas.

Un elemento fundamental en la composición de estas luchas y en el perfil de los conflictos socioambientales es su carácter territorial¹². Los proyectos del

capital que buscan imponerse bajo la temporalidad abstracta de la valorización del valor, entran en tensión con las espacialidades y temporalidades locales (Porto Gonçalves, 2008: 238; Svampa, 2008a: 102). Se trata de una lucha por funcionalizar y enajenar el espacio, por transformarlo en un espacio abstracto, eliminando sus valores de uso y relativizando las significaciones que las comunidades tienen con él.

Dichas territorialidades locales están constituidas por un denso tejido de relaciones sociales y *entramados comunitarios* en torno a la reproducción de lo común que, aun con largas historias de división, tienden a cohesionarse frente a la tensión que produce la temporalidad externa del capital. La dimensión espacio-temporal de vecindad y contigüidad se actualiza como una red de poder social que de modos múltiples existe en la vida cotidiana. Se trata de redes territoriales o asociaciones variadas de lo social, que en forma de relaciones de parentesco, etarias, estudiantiles, laborales o de afinidad, comienzan a funcionar como un soporte básico y primario para la lucha.

Ante la posible afectación ambiental en la forma de megaproyectos con su correlato de contaminación y despojo, el *No* –como una figura central de la oposición– irrumpe ante la imposición, al tiempo que produce un acuerdo que va cohesionando ciertos *entramados comunitarios*, entendidos como “sujetos colectivos de muy diversos formatos y clases con vínculos centrados en lo común y espacios de reproducción de la vida humana no directa ni inmediatamente ceñido a la valorización del capital” (Gutiérrez, 2011: 13-14).

En la conformación de estos sujetos colectivos, el carácter de *autoconvocados* resulta ser una clave esencial para la comprensión de su emergencia, como llamado autónomo e intuitivo a la creación de un espacio colectivo ante la indignación que producen los procedimientos antidemocráticos, las irregularidades, la falta de información, la opacidad e ilegalidades, presentados en la mayoría de los casos por los gobiernos que buscan apresurar decisiones fundamentales para la implementación de los proyectos de desposesión (Navarro y Pineda, 2009: 94). La autoconvocatoria rompe con el anonimato encarnado en el ámbito individual para dar cabida a un espacio colectivo de reconocimiento y acuerpamiento común.

Y es que el interés por el desarrollo económico se vuelve una urgencia del Estado, presionado por intereses de acumulación e inversión “nacionales” o “transnacionales” que implican una enorme fuerza política, mediática, represiva y, en muchas ocasiones, jurídica. El interés local por la preservación de pueblos y ecosistemas es, en comparación, una fuerza mucho más pequeña, que, sin embargo, sostiene en algunos momentos una resistencia anclada en la movilización y participación de los pueblos que puede ser desbordante y, a veces, sorprendente (Navarro y Pineda, 2009: 98). La aparición de estos sujetos colectivos simboliza uno de los obstáculos más problemáticos para la acumulación del capital por el retraso o directa paralización en la implementación de los megaproyectos.

El capital enfrenta sujetos colectivos que se oponen y resisten a las imposiciones, no como blancos fáciles de someter sino como flujos dinámicos, inestables e impredecibles. Hay una energía social que circula impetuosamente sien-

do capaz de traspasar los cuestionamientos iniciales sobre los procedimientos y exclusión de las decisiones, para pasar a preguntarse: ¿qué desarrollo?, ¿a quién beneficia?, ¿qué utilidad colectiva traerá? En el siguiente testimonio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP)¹³ se ilustra claramente este problema:

Hay una cosa que la CFE ha dicho y es que nos oponemos al desarrollo, pero nosotros decimos desarrollo ¿para quién?, ¿para las grandes trasnacionales?, pues entonces sí nos oponemos. Si no es un desarrollo para la gente, que respete los derechos humanos, que plantee igualdad entre hombres y mujeres, tampoco es un desarrollo. Y en eso estamos (Entrevista a Rodolfo Chávez, CECOP, diciembre de 2009).

Los incipientes cuestionamientos frente a la injusticia del poder van produciendo un sentimiento de indignación que, además de movilizar contra la imposición, son capaces de producir un impulso de autodeterminación política. Se trata de flujos de politicidad que van revelándose en naciente tensión con el monopolio estatal y la expropiación de la política. Hablamos de impulsos, porque siguiendo a Holloway (2011: 68), no podemos pensar en la autodeterminación plena mientras las relaciones capitalistas sigan reproduciéndose, sino en impulsos constantes hacia la autodeterminación, que sólo pueden ser comprendidos como un proceso social. Bajo esta lógica, sin duda estos impulsos de autodeterminación no siempre logran cristalizarse en formas políticas expropiatorias más duraderas, o capaces de resistir o superar de manera continua la imposición. Sin embargo, lo cierto es que, más allá de la duración de las formas comunitarias de lo político, los tiempos extraordinarios de la lucha renuevan la capacidad social para darse forma. Como lo plantea Mágina Millán, se trata de una interrupción del tiempo de la dominación en el que las cosas se desacomodan y reclaman a la forma cambiar de forma.

Bajo estas “nuevas” formas, las luchas socioambientales tienden a presentarse o a percibirse como “inexpertas”, en tanto aparecen como intentos prístinos de organización política. Consideramos que si bien estas “nuevas” luchas no siempre cuentan con las herramientas organizativas “necesarias” para hacer frente a los periodos de conflictividad, esto no implica que no haya recursos colectivos disponibles en el acervo comunitario como sedimentación de experiencias de movilidad social previa. Resulta conveniente pensar que estos nuevos ciclos de lucha son actualización de las experiencias pasadas, lo que revela y potencia la rearticulación de una suerte de conciencia colectiva. Y es que –siguiendo a Ouviaña (2008: 77)– hasta en el movimiento aparentemente más espontáneo existen elementos de dirección consciente; lo que ocurre es que no han dejado huellas o documentos identificables.

Para Gramsci, la dirección consciente está relacionada con la existencia de “núcleos de buen sentido”, que se caracterizan por un tipo fundamental de conocimiento construido por la experiencia de lucha de las clases subalternas. Este acervo de saberes tiene la potencia de producir una forma de conocimiento coherente, autónomo al del sentido común definido por las clases dominantes; es decir, una coherencia de ninguna manera funcional a la dominación, sino disruptiva de la misma. El “núcleo de buen sentido” del sentido común puede

ser interpretado, siguiendo la argumentación gramsciana, como una suerte de embrionaria concepción alternativa del mundo surgida de la resistencia a la dominación; esto es, como una forma cultural activa de los de abajo, que entre otras cosas apunta a rechazar la idea de la dominación como un hecho objetivo sin fisuras (Tischler y Navarro, 2011: 69).

De tal suerte que el acuerpamiento de estos sujetos y su rechazo a la imposición es posible por los núcleos sanos de buen sentido que se construyen a partir de la propia experiencia cotidiana, y que se activan frente al violento avance del despojo. El buen sentido de las clases subalternas es una grieta –como ruptura con las relaciones sociales capitalistas– (Holloway, 2011: 68) que hace posible que el desafío explícito florezca en medio de la dominación, un *No* que es capaz de irrumpir como discontinuidad cuando los umbrales de la tolerancia por múltiples e insospechadas razones se han sobrepasado. Siguiendo a Tischler:

La dominación implica duración y la crisis de la dominación es el rompimiento de esa duración. [...] El rompimiento de la reproducción de la forma de dominio o crisis es, al mismo tiempo, la emergencia y producción de otra forma de temporalidad emanada de la práctica de un nuevo sujeto social (2005: 18).

Y es que estos sujetos colectivos no son en absoluto “un simple agregado de individuos, de grupos, de movimientos, sino una suerte de ‘iluminación’ de la cual surge una nueva subjetividad” (Tischler, 2004: 79). De hecho, el acontecimiento de lo comunitario produce tensiones con la forma individuo, de la modernidad. Basta recordar que la introducción del individualismo ha tenido que ver con el remplazo de la socialización comunitaria por la socialización mercantil, bajo la forma individuo, y una contraparte colectiva, que se ha compensado con la invención de una comunidad imaginada representada en la figura del Estado nacional (Anderson, 1993).

La recreación y actualización de la comunidad y los lazos con el territorio tienden a potenciarse con lo que Martínez Alier denomina *lenguajes de valoración* no mercantiles, que desde nuestra perspectiva actúan como formas culturales activas de los de abajo que se nutren de la experiencia histórica de vida en un territorio determinado. Los lenguajes de valoración no mercantiles, contrarios a los lenguajes de valoración económicos, en ocasiones se construyen a partir de vínculos de larga duración con el territorio, tejidos por historias que se conectan entre sí a partir de la memoria colectiva.

Desde nuestro punto de vista, los lazos con el territorio y la defensa del mismo no pueden explicarse solamente como la emergencia de una nueva sensibilidad política de los pueblos con su entorno, sino como actualizaciones de lo que Ceceña (2012) llama “mundos de vida no predatorios”, que habitan y residen en el mismo territorio desde hace muchos años. De aquí que la memoria aparezca como una de las fuentes más potentes en la conformación de la conciencia colectiva condensada al calor de la resistencia.

Es entonces que la política de la memoria como dispositivo de resistencia no se funda en ver hacia atrás como un gesto nostálgico o romántico, sino como una manera de ir más allá de las relaciones sociales que los oprimen, es decir, como un proceso de transformación que parte de la negación de las expresiones

más agresivas y predatorias del capital (Tischler y Navarro, 2011: 67). Como dice en su testimonio un integrante de Radio Ñomndaa¹⁴:

El hecho de darnos cuenta de nuestra historia de antes y de cómo es la historia reciente, uno se va dando cuenta contra qué estamos luchando. Antes nosotros [...] vivíamos diferentes, antes éramos más libres. Entonces tener esta memoria histórica, de cómo eran los tiempos antes del sometimiento, y cómo son las cosas ahora. Y por eso a nosotros nos entra el coraje, la rebeldía de por qué vamos a vivir así, vamos a seguir la lucha de nuestros abuelos, de los que no se dieron por vencidos, que nos han dado la oportunidad de tener un territorio (Entrevista a David Valtierra, Radio Ñomndaa, diciembre de 2010).

La producción del nuevo sujeto social está íntimamente articulada con el territorio porque su sobrevivencia depende de él: comunidad y territorio se funden en una sola entidad

La memoria como conciencia colectiva permite iluminar y potenciar los usos de la reapropiación social de la naturaleza para la satisfacción de necesidades humanas. Esto genera una relación entre la estimación de los beneficios que la naturaleza brinda y la lucha que debe generarse para defender los bienes y preservar el modo y los medios de vida con que se cuenta. La reapropiación social de la naturaleza en relación a los valores de uso que esta produce puede notarse en el siguiente testimonio del CECOP:

La relación con la tierra se ha fortalecido. Efectivamente nadie se había cuestionado que alguien quisiera quitarte la tierra. Eso no se había dado. Inclusive en los talleres, la gente más antigua dice que nunca habían tenido problemas con la tierra. Hoy sí nos la quieren quitar y ha nacido un acercamiento con la tierra (Entrevista a Rodolfo Chávez, CECOP, diciembre de 2009).

La producción del nuevo sujeto social está íntimamente articulada con el territorio porque su sobrevivencia depende de él: comunidad y territorio se funden en una sola entidad. La pertenencia al espacio socialmente construido se potencia más allá de las condiciones materiales que proveen el sustento. Los arraigos se profundizan, los anclajes materiales y simbólicos al territorio se fortalecen.

Lo principal es defender el territorio, si no tenemos el territorio perdemos todo, perdemos todo. Eso es lo más importante ahorita. Detener el despojo, la explotación del territorio (Entrevista a David Valtierra, Radio Ñomndaa, diciembre de 2010).

A este respecto, en las espacialidades rurales lo comunitario aparece más ligado al territorio y a la comunidad política; aunque está constituido por profundas contradicciones tiene anclajes materiales más concretos. Cuando surgen, estos movimientos de oposición tienden a emplear y actualizar las estructuras tradicionales comunitarias de convivencia y organización para la deliberación y toma de decisiones¹⁵, mientras que en las espacialidades urbanas la comunidad política real está profundamente desgarrada, puesto que las abstracciones

y ordenamientos del capital –incluyendo la forma individuo– aparecen más cristalizadas. Sin embargo, hay una lucha –pocas veces visible y la mayor parte del tiempo intersticial– por recrear lazos colectivos y hacer común la vida urbana. Esta lucha se produce de manera intermitente¹⁶, con diversos fines, modalidades variadas a nivel espacial y temporal, bajo la forma sindicato, barrio, centro social, colectivo político, gremio profesional, organización social o asambleas vecinales.

Lo cierto es que, más allá del tipo de espacialidad, las fisuras que estas luchas producen en la política están relacionadas con la incipiente generación de espacios públicos no estatales, inaugurando “novedosos escenarios de vivencia democrática y autogestiva, permitiendo retirar del Estado y de los agentes privilegiados del sistema capitalista el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social” (Ouviña, 2007: 190). Se trata de una política conjugada en tiempo cotidiano, una política no separada del hacer. En el siguiente testimonio de la Agrupación Un Salto de Vida¹⁷ se enfatiza la reapropiación de las capacidades políticas y la voluntad colectiva por parte de las comunidades:

De la política sí hay posibilidades, pero no de la partidista. Se necesita una nueva política de las comunidades, más democrática. Pero no que nosotros tengamos el poder, sino que la gente lo tenga, todos lo tengamos. La política absorbe a la gente y no se puede mover. Yo no veo que haya que meterse a la política, sino es un construir desde abajo, un nuevo empezar. [...] Es un eterno construir desde abajo. Con los partidos ni pensarlo (Entrevista a Enrique Enciso, Agrupación Un Salto de Vida, enero de 2010).

Siguiendo a Ceceña (2008: 103-104) “en los procesos emancipatorios la comunidad pasa de herencia y estrategia intuitiva de sobrevivencia a eje consciente de la organización y construcción societal, es decir, va creando nuevas relaciones políticas y nuevos imaginarios, que son a la vez un modo de subvertir, socavando, las relaciones de poder”. Como parte de estas transformaciones, podemos ubicar la activa participación de las mujeres en los espacios de la política comunitaria, que incluye la modificación de las formas de habitar la vida cotidiana, como interrupción –por lo menos momentánea– de las relaciones históricas patriarcales de dominación. Se trata de procesos de subjetivación en marcha que coexisten conflictivamente entre los nuevos modos de relación y la propia tradición atravesada por la dominación, que lucha por reproducirse.

Desde la perspectiva de Silvia Federici (2010), los regímenes de propiedad comunal han comprendido márgenes mayores de acción para las mujeres, porque ante los pocos o nulos derechos sobre la tierra que ellas han tenido, lo común ha resultado fundamental como espacio de producción y de sociabilidad. De ahí que lo común, históricamente, haya estado relacionado con las economías de cuidado o de sustento en las que el papel de la mujer ha sido central (Shiva, 2006: 25). Es entonces que el cercenamiento de lo común implica necesariamente el debilitamiento de lo femenino y su capacidad de proporcionar apoyo y sustento a las actividades comunitarias¹⁸.

Pese a esta larga historia de dominación sobre lo femenino, lo común se produce y reproduce en el amplio y denso espectro de la vida, en buena medida por las actividades de cuidado y sustento que generan las mujeres en

beneficio de la comunidad. En cierto modo, los conflictos socioambientales y la recreación de una política comunitaria antagónica al capital revelan la capacidad productiva de las mujeres más allá de lo reproductivo, incluso con intervenciones inéditas en espacios que tradicionalmente habían estado dominados por los hombres. Esta capacidad de cuidado y recreación de lo común está relacionada con lo que Gutiérrez denomina *política en femenino*, la cual durante los tiempos de conflicto se potencia y se vuelve parte del poder comunitario para la defensa del territorio. A continuación, el testimonio de una integrante del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER)¹⁹ sobre la participación de las mujeres en la resistencia contra la Presa Paso de la Reina:

Sobre la participación de las mujeres, con todo este movimiento aquí en el pueblo todavía existen muchos hombres machistas que dicen que las mujeres no tienen ni voz ni voto en una asamblea general del pueblo. Ya se venía discriminando a las mujeres, pero este año y con este movimiento pues ya abiertamente está declarado de que las mujeres tienen derecho a participar en una asamblea en la toma de decisiones o se le está dando ese espacio para que participen de la reunión y en adelante las mujeres puedan ocupar cargos, puedan ocupar un cargo de policía municipal, puedan ser una secretaria, una tesorera de la agencia. Ya se abrió el espacio, hay que cuidarlo y que la mujer también haga valer su derecho, que exija, que como mujer es ciudadana y tiene todos los derechos de los varones. Fue un movimiento que se lo ganó (Entrevista a Jaime Jiménez y Estela Chávez, COPUDEVER, febrero de 2010).

De aquí que lo político, la comunidad y el territorio se entretejan como una potente capacidad contra el cercamiento de lo común y la asimétrica batalla contra el capital. Se trata de capacidades sociales en torno a la recuperación de lo político, a la recomposición comunitaria y al arraigo con el territorio que logran resistir, al mismo tiempo que —en medio de profundas dificultades— buscan imaginar, experimentar y fortalecer modos de autorregulación social²⁰ basados en la solidaridad y la sostenibilidad para hacer común la vida.

En este marco, la auto organización se convierte en una dinámica central para coordinar la cooperación social ante la evidente incapacidad, corrupción y complicidad entre gobiernos y empresas, y ante la limitación de los marcos institucionales y mecanismos de participación formal para frenar o desactivar los proyectos de expropiación. En este sentido, si bien en algunas coyunturas estos movimientos apelan a la utilización de canales institucionales y recursos jurídicos para retrasar o frenar el cercamiento de lo común, en la mayoría de los casos se evidencia una fuerte apuesta a la acción directa no convencional y disruptiva como principal herramienta de lucha para la presión política, así como a la articulación y coordinación con otras organizaciones sociales y experiencias de resistencia²¹ (Svampa, 2008a: 99-100). Generalmente, hay una tendencia a dotarse de estructuras poco rígidas de organización, experimentándose formas organizativas basadas en la democracia directa, el uso de la figura asamblearia, mecanismos horizontales de toma de decisiones y de participación de los miembros.

La frustración y el desencanto que genera la política formal pueden derivar en el rompimiento de las mediaciones que venían regulando los conflictos para estabilizarlos e incorporarlos al terreno de la gobernabilidad estatal. Un ejem-

plo de esto es cómo, a través de la lucha del CECOP, se lograron desarticular las relaciones clientelares con la Confederación Nacional Campesina (CNC)²², la cual había venido operando con bastante influencia en la zona. La CNC consiguió incidir en la integración de los comisariados ejidales y de las estructuras comunitarias para avanzar con la construcción de la presa; sin embargo, este intento fracasó.

El aprendizaje más importante como estrategia de lucha fue haber acabado con el esquema corporativo. Sí se rompió. Hay un desprecio a los métodos de la CNC. [...] El rompimiento con el corporativismo fue una de las ganancias mayores. [...] Se ha modificado la visión de los partidos políticos, una visión distinta de los esquemas de dominio, como los charros campesinos, los dirigentes campesinos de la CNC o los núcleos agrarios (Entrevista a Rodolfo Chávez, CECOP, diciembre de 2009).

Cuando se erosionan las mediaciones y se fisuran las relaciones de dominación, no sólo comienza a explicitarse la crítica a la representación política encarnada en el Estado, sino que se pone mayor atención en las relaciones tejidas al interior de los espacios organizativos. A este respecto, aunque la separación entre dirigentes y dirigidos existe en los hechos aun sin estar formalizada la mayoría de las veces, tiende a haber un cuestionamiento hacia la figura del dirigente que se separa de las bases y se independiza del pensamiento colectivo y concreto de la experiencia. “Los comisariados son nuestros representantes, pero ellos no deciden, decide el pueblo” (Entrevista a Felipe Flores, CECOP, mayo 2010). “La responsabilidad directa es sobre el comisariado, los ejidatarios somos dueños del ejido, y nosotros respaldamos al comisariado o le decimos que hacer. Él no puede decidir solo, tiene que traerlo a la asamblea general del pueblo” (Entrevista a Jaime Jiménez y Estela Chávez, COPUDEV, febrero de 2010).

Sin embargo, existen también otras situaciones en las que las mediciones estatales o de las mismas empresas a nivel local resultan efectivas para reforzar la “gestión de la gobernabilidad”. El clientelismo, en estos casos, aparece como un rasgo fundamental del metabolismo de la dominación local (Machado, 2009: 226-228). En ese sentido, Garibay Orozco (2010: 175-176) afirma que, en el caso de las corporaciones mineras, se impone un régimen autocrático clientelar cuya cúspide reside en la administración de la compañía, desde la cual se reparten beneficios selectivos y se subordinan autoridades comunitarias que, a su vez, buscan reproducir esta lógica sobre el resto de la comunidad. La principal consecuencia de los dispositivos de cooptación y captura es la división social y la confrontación que generan al interior de las comunidades afectadas, lo que redundará en el ahondamiento de los sometimientos previamente existentes y que sin lugar a dudas transforma las relaciones sociales vinculadas al territorio, aislando y debilitando las resistencias. Aunado a este repertorio de estrategias se han recrudecido las políticas orientadas a la criminalización de la protesta, la represión, la militarización y la contrainsurgencia²³.

Con respecto a lo anterior, ha resultado vital la construcción de relaciones horizontales de solidaridad y apoyo entre las diferentes resistencias para la

expansión, cobertura, visibilidad y fortalecimiento de las capacidades sociales contra el despojo. Se trata de la articulación de “comunidades del no”²⁴ o redes extraterritoriales que se tejen en torno al sujeto comunitario local y que influyen fuertemente en las conexiones que los sujetos comunitarios hacen entre el capitalismo global, el Estado y la degradación ambiental. Las percepciones de las luchas socioambientales son alimentadas por referencias y experiencias de otras latitudes que enfrentan los mismos problemas. Hay un movimiento entre escalas y pisos para pensar el problema. Lo local se conecta con una conciencia global sobre lo ambiental y viceversa.

En suma se trata una racionalidad ambiental (Leff, 2009) que va adquiriendo nuevas profundidades y aristas para subvertir los principios que han ordenado y legitimado la racionalidad instrumental de la modernidad. Como parte de estos despliegues se encuentra la configuración de sistemas de saber a contrapelo de la ciencia dominante. Tal es el caso de los discursos contra-expertos, en los que se van esgrimiendo y detallando los argumentos del rechazo y resistencia popular (Svampa, 2008b), constituidos a través de la propia práctica, los aprendizajes compartidos con otras organizaciones y mediante el contacto con organizaciones no gubernamentales y especialistas o profesionistas independientes²⁵. Estos elementos técnicos son procesados y articulados en un saber independiente al hegemónico, con capacidad de interpelar a gobiernos y empresas, e incluso de intervenir y formular soluciones a los problemas sociales. A continuación un testimonio de un integrante del CECOP en relación a los aprendizajes construidos: “Nosotros ahora podemos debatir con cualquier intelectual, porque ellos hablan de bondades de los megaproyectos y nosotros les decimos cuáles son los daños, cómo rompen el tejido social, en cualquier país del mundo” (Entrevista a Felipe Flores, CECOP, mayo de 2010).

Como parte de estos sistemas de saber, de igual forma aparecen los aprendizajes de epidemiología popular que las comunidades van adquiriendo, sin la ayuda de expertos y gobiernos, a partir de la reunión de datos e información científica para comprender las enfermedades que padecen (CEECEC, s/f: 145). Esto se produce en aquellas comunidades que ya enfrentan algún grado de afectación o sufrimiento ambiental y que, ante la impunidad y negligencia del poder, requieren de capacidades sociales de autocuidado y diagnóstico común²⁶. A continuación el testimonio de la Agrupación Un Salto de Vida en torno a la búsqueda de alternativas de prevención y protección de la salud, con base en los saberes tradicionales y el propio conocimiento que la comunidad tiene para restaurar ciertos daños:

Hay mucha gente que es profesional, que tiene conocimientos, saberes previos, sabe cómo resolver, en cuestión de protección a la salud, o de aumentar el acervo de hierbas, alimentos, de nutrición. Nosotros no le vemos un camino rápido, pero sí tenemos la urgencia de hacer un camino alternativo, para que en lo que se arreglan las cosas, juntos tengamos modos de protección y prevención. Porque a como van las cosas creemos que en unos cinco años nos vamos a morir muchísimos más (Graciela González, Agrupación Un Salto de Vida, enero de 2010).

En suma, la emergencia y recomposición del pensamiento ambiental abre la posibilidad de reconstruir formas de vida basadas en la solidaridad y la sostenibilidad a contracorriente de la devastación y violencia del capital. Comuneros y comuneras del CECOP y del COPUDEVER se resisten a sembrar el maíz transgénico y a usar los agrofertilizantes de los paquetes tecnológicos promovidos por los gobiernos. Por el contrario, continúan produciendo la milpa y utilizan semillas autóctonas, lo que fortalece la autonomía y soberanía alimentaria de sus comunidades.

...la emergencia y recomposición del pensamiento ambiental abre la posibilidad de reconstruir formas de vida basadas en la solidaridad y la sostenibilidad a contracorriente de la devastación y violencia del capital

Radio Ñomndaa “La Palabra del Agua”, ha potenciado la integración, cooperación y colaboración entre las comunidades, convirtiéndose en un referente para la información y organización en la lucha por la autonomía, la defensa del territorio, la libertad de expresión y el uso de la lengua originaria. Asimismo, destacan los proyectos productivos de las mujeres amuzgas para la comercialización de sus tejidos. Los cheranenses han logrado constituirse como municipio autónomo regido por usos y costumbres, y han echado a andar un conjunto de disposiciones y prácticas colectivas para la toma de decisiones y la protección de su territorio, como es el caso de la Ronda Comunitaria y las fogatas por barrio, lo que, en suma, les ha dado mayor margen para cuidar su bosque y defenderse de los talamontes. La Agrupación Un Salto de Vida desde hace casi 5 años viene impulsando la “Parcela Escuela del Ejido de Jesús María”, la cual tiene como objetivo “crear vida en medio de la muerte” a través de la capacitación popular en agricultura orgánica. Estos sistemas de saber y la apropiación de tecnologías son centrales para resistir a la devastación ambiental.

La irradiación de las luchas socioambientales para hacer común

En medio del debate sobre las alternativas para enfrentar la crisis civilizatoria²⁷ y ante las falsas soluciones que los gobiernos y corporaciones están generando dentro de la llamada “economía verde”²⁸, la respuesta que se apunta desde diversas latitudes y movimientos de abajo está orientada a fortalecer los entramados colectivos y los esfuerzos de recomposición comunitaria en espacialidades urbanas y rurales para la producción, gestión y recreación de lo común.

La supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y potencialmente puede estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de autorregulación social que incorporen entre sus principios frenos y controles al mal uso de los recursos. Se trata de experimentar modalidades comunitarias que, mediante la confianza, la reciprocidad, la cooperación, hagan posible sos-

tener modos de gestión de lo común.

La batalla que están librando las luchas socioambientales contra el despojo múltiple abre pertinentes cuestionamientos sobre cómo resistir, defender, fortalecer y expandir lo común. De aquí se deriva el fecundo debate sobre qué tipo de propiedad y qué formas de regulación hacen posible lo común. Consideramos que, a diferencia de las formas de propiedad y organización estatales y mercantiles, lo común surge del presente, de lo particular y de los impulsos de autodeterminación social, no de un centro que planifica y determina el hacer. La regulación de lo común implica pensar y hacer lo común bajo escalas realmente humanas y materializadas en relaciones comunitarias situadas temporal y/o espacialmente.

Las luchas socioambientales, como parte de una constelación de movimientos contra el despojo, están construyendo –en medio de terribles adversidades– formas alternativas capaces de negar, subvertir e ir más allá del capital. Las formas particulares del antagonismo contra el capital que las luchas socioambientales encarnan trascienden el ámbito local de la defensa de los bienes comunes naturales o ecológicos. Su potente capacidad de contagio, ejemplo e irradiación ha logrado conexiones con otros rostros de la lucha contra el capital.

Estas luchas han logrado iluminar aspectos vitales para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta. Han ayudado a que problematicemos nuestra relación con la naturaleza, y a que entendamos la urgencia de la construcción de alternativas basadas en la solidaridad y la sustentabilidad. Han sido parte del impulso por extender lo común sobre todos los ámbitos de la reproducción social para resistir a las formas económicas y políticas del despojo múltiple y garantizar una alternativa frente a la devastación que el capital produce a su paso.

Bibliografía

- Altwater, Elmar 2009 “La Ecología desde una óptica marxista”, clase del curso *Ecología política en el capitalismo contemporáneo* del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED), Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Buenos Aires.
- Anderson, Benedict 1993 *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Antonelli, Mirta 2009 “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la ‘minería responsable y el desarrollo sustentable’” en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Auyero, Javier y Swistun, Débora 2008 *Inflamable: Estudio del sufrimiento ambiental* (Argentina: Paidós).
- Barreda, Andrés 2011 “Riquezas y Miserias de la civilización petrolera” en *Oilwatch Mesoamérica* en <www.oilwatchmesoamerica.org>.
- Benjamin, Walter 2003 *Tesis sobre la historia y otros fragmentos* (México: Contrahistorias).

- Bonefeld, Werner 2001a "The Permanence of Primitive Accumulation: Commodity Fetishism and Social Constitution" en *The Commoner*, N° 2. En <www.commoner.org.uk>.
- Bonefeld, Werner 2001b "Clase y constitución" en *Bajo el Volcán* (México) Año 2, N° 2.
- Ceceaña, Ana Esther 2008 *Derivas del mundo en el que caben todos los mundos* (Buenos Aires: CLACSO/Siglo XXI).
- Ceceaña, Ana Esther 2012 "Dominar la naturaleza o vivir bien: disyuntiva sistémica" en *Nostramo* (México) Año IV, N° 5.
- Civil Society Engagement with Ecological Economics (CEECEC) s/f "Glossary" en <www.ceecec.net>.
- Composto, Claudia y Navarro, Mina Lorena 2012a "Territorios en disputa: entre el despojo y las resistencias. El caso del Frente Amplio Opositor contra la Minera San Xavier en San Luis Potosí, México" en *Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales* (Bahía Blanca: CEISO) N° 5, enero-junio.
- Composto, Claudia y Navarro, Mina Lorena 2012b "Estados, transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias en torno de la minería a gran escala en América Latina" en *Theomai* (Quilmes) Número especial 25/26, agosto. En <revista-theomai.unq.edu.ar>.
- De Angelis, Massimo 2001 "Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital's 'enclosures'" en *The Commoner*, N° 2. En <www.commoner.org.uk>.
- Dyer-Witherford, Nick 2007 "El en-comunismo" en <turbulence.org.uk>.
- ETC 2011 "¿Quién controlará la economía verde?" en <www.etcgroup.org>.
- Federici, Silvia 2010 *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria* (Buenos Aires: Tinta Limón).
- Garibay Orozco, Claudio 2010 "Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual" en Delgado Ramos, Gian Carlo (coord.) *Ecología Política de la Minería en América Latina* (México: CEIICH-UNAM).
- Gutiérrez, Raquel 2009 *Los ritmos del pachakuti* (México: Bajo Tierra/ICSYH-BUAP).
- Gutiérrez, Raquel 2011 "Pistas reflexivas para orientarnos en una turbulenta época de peligro" en Gutiérrez, Raquel (ed.) *Palabras para tejernos, resistir y transformar* (México: Pez en el árbol).
- Gutiérrez, Raquel s/f "Autorregulación social" en Colectivo Latinoamericano de Ecología Política (comps.) *Diccionario de Ecología Política* (en proceso de elaboración y publicación).
- Hardt, Michael y Negri, Antonio 2011 *Common wealth: el proyecto de una revolución del común* (Madrid: Akal).
- Harvey, David 2004 "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión" en *Socialist register* (Buenos Aires: CLACSO).
- Holloway, John 2011 *Agrietar el capitalismo: el hacer contra el trabajo* (México: Bajo Tierra/ ICSYH-BUAP).

- La Jornada* 2011 "Duplican magnates mineros el oro extraído en la Colonia" en *La Jornada Minera. 500 años de saqueo* (México) Suplemento especial, 14 de noviembre.
- Leff, Enrique 2009 *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza* (México: Siglo XXI).
- Machado, Horacio 2009 "Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias: El caso de Minera Alumbrera" en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (eds.) *Minería transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Madrilonia 2011 *La Carta de los Comunes: para el cuidado y disfrute de lo que de todos es* (Madrid: Traficantes de sueños). En <madrilonia.org>.
- Marín, Marcela 2009 "El 'no a la mina' de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible" en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (editoras) *Minería transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Martínez Alier, Joan 2009 "Conflictos ecológicos y lenguajes de valoración", clase del curso *Ecología política en el capitalismo contemporáneo* del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED), Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" (Buenos Aires).
- Marx, Karl 2008 (1867) *El Capital. Crítica de la Economía Política* (México: Fondo de Cultura Económica) Tomo I.
- Navarro, Mina Lorena y Pineda, Enrique 2009 "Luchas socio ambientales en América Latina y México: nuevas subjetividades y radicalidades en movimiento" en *Bajo el Volcán* (México) N° 13.
- Navarro, Mina Lorena y Tischler, Sergio 2011 "Tiempo y memoria en las luchas socio-ambientales en México" en *Desacatos* (Guadalajara) N° 37, septiembre-diciembre.
- Notimex 2012 "México encabeza exploración minera en Latinoamérica" en *El Financiero* (México) 8 de marzo.
- Ouviña, Hernán 2007 "Hacia una política prefigurativa. Algunos recorridos e hipótesis en torno a la construcción de poder popular" en *Reflexiones sobre el poder popular* (Argentina: El Colectivo).
- Ouviña, Hernán 2008 "Las asambleas barriales y la construcción de lo 'público no estatal': la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en Levy, Bettina y Gianatelli, Natalia (comps.) *La Política en Movimiento: identidades y experiencias de organización en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Ouviña, Hernán 2010 "Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una perspectiva prefigurativa" en Jóvenes en resistencia alternativa (coords.) *Pensar las autonomías: alternativas de emancipación al capital y al Estado* (México: Bajo Tierra).
- Porto-Gonzálves, Carlos Walter 2008 *La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización* (La Habana: Casa de las Américas).
- Ramírez, Érika 2010 "Entregan oro y plata de México a transnacionales. Otorgadas ya más de 24 mil concesiones para la explotación de minas" en *Contralínea* (México) 25 abril. En <contralinea.info>.

- Seone, Jose; Algranati, Clara y Taddei, Emilio 2011 "Tras una década de luchas. Realidades y desafíos de los proyectos de cambio en Nuestra América" en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 46. En <www.herramienta.com.ar>.
- Serna, Eva 2009 "De sobrevivientes y guardianes. Luchas campesinas en México" en *Rebeldía* (México) Año 8, N° 68.
- Shiva, Vandana 2006 *Manifiesto para una democracia de la tierra* (Barcelona: Paidós).
- Simone, Anna y Giardini, Federica 2012 "Beni comuni e beni pubblici. Sui rapporti tra politica e diritto" en <www.globalproject.info>.
- Svampa, Maristella 2008a *Cambio de época: movimientos sociales y poder político* (Buenos Aires: CLACSO/Siglo XXI).
- Svampa, Maristella 2008b "Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IX, N° 24, octubre.
- Tischler, Sergio 2004 "La forma clase y los movimientos sociales en América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año V, N° 13, enero-abril.
- Tischler, Sergio 2005 *Memoria, tiempo y sujeto* (Guatemala: BUAP/F&G).
- Tischler, Sergio y Navarro, Mina Lorena 2011 "Tiempo y memoria en las socio-ambientales en México" en *Revista Desacatos* (Guadalajara) N° 37, septiembre-diciembre.
- Vega Cantor, Renán s/f "Crisis Civilizatoria" en Colectivo Latinoamericano de Ecología Política (comps.) *Diccionario de Ecología Política* (en prensa).

Notas

1 Este artículo busca hilvanar una serie de testimonios que se desprenden de las entrevistas realizadas de 2008 a 2011, sobre experiencias socioambientales en México, como parte de la investigación doctoral que actualmente realizo. Las experiencias con las que hemos trabajado y que son el sustento empírico de este trabajo están mayoritariamente constituidas por entramados comunitarios indígenas, situados en espacialidades rurales o semiurbanas, con excepción de la Agrupación Un Salto de Vida, que habita en un municipio urbano de la zona de Guadalajara, en el occidente de México. Los argumentos aquí expuestos son producto de discusiones y reflexiones colectivas con las propias organizaciones, activistas y académicos, en particular con Sergio Tischler, Raquel Gutiérrez, Claudia Camposto, Enrique Pineda y Daniele Fini.

2 El análisis de las variadas formas de despojo es útil para simplificar la complejidad del problema, pensando en los posibles niveles y estrategias de la acumulación del capital; sin embargo, no debemos perder de vista que, en los hechos, suceden como parte de un mismo proceso.

3 Por *acumulación originaria* nos referimos al hecho histórico de los primeros cercamientos de las tierras comunales en Europa durante el siglo XIV,

que Marx describiría como la separación súbita y violenta de grandes masas humanas de sus medios de subsistencia, arrojándolas, en calidad de proletarios totalmente libres, al mercado de trabajo (Marx, 2008); pero también, tal y como lo plantea Massimo de Angelis (2001), como una trama de continuidad en la expansión del capitalismo. En este mismo sentido, Harvey habla de *acumulación por desposesión* para enfatizar que el despojo no solo es un hecho fundacional, sino también un proceso que se halla vigente y se continúa desarrollando en la actualidad (Harvey, 2004: 116).

4 Para referirse a esta forma de despojo, Harvey (2004) plantea el término de *reproducción ampliada* como el crecimiento del capital y la producción de plus valor, diferenciándola de la *acumulación por desposesión*. Cabe destacar que, según Bonefeld (2001a y 2001b), la acumulación originaria está siempre presente en el marco de la reproducción ampliada, como un presupuesto constitutivo que debe ser constantemente recreado. En este sentido, no habría una distinción temporal o geográfica entre uno y otro proceso, sino que el primero sería el fundamento latente de las relaciones sociales capitalistas y condición de posibilidad para que se reproduzca la explotación a lo largo del tiempo. De modo

que la acumulación originaria, en tanto separación tajante de las poblaciones respecto de sus medios de subsistencia, subyace en cada relación mercantil como supuesto permanente –pero nunca garantizado de antemano–, que debe reforzarse una y otra vez frente a aquellas fuerzas sociales que no aceptan los requerimientos del sistema como una “ley natural”, bajo pena de ver peligrar las bases mismas de la reproducción capitalista. Las luchas históricas de la clase trabajadora representan, precisamente, una ruptura en dicha aceptación, una no conformidad con las leyes de la oferta y la demanda, una no subordinación al curso ordinario de las cosas. Como respuesta al carácter continuo de las resistencias sociales, el capital se vale de dos estrategias interrelacionadas de carácter extraeconómico: la ideología y la fuerza.

5 Desde abril de 2011, la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, ha logrado impulsar un proceso organizativo para detener a los talamontes relacionados con grupos del crimen organizado, que no solo venían extrayendo madera de los bosques, sino además realizando una serie de robos, extorsiones y secuestros contra la población. Los agravios cometidos han reducido considerablemente los bienes forestales: de 27 mil hectáreas solo quedan 7 mil. Para la defensa de su territorio, los cheranenses están poniendo en práctica formas de participación y de toma de decisiones colectivas, logrando, además, el reconocimiento estatal para regirse por usos y costumbres.

6 Al respecto recomendamos revisar la tipología sobre estrategias de dominación para la expropiación de bienes comunes ecológicos o naturales: 1) legalidad institucional; 2) consenso y legitimidad; 3) captura y cooptación; 4) disciplinamiento y normalización; 5) criminalización de la protesta; 6) represión; 7) militarización y contrainsurgencia, en Composto y Navarro (2012b).

7 Este término fue acuñado por Eduardo Gudynas, quien junto a otros autores ha venido desarrollando las novedades del extractivismo contemporáneo en América Latina.

8 A este respecto, Seoane, Taddei y Algranati (2011) distinguen tres proyectos societales que, actualmente, se encuentran en disputa luego del quiebre de la hegemonía neoliberal en los noventa: 1) el Socialismo del Siglo XXI o socialismo comunitario (Bolivia, Venezuela y, por lo menos inicialmente, Ecuador); 2) el neoliberalismo de guerra o neoliberalismo armado (México, Colombia y Perú, por lo menos hasta Omala); 3) el neodesarrollismo (Argentina, Brasil). Y agregan que, más allá de las enormes diferencias entre dichos proyectos, el crecimiento exponencial del precio internacional de los *commodities* durante la última década los asimila peligrosamente en su relación con el neoextractivismo. En efecto, estos autores sostienen que los tres proyectos “comparten un elemento común: se sostienen en gran medida en base a la explotación y exportación de bienes comunes de

la naturaleza. Claro que uno lo hace promoviendo la propiedad pública de los mismos y un proceso de redistribución del ingreso y la riqueza [socialismo comunitario], otro en beneficio casi exclusivo del capital transnacional y sus asociados [neoliberalismo de guerra], y el tercero apelando a la mayor regulación pública y a la apropiación estatal de una parte de la renta extraordinaria [neodesarrollismo]”.

9 Durante las últimas dos administraciones gubernamentales a cargo de Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), no solo se han continuado sino que se han profundizado las políticas extractivistas en todo el territorio nacional. En suma, se ha venido produciendo un profundo reordenamiento de la forma productiva agropecuaria y alimentaria en manos de grandes transnacionales agroalimentarias, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales. Junto con la profundización del modelo extractivo de petróleo, gas y minerales, y el desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera y portuaria y enclaves turísticos. Un caso emblemático es, sin duda, el de la industria minera y la apertura de actividades de exploración y producción a empresas extranjeras. “Solo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, el de hoy es México” (*La Jornada*, 2011). Al respecto, se tiene registrado que de 2000 a 2008 se otorgaron 24.713 concesiones a 231 empresas extranjeras, aumentando exponencialmente la extracción de los recursos minerales (Ramírez, 2010) y, en consecuencia, la conflictividad social por la concesión de 52 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. La proactividad del gobierno en este sector ha logrado que, en los últimos tiempos, México se posicione como uno de los destinos con mayor número de desarrollos mineros de América Latina y, a nivel mundial, haya pasado del octavo al cuarto lugar en el índice de crecimiento de la inversión minera. En un reporte del Metal Economic Group, una empresa dedicada al monitoreo de la actividad metalúrgica global, se aseguró que el gasto de exploración en México es, en la actualidad, el más alto de Latinoamérica, al alcanzar en 2011 una cifra récord de alrededor de mil millones de dólares (*Notimex*, 2012).

10 Para mayor información, se recomienda revisar la “Audiencia General Introductoria de la Devastación Ambiental y los Derechos de los Pueblos”, presentada en el Capítulo de México del Tribunal Permanente de los Pueblos, disponible en <www.afectadosambientales.org>.

11 Cabe señalar que estos rasgos han sido conceptualizados como parte de un movimiento teórico que tiene su centro en la lucha misma, y en el que, de ninguna manera, pensamos que se trate de relaciones enteramente armónicas con la natu-

raleza, sino de sujetos atravesados por profundas contradicciones emanadas de la vida en el capitalismo, cuyos modos de relación con la naturaleza no siempre están regidos por prácticas totalmente sostenibles o desmercantilizadas. Sin embargo, sostenemos que cuando se activa un proceso de resistencia contra el despojo, se producen nuevos modos de reapropiación social de la naturaleza y de comprensión de lo ambiental.

12 A diferencia de muchas otras comunidades en torno a la producción o defensa de los bienes comunes que no comparten un espacio físico determinado, como es el caso de las comunidades del *software libre*, integradas por usuarios, desarrolladores y simpatizantes, situados en diferentes latitudes del planeta.

13 El CECOP es una organización de campesinos y campesinas del municipio de Acapulco, en Guerrero, al sur de México, que desde hace más de siete años ha logrado detener la construcción de la presa La Parota sobre el río Papagayo, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La construcción de esta presa afectaría directamente a 25 mil campesinos y desertificaría las tierras de 75 mil que siembran río abajo. La lucha del CECOP es un símbolo internacional de las resistencias que han conseguido frenar megaproyectos.

14 Radio Nomndaa “La Palabra del Agua” es un proyecto de comunicación y organización a cargo de comunidades indígenas del pueblo amuzgo en la Costa Chica de Guerrero, que desde 2002 vienen construyendo y peleando por un profundo proceso de construcción de autonomía en esa zona. Además, desde hace por lo menos diez años han estado involucrados en la defensa de sus bosques y contra la explotación maderera, siendo recientemente parte de una lucha contra el saqueo de la grava de los ríos de sus comunidades, a cargo de las autoridades municipales y de la cacique de la zona, Aceadeth Rocha.

15 Por “estructuras tradicionales” nos referimos a la propiedad colectiva de la tierra, el sistema de cargos, la asamblea comunitaria, el tequilo o la fiesta, propias de las comunidades indígenas de México.

16 Siguiendo a Gutiérrez (2009: 31), lo intermitente refiere a lo “permanente” aunque “discontinuo” de los ritmos presentes en casi todos los procesos vitales: “desde el sístole-diástole del sistema circulatorio hasta los flujos y reflujos de las movilizaciones sociales. Esta pauta de lo que podemos llamar “tiempos vitales” se contradice, antagoniza y desborda permanentemente los falsos tiempos homogéneos, idénticos y lineales del capital y del Estado”.

17 La Agrupación Un Salto de Vida es una organización territorial comunitaria de vecinos de El Salto, Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que se reúnen desde mediados de los noventa para emprender acciones contra los terribles efectos a la salud y daños ambientales que la contaminación del río Santiago ha venido generando. La contaminación del río Santiago, desde la década de los setenta hasta

la actualidad, ha traído consecuencias devastadoras para las poblaciones aledañas por las descargas municipales, industriales y lixiviados del Basurero Municipal que se arrojan en él.

18 Federici (2010) asegura que durante el feudalismo las mujeres fueron las más afectadas cuando perdieron la tierra, lo que las terminó confinando al trabajo reproductivo y devaluando su hacer concreto. Esto supuso la imposición de una nueva división sexual del trabajo, como fundamento del nuevo orden patriarcal, sometiendo el hacer femenino a la función reproductiva e invisibilizando su hacer productivo. Esto explica, en buena medida, la reiterada escisión de los ámbitos de la producción y la reproducción, quedando lo masculino ceñido a lo productivo y lo femenino a la reproducción.

19 El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) es una organización comunitaria integrada por consejeros representantes de más de veinte localidades cuyos habitantes son indígenas mixtecos, chatinos, y población afromestizada de la Costa de Oaxaca. Desde 2007 se han organizado para defender su territorio y detener la construcción de la presa denominada “Aprovechamiento Hidráulico de los Usos Múltiples Paso de la Reina”, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad – empresa paraestatal generadora y distribuidora de la energía eléctrica en México–, con la que se afectaría directamente a 17 mil personas e indirectamente a otras 97 mil. Hasta el momento en que se escribe este texto han logrado exitosamente detener cualquier avance del proyecto.

20 Recuperando a Gutiérrez (s/f) consideramos que la “autorregulación es algo así como la *dinámica de la autonomía*, es decir, la posibilidad y capacidad – de personas, conjuntos de personas o sistemas– de modificar, ajustar o equilibrar a *lo largo del tiempo* las normas a las que han de ajustarse y/o los fines que se proponen alcanzar”.

21 Entre los diferentes espacios de coordinación y organización que se han constituido en México destaca la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), creada desde 2008 por comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales de decenas de localidades, como espacio de encuentro autónomo y de coordinación conjunta para enfrentar las problemáticas ambientales. Los diferentes movimientos que integran esta *asamblea* enfrentan conflictos de agua, basura, vivienda, urbanización “salvaje”, construcción de carreteras, destrucción de bosques, políticas agrarias, avance de la agricultura transgénica, desarrollos hoteleros, despojo de playas y daños a la salud. Para mayor información véase: <www.afectadosambientales.org>.

22 La CNC fue concebida en su origen como el brazo agrario del PRI. Hoy en día, más que de una organización social se trata de grupos de poder que operan desde el campo: sus líderes reclaman cuotas dentro de los partidos a cambio del voto campesino. En su composición, la CNC ha ido quedando bajo el control

de los caciques estatales. Este tipo de organizaciones siguen existiendo únicamente como instrumentos de control, pues los mecanismos institucionales de mediación entre sus afiliados y el Estado se han ido diluyendo en el mar neoliberal (Serna, 2009: 33).

23 En México, durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, ha crecido estrepitosamente la cifra de casos de activistas y luchadores sociales perseguidos, amenazados, vigilados y asesinados. El registro de asesinatos relacionados a conflictos ambientales es alarmante: Aldo Zamora, comunero tlahuica del Estado de México y defensor de los bosques del Parque Nacional "Laguna de Zempoala"; Francisco Quiñones, en Jalisco, por su lucha contra la Minera Peña Colorada; Dante Valdez, maestro de Chihuahua que denunció a la Minera Minefinders; Mariano Abarca, en el marco de de la lucha contra el emprendimiento de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas; veintinueve comuneros en Ostula, Michoacán, en el proceso de recuperación de sus tierras; Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en Oaxaca; cinco comuneros del municipio autónomo de Cherán a raíz de la organización del pueblos contra el crimen organizado y los talamontes; y Fabiola Osorio Bernáldez, de la asociación civil Guerreros Verdes, afiliada a la Red Manglar México y activa defensora del ambiente en Guerrero. Hasta el momento, la mayoría de estos crímenes está lejos de ser esclarecida por parte de las autoridades mexicanas.

24 Siguiendo a Antonelli (2009: 61), en las comunidades del no "se incluye a distintos actores que, sin ser asambleístas, comparten la valoración ética, la evaluación epistémica y la promoción de la concientización ciudadana [...] y que llevan adelante acciones de promoción del discurso del no en diferentes ámbitos. [...] Con este alcance, la designación propuesta excede la territorialidad como principio o variable de configuración de los colectivos que contienen asimétricamente contra el dispositivo hegemónico".

25 A este respecto vale la pena señalar la experiencia de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), constituida por un amplio grupo de científicos de campos diversos como las ciencias naturales, las sociales y las humanidades en México, que han logrado contribuir a la conformación de un saber experto contrahegemónico al servicio de la sociedad. La UCCS apoya a la ANAA y a algunas de las luchas socioambientales que la integran, brindándoles asesorías e información sobre los conflictos que enfrentan. Para mayor información, véase: <www.uccs.mx>.

26 El sufrimiento ambiental –expresado en un amplio arco de síntomas y enfermedades, agudas o crónicas, progresivas y degenerativas en los organismos vivos– aparece en muchos territorios como indicio del cercenamiento de lo común y de severos conflictos de contaminación y devastación. El sufrimiento ambiental tiende a vivirse desde el ámbito individual

como angustia personal, lo que encubre la violencia del capital como problema global y consustancial a su lógica. El sentido común dominante niega estas enfermedades y mantiene la desconexión con las causas que las originan. De hecho, los significados que los propios habitantes otorgan a las enfermedades y malestares sociales resultan la mayoría de las veces contradictorios con las causas del problema (Auyero y Swistun, 2008).

27 Siguiendo a Renán Vega Cantor (s/f), "la crisis civilizatoria describe la situación actual, en la cual confluyen de manera compleja crisis de diversa índole, que afectan a todo el mundo y que ponen en cuestión la existencia misma del patrón civilizatorio que ha existido en los últimos cinco siglos". En este sentido, "puede hablarse de una civilización capitalista, que se ha hecho dominante en el sistema-mundo moderno, extendiendo por todo el planeta sus características intrínsecas: conversión de todo lo existente en mercancías, cuya producción no tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades humanas sino la generación de ganancias individuales; producción de riqueza mediante la explotación de seres humanos bajo mecanismos salariales generadores de plusvalía; subordinación de toda la sociedad y la naturaleza a las formas mercantiles y a la ganancia, bajo el supuesto de que el crecimiento (entendido en términos estrictamente económicos) es infinito; consolidación de un patrón energético basado en combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) de corta duración en términos históricos; concepción depredadora de la relación con la naturaleza; y confianza absoluta en que las mediaciones científicas y tecnológicas garantizan un ascendente e incontenible progreso. Estos aspectos se han acompañado del individualismo, la competencia, el ánimo de lucro, el egoísmo, el consumo exacerbado de mercancías, como formas mentales, ideológicas y culturales dominantes en el imaginario de gran parte de los seres humanos. [...] Se precisa de la construcción de otra civilización completamente distinta a la que hoy es dominante, y en la que predomine la propiedad común y colectiva, los medios de producción estén controlados por el conjunto de la población, el valor de uso y la reciprocidad sean la norma que permita satisfacer las necesidades de los seres humanos, los patrones de producción y de consumo sean adecuados para preservar la naturaleza y satisfacer las necesidades básicas de la gente, de tal forma que se pueda vivir dignamente".

28 El Grupo ETC (Grupo de acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) ha definido a la economía verde como un nuevo tipo de economía más allá de la sustentada en la petroquímica, en la que las industrias más grandes del mundo están compitiendo por tierras, recursos naturales y plataformas tecnológicas para la transformación de biomasa (ETC, 2011: 2-4). Para mayor información al respecto, léase el artículo citado.

Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal

Una aproximación estructural en términos histórico políticos¹

JORGE LUIS DUÁREZ MENDOZA

Sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Resumen

El presente trabajo propone una interpretación estructural en términos histórico políticos de algunos aspectos de los conflictos socioambientales en el Perú contemporáneo. Para ello, Jorge Luis Duárez vincula este tipo de conflictos con un fenómeno de mayor envergadura: el discurso neoliberal, en el contexto del segundo gobierno aprista, de 2006 a 2011. A partir de la noción de antagonismo y del estudio de un caso particular (el conflicto en Bagua), el autor desarrolla cuáles son los patrones estructurales de los movimientos socioambientales. De esta manera, sostiene que dichos conflictos no pueden ser entendidos como una "externalidad" del discurso neoliberal, debido a que responden a la propia manera en que éste estructura el orden social en el Perú. En tal sentido, lo que están haciendo los conflictos socioambientales es evidenciar los límites de este discurso, al mostrar una serie de problemas históricos del Perú republicano que el neoliberalismo ha sido incapaz de resolver.

Abstract

This paper proposes a structural interpretation in historico-political terms of some aspects of socio-environmental conflicts in contemporary Peru. To do so, Jorge Luis Duárez associates this type of conflict with a more significant phenomenon: the neoliberal discourse in the context of the second Aprista administration, from 2006 to 2011. Based on the notion of antagonism and the study of a specific case (the conflict in Bagua), Duárez discusses the structural patterns of socio-environmental movements. He argues that these conflicts are not to be understood as "external" to the neoliberal discourse because they are in line with the manner that neoliberalism structures social order in Peru. In this sense, socio-environmental conflicts go to show the limitations of the neoliberal discourse, inasmuch as neoliberalism has failed to solve a number of historical problems in republican Peru.

Palabras clave

Conflictos socioambientales, minería, neoliberalismo, antagonismo.

Key words

Socio-environmental conflicts, mining, neoliberalism, antagonism.

Cómo citar este artículo

Duárez Mendoza, Jorge Luis 2012 "Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal. Una aproximación estructural en términos histórico políticos" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Introducción

Los conflictos socioambientales se han convertido en uno de los principales desafíos políticos en América Latina. Estos conflictos se generan por el uso y/o acceso al ambiente y sus recursos (agua, minerales, gas, petróleo, etcétera). En el caso particular de la actividad minera, su expansión hacia nuevos territorios de la región ha generado una serie de disputas entre el Estado, las empresas y la población en relación al control y uso de los recursos naturales. El proyecto minero de Pascua Lama, que involucra zonas glaciales de Argentina y Chile; las leyes específicas sobre minería y recursos hídricos que han generado tensiones entre el movimiento indígena y el gobierno de Ecuador; y la intención del gobierno federal mexicano de promover la minería en el territorio sagrado de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí, son sólo algunos ejemplos de dichas disputas. Esto se corresponde con el hecho de que América Latina es, desde hace más de una década, la principal región captadora de inversiones mineras a nivel mundial (De Echave, 2011).

El Perú no ha sido la excepción en este escenario de disputas, en el cual la actividad minera y sus consecuencias son el centro de la gran mayoría de los conflictos socioambientales que se producen en la actualidad. Por ello no nos llama la atención el que, a menos de un año de haber asumido la presidencia de la República, los principales conflictos sociales que Ollanta Humala ha enfrentado han sido agudos conflictos socioambientales en torno a la actividad minera. En la región Cajamarca, al norte del país, la empresa Newmont busca ejecutar el "Proyecto Conga", el cual supone la extracción de oro y cobre en cabeceras de las cuencas, lo cual ha generado desde fines del año pasado el rechazo de diversas organizaciones sociales y del propio presidente regional. Después de más de seis meses, este conflicto no ha logrado resolverse, llevándose a cabo un paro en la región al momento de escribir este trabajo. Otro agudo conflicto es el producido en la provincia cuzqueña de Espinar, en el cual un importante sector de la población se opone a la actividad minera de la empresa *Xstrata Tintaya*, debido a los niveles de contaminación que produce y los escasos beneficios que genera para el desarrollo de la provincia. El saldo ha sido hasta ahora la muerte de dos manifestantes y el arresto del alcalde de la provincia, quien apoya las manifestaciones contra la minera. También en los momentos en que esto se escribe, el gobierno nacional viene intentando retomar el diálogo con los grupos movilizados, con la intención de llegar a un buen recaudo. Estos conflictos han tenido la particularidad de que los grupos movilizados han demandado al presidente de la República que cumpla con su promesa de campaña, la cual se resume con la frase "el agua antes que el oro", demanda que se extiende entre la población al comprobar que la forma en

que el nuevo gobierno viene encarando los conflictos socioambientales no se diferencia de la forma en que lo hicieron gobiernos anteriores. Podríamos decir que, a pesar de la buena voluntad que tendría el presidente Ollanta Humala, existen razones estructurales –en términos históricos y políticos– que definen las dinámicas que adquieren los conflictos socioambientales, sobre los cuales proponemos una aproximación en el presente trabajo.

Para cumplir con nuestro objetivo, analizaremos algunos aspectos de los conflictos socioambientales ocurridos durante el gobierno que antecedió a Ollanta Humala, es decir, el segundo gobierno aprista dirigido por Alan García Pérez (2006-2011). En este gobierno los conflictos de tipo socioambiental fueron los de mayor recurrencia, e incluso uno de ellos en particular generó la mayor crisis gubernamental. Proponemos relacionar las dinámicas de los conflictos socioambientales con un fenómeno de mayor envergadura: el discurso neoliberal, presente en el Perú de forma hegemónica desde inicios de la década de los noventa². La pregunta que guiará este trabajo es: ¿qué estarían expresando determinados patrones de los conflictos socioambientales sobre los límites del discurso neoliberal en el Perú?

Los conflictos socioambientales en clave antagónica

Tras la salida del poder de Alberto Fujimori, el Perú registró un importante incremento de la conflictividad social. Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se registraron 1.077 conflictos más que durante el segundo gobierno de Fujimori (Garay y Tanaka, 2009), mientras que en el segundo gobierno aprista esta tendencia no varió³. Según los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, estos pasaron de 84 en julio de 2006 a 214 en julio de 2011, es decir, aumentaron durante los cinco años de gobierno aprista (ver Gráfico 1). En particular, durante el segundo gobierno aprista aumentaron exponencialmente los conflictos socioambientales, los cuales involucraron discrepancias alrededor de las consecuencias sociales y ambientales que generan o generarían proyectos de inversión de diverso tipo, tales como mineros, petroleros e hidroeléctricos (Defensoría del Pueblo, 2011). Así, los conflictos socioambientales pasaron a ser los más numerosos y activos desde marzo de 2007 (Gráfico 2).

En los conflictos socioambientales los sujetos involucrados han sido básicamente tres: el Estado, las organizaciones sociales de diverso tipo y las empresas inversionistas. En no pocos casos, el Estado no cumplió con su función de regulación y de control a las empresas inversoras, lo cual generó que los problemas suscitados por la actividad extractiva sean abordados asimétricamente por la población y los empresarios. El Estado basó su accionar en un marco de normas ambientales débil, careció de institucionalidad y de recursos para liderar la gestión ambiental. Además, durante el segundo gobierno aprista se mantuvieron los incentivos para los inversionistas, generados a inicios de los años noventa (como el no pago de impuestos a la renta hasta la plena recuperación de la inversión hecha, la devolución anticipada del impuesto general a las ventas y la depreciación acelerada de los activos, entre otros). Esta especie de inacción del

gobierno nacional estuvo contrarrestada por el hecho de que, en más de una ocasión, algunos alcaldes y presidentes regionales apoyaron y en ciertos casos hasta lideraron diversas movilizaciones contra las consecuencias de la actividad extractiva. Cabe destacar también que el déficit de confianza de la población hacia la administración pública se profundizó, ya que múltiples compromisos que el Estado asumió para solucionar los conflictos socioambientales fueron incumplidos (De Echave, 2011).

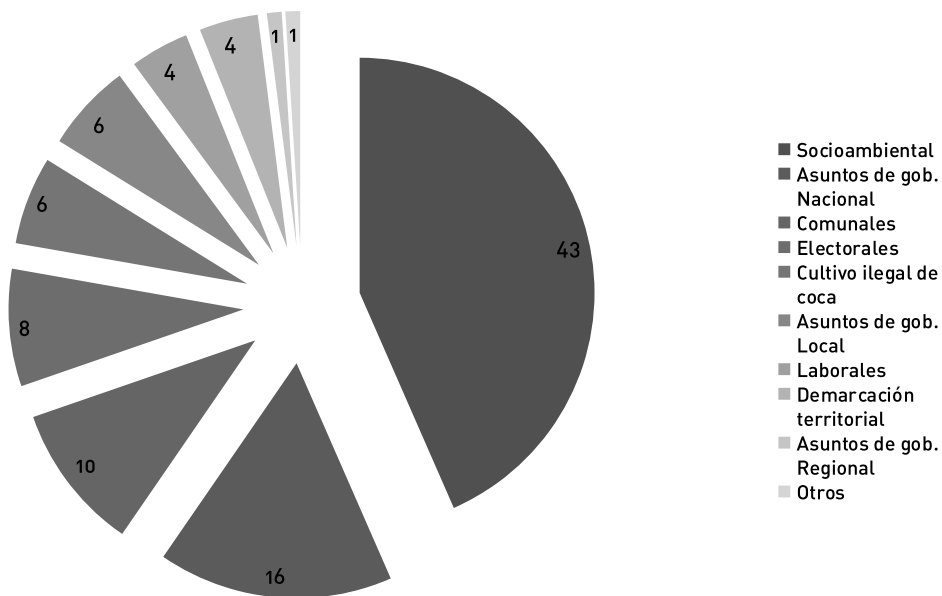
Gráfico 1. Conflictividad durante el segundo gobierno de Alan García (julio 2006-julio 2011)



Activo: el conflicto se ha manifestado públicamente por acción de una de las partes o de ambas, mediante demandas en las que se sienta una posición determinada sobre situaciones que son consideradas amenazantes o dañinas.

Latente: el conflicto no se ha manifestado públicamente, pese a que el problema ha sido percibido y se ha identificado a los actores en controversia. O, habiendo estado activo, las partes han dejado de expresar sus discrepancias.

Gráfico 2. Promedio de conflictos sociales por tipo (julio 2006-mayo 2011)



Fuente: Defensoría del Pueblo (s/f). Elaborado por Duárez (2012).

La permisividad del Estado frente al accionar de las empresas se explicaría, en parte, por la importancia del sector extractivo en la economía nacional y en el erario público. Ejemplo de esto es que el alto crecimiento del producto interno bruto del Perú durante la última década (7,1%) ha estado impulsado principalmente por la actividad minera. La minería llegó a representar el 25% del total de los impuestos internos y el 49% del impuesto a la renta en el 2007, mientras que su participación en el total de las exportaciones es de más de 60%. Por tanto, los recursos que generó –y genera– para las finanzas del Estado fueron sumamente importantes, llegando a representar en el 2011 el 50% de los recursos económicos que el gobierno nacional transfirió a los gobiernos regionales y locales (Monge; Viale y Bedoya: 2011). De ahí el constante interés que tuvo el segundo gobierno de García en promover mayores inversiones en el sector extractivo en general y en la actividad minera en particular.

En el caso de las empresas, se han visto beneficiadas por una serie de decisiones tomadas desde el Estado. Se promovieron condiciones legales y fiscales favorables para las empresas en el campo de la extracción petrolera, gasífera, minera, maderera e hídrica. En el caso particular de las empresas mineras, han rebasado en los últimos años su tradicional zona de intervención alto andina, expandiéndose hacia valles transandinos, zonas de costa y en la Amazonía alta y baja. Este escenario de expansión explica en parte la disputa por el control de tierras agrícolas y de recursos hídricos, que agregados a los temas de contami-

nación, de desplazamiento de poblaciones y actividades productivas se convirtieron en los aspectos centrales que estuvieron en la base de diversos conflictos socioambientales. Frente a la alta conflictividad social, las propuestas de las empresas mineras se orientaron principalmente a la creación de mecanismos voluntarios de autorregulación y de aumento de contribuciones económicas. Lo primero se expresó en códigos de conducta y prácticas de responsabilidad social empresarial, que buscaron lograr un entorno favorable para el desarrollo de sus actividades. Lo segundo se expresó en la creación del llamado “óvolo minero”, por el cual 39 empresas se comprometieron a aportar el 3,75% de sus utilidades netas durante 5 años para proyectos sociales. El desarrollo de estos mecanismos supuso, por un lado, que las empresas reconozcan la existencia de ciertas externalidades negativas producto de sus actividades y, por otro lado, que dichos agentes asuman el control de las externalidades sin la necesidad de que el Estado cree nuevos instrumentos de regulación que desincentiven a la inversión privada (De Echave, 2011).

... los conflictos socioambientales son el síntoma de algo más complejo que el cuestionamiento a la gobernabilidad democrática, pues apuntan a la imposibilidad de que el orden neoliberal se realice plenamente

Las organizaciones sociales, por su parte, adquirieron una lógica en donde los “frentes de defensa” o los “comités de lucha” buscaron posicionar sus agendas, las cuales muchas veces han supuesto posiciones anti mineras. En más de una oportunidad, las demandas de dichas organizaciones evidenciaron que los conflictos socioambientales manifiestan la relación entre las causas inmediatas (la contaminación de ríos, por ejemplo) y los problemas estructurales, lo cual está relacionado con los niveles de violencia que adquirieron determinados conflictos, su larga duración y la cohesión social que generaron. Frente a la inacción del Estado, las organizaciones sociales encontraron –y encuentran– en la presión pública, en algunos casos incluso vía actos de violencia, la forma de lograr alguna solución para sus demandas. Por otra parte, las organizaciones sociales involucradas en conflictos socioambientales no lograron una articulación a nivel nacional; por el contrario, se caracterizaron por su fragmentación. Sin embargo, en algunas experiencias se evidenció la posibilidad de lograr ciertas articulaciones entre diversos sujetos –municipios locales, iglesias, rondas campesinas, organizaciones no gubernamentales– a partir de agendas consensuadas (De Echave, 2011).

Para autores como Grompone y Tanaka (2009), la fragmentación de los conflictos sociales en el Perú de los últimos años manifiesta dos dimensiones: una horizontal y otra vertical. La primera refiere a los enfrentamientos entre los sujetos sociales –los autores los llaman actores– que comparten condiciones de vida relativamente similares pero compiten por la atención del Estado, lo cual genera dispersión. La segunda dimensión refiere a la desconexión entre la población y las instituciones del Estado, además de los partidos y organizaciones

políticas. Estas dos dimensiones de la fragmentación explicarían por qué los conflictos socioambientales son por lo general de carácter local, tendientes a asumir la forma de “estallidos” esporádicos, sin seguir caminos institucionales y sin constituirse como sujetos políticos de largo aliento. Por tal motivo, los autores concluyen que la dinámica de los conflictos sociales en el Perú pone en evidencia la inexistencia de un sistema de representación legítimo y estable; en otras palabras, la inexistencia de un sistema de partidos políticos consolidado. De ahí que los conflictos sociales sean entendidos por Grompone y Tanaka como cuestionamientos a la gobernabilidad democrática.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que los conflictos socioambientales son el síntoma de algo más complejo que el cuestionamiento a la gobernabilidad democrática, pues apuntan a la imposibilidad de que el orden neoliberal se realice plenamente. Es decir, los conflictos sociales pueden ser concebidos como fenómenos que manifiestan el carácter antagonista del discurso neoliberal, *evidenciando sus límites*. Entender a los conflictos socioambientales como antagonismos supone reconocer que toda identidad política demanda una frontera, un nosotros-amigo que se enfrenta a otro-enemigo que lo amenaza (Stäheli, 2008). Los conflictos socioambientales, al ser entendidos como antagonismos que definen identidades políticas, se evidencian como parte del propio discurso neoliberal, pues no son una exterioridad que con el despliegue del neoliberalismo pudiera ser, en un futuro, eliminada. Por ello, según el discurso neoliberal los conflictos socioambientales son generados por los “antisistema”, es decir, el otro-enemigo, aquel que se opone a la actividad minera, aquel que frena “el desarrollo del país”⁴.

Para profundizar nuestro análisis desde la noción de antagonismo, presentamos brevemente un conflicto socioambiental ocurrido en la localidad amazónica de Bagua durante el segundo gobierno aprista. Por sus consecuencias, este conflicto puede ser identificado como el que generó la mayor crisis que sufrió dicho gobierno. Seguidamente enfatizaremos cómo este antagonismo manifiesta la fractura del discurso neoliberal.

El conflicto de Bagua⁵

En el mes de diciembre del año 2007, el presidente Alan García solicitó al Congreso de la República facultades legislativas en una serie de temas que su gobierno consideraba relevantes para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dichas facultades fueron concedidas para un período no mayor de 180 días. Meses después, exactamente en junio de 2008, el gobierno aprobó más de 100 decretos legislativos, entre los cuales se destacaron aquellos que buscaban modificar el marco legal concerniente a la venta, alquiler y otros usos de tierras en propiedad de comunidades indígenas. Se evidenció, así, la intención del gobierno de generar condiciones favorables para la inversión privada en propiedades que mantenían un estatus colectivo.

La respuesta de las poblaciones indígenas no se hizo esperar. En agosto de 2008 la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) inició una huelga general que duró hasta el mes de septiembre del mismo año. La demanda fue la derogatoria de los decretos legislativos que consideraban po-

nían en riesgo a sus tierras y al ecosistema. Ante esta demanda, el congreso derogó 2 decretos legislativos, aduciendo que violaban la Constitución, acordando además con la AIDSESP la creación de una comisión de trabajo para evaluar los decretos no derogados, que la asociación consideraba violatorios a los derechos de sus representados. Este acuerdo permitió el levantamiento de la huelga.

En el mes de diciembre de 2008, dicha comisión de trabajo presentó al congreso su reporte sobre los decretos legislativos, con la intención de que sean debatidos en el pleno. Sin embargo, el debate se pospuso hasta el mes de febrero de 2009 debido a que los congresistas salían de vacaciones. En dicho mes tampoco se debatió sobre los decretos en el congreso, por lo cual la AIDSESP mandó cartas a dicha institución y al primer ministro recordándoles su promesa de revisar los decretos y de debatir el reporte. Al no encontrar respuesta, los líderes locales y regionales de la AIDSESP decidieron reiniciar la huelga en abril de 2009. El gobierno respondió imponiendo el estado de emergencia en 5 regiones del país.

Luego de 55 días de huelga general en la amazonía peruana, exactamente el 5 de junio de 2009, se generó la represión. Por la mañana de dicho día las fuerzas policiales, con el apoyo del ejército, intentaron desbloquear la carretera “Fernando Belaúnde” cerca de la capital provincial de Bagua, atacando a los manifestantes. Seguidamente, las fuerzas del orden desalojaron también de una estación de bombeo de petróleo a indígenas que habían tomado el lugar días atrás. El resultado de la intervención fue, según las cifras oficiales, 24 policías y 10 indígenas muertos. La huelga continuó después de la confrontación, hasta que el gobierno aceptó su derrota y el congreso aprobó la derogación de los decretos legislativos. Posteriormente, el primer ministro y su gabinete renunciaron.

Tras el conflicto se decidió la creación de una comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua. Esta comisión presentó su informe en diciembre de 2009, señalando en sus conclusiones –las cuales no fueron reconocidas por todos sus miembros– que las causas del enfrentamiento fueron principalmente la acción de actores externos y la falta de comunicación por parte del gobierno para explicar los decretos legislativos a la población amazónica. Es decir, se asumió básicamente la posición que sobre el conflicto tuvo el gobierno.

Si seguimos el análisis propuesto por Laclau (2006) podemos reconocer cómo el conflicto de Bagua, entendido como un antagonismo, escapa a la aprehensión conceptual del discurso neoliberal. Veamos: 1) los términos de intercambio de los minerales y del petróleo en el mercado mundial son favorables para el Perú, el cual cuenta con importantes recursos extractivos; 2) de este modo, el gobierno tiene un incentivo para incrementar las inversiones en dicho sector; 3) como resultado, comienzan a promover inversiones en nuevas tierras, lo cual afecta a comunidades indígenas tradicionales de la sierra y la selva; 4) por lo tanto, la población afectada no tiene otra alternativa más que resistir las acciones gubernamentales. Si bien el discurso neoliberal puede ser capaz de incorporar este último eslabón, acusando a los “antisistema” de las revueltas, este no tiene lugar a través de su propia aprehensión de lo que debería ser el orden social, sino que debe apelar a su exterior constitutivo: el ellos-enemigo. De

esta manera se evidencia la fractura de la continuidad armoniosa del discurso neoliberal, en donde si bien los responsables no son reconocidos como parte del nosotros-amigo, resultan ser constitutivos para el discurso mismo.

Ahora bien, el concepto de antagonismo no sólo nos permite reconocer analíticamente el límite del discurso neoliberal –haciendo evidente que los conflictos socioambientales son elementos constitutivos del mismo–, sino que, además, nos permite identificar la deuda simbólica del neoliberalismo como ideología. Veamos.

Patrones de los conflictos socioambientales y deuda simbólica neoliberal

Si asumimos como Žižek (2003) que la ideología actúa en la propia simbolización de la realidad, y que aquella es incapaz de “cubrir” por completo lo real, identificaremos la existencia de una deuda simbólica pendiente, irredenta en la acción de todo discurso político. Este real no simbolizado aparecerá en los antagonismos bajo lo que el filósofo esloveno llama “apariciones espectrales”. Así, el espectro manifestará aquello que se le escapa a la realidad, o a la sociedad simbólicamente estructurada; lo primordialmente reprimido en ella, aquello que desestabiliza al orden fundado.

Teniendo en cuenta esta noción de deuda simbólica pasemos ahora a profundizar en algunos de los patrones estructurales de los conflictos socioambientales en el Perú. Estos patrones son fenómenos recurrentes en los conflictos socioambientales, los cuales se refieren a: i) lo indígena como subordinado-excluido en el discurso neoliberal; ii) la inestabilidad de la hegemonía neoliberal; y iii) el Estado como administrador precario del orden social.

Lo indígena como subordinado-excluido en el discurso neoliberal

Los conflictos socioambientales de los últimos años han implicado disputas por territorios en donde poblaciones indígenas campesinas se han visto afectadas⁶. Estos conflictos han evidenciado una serie de desencuentros y tensiones culturales reproducidos desde el propio discurso neoliberal. Dichos desencuentros y tensiones se han expresado entre el Estado y las empresas, por un lado, y las poblaciones indígenas campesinas, por otro; entre la capital (donde se toman las decisiones vinculantes) y las provincias (donde se ejecutan los proyectos extractivos); entre las lógicas de mercado y las instituciones colectivas. Es decir, los conflictos socioambientales involucran elementos que rebasan la sola explotación de los recursos naturales en un lugar determinado; son en muchos casos conflictos por la producción del territorio en términos de la relación que se pretende entre los pobladores y el ambiente, de cómo debería ser utilizado y administrado, de quiénes deberían hacerse cargo del mismo y de cómo se vincularía con el resto de territorios (Bebbington, 2011:30-31). Ahora bien, el discurso neoliberal ha mostrado serias limitaciones para simbolizar lo indígena campesino e incluirlo en su imaginario, manifestando su deuda simbólica. Lo indígena campesino como identidad aparece en algunos casos subordinado dentro de la propia lógica del discurso neoliberal, pues este ha apelado a una

representación en donde lo indígena queda en un segundo lugar ante la demanda de un mercado global por individuos competitivos. A la identidad indígena campesina le quedaría elegir entre asumir el “reto de modernizarse” o aceptar ser un objeto de exhibición del circuito turístico nacional. En otros casos, el discurso neoliberal excluye de su simbolización a la identidad indígena campesina, convirtiéndola en una especie de *residuo* de la historia del Perú que imagina⁷. Es decir, la identidad indígena campesina en determinadas disputas políticas no ha sido representada al interior del discurso neoliberal, imposibilitando su inclusión. La dinámica de varios de los conflictos socioambientales generados durante el segundo gobierno aprista manifiestan esta situación⁸. Ahora bien, esta deuda simbólica del discurso neoliberal estaría generando entre la población campesina la redefinición de una creencia, según la cual el progreso está reñido con su condición de indígena. Según Pajuelo (2010) la acción de las poblaciones demandantes en los conflictos socioambientales vendría reivindicando los rasgos culturales indígenas de la sierra peruana. Estaríamos tentados a incluir también a la población de la selva peruana.

La inestabilidad de la hegemonía neoliberal

Los conflictos socioambientales, si bien no han estado exentos de la fragmentación –sobre la cual ya hicimos referencia–, han logrado evidenciar como ningún otro tipo de conflicto el carácter inestable de los consensos neoliberales. En el citado trabajo de Bebbington, este autor destaca que en algunos casos las resistencias de las poblaciones frente a proyectos mineros han logrado cambiar las formas de desarrollo territorial y las prácticas de responsabilidad social asumidas por las empresas. Por ello, el autor afirma que las movilizaciones involucradas en los conflictos socioambientales han tenido efectos materiales en el desarrollo de las localidades. Podemos volver al conflicto de Bagua para graficar lo que Bebbington afirma: a partir de dicho conflicto los pueblos indígenas de la amazonía lograron ser reconocidos como interlocutores válidos frente al Estado, la elaboración de una ley de consulta previa a la población indígena u originaria que vea afectado su territorio por proyectos extractivos y la suspensión definitiva de las actividades de la minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor (Durand, 2010). Es decir, si bien las demandas del conflicto de Bagua no lograron articular, posteriormente, un proyecto nacional alternativo, sí manifestaron la inestabilidad de los consensos sobre los cuales se basa el discurso neoliberal en el Perú. Incluso –y vinculado con lo indígena como subordinado-excluido en el discurso neoliberal– el conflicto de Bagua tuvo la capacidad de enunciar una demanda históricamente postergada, referida a la inclusión de la población indígena campesina dentro de la comunidad política nacional.

El Estado como administrador precario del orden social

Los conflictos socioambientales son síntoma también de las debilidades del Estado peruano en dos formas, en cuanto su presencia en el territorio nacional y su precariedad administrativa. El Estado y sus limitaciones, así como lo indígena campesino antes mencionado, es un problema histórico del Perú republicano que el discurso neoliberal no ha logrado saldar. Por un lado, la promoción y eje-

cución de nuevas inversiones mineras y petroleras se produjeron en territorios donde el Estado ha tenido una presencia y accionar bastante limitadas. Estos territorios se insertaron de alguna forma al mercado sin una mayor inclusión de su población en la comunidad política nacional, lo cual demandaba un Estado que asegure el ejercicio de derechos por parte de la población afectada. Ahora bien, a diferencia de décadas pasadas, la ausencia del Estado también habría respondido a cálculos, tácticas y procedimientos de ejercicio de poder para “dejar hacer” al mercado (Scott, 2010). Por otro lado, el Estado se mostró también incapaz de canalizar las demandas de poblaciones afectadas por las actividades extractivas, desbordándose la conflictividad social. La precariedad del Estado, principalmente a nivel local y regional, hace que las diferentes demandas de las poblaciones afectadas no encuentren cauces institucionales efectivos. Esta situación evidencia que los mecanismos de participación y concertación promovidos desde la “transición democrática” posterior a Fujimori han sido por lo general incapaces de procesar las demandas de la población (Grompone y Tanaka, 2009). De esta manera, en los conflictos socioambientales predominó la confrontación, pues esta se muestra como el mecanismo más efectivo para llegar a dialogar con el Estado (Caballero y Cabrera, 2008). La distancia entre el Estado y la población afectada por los proyectos extractivos –en términos simbólicos y administrativos– habría abonado a la reproducción de un discurso oficial que criminalizó a la protesta social.

...esta deuda simbólica del discurso neoliberal estaría generando entre la población campesina la redefinición de una creencia, según la cual el progreso está reñido con su condición de indígena

En nuestro análisis de los conflictos socioambientales hemos hecho referencia a problemas históricos, es decir, a cuestiones que han estado latentes a lo largo de la experiencia republicana del Perú. Para cerrar este trabajo planteamos algunas reflexiones al respecto, rastreando cómo algunos elementos del discurso neoliberal referidos a los conflictos socioambientales muestran la pervivencia –no sin ciertas variaciones– de antiguos discursos políticos desarrollados en el Perú.

¿Neoliberalismo como novedad absoluta? Los elementos del Estado oligárquico en el discurso neoliberal peruano a propósito de los conflictos socioambientales

¿El neoliberalismo como una forma particular de significar lo social es una total novedad en el Perú? Parecería que no, pues apela a elementos propios de representaciones sociales antes presentes en el país. Es decir, el discurso neoliberal podría entenderse como la compleja vinculación de cambios y continuidades en el imaginario social. Pensando a la ideología como una matriz generativa que regula lo visible e invisible, lo imaginable y lo no imaginable en la expe-

riencia social, Žižek (2003) sostiene que esta matriz puede descubrirse en la dialéctica entre lo “viejo” y lo “nuevo” cuando, por ejemplo, un acontecimiento que se inscribe en la lógica del orden existente es percibido como una ruptura radical. El neoliberalismo como acontecimiento en el Perú es pensado como una ruptura radical frente a un pasado marcado por la pobreza, el caos y la violencia. Cierta literatura identifica a los años noventa como el inicio de una “revolución capitalista” o “los años del gran cambio”. Así, lo “viejo” (apelando a un imaginario referido a la hiperinflación, el caos y la violencia de los años ochenta) habría sido superado por el neoliberalismo, es decir, lo “nuevo”. Sin embargo, podemos sostener que el imaginario propio del discurso neoliberal no sería tan novedoso como parece.

Profundicemos en aquellos elementos del discurso neoliberal que consideramos presentes en antiguos imaginarios sobre el Perú republicano, sin perder de vista a los conflictos socioambientales. Iniciemos nuestra argumentación desde el siguiente suceso: el mismo día del enfrentamiento en Bagua, el presidente García, refiriéndose a la población involucrada en la huelga amazónica, dio las siguientes declaraciones a la prensa: “Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase, que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos ‘tú no tienes derecho de venir por aquí’; de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”⁹.

En sus declaraciones, Alan García hizo dos distinciones que nos llaman la atención: nativos/ciudadanos de primera clase y nativos/peruanos. Estas dos distinciones niegan a los nativos, a los indígenas amazónicos, tanto en su condición de ciudadanos como de peruanos, pues por sus acciones llevan al país hacia la irracionalidad y lo primitivo. Estas declaraciones son sólo un ejemplo de la manera en que García, en diferentes columnas de opinión y en declaraciones a la prensa, hizo referencia a distinciones de índole social y racial que manifestaron una lógica de exclusión latente en el discurso neoliberal¹⁰. Además, en diferentes oportunidades, el líder aprista se refirió a la Amazonía como un territorio baldío en espera del desarrollo, desconociendo las manifestaciones socioculturales y económicas ya presentes ahí (Bebbington, 2011).

Los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo (1987) estudiaron a la oligarquía del Perú de finales del siglo XIX. Según estos autores, dicha configuración política construyó un imaginario basado en la exaltación de los elementos hispanos y en el menosprecio u omisión de la tradición indígena. La unidad de la nación estaba representada por la oligarquía misma, por lo que todo intento de subvertir el orden que ella custodiaba significaba un atentado contra los intereses nacionales. Consideramos que este elemento del imaginario oligárquico también está presente, noventa años después, en el imaginario neoliberal, no sin ciertas variaciones. Las propias dinámicas de los conflictos socioambientales son prueba de ello¹¹.

Según Burga y Flores Galindo, la oligarquía estableció desde fines del siglo XIX un dominio casi absoluto sobre “la sociedad peruana”. Este dominio se basó en un Estado excluyente, caracterizado por el débil desarrollo de sus aparatos administrativos, por la privatización del poder público y la violen-

cia de clase dirigida hacia el campesinado indígena. Las características de este Estado manifestaban la carencia de un sustrato cultural común (distintas lenguas, diferente educación básica, etc.) entre la oligarquía y las clases subalternas, lo cual dificultaba la constitución de un consenso alrededor de la oligarquía.

Si bien en la actualidad podríamos identificar en el país mayores indicios de un sustrato cultural común, mucho del déficit del Estado oligárquico persiste. Las tensiones del Estado con lo indígena –evidenciados en los conflictos socioambientales– a nivel institucional, legal y de políticas públicas seguirían respondiendo a lógicas excluyentes (Pajares, 2009). Estas lógicas se combinarían con prácticas de subordinación de la población frente a la promesa neoliberal del ascenso social.

Ahora bien, el Estado oligárquico estaba vinculado a una mentalidad oligárquica. Según Burga y Flores Galindo, uno de los elementos de dicha mentalidad fue la violencia y el paternalismo en la relación entre la oligarquía y las clases populares. La violencia en la relación entre la oligarquía y las clases populares se expresó principalmente en la explotación del trabajo en las haciendas, justificada por una supuesta inferioridad étnica del indígena. El paternalismo, por su parte, se justificaba por el deber de proteger al inferior o inválido y en la primacía de la voluntad del hacendado sobre las leyes, manifestación de la privatización de la vida pública y del débil desarrollo estatal. En pocas palabras, el estatus de ciudadano era negado a la población indígena, negación presente en el Estado oligárquico que pareciera pervivir en las declaraciones de García sobre los indígenas amazónicos que participaron en el conflicto de Bagua: “Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase”.

Visto en perspectiva histórica, el discurso neoliberal a la peruana al parecer no es tan novedoso. La apelación del gobierno de García a una explicación sobre las causas del conflicto socioambiental de Bagua basada en la manipulación que sufrieron los indígenas por los “antisistema” reproduce esta imagen de la condición inferior del indígena, incapaz por sí mismo de entender “lo que realmente sucede”.

Para Burga y Flores Galindo, la oligarquía de finales del siglo XIX en el Perú fue una clase dominante mas no una clase dirigente. Esto último ni siquiera se lo propusieron, según los historiadores. A diferencia de ello, nosotros consideramos que el discurso neoliberal sí ha tenido pretensión dirigente, es decir, pretensión hegemónica. Ahora bien, la coerción y la violencia presentes en los conflictos socioambientales manifiestan la precariedad del discurso neoliberal, frente a la cual podría redefinirse para pervivir, o para ser subvertido.

A modo de conclusión

Los conflictos socioambientales en el Perú contemporáneo están expresando, en términos estructurales, las dificultades que tiene el discurso neoliberal para articular en su visión de país a importantes sectores de la población nacional, históricamente relegados. Dichos conflictos muestran el carácter

antagónico del neoliberalismo, el cual define una frontera política amigo/enemigo que influye en el desarrollo de aquellos. En tal sentido, los conflictos socioambientales no son un externalidad del discurso neoliberal, sino que más bien responden al propio despliegue de este último. Además, los conflictos socioambientales muestran una serie de patrones referidos a: i) lo indígena como subordinado-excluido en el discurso neoliberal; ii) la inestabilidad de la hegemonía neoliberal; y iii) el Estado como administrador precario del orden social. Estos patrones responden a problemas históricos del Perú republicano que el neoliberalismo ha sido incapaz –hasta ahora– de resolver, los cuales relativizan la novedad absoluta de este último como generador de orden social.

Frente a ello, Ollanta Humala ganó la presidencia de la República difundiendo entre la población un mensaje reformista en lo económico y social. Sin embargo, a menos de un año de haber sido elegido, su gobierno no muestra una clara dirección política, evidenciando más bien confusión e ineptitud. Las formas en que el nuevo gobierno encaró los conflictos socioambientales referidos al inicio de este trabajo alimentan esta percepción, añadiendo una sensación de continuidad antes que de ruptura en relación a los gobiernos anteriores. Como hemos visto, los conflictos socioambientales manifiestan problemáticas profundas que el presidente Ollanta Humala deberá enfrentar si busca realizar la “gran transformación” que anunció durante toda su campaña electoral... si es que esto aún le interesa.

Bibliografía

- Bebbington, Anthony 2011 *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos/Centro Peruano de Estudios Sociales).
- Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto 1987 *Apogeo y crisis de la República Aristocrática* (Lima: Rikchay Perú).
- Caballero, Víctor y Cabrera, Teresa 2008 “Conflictos sociales en el Perú, 2006-2008” en Toche, Eduardo (comp.) *Por aquí compañeros, aprismo y neoliberalismo* (Lima: DESCO).
- De Echave, José 2011 “Tendencias de la minería y transiciones al post extractivismo” en Toche, Eduardo (comp.) *Ajustes al modelo económico. La promesa de la inclusión* (Lima: DESCO).
- Durand, Anahí 2010 “Un año de mil meses... Repercusiones de los sucesos de Bagua en la política y la protesta social” en Amayo, Enrique *et al.* *Democracia, desarrollo y otras fantasías* (Lima: DESCO).
- García, Mariel 2011 “Gobernar al decretazo: los peruanos del hortelano y los límites del modelo de Alan García” en Alfaro, Santiago *et al.* *El quinquenio perdido. Crecimiento con exclusión* (Lima: DESCO).
- Garay, Carolina y Tanaka, Martín 2009 “Las protestas en el Perú entre 1995 y el 2006” en Grompone, Romeo y Tanaka, Martín (eds.) *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

- Grompone, Romeo y Tanaka, Martín 2009 "Las nuevas relaciones entre protestas sociales y política" en Grompone, Romeo y Tanaka, Martín *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).
- Laclau, Ernesto 2006 *La razón populista* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Monge, Carlos; Viale, Claudia y Bedoya, Felipe 2009 "La reconcentración de los recursos naturales... más poder al poder" en Ballón, Eduardo *et al. Luces y sombras del poder* (Lima: DESCO).
- Monge, Carlos; Viale, Claudia y Bedoya, Felipe 2011 "Las industrias extractivas con Alan García y los retos de Ollanta Humala" en Alfaro, Santiago *et al. El quinquenio perdido. Crecimiento con exclusión* (Lima: DESCO).
- Monge, Carlos; Portocarrero, León y Viale, Claudia 2009 "La democracia peruana agoniza en la curva del diablo" en Amayo, Enrique *et al. Del hortelano su perro. Sin espacio ni tiempo histórico* (Lima: DESCO).
- Pajares, Erick 2009 "Poder y recursos naturales en el Perú: actores estratégicos en la sociedad de mercado" en Ballón, Eduardo *et al. Luces y sombras del poder* (Lima: DESCO).
- Pajuelo, Ramón 2010 "Movimientos indígenas y política nacional en los Andes: ideas para un balance" en Amayo, Enrique *et al. Democracia, desarrollo y otras fantasías* (Lima: DESCO).
- Portocarrero, Gonzalo 2010 "Los fantasmas del patrón y del siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana" en Portocarrero, Gonzalo; Ubilluz, Juan Carlos y Vich, Víctor (eds.) *Cultura política en el Perú* (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú).
- Scott, Rogelio 2010 "La supresión de lo comunitario en los Andes mineros. El caso de La Rinconada como paradigma de la construcción de la mentalidad capitalista en nuestra época" en Portocarrero, Gonzalo; Ubilluz, Juan Carlos y Vich, Víctor (eds.) *Cultura política en el Perú* (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú).
- Stäheli, Urs 2008 "Figuras rivales del límite. Dispersión, transgresión, antagonismo e indiferencia" en Critchley, Simon y Marchart, Oliver (comp.) *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Ubilluz, Juan Carlos 2006 *Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea* (Lima: IEP).
- Vich, Víctor 2010 "El discurso sobre la sierra del Perú: la fantasía del atraso" en *Crítica y emancipación* (Buenos Aires: CLACSO) Año II, N° 3.
- Žižek, Slavoj 2003 "Introducción. El espectro de la ideología" en Žižek, Slavoj (comp.) *Ideología. Un mapa de la cuestión* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Hemerografía

Defensoría del Pueblo en <www.defensoria.gob.pe>.

Notas

1 Este trabajo se basa en los resultados de la tesis de maestría que estoy realizando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México.

2 Por discurso entendemos los significados socialmente compartidos que orientan la acción política. Por ello, nos referimos al neoliberalismo como una estructura discursiva que tiene como elemento central al capitalismo tardío. Sostenemos que el discurso neoliberal en el Perú y América Latina ha supuesto procesos complejos que redefinieron los contenidos y las fronteras de lo político, lo económico y lo social, así como sus interrelaciones.

3 Garay y Tanaka (2009) hablan de protesta social sin explicitar lo que entienden por esta. A partir de la descripción que realizan, identificamos que un elemento central en las protestas es la demanda insatisfecha por el Estado, el cual está presente también en la noción de conflicto social que utiliza la Defensoría del Pueblo. Por tal motivo, utilizaremos a lo largo del trabajo la noción de conflicto social para referir tanto a la información brindada por los autores como a la de la defensoría.

4 Ejemplos de cómo el gobierno, y en particular el presidente de la República, definió dicha frontera política son las 5 columnas de opinión que este último publicó en la prensa nacional durante los años 2007 y 2009. En dichas columnas, Alan García expresó su visión de desarrollo para el país basada en el libre mercado, y caracterizó a aquellos que se oponen a dicha visión como sujetos que sufren el “síndrome del perro del hortelano” (incapaces de hacer rentables los recursos con los que cuentan y que a su vez entran en la iniciativa de aquellos que sí tienen los medios para hacerlo), “antisistemas” incapaces de “ver la realidad”.

5 Para esta sección nos basamos en los trabajos de Durand (2010) y Monge; Portocarrero y Viale (2009).

6 Nos referimos a la población indígena campesina como sujeto político involucrado en los conflictos socioambientales apelando a una doble caracterización, ya que el Perú —a diferencia de otros países andinos como Bolivia o Ecuador— no ha contado con un movimiento indígena sólido que incida en el Estado. En el Perú, la identidad campesina ha sido más recurrente que la indígena en los discursos públicos; sin embargo, como señalaremos más adelante, en los últimos años se estarían generando algunas transformaciones al respecto. El vínculo indígena campesino busca llamar la atención sobre ello.

7 Vich (2010) ha analizado los principales imaginarios sobre la sierra peruana, sosteniendo que estos han obstaculizado la inclusión de dicha región en un proyecto nacional. Cinco serían los principales imaginarios que han circulado y circulan sobre la sierra peruana según el autor: el primero presenta a

los Andes peruanos como un lugar “estático”, tradicional, resistente a la modernidad; el segundo figura a la sierra peruana como lugar de atraso que debe ser educado tuteladamente; el tercero presenta a la sierra como un territorio difícil de controlar pero lleno de riquezas naturales; el cuarto imaginario nos muestra a los Andes como lo más profundo y auténtico del Perú (heredero de un pasado milenarista) sin correlato con los indígenas del presente; y el quinto nos muestra a la sierra como un espacio donde el capitalismo y la modernidad deben ingresar a como dé lugar. Esta última sería la representación imperante de la sierra peruana durante el segundo gobierno de Alan García. Para Vich estos imaginarios se encuentran en la actualidad superpuestos unos a otros en diferentes momentos y circunstancias.

8 Un señalamiento reiterativo de la población afectada por proyectos extractivos es que ni el gobierno ni las empresas entienden “su forma particular de relacionarse con la naturaleza”.

9 Estas declaraciones pueden verse en You Tube, en el video titulado: “Alan García: Estas personas no son ciudadanos de primera clase”.

10 Mariel García (2011) señala que las columnas de opinión de García referidas al “síndrome del perro del hortelano” lejos de reducir brechas y acercar a los ciudadanos entre sí, refuerzan las jerarquías sociales, el racismo y la exclusión.

11 Autores como Portocarrero y Ubilluz ya han planteado la hipótesis de que el neoliberalismo se ha vinculado en el Perú con viejos imaginarios. Ambos refieren a los “fantasmas del patrón y del siervo” como manifestaciones de un pasado colonial y discriminatorio que se hacen presentes en la sociedad peruana contemporánea. Para Portocarrero, la crisis de autoridad en el Perú estaría vinculada con el no acatamiento o resistencia de la población frente a las leyes dictadas por el Estado, situación que tendría una raíz histórica muy profunda. En palabras del autor (2010: 13), “el hecho es que la legitimidad tradicional, asociada a la dominación étnica y el racismo, no ha sido reemplazada por una legitimidad moderna, burocrático legal. En otras palabras, estamos dejando de ser siervos pero no somos aún ciudadanos”. Ubilluz, por su parte, al analizar el sistema laboral peruano, sostiene que si bien los empleados manifiestan una mayor autonomía frente a alguna colectividad (el individualismo capitalista), hoy más que nunca actúan como súbditos frente a la voluntad del patrón. De esta manera “el fantasma oligárquico y la ética individualista se conjugan para consolidar un sistema laboral en el que el agravio al empleado es percibido como la norma de los nuevos tiempos, como las nuevas reglas de juego para sujetos que ya no son ciudadanos sino súbditos-que-ascienden-socialmente” (2006: 140-141).

Debate

**Para una caracterización de la
crisis histórica de nuestra época**

José Guadalupe Gandarilla Salgado

Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época

JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADO

Investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Doctor en filosofía política por la UAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordinador del seminario permanente "Marx revisitado: posiciones encontradas", que se desarrolla en el CEIICH-UNAM.

Resumen

Desde hace al menos cuatro décadas, el debilitamiento del Estado social y su transformación en el principal promotor de la privatización de los bienes nacionales ha sido tan sólo uno de los rasgos de la crisis que estamos atravesando a nivel mundial. De acuerdo con José Guadalupe Gandarilla Salgado, esta crisis no es sólo del capitalismo, en su modalidad neoliberal de acumulación, sino también del proyecto de modernidad, que en algún momento de la historia fue absorbido por la lógica capitalista. Se trata, entonces, de una crisis civilizatoria que ha alcanzado, según el autor, al pensamiento crítico y las teorías hasta ahora formuladas para su explicación. Con una mirada marxista, el autor ofrece una serie de elementos útiles para realizar una caracterización de esta crisis, particularmente de su último capítulo, el más reciente, conocido como globalización. Es así como, ante el escenario catastrófico que dicha ofensiva representa para la vida en el planeta, el pensamiento crítico debería buscar, nos dice el autor, alternativas críticas no sólo al desarrollo, sino a la propia modernidad.

Abstract

For about four decades, the weakening of the social State and its transformation into the leading proponent of the privatisation of national goods has merely been one of the many features of the current global crisis we are currently going through. According to José Gandarilla, this is not just a crisis of capitalism, in its neoliberal approach to accumulation, but also one of the project of modernity, which at some point in history was assimilated by the capitalist logic. This is then a civilising crisis which has affected, according to the author, critical thinking and the theories advanced up to now to provide explanations. From a Marxist point of view, the author suggests a number of useful pointers to provide a description of this crisis, especially in its current and most recent configuration, globalisation. The author says that in view of such a catastrophic scenario for life on the planet, critical thinking should look for alternatives for criticism of development and also of the very same modernity.

Palabras clave

Modernidad, crisis, globalización, pensamiento crítico.

Key words

Modernity, crisis, globalisation, critical thinking.

Cómo citar este artículo

Gandarilla Salgado, José 2012 "Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

"La insolencia de la civilización que quiere ser consciente de sí misma y mientras tanto se destruye".

Roberto Calasso

De la globalización neoliberal y su crisis

La globalización del neoliberalismo articuló en su conformación la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado, la activación de principios formales e informales de acumulación y el uso de principios legales e ilegales para consolidar sus fines de acumulación y rentabilidad según el exclusivo criterio de la racionalidad instrumental. En efecto, en sus casi cuatro décadas de aplicación e instauración como el nuevo sentido de la época, se registra un incremento en la gestión de los procesos sociales a través de modalidades mercantiles; y un debilitamiento o desmembramiento de ciertas obligaciones del Estado. El incremento es de aquellas funciones en que este dispositivo cumple con servicios de bienestar social o hace de proveedor de salario indirecto. Se debilita el Estado social (disminuyendo subsidios y programas de apoyo) pero se afirma el Estado competitivo (financiando al capital o disminuyéndole las cargas impositivas), se le quitan funciones al Estado y se le retira de sectores estratégicos, pero se tienden a concentrar decisiones en una de sus partes (la del Ejecutivo, por ser el único con el que negocian o tratan los organismos internacionales o supranacionales o, según sea el caso, se criminaliza y judicializa el conflicto y la protesta social, pues así se maniatra el tiempo concreto y constituyente de los movimientos al tiempo abstracto e inviolable de la ley y los tribunales). No consistió en otra cosa la imposición de los criterios del así llamado "Consenso de Washington" (Thwaites Rey, 2010). Se ha convertido, de ese modo, al Estado, en un activo promotor de los procesos de privatización o extranjerización, o bien, de salvataje financiero, pues no se ha ideado otro instrumento de mediación social que pueda cumplir la función de "prestamista en última instancia", de entidad de legitimación colectiva que asegure la transferencia de "nuevas" masas de ingreso que lubriquen y aceiten los ruidos engranajes de los mecanismos de la "máquina financiero bursátil" en que se ha convertido el "capital financiero" del siglo XXI; y con dicho proceder se concreten procesos de externalización económica negativa para amplios contingentes sociales de trabajadores y ciudadanos que por justa razón se indignan y promueven imaginativas e inéditas formas de lucha y resistencia.

Lo que actualmente se muestra en la arena social, y en casi cualquier sitio en el mundo entero, es una situación de conflictividad contra el trabajo y contra el hacer social y político de los grupos que pretenden expresar un sentido de organización colectiva, por encima del individualismo posesivo. Concurrimos, en esta etapa, a una pugna global que se expresa en la pérdida de derechos, y en la pérdida del “derecho a tener derechos”; la disputa por contener la destrucción del régimen de derechos advino así en un lado privilegiado de la lucha de clases. Esto es una ofensiva integral sobre el trabajo que ha involucrado las tres dimensiones temporales que se articulan en este presente problemático y complejo. Hay una clara ofensiva actual pero que es *al pasado* en cuanto aquel fincó una serie de derechos de representación colectiva y de contratación y negociación que el capital no está dispuesto a atender. Hay una *ofensiva en tiempo real* que se está instrumentando paulatina o violentamente (según el grado de inconformismo laboral que se enfrenta) por imponer nuevas condiciones de producción cuyo significado ha sido la expulsión del obrero o su reducción y subalternización ante procesos impulsados por las nuevas estrategias organizacionales, la “producción ajustada”, la reingeniería de los procesos o la importación de desempleo al utilizar patrones y tecnologías ahorradoras de trabajo. Por último hay una *ofensiva* que opera ahora pero *para dificultar la condición de vida futura* del contingente de los trabajadores, en dos planos igual de dañinos, apropiándose de los fondos obreros que prometían la reproducción futura (inmiscuyéndolos a los juegos financieros o financiando los adelantos de capital) y cancelando los derechos de pensiones y jubilaciones para los obreros en activo, bajo la promesa de un evanescente fondo de capitalización individual administrado, justamente, por las entidades que han conducido al desastre actual (financiero, presupuestal, fiscal y de gestión pública).

Lo que este proceso exhibe (acicateado por el estallido de una serie de acontecimientos que pueden combinarse de tal modo que den lugar a una depresión económica de grandes proporciones) es un nuevo tipo de mercado y un nuevo tipo de Estado, pues en dinámicas no lineales, a la hora de establecerse como principios de gobierno y políticas públicas y estatales el sostenimiento del principio de la propiedad capitalista y la obtención de beneficios (sea en el marco de la contingencia económica y de los rescates públicos de los operadores financieros privados), se instrumenta sobre la base de abatir principios universales y a través de la consolidación de objetivos focalizados.

Es por ello que la crisis histórica de nuestra época no consiente una fácil o simplificada explicación: su examen reclama poner en crisis los conceptos mismos con los que se ha procurado analizar las crisis anteriores, o que le han precedido, puesto que su amplitud y las esferas que parece involucrar no sólo son más amplias sino que también están involucradas en su múltiple temporalidad y, por ello, involucran ciertas peculiaridades que han de ser subrayadas. La presente es una crisis no sólo del capitalismo bajo la forma neoliberal de acumulación sino también del proyecto civilizacional moderno al que, en un determinado momento de su instauración planetaria, la forma capitalista de producir terminó por plegar a su lógica. Es así que en su caracterización adquiere una nueva dimensión la relación entre experiencias y expectativas en tres asuntos, cada uno de ellos de espesor muy particular: Modernidad, crisis y crítica. Puesto que, si a lo interno

de lo prometido por la modernidad su ofrecimiento era inmenso en el sentido de nuevas, mayores y mejores expectativas, luego de su instalación en los más diversos complejos civilizatorios, lo que se aprecia es un déficit con relación a éstas, pues las experiencias que su realización efectiva ha acarreado se han quedado muy por detrás. No es el caso, por el contrario, cuando se trata de la crisis de la modernidad capitalista. Ahí cualquier expectativa que se haya aventurado en su momento con relación a su estallido, a las dimensiones involucradas y al curso de sus acontecimientos, se ha quedado muy corta con relación a las experiencias por las cuales las distintas sociedades, y alrededor del mundo entero, atraviesan sin que se vislumbre el derrotero a que esta situación puede conducir. También la experiencia de la crisis es mayor a la expectativa que, desde el aparato crítico de que se disponía, podía haber sido esperada. Es tal vez por esa razón que se requiere formular una nueva teoría crítica, o dotarle de otro sentido (que entre en relevo) a la hasta ahora hegemónica, conocida como Teoría Crítica de la sociedad. A semejante necesidad de un nuevo *corpus* para la discursividad crítica puede estar contribuyendo, también, el que esta misma situación opera en una especie de desfase o desencuentro ubicado en el seno de nuestra actualidad, entre prospectiva y perspectiva, o entre determinación y previsibilidad; justo porque los nuestros son tiempos en que se ha estabilizado la inestabilidad, en que hay certeza en la incertidumbre, caos determinista, complejidades organizadas y entropías que avivan islas neuentrópicas y bolsas de resistencia.

La crisis del capitalismo mundial tiene muy larga data, la cual se ha venido desatando con tal persistencia que se muestra, según fue propuesto hace ya mucho tiempo, como una “crisis permanente”

La crisis del capitalismo mundial tiene muy larga data, la cual se ha venido desatando con tal persistencia que se muestra, según fue propuesto hace ya mucho tiempo, como una “crisis permanente” (Mattick, 1979: 94). Desde inicios de los años setenta del siglo pasado, cuando se vislumbran sus primeros indicios, hasta ahora que sus alcances se han multiplicado, comprende un ciclo temporal de ya casi cuatro décadas y no se aprecian signos de que se haya dado con los elementos contrarrestantes, efectivos ya no para que inauguren un nuevo ciclo sino siquiera para aligerar el descalabro¹. Los instrumentos correctivos a que se ha acudido (generalización del desempleo estructural a todo lo largo y ancho del mundo; intensificación de la precarización de la contratación y de la ocupación para aquellos que pueden conservar su membresía en el mercado de trabajo; crecimiento de los nichos de la economía y el sector informal; ampliación de la escala y la profundidad del empobrecimiento, etc.), no obstante la fiereza con la que han sido implementados, se han revelado ineficaces. No ha sido suficiente con el reciclaje de los dólares luego del *shock* petrolero de 1973; con el endeudamiento del tercer mundo desde inicios de los años ochenta; con la apertura de la cuenta de capital en el sur del mundo y la generalización del mercado de valores y acciones en el mundo entero; ni siquiera con la crisis del socialismo de tipo soviético y la devastación

de ese tipo de sociedades (que si aspiraban a ser lo opuesto del capitalismo terminaron por ser su reflejo); con la creación de las distintas burbujas especulativas (incremento exorbitante de la deuda privada de los hogares, de la deuda pública de los Estados y del desfalque en los contratos de propiedad inmobiliaria); con el arrebato del tiempo futuro de vida o su *vulnerabilización* por el desmantelamiento del sistema de jubilaciones y pensiones; ni con la modificación de la información contable de los grandes emporios o el fraude más descarado; ni siquiera con la devastación y desvalorización del capital que acompañan al despliegue de la guerra global y la realización de las fuerzas destructivas que incuba el capitalismo.

Globalización, extractivismo y autonomías

El episodio de esta larga historia que, en su figura más reciente, es nombrado como globalización, corresponde pues a una ofensiva integral, a una guerra total y prolongada por parte de dicho patrón de poder, para imponer una “dictadura global de la gran propiedad” (Duchrov y Hinkelammert, 2004). Es una estrategia de afianzamiento de un patrón de poder que bajo su forma actual ha experimentado la peligrosa transición de ser “un neoliberalismo de paz” para convertirse en “un neoliberalismo de guerra” (González Casanova, 2002).

El conjunto conformado por la alianza entre explotadores internos y externos no parece ceder en su “acumulación interminable de capital”. La condicionalidad de las medidas económicas, desde los planos financiero y comercial, tan eficaz en el momento de auge del neoliberalismo ha sido puesta en serio cuestionamiento luego del inicio de su crisis, y se agrava a pasos agigantados en cuanto más sectores y ramas de la economía tienden a resentir la baja efectiva o estimada de sus tasas de rentabilidad. Por tal razón, el proyecto de dominación, explotación y apropiación, pareciera estar desplazando su condicionalidad hacia un plano político, militar y territorial recobrando, con el peligro que significa este desplazamiento, su importancia (que nunca dejó de ser mayúscula) tanto la apropiación y expropiación de la riqueza social y pública ya existente, como el *adueñamiento* (privatización) y la pretendida conversión en mercancías y derechos de propiedad de los bienes comunales naturales, estratégicos, genéticos, bióticos y culturales (a través de amplios y profundos procesos de extranjerización u ocupación territorial). Envuelto como está el neoliberalismo en una crisis de su dominación político económica, parece encaminar no sólo al sistema en su conjunto, sino a la civilización en cuanto tal, a la resolución de sus contradicciones en el más profundo plano de su conflictividad, en la devastación material de las fuerzas productivas y en los umbrales de una “guerra de destrucción masiva” y global, capaz de desvalorizar el sobrante de capital o de darle cabida a porciones del mismo que de otro modo permanecerían inutilizadas al no encontrar asidero productivo con niveles aceptables de rendimiento.

La exigencia de inclusión de todo un conjunto de bienes tradicionales, materias primas no renovables, nuevos materiales y recursos estratégicos en las metas, objetivos y carteras de inversión de los grandes consorcios multinacionales; en los esquemas especulativos de los grandes fondos de inversión; o en las manías, pánicos y *cracks* que acompañan a la gran variedad de instituciones e instrumentos

accionarios, impulsa mecanismos directos o indirectos, o en su caso, procesos diluidos socialmente a través de la acción no intencional. Esto es que transmutan el accionar abstracto del sujeto automático capitalista (sin patria ni asidero fijo o estático) en efectivos y concretos procesos de invasión, ocupación territorial y transgresión de la frontera ecológica, lo que da por resultado un macro proceso planetario de traslado de la riqueza (en su forma material, ya no exclusivamente monetaria) del *Sur* (generosamente dotado en megadiversidad) hacia el *Norte* industrializado (con sus incrustaciones de industrialización tardía o trunca en el propio sur), con una incontable proliferación de “efectos no deseados” y “daños colaterales” preferiblemente situados en los costados sureños de la geografía. La combinación resulta perversa y el coctel verdaderamente explosivo; por ello es que la acción de los Estados se convierte en campo de disputa (y de ello no se eximen aquellos que se asumen como o dicen representar un gobierno de o desde los movimientos sociales). Según sea el modo en que los reacomodos hegemónicos se establezcan, la institucionalidad de los Estados puede asumir, en la mayoría de los casos, el encargo de protección de la forma valor que se valoriza (realizando con ello valores de uso destructivos, en estrategias policiales, militares o paramilitares, engullendo lo producido en el sector armamentista) o por el contrario, y no por voluntad de la política establecida sino por el impulso de la lucha de los de abajo y de los afectados directos, ser exigido en tanto entidad privilegiada de la mediación social, para establecer jurisdiccionalmente principios de derecho que otorguen garantías y protección de territorios, comunidades y colectividades. En los espacios de resistencia que alcanzan los mayores grados de politización y que aspiran a construir territorialidades emancipatorias, estas luchas están dando lugar a procesos de autodeterminación y a estrategias de seguridad autogestionadas por las propias comunidades o con base en sus autoridades y códigos consuetudinarios (es el caso, en México, de las “juntas de buen gobierno” en Chiapas, o de la “policía comunitaria” en Guerrero). En aquellos despliegues que logran un alcance mucho más amplio que el de cualquier localidad estas reivindicaciones se comienzan a plasmar en nuevos acuerdos, inéditos compromisos o procesos asamblearios constituyentes que tienden a recobrar el sentido de lo plural (pues al reconocer la diversidad de las culturas, se integra el sentido que a la naturaleza, como espacialidad de lo común y conferida de dignidad propia, le otorgan las formas de socialidad ancestrales o los estratos más avanzados del pensar/hacer alternativo); o bien, establecen y le confieren todo un nuevo sentido al mundo de la vida (*sumak qamaña*, “vivir bien”, del aymara, en Bolivia, o *sumak kawsay*, “buen vivir”, del quechua, en Ecuador), cuando desde la deteriorada república neoliberal se da paso a lo plurinacional.

La peculiaridad de la crisis histórica de nuestra época no deriva de que abarque diversos planos, esto es, que presente un carácter multidimensional, sino que en su progresión ha ido devastando diversos espacios: a) de la producción, circulación, distribución y consumo; b) geográficos, energéticos, ambientales y de los ecosistemas; c) de las “unidades domésticas” hasta urbes enteras o naciones que quedan hechas trizas. La vivencia de tales estragos como “saqueo planificado” que sufren áreas territoriales protegidas, comunidades rurales, campesinos y contingentes obreros no es sino la forma en que el capital externaliza su crisis; el modo

en que se enfrenta con sus “límites relativos” y pareciera acercarse (como una asíntota) a sus “límites absolutos” sin que ello llegue a experimentarse, porque es ese “estado de permanencia en los límites” lo que se vive como crisis. No es otra la caracterización que Marx hace del capital, esa universalidad que sólo se puede expresar en sus formas reales de aparecer, y que en tanto “sujeto automático” que desplaza y subsume al sujeto corpóreo y real experimenta la valorización del valor como autovalorización en la medida en que efectúa constantemente ese pasaje o traspaso “de una forma a la otra [...] sujeto de un proceso en el cual cambiando continuamente las formas [...] modifica su propia magnitud” (Marx, 1984: 188); afirmación que no puede ser entendida sino en correspondencia a cómo, en la primera redacción de su obra, lo ha definido: “El capital es la potencia económica, que lo domina todo, de la sociedad burguesa” (Marx, 1989: 28). El capitalismo en su dinamismo de crecimiento y en su tentativa de acumulación (el tiempo abstracto de su lógica económica) termina por rebasar los ciclos de la naturaleza y los de aquellos elementos (fósiles) que están en su base energética (tiempo concreto de la vida y de la materia). De ahí que el capital desplaza su accionar desde el plano de la mercancía y el dinero, cuando las posibilidades de ganancia ahí se dificultan, hacia los planos en que mejor opera actualmente la extracción de excedentes y riqueza: “la acumulación por despojo”, sin importar que con ello se precipiten “guerras por los recursos” toda vez que, en los hidrocarburos, se llega a los topos de la producción (*Peak Oil*), o en la megaminería a gran escala y a cielo abierto la devastación ambiental y la contaminación de los mantos acuíferos es mayúscula, pues la obtención de los metales preciosos u otros materiales opera con tasas cada vez más bajas (en proporción a los territorios involucrados) pues los “yacimientos de alta ley” están casi agotados. Es el caso también de los megaproyectos hidroeléctricos o de la exportación de los agrocombustibles que no son sino modalidades encubiertas de transferencia del recurso vital hacia esquemas industrializadores y la privación del agua a comunidades enteras: otra forma también de externalizar el “límite ecológico”².

La complejidad de esta crisis exige del pensamiento alternativo que busque sus “otros mundos posibles” ya no en exclusiva como contención o superación del capitalismo, sino al modo de alternativas al desarrollo y a la propia modernidad. Esta situación hace estallar la conflictividad constitutiva que acompaña la larga historia de conformación de la modernidad, la que opera entre el emergente ordenamiento societal que prepara el camino al capitalismo (un sujeto individual racional moderno que se erige en dominante, apropiador, depredador y expropiador ante sus otros, no-humanos y humanos no reconocidos como humanos, degradados en su condición ontológica) y los entramados civilizatorios y culturales preexistentes, que mantienen a mayor resguardo las sabidurías milenarias y los equilibrios centenarios entre las entidades que conforman sus simbolismos, cosmovisiones y mundos de espacialidades más amplias y generosas en su sentido de lo comunitario³.

Los mapas de lo que está en juego y la cartografía de las resistencias se pintan de verde y se ensucian las manos y el cuerpo en el lodo de la tierra y los humedales, y en el peor de los casos se pintan de rojo por la sangre derramada por los activistas ambientales y sus luchas ejemplares: al saqueo económico se suma la devastación ambiental y además la tragedia humana.

Si en la globalización se manifiesta este drama, lo es porque el gran capital y los consorcios multinacionales sustentan un programa que aspira a colonizar, apropiarse y explotar las cuatro modalidades históricas de existencia de las “mercancías ficticias” (según la terminología de Polanyi): la tierra (o la naturaleza, en un sentido más general), el dinero, el conocimiento y la capacidad viva de trabajo⁴. En efecto, podemos consentir que la globalización “refiere a una determinada escala geográfica de actividad humana” (Taylor y Flint, 2002: 2), pero lo hace en el ejercicio despiadado por apropiarse de la completa geografía del pensar/hacer humano desplazando, nulificando o invisibilizando toda aquella relación social que no esté guiada por el principio de la valorización del valor y de la rentabilidad económica. Si cabe hablar de Imperio, lo es en ese preciso sentido: la globalización es la tentativa por imponer el imperio del capital. En este plano es que la globalización se conecta con los procesos de extractivismo y neo-extractivismo, con la lucha por los comunes y por hacer de ellos Bienes Comunes de la Humanidad, con la defensa de lo comunitario y de las estrategias de territorialidad emancipatorias. En correspondencia con esta argumentación es que podemos afirmar, sin caer en un juicio arbitrario, que la globalización se establece como un dique o una estructura que limita el ejercicio de la autonomía o la construcción de “espacios de autonomía”, dado el hecho de que los grupos subalternos (en el proceso experimental de la lucha por dejar de serlo, o en el más elemental de asegurar las condiciones para su sobrevivencia) tienden a desplegar su actuación, o a habitar dichos espacios societales en que se concentran tan valiosas y, en ciertos casos, escasas “mercancías ficticias”, y por dicha circunstancia viven en carne propia la agresividad desmedida del sistema. Si en dicho sentido la globalización limita y delimita, en otro, muy distinto, amplía y extiende: la escala y el ámbito de las operaciones tanto de empresas como de *holdings* y grandes corporativos, también de ejércitos y fuerzas policiales y parapoliciales que traspasan en su ámbito de actuación las fronteras nacionales en intervenciones quirúrgicas, guerras humanitarias u operaciones relámpago, o bien, que en abierta violación de la legalidad internacional promueven la adopción de la guerra preventiva.

La imposición de la propiedad privada, producto de una relación de poder, y la obtención de ganancias, regalías, *royalties* o derechos de patente y propiedad intelectual, en la forma de un despliegue ampliado no sólo de la acumulación de capital sino de las relaciones sociales de tipo capitalista y de las contradicciones a ella inherentes, se propaga al modo de una combinación sistemática y de largo aliento de dos tipos de ordenamientos complejos: el empresarial o gran empresarial y el policial o militar industrial, subsistemas ambos que operan de manera diferenciada al seno de los Estados y en la relación entre los Estados. Lo que al interior de los Estados se experimenta como la ampliación (intensiva y extensiva) de la mercantilización absoluta de la vida, corresponde a modalidades en que la globalización determina la imposición internacional de hechos consumados por sobre el derecho de naciones, pueblos, comunidades y colectivos. Es así que el Estado nación como mediación privilegiada para que se opere este proceso, o como correa de transmisión de las relaciones de poder entre el capital mundial y la corporalidad sufriente del trabajo vivo, también mundial, se establece como un campo de lucha entre dos fuerzas. De un lado, la de los complejos empresariales

y militares, y del otro, la de los movimientos contrasistémicos y alternativos: los Estados poderosos (sea en la forma de sus corporativos o ejércitos) se afirman a lo externo e impulsan la desconfiguración interna de los equilibrios preexistentes en los Estados más débiles o en proceso de periferización –al punto no sólo de debilitar su condición soberana sino de decretar su clasificación como “Estados fallidos”, con lo cual se abre una amenaza inminente de intervención o colonización efectiva.

Los destrozos de la crisis y los senderos que se bifurcan

La crisis actual del capitalismo se manifiesta en los más diversos ámbitos, y en tal grado de crudeza, que ha concitado un abanico ya muy vasto de expresiones para intentar caracterizarla y tratar de asir sus contenidos más significativos. En tal situación nos hallamos, que es lícito preguntar si acaso no estamos ante una crisis en la propia “teoría de la crisis”, o de las versiones de la misma que se han propuesto para afrontar la caracterización del estado actual del capitalismo. Si así fuera estaríamos ante un caso notorio de déficit de teoría ante una realidad muy compleja, lo que haría lícito dirigir dicho cuestionamiento hacia los campos problemáticos y complejos en que se orienta el orden social dominante que, si bien es cierto que ha exhibido una alta capacidad autoadaptativa, está comenzando a mostrar en los tiempos actuales (y, literalmente, a la hora de escribir estas páginas) contradicciones insalvables en ámbitos que cuestionan la reproducción de su hegemonía y que anuncian coyunturas inciertas: es el caso del dislocamiento de la estabilidad monetaria por las dificultades para sostener la divisa de reserva mundial, el dólar, y la que se erigía como posible sustituta, el euro. El estallido de los problemas de sobreendeudamiento privado de los hogares y de la cartera de deuda pública en los Estados Unidos, y la crisis fiscal y de deuda soberana de los estados de la zona euro, no son sino ámbitos en que la condición de superpotencia indisputada se pone en entredicho; y ambos propiciados por el verdadero problema de fondo que es la insana situación productiva de toda la economía mundial, y en especial la norteamericana, que en la auténtica “guerra de clases” llamada neoliberalismo ha logrado, en contra del espíritu de Benjamín Franklin, erigir una sociedad donde el gobierno es del, por y para el 1% de la población: los súper ricos.

Sin necesidad de sucumbir a la muy “larga duración” y referirse a ella como crisis “civilizatoria” (damos razón más adelante de lo que tal calificativo estaría significando) y con ello estar tratando de decir algo mucho más amplio que “estructural”, “sistémica”, “terminal” u “orgánica” (por acudir a una jerga más clásica) podemos, de entrada, servirnos de la historia y decir que los eventos a los que se ha precipitado el sistema capitalista de 2008 a la fecha no son sino las tendencias de profundización de una crisis que se viene arrastrando desde inicios de los años setenta del siglo pasado (Amin, 2009). No se trata de una crisis financiera, aunque ahí se exhibe una de sus más evidentes sintomatologías. Tampoco de una crisis presupuestal o de los niveles de gasto de los gobiernos, aunque los niveles de fiscalidad exigidos, y la necesidad de orientarlos a los sectores de mayores ingresos y al gran capital (y la negativa a hacerlo de ese modo, para dejar caer la carga fiscal en la espalda de los trabajadores restringiendo los gastos sociales del gobierno,

o ampliando los impuestos al consumo) han hecho una clara contribución, y lo harán de mayor modo, a la parálisis económica. Es por tales razones y otras que enseguida apuntaremos, que encontraríamos el parangón de la crisis financiera y económica que mutará en recesión global y generalizada en un futuro muy próximo, en aquella coyuntura que los historiadores de inicios y hasta mediados del siglo XX dieron en clasificar como la “gran crisis” de fines del siglo XIX (Gandarilla, 2008). Esto es, la que comprendió el período entre 1873 y 1896 (y que, ahora se sabe, según investigaciones recientes sobre Marx, en la edición de la MEGA 2, ocupó la atención del clásico en sus trabajos del último período de su vida).

Como aquella de fines del siglo XIX, la crisis de onda larga depresiva de los años setenta del siglo XX trató de resolverse rompiendo las ataduras del capitalismo y orientándolo hacia lo que Karl Polanyi dio en llamar “la gran transformación” (capitalismo de los grandes cárteles, los *trusts* nacientes y empuje del capital financiero, en aquella ocasión; impulso de la gran corporación, los oligopolios y la mundialización financiera, en tiempos más recientes) e impulsando su expansión artificial o efímera (*belle époque*, en aquella coyuntura, política de globalización neoliberal; Nueva Economía, y burbuja financiera, en tiempos más recientes) pero abriendo las bases de una política de conquista y saqueo (imperialismo clásico y reparto de África, en aquella ocasión; impulso de las guerras humanitarias y de ocupación, en tiempos más recientes). La Primera Gran Guerra europea no solucionó las contradicciones de aquella mundialización y en cambio abrió una confrontación de treinta años, en medio de cuya conflagración llegaron los descalabros financieros de 1929 y la recesión productiva de toda la década siguiente, postración económica que únicamente pudo solventarse (al interior de los Estados nación) a través del nuevo “compromiso histórico” luego de abatir (pero sin dejar de ensayarla socialmente con las consecuencias que conocemos) la otra opción que se abrió al capitalismo y al “modernismo reaccionario” (Herf, 1990; Griffin, 2010) esto es, el fascismo (por el que habían optado militantemente varias naciones europeas). El mecanismo que permitió tal recomposición consistió en consentir (al interior del sistema interestatal, o “nuevo orden internacional”) la inauguración de un período floreciente e indisputado de “hegemonía norteamericana” que sólo duró los así llamados “treinta gloriosos”, sobre la base del impulso keynesiano de la demanda efectiva, la recuperación europea con los instrumentos de Breton Woods, y el crecimiento de los mercados internos con base en un incremento relativo de la remuneración obrera (directa e indirecta).

La desventura de la coyuntura actual es que la presente mundialización y crisis del capitalismo no parece acogerse a soluciones keynesianas ni a ninguna unilateralidad ortodoxa según la disciplina económica convencional. Ni los enfoques institucionalistas son suficientes con relación al tamaño de las aporías provocadas en dicho ámbito por las políticas de desregulación global, hechas a imagen y semejanza de los intereses de los complejos corporativos (el militar-industrial, el biotecnológico-farmacéutico, o el de seguros y atención médica privada, por mencionar algunos). No se ve luz al final del túnel ni apertura de una nueva onda larga expansiva. Pareciera que Kondratiev se ha olvidado de nosotros, aunque muchos analistas han pronosticado el inicio de tal nuevo ciclo (lo hicieron, a mediados de los noventa, y se dieron de topes con la crisis asiática, y lo volvieron

a prefigurar luego del “espejismo Obama”, y miren dónde nos hallamos; tales formulaciones no son más que *wishful thinking*, y de eso no vive el análisis social): lo que se avizora, por el contrario, es la continuación de una crisis permanente e integral (escribiendo desde México es inevitable incurrir en tal caracterización) si no es que el comienzo de otros “treinta tenebrosos”. A fin de cuentas, el mundo entero no está a salvo de soluciones reaccionarias que, como en el pasado, comienzan a exhibir diversas modalidades de relación social signadas por lo que algunos autores han dado en calificar como “fascismo societal”, dado el hecho de que la crisis actual no es sino el resultado de la aplicación de los remedios que se instrumentaron para darle solución. Como lo ha sostenido el geógrafo marxista David Harvey (2010: 169) “la crisis actual se originó en las medidas adoptadas para resolver la crisis de los setenta”, es también, sin embargo, un caso de búsqueda de cura a través del veneno, pero incubado en un sistema como el social que no corresponde a la biología humana y a la reacción de sus anticuerpos. A nivel macrosocial, la vacuna desestabilizó aún más la enfermedad que ha tomado por presa al cuerpo senil del capitalismo (“lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer”).

La desventura de la coyuntura actual es que la presente mundialización y crisis del capitalismo no parece acogerse a soluciones keynesianas ni a ninguna unilateralidad ortodoxa según la disciplina económica convencional

También como en la crisis de cierre del siglo XIX, se está ingresando, con los acontecimientos recientes, a una coyuntura análoga a la de 1929 (Marichal, 2010). Las devastaciones calamitosas de la economía de aquella época darán risa comparadas con la debacle actual (magnificada por los límites ecológicos, energéticos y alimentarios ante los que ahora se encuentra expuesto el sistema mundial, y que no eran de tal magnitud en crisis pasadas). Ya pasamos por la primera y segunda guerra del golfo, y falta ver si habrá sustitución hegemónica (algo a todas luces dudoso según la estrategia de China, que suele acogerse a temporalidades más largas que las occidentales y a la “propensión de las cosas”, antes que a protagonismos innecesarios y altamente costosos) o se abrirá un campo para soluciones más regionalizadas o multipolares. Si el pasado siglo, fue, verdaderamente, un “largo siglo XX” (Arrighi, 1999), esta es la coyuntura que ventura su cierre, con la posible disolución de una moneda mundial que resguarde los intercambios internacionales y la reserva, o mejor, desvalorización del valor. Sin embargo, basta recordar que en las largas coyunturas que han entregado un nuevo hegemón indisputado, en los últimos cinco siglos de desarrollo capitalista, ello se ha decidido (en al menos tres ocasiones, con los Países Bajos y la paz de Westfalia, en el siglo XVII; Inglaterra y la *pax británica*, en el XIX; y Estados Unidos y su *pax americana*, en el XX) a través de hacer comparecer la opción bélica, instrumento innegable de destrucción de capital. No se puede ser optimista dado el programa al que se embarcó la derecha y los halcones norteamericanos (recordemos, si no, el “Proyecto para un Nuevo

Siglo Americano”) y el comportamiento del estadounidense medio, exhibido en los últimos años, proclive y *performatizado* hasta el cansancio a la mentalidad de *ranger* o *marine*, y la propensión en el Norte global de tipo racista y fascista hacia el migrante y las otras culturas.

Detengámonos ahora en una temporalidad más cercana, a la que se entrega el capitalismo en la coyuntura de los años setenta del siglo pasado. Los acontecimientos a que hemos concurrido (nuestra historia inmediata), verdaderos torbellinos para la existencia social, no son sino producto de tal circunstancia y de las modalidades en que el conflicto social tomó cursos que ya se prometían como enormemente problemáticos. Somos hijos de esa crisis y en dicha crisis nos hallamos. Las bases de la misma estaban presentes desde fines de los años sesenta (como problema de baja rentabilidad, sobreproducción y baja formación de capital), en un movimiento acompasado que involucró a todos los centros desarrollados. Las visiones superficiales por aquellos años quisieron ver en el alza del precio del petróleo el detonante (luego de la guerra de Yom Kippur). Lo cierto es que la solución a tal situación fue no sólo la alianza norteamericana con las dinastías árabes (petróleo a cambio de protección), sino el reciclamiento de los petrodólares desde la *city* de Nueva York: fue así que se dio inicio a la propensión rentista y a la vocación compradora en las burguesías o lumpen burguesías (como las llegó a tildar André Gunder Frank) de la gran mayoría de países del tercer mundo. El resultado de ello fue el incremento de la deuda externa y el ahorcamiento financiero de aquellos países que habían incurrido en tal expediente, luego del brutal incremento de las tasas de interés por la política de la reserva federal en Estados Unidos en los comienzos de los años ochenta del siglo pasado. Tocó a México el ingrato privilegio de declarar la primera moratoria en 1982 y entregarse de lleno al cumplimiento del credo neoliberal, que ya se había comenzado a instrumentar en América Latina (con bayoneta y *manu militare* de por medio) a través de las dictaduras de seguridad nacional, en un recorrido que fue abarcando a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y más.

El neoliberalismo se comenzó a instrumentar en América Latina. Desde 1973, tal programa fue entendido como una recomposición de clases (Anderson, 1997) en que la agudización de la desigualdad figura como premisa y no tanto como resultado del proceso, en la medida en que se sostiene que el incremento en el ahorro será el detonante de la inversión y no como es en las figuraciones keynesianas y su mito del “pleno empleo” a través de hacer crecer la demanda efectiva. Lo cierto es que el crecimiento de la acumulación de capital lo fue con base en su concentración y la apropiación de la riqueza social ya existente, y no a través del crecimiento económico, que para el modelo neoliberal no es condición imprescindible (si no, miren a México, cuya condición de endémico estancamiento es acompañada por un aumento de las posesiones de riqueza por unos cuantos personajes que aparecen en las páginas de *Forbes* o de *Fortune*). Una vez que el programa económico y social precedente fue derrotado en México, uno a uno los países latinoamericanos se comprometieron con el Consenso de Washington.

La década perdida de los ochenta comenzó a mostrar su sino con escenarios de devastación, guerras civiles o internas, e impulso externo de entramados contrainsurgentes en América Central; con la crisis del populismo trasnochado de Alan

García en Perú, o de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Los noventa arrancaban en medio de un cierto neoliberalismo pintoresco con Collor de Mello en Brasil o Menem en Argentina. Las élites y oligarquías dominantes en la región podían incurrir en excesos pues el neoliberalismo experimentaba un alcance prácticamente global y cobraba la forma de nuevo sentido común de la época. Su victoria parecía también ideológica, pues a inicios de los años noventa del siglo pasado, los otros tres modelos que le pudieron haber disputado la hegemonía fracasaron (Gandarilla, 2003: 110-117). No sólo vivieron su debacle tanto los proyectos de liberación nacional, con la derrota de los sandinistas en Nicaragua y el asesinato de los jesuitas en El Salvador, como la caída del socialismo de tipo soviético y el inicio del período especial en Cuba, sino que se convirtieron en su reflejo, como fue el caso de los programas socialdemócratas, que en un caso de rara evolución mutaron para ser más neoliberales que los propios neoliberales.

Ese panorama comenzó a cambiar con el *caracazo* en Venezuela en el año de 1989, y a mediados de la década siguiente con el grito del ¡Ya Basta! zapatista, en el sureste mexicano. En una especie de rara paradoja, en estas tierras, cuando al inicio del año 1994 se anuncia el descontento y se elabora todo un nuevo esquema del pensar/hacer emancipatorio y libertario, lo que se vislumbra y fortifica no son alternativas sino alternancias, imposición y restauración. La región sudamericana ha avanzado, con variados niveles de eficacia hacia otras sendas, una vez que el proyecto del ALCA fracasó y los Estados Unidos, presionados por haber llegado al *Peak Oil*, tuvieron que orientar su política exterior hacia el Asia Central y la región del Cáucaso (Howard, 2007), abriendo un campo de oportunidad al que la oligarquía mexicana no quiso o no pudo acogerse, maniatada por los compromisos signados en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), con un gobierno producto del fraude electoral. También es el caso, en los años más recientes, de la política del ASPAN y la Iniciativa Mérida a los que México ha quedado encadenado justo porque exhibe un gobierno sin un ápice de legitimidad. El resto de la región latinoamericana experimenta una opción bifronte: algunos capitalismo nacionales supieron mirar hacia oriente o la cuenca del Pacífico, o diversificaron, así sea modestamente, sus estructuras productivas. Por ejemplo, Chile, atrapado en la exportación de bienes tradicionales, o los involucrados, como es el caso de Brasil, en un agresivo protagonismo exterior (BRIC, Grupo de los 20) y bajo el amparo del equilibrio fiscal y la inversión en nichos novedosos pero extractivistas (petróleo de aguas profundas, agrocombustibles), a tal punto que el gigante del Cono Sur pareciera estar conduciéndose hacia una condición semiperiférica. Pudiera ser, también, que en tierras latinoamericanas se lleguen a consolidar los primeros atisbos de oposición al neoliberalismo en determinadas políticas y cambios estratégicos que anuncian modos novedosos para salir de él. En algunos de los países donde más se había avanzado en la instrumentación del Consenso de Washington y en la política de desinstitucionalización de los Estados, es donde se han erigido y levantado los mayores campos de resistencia –región andina–; pues salir de tal atolladero ha exigido una recomposición de los acuerdos constituyentes sobre bases novedosas, y por ello muy complejas, pues los entramados sociales de la resistencia han correspondido a una mayor consolidación. Venezuela también se distancia del predominio neoliberal y está enarbolando una política que hacia el

futuro inmediato, sin embargo, tendrá que avanzar más en el esclarecimiento de lo que su propuesta programática significa (el llamado “Socialismo del siglo XXI”); de lo contrario las presiones geopolíticas del convulso presente la condenarán a tener un carácter más emblemático que efectivo, situación que se agravaría de mantener una condición de monoexportador del hidrocarburo, con los costos ecológicos que ello significa. México juega en todo este complejo proceso de recomposición un lugar secundario, ya no sólo en su relación con los Estados Unidos (enganchado al curso que el hegemón decadente experimenta y le marca) sino con relación al lugar que tradicionalmente había ocupado en la región latinoamericana. En el caso de México no hubo sólo equivocación estratégica (de las élites gobernantes y la oligarquía parasitaria) sino instrumentación del modelo neoliberal en su grado más extremo, el indicado para propiciar un modelo de acumulación oligárquico y depredador, que parece exhibir un novedoso e informal modo de enriquecimiento a través de la “renta criminal”. Otra peligrosa tendencia que nunca dejó de inspirar la agenda hemisférica de los Estados Unidos para la región latinoamericana ha sido esa especie de mutación civil, legal o parlamentaria que están experimentando los ejercicios de reversión de procesos de cierta amenaza a los intereses norteamericanos bajo la forma del golpe militar efectivo y el régimen de ocupación (desde aquel perpetrado en el Haití de Aristide en 2004), o en formas encubiertas y menos escandalosas (como en el caso de Celaya en Honduras, en 2009; y el más reciente en contra de Lugo en Paraguay).

Alcances de una crisis muy profunda y multidimensional

Pareciera que el fondo del problema está situado en un lugar aún más profundo de lo que el ángulo financiero, monetario o presupuestal dejan exhibir, pues esta crisis parece comprometer no sólo la legalidad o causalidad *interna* al capitalismo, esto es, una cuyo eje de comportamiento está en el sostenimiento de la rentabilidad y la acumulación de ganancias, riqueza y capital, sino que los impactos de la devastación capitalista han alcanzado una legalidad o causalidad mayor (contradicción *externa*). En esta causalidad se ve involucrado el piso sobre el que este orden se asienta (O'Connor, 2001), su entorno ecológico ambiental y los equilibrios climáticos, biológicos, los de la escala de biomasa y otros componentes primarios requeridos para cumplir la exigencia de energía que el funcionamiento del sistema está demandando, y que la huella ecológica está comprometiendo, así como los de captación del tipo y los niveles de contaminantes que el planeta puede alojar o absorber. En nuestra condición epocal lo geográfico parece asumir la connotación, en mayor correspondencia con lo sostenido por Marx, de límite insuperable, de materialidad agotable si permanece o se agudiza la interminable acumulación de dinero, ganancia, riquezas y posesiones por parte de unos cuantos. Tal voracidad es muy probable que termine por activar, en el despliegue multiforme de esta crisis sistémica, los límites absolutos del capital (Mészáros, 1986: 2001).

El calado de esta crisis, entonces, conduce la pregunta sobre nuestra condición epocal en una senda como la propuesta por Walter Benjamin, cuando se pronunciaba por “captar la actualidad como reverso de lo eterno en la historia y así tomar la impronta del lado oculto que esconde la medalla” (2010: 23). La exigencia que

al analista se le impone es aproximarse en el mayor grado posible y de la forma más documentada a que haya lugar, con el fin de saber a qué atenerse si las tendencias identificadas (con los métodos y las teorías más acreditadas) se mantienen o se agravan. Tuvo razón Bolívar Echeverría cuando encontró en el conjunto de circunstancias que se cruzan en lo actual un hiato mayor dado que “el modo como las distintas crisis se imbrican, se sustituyen y complementan entre sí parece indicar que la cuestión está en un plano más radical; habla de una crisis que estaría en la base de todas ellas: una crisis civilizatoria” (Echeverría, 1998b: 34).

En el inicio del libro que hace remembranza de su existencia, André Malraux narra el impacto que le provoca uno de sus viajes y afirma: “conocí una Asia cuya agonía misma nos aclaraba el sentido de Occidente” (Malraux, 1977: 12). Es cierto que el escritor francés, al decir Occidente, cree estar diciendo el mundo entero; y es que ahora ese debiera ser nuestro lugar de enunciación, poniendo en la mira, también, un sentido más amplio de la entidad que para el autor de *La condición humana* representa Asia. Así comprendemos tanto el cercano como el lejano oriente y recuperamos lo dicho por Malraux, pues en los tiempos actuales apreciamos, luego del temblor y tsunami en el Japón, una agonía y pérdida de sentido en la racionalidad científica misma por la crisis del reactor nuclear en Fukushima, intentando ser enfiado a través de mecanismos no sólo precarios sino literalmente improvisados. Si ya el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki hace poco más de medio siglo revelaba la pérdida de inocencia de la ciencia física, ahora en una especie de fatalidad insospechada, el mismo punto geográfico nos alerta de cómo la contingencia y la dureza de los desequilibrios naturales impactan al baluarte de la sociedad moderna (la racionalidad instrumental y el despliegue tecnocientífico). Pero, por otro lado, y esta vez desde la geografía del cercano y medio oriente, con impactos sensibles en el norte de África y el sur de Europa (que durante varios siglos fueron una sola entidad civilizatoria), la generalización de movilizaciones colectivas que desequilibran (en grados diversos) la institucionalidad política vigente muestran el otro cariz (que impacta las modalidades de la representación y gestión de la política) y el agigantado alcance de la crisis que el sistema capitalista exhibe y que por ello permite ser enunciada como crisis de tonalidad civilizatoria. Oriente, entonces, muestra al mundo un carácter bifronte (pero cuyos alcances son más generalizados) de la agonía de la civilización occidental moderna-capitalista.

Como estrategia para ir más allá de la noción espacial-geográfica, se ha propuesto partir de entender por Occidente “un modo de existencia del ser humano que se organiza en torno al comportamiento técnico como el lugar privilegiado donde el ser de los entes adquiere su sentido más profundo y definitivo” (Echeverría, 1988: 212). Y ver en este proyecto de totalización civilizatoria, que en el curso de los siglos se esparce por el mundo entero, la conversión de una modernidad potencial en modernidad existente y efectiva, cuando esta establece afinidad electiva con el capitalismo. Por ello, Bolívar Echeverría afirmó de él:

El proyecto capitalista en su versión puritana y noreuropea, que se fue afirmando y afinando lentamente al prevalecer sobre otros alternativos y que domina actualmente, convertido en un esquema operativo capaz de adaptarse a cualquier sustancia cultural y dueño de una vigencia y una efectividad históricas aparentemente incuestionables (Echeverría, 1998a: 34).

Una vez que el proceso de reproducción de la vida material opera de tal modo, no es posible sino hablar de “modernidad capitalista”. El problema brota cuando se ha hecho evidente que el desarrollo técnico no es equivalente al desarrollo de la humanidad; que el progreso de la tecnología no es el progreso de la humanidad; que la técnica, la tecnología y el progreso no son asuntos meramente técnicos sino, en el fondo, políticos. La correlación entre la modernidad capitalista y la racionalidad científica se da no en cuanto superación de lo mítico, pues la razón también se basa en mitos, dos de ellos fundamentales: el del progreso y el de la armonía por el mercado (el progreso genera una lógica de infinitud, el de la mano invisible de creación de un orden; ambos son lo más funcional al sistema dominante, son sus puntales más efectivos), de ahí que el sistema se alce enarbolando también el mito prometeico de la técnica. Por ello es que, en una línea de trabajo convergente con este énfasis, Franz Hinkelammert viene sosteniendo, desde inicios a mediados de los años noventa, que “lo que enfrentamos no es solamente una crisis del capitalismo, sino una crisis del concepto fundante de la modernidad. Se trata del concepto de la armonía inerte entre el progreso técnico y el progreso de la humanidad” (1995: 25).

La correlación entre la modernidad capitalista y la racionalidad científica se da no en cuanto superación de lo mítico, pues la razón también se basa en mitos, dos de ellos fundamentales: el del progreso y el de la armonía por el mercado

Es ahí en donde se aloja el núcleo problemático de la cuestión y en ello se involucra una tendencia de *longue durée*, motivo por el cual “cuando hablamos de crisis civilizatoria nos referimos justamente a la crisis del proyecto de modernidad que se impuso en este proceso de modernización de la civilización humana” (Echeverría, 1998a: 34).

Ya antes lo había argumentado Franz Hinkelammert, en otros términos quizás aún más radicales: “Superar la crisis del capitalismo nos lleva ahora a la necesidad de ir más allá de la civilización occidental y de su misma modernidad” (Hinkelammert, 1995: 24). Es, justamente, por el calado de esta crisis civilizatoria que la recuperación del sentido de lo que significa la búsqueda de alternativas para los movimientos anti-sistémicos se encuentra ya no al interior del capitalismo. Tampoco se encuentra como una variante al desarrollo (sea sustentable, humano o sostenible) o al crecimiento (las teorías del “decrecimiento”, o el “paradigma lento”, por ejemplo). Esto exige ir ampliando y profundizando la crítica (al capitalismo, el desarrollo, el crecimiento, o la modernidad) revelando y poniendo en primer lugar, y de modo explícito, la condición de colonialidad como el hiato mayor a superar. Así, pareciera que la crisis de la teoría crítica aún prevaleciente se debe a tal carencia, a la incapacidad para incorporar en su crítica a la totalidad burguesa este problema que, en los últimos años, parece emerger como su eje orientador: la totalización del proceso civilizatorio vigente se efectúa y se hace efectiva al modo de un complejo constitutivo, el de la capitalista modernidad/colonialidad eurocen-

trada; y no como había sido asumida por otros discursos críticos al modo de ser entendido como modernidad/racionalidad (Quijano, 1992; Mignolo, 2009), que en algún determinado momento se desvirtúa por tendencias irracionales a las que hay que contener. Y por ello se erigía, en la teoría crítica anterior, a la re racionalización o a la reconducción racional del proceso social y técnico productivo como base de la “sociedad nueva”, potencialmente preparada por el aporte civilizatorio del capitalismo.

Es por ello que, desde preocupaciones coincidentes en lo que puede erigirse como un nuevo enfoque o un nuevo sentido del pensamiento crítico de algunos pensadores contemporáneos, cada vez más socorridos en el debate, este asunto (el de una crisis histórica sin precedentes cercanos por su grado de profundidad y complejidad) ha comenzado a enunciarse al modo de una serie de propuestas teórico conceptuales que revelan un nuevo enfoque que ha dado en llamarse el “giro decolonial”. Esta discursividad crítica aspiraría a alcanzar una nueva “episteme” para la crítica del programa sociocultural de la modernidad occidental, y no sólo de su encierro bajo el capitalismo.

Es, precisamente, la lógica irrefrenable del capital (en su vocación insaciable de ganancia) la que precipita al sistema en una crisis distinta a las anteriores porque constituye una oposición insalvable entre el tiempo abstracto del valor valorizándose y el tiempo concreto de las estructuras complejas de la vida, que experimentan aproximaciones a límites que parecen umbrales de no retorno. La oposición que parece corresponder a esta modalidad de crisis es una entre el capitalismo y la vida humana, entre el régimen del instrumento autoactuante, esto es, el sistema de maquinaria integrado (Marx, 2005) y el ser humano de carne y hueso, que se ve orillado a una inestabilidad constante en su existencia o reducido a órgano consciente del proceso. En los estudios de Marx sobre el instrumento técnico, la máquina y el sistema de maquinaria integrado, así como de la subsunción de la ciencia y la tecnología a la lógica capitalista existe plena conciencia de que en este proceso no sólo se juega el arrebato del saber obrero o su conversión en fuerza productiva del capital sino algo más importante aún, y es el orillamiento, el desplazamiento, la posibilidad de exclusión y la amenaza de la existencia para la capacidad viva de trabajo. No obstante ello, todavía se aprecia en Marx una visión que alimenta una certeza de que ello dependerá del “uso capitalista de la máquina” y no de una condición inherente que reside en el nuevo autómeta que se ha creado. Tal parece que ante dicho proceso al que se ha dado vida, los críticos *luditas* alcanzaron un mayor grado de conciencia pues apuntaron, desde un inicio, correctamente, en contra del abaratamiento de los trabajadores, e indicaron las connotaciones profundas e inherentes al *factum* tecnológico. Su protesta fue dirigida al contenido material de la tecnología y la ciencia desarrollada por el capital y no sólo a su forma económica de utilización. Y es que, en efecto, con el autómeta se ha liberado código, fuerza, energía y composición pero también amenaza de quedar atrapado en su lógica que es la de, en cierto modo, autorreferencia e incontenibilidad. También la de liberación, pero de la condicionalidad del medio, de la irrebabilidad del *dictum* temporal, de la flecha del tiempo, que en termodinámica quiere decir entropía y que, en el despliegue de ese su hacer sin límites, ni trazas conscientemente discernidas, lo conduce (al autómeta liberado, al capital

como sujeto automático, como valor que se valoriza) a un camino de salidas muy inciertas, laberínticas, al de la senda sin retorno, al del agotamiento del medio (no porque se acabe la geografía, sino porque su pleno abarcamiento la desquicia) y al de la destrucción de la persona humana (porque también se deshumaniza la humanidad que queda con vida, no sólo la material y ontológicamente liquidada). Marx llegó a vislumbrar esto cuando analizó el desarrollo de la maquinaria y la gran industria en el Tomo I de *El Capital* y advirtió que con el desarrollo del capitalismo (y la modificación material de su base técnica por el paso de la subsunción formal del trabajo inmediato al capital hacia su subsunción real y con ello el establecimiento del “modo de producción específicamente capitalista”) se ponían en riesgo las dos fuentes creadoras de riqueza (el ser humano y la naturaleza) en esta y cualquier otra modalidad posible de producción; sin embargo, en consideración de los avatares actuales y de sus alcances, requerimos emprender nuevos diagnósticos y ampliar nuestro esquema categorial.

Límites de la crisis y la cuestión hegemónica

En su obra de 1857 a 1858, esto es, durante la primera redacción de corrido de *El Capital*, Marx llegó a escribir una de las definiciones más precisas de lo que entiende por crisis del capitalismo y lo hizo cuando lo relacionó con sus barreras o límites. En dicha obra se ocupa de tres tipos de barreras (mercantiles, financieras y geográficas) que van emergiendo según se opera el proceso de autonomización o independización del sujeto automático, *el capital*, respecto de la producción social y colectiva de la vida material (los productos del trabajo cobran la forma de mercancías, luego, de las mercancías se autonomiza el dinero, del dinero se autonomiza el capital, del capital lo hará una figura cada vez más ficticia de este). Es así que cuando habla de un límite o barrera de la producción capitalista lo entiende como una “contingencia que debe ser superada” (Marx, 1984b: 277), pues considera que el capital “constituye el impulso desenfrenado y desmesurado de pasar por encima de sus propias barreras”. Esto es, ve en el capital un dispositivo en que encarna ontológicamente el desenfreno y la desmesura, por ello, no se puede esperar que en su personificación y figura subjetiva más acabada, el capitalista, pueda haber ocasión para que en un acto de iluminación operen (ellos, los capitalistas) determinados mecanismos de autolimitación. Muy al contrario, es responsabilidad del colectivo social operando ajenamente a dicha disposición subjetiva (la del enriquecimiento y el interés privado) el implementar mecanismos que contengan la compulsión capitalista, que detengan su automatismo. Para Marx está claro que la situación de crisis más específica y compleja del capitalismo se verifica en cuanto este va comprendiendo cada vez más esferas de socialidad en la irrefrenable compulsión por abarcar el mundo entero, es así que argumenta lo siguiente:

Dado que la autonomización del mercado mundial [...] (en el que la actividad de cada individuo está encerrada), se acrecienta con el desarrollo de las relaciones monetarias... y que viceversa, la conexión y la dependencia de todos en la producción y en el consumo se desarrollan a la par de la independencia y la indiferencia recíproca de los consumidores y de los productores, dado que tal contradicción conduce a la crisis, etc., se intenta suprimir esta enajenación a medida que ella se desarrolla (Marx, 1984b: 88).

A nuestro juicio lo que Marx está intentando hacer explícito es que la producción capitalista es una producción a-social, esto es, una cuyos equilibrios son inestables y azarosos, no alcanzables con base en una gestión o autogestión consciente de los productores sino por los mecanismos del mercado y las relaciones mercantiles; y de las relaciones mercantiles del propio instrumento dinerario o de las figuras más acabadas y complejas del instrumento financiero. Es ello lo que está contemplado como tal enajenación, proceso en que concurren dos lógicas contradictorias: por un lado debe existir conexión entre lo que se produce y lo que se consume, de lo contrario la entidad de socialización desaparece, pero para que esto ocurra se separan e independizan cada vez más ambas esferas sociales (la de la producción y la del consumo), separación que es cada vez mayor en cuanto más se desarrollan las relaciones sociales como relaciones monetarias. Es por ello que el capitalismo es contradicción viva, y entonces, la condición de crisis consiste justamente en el modo de suprimir la contradicción a medida que se le desarrolla cada vez más. Por esto es que en otra parte de dicha obra Marx sostiene que “todas las contradicciones de la producción burguesa”, esto es, la inherente condición del capitalismo como crisis, es “el límite ante el cual ella misma [la producción burguesa] tiende a superarse” (Marx, 1984b: 273). Para Marx, entonces, el capitalismo es crisis, y a la luz de los sucesos actuales, del despliegue cada vez más abarcador de situaciones problemáticas de crisis, de esa lucha despiadada del sistema social capitalista por alcanzar una sobrevida, la pregunta que tenemos frente a nosotros es: ¿Cuándo hará crisis la crisis? Si es que esto llegase a ocurrir lo hará cuando encuentre limitaciones insalvables para desarrollar (aplazar) sus contradicciones, y esa mayúscula limitación no puede sino ser producto de la activación política. No será producto de ningún determinismo estructural o limitación de ningún tipo, sino de la potenciación de la subjetividad política que ante la sumatoria de los límites es capaz de poner limitación al capitalismo, es capaz en cuanto proceso constituyente de lo político y en cuanto forma organizativa (forma de “gobernanza de la revolución”) de poner límites al dispositivo que pretende no reconocer límites (lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer).

En una línea coincidente, Wallerstein desde hace mucho tiempo (y lo reitera en sus más recientes trabajos) ha señalado que la actual crisis del capitalismo lo es también del entendimiento de este como modalidad civilizatoria, como programa sociocultural de establecer la convivencia humana. Por ello, como buen historiador, lee las tendencias presentes como indicadores de regularidades sistémicas y expresiones de su larga duración. Es por esto que, en su enfoque, las limitaciones del capitalismo están precipitándole a situaciones inéditas y hacia posibles bifurcaciones de rumbos muy inciertos. El historiador norteamericano ve la limitación mayor del sistema actual en su incapacidad para eludir esa especie de “ajuste de cuentas social” y su posible sustitución por otro tipo o modalidad de organización humana. La limitación mayor está en seguir o continuar con el proceso de externalización de costos, en que la eficacia de los complejos megaempresariales y la gran corporación se mide por su grado o capacidad de transferir el terrible costo de la crisis hacia las formas organizativas de lo público social y las colectividades humanas; esto es, hacia pueblos, ciudadanos de a pie, sindicatos y trabajadores. Si para ello debe utilizar la fuerza hegemónica del

discurso o el ejercicio efectivo de la violencia, no hay contención humana que desde su automatismo le marque límites; si ha de obrar erigiendo mega Estados o Estados fallidos, pareciera quererlo hacer sin ninguna contemplación. Pero he allí uno de los signos de su deterioro hegemónico, su eficacia se comienza a revelar como efímera, o ella misma sobrevalorada y pareciera que (esa compulsión ilimitada y ese rasgo de su hegemonía) no es sino una burbuja más. El sistema parece revelar una incapacidad actualmente ampliada para externalizar tres tipos de costos al modo en que lo había hecho hasta fechas recientes: en primer lugar, había trasladado esa tarea hacia otros contingentes sociales en la forma de reducidos costos salariales hacia los trabajadores del sur del mundo, pero lo ha tenido que comenzar a hacer también en los países centrales en agresivas formas de empobrecimiento; en segundo lugar, había trasladado los costos ecológicos hacia los países periféricos y hacia geografías aledañas, pero las formas propias de la globalidad en la devastación ecológica obligan a resarcir procesos que hacen incrementar la composición orgánica del capital y a sobreacumular si se pretende legitimar el “capitalismo verde”; en tercer lugar, no se puede eludir más el desfondamiento fiscal de los Estados y su sobreendeudamiento, pues se ha hecho de ellos el dispositivo creador de liquidez (en tanto “prestamista en última instancia” pues los Estados no quiebran) o el artefacto artificial de creencia (pues tal es la etimología de crédito como *credere*, como hacer creer). Así, se hace conversión del Estado en una especie de superyó freudiano que reprime socialmente al capital pero que también lo “apapacha” y consiente su exceso, y ahí también se hacen sentir los efectos en Estados ya no sólo del sur del mundo, a los que había que disciplinar desde los años ochenta, sino en países cuyos Estados hacían parte de ese frente global de disciplinamiento que fue el neoliberalismo. Parece ser que en esta especie de llegada del neoliberalismo a casa, como ha sido el rebote de la crisis hacia el centro del mundo, se muestra también un cierto cariz de su desgaste hegemónico.

La condición del deterioro de la condición hegemónica al interior del sistema, no lo es sólo de la forma del sistema interestatal, hasta el momento envuelto en una crisis hegemónica sin forma previsible en que opere el relevo, pues no hay certeza de que haya nuevo hegemón dominante. Hay crisis de la hegemonía norteamericana, sí, pero todavía no sustitución hegemónica, la prolongación temporal de este proceso no es sino expresión de la crisis que se vive. El desbocamiento de la conflictividad bélica y de despliegue de efectivos militares por el mundo entero comienza a demostrarse como económicamente insostenible al seno de un Estado que ha sobreinflado las fuentes de su financiamiento: ya sea en la forma del señorío financiero (con nuevas emisiones de divisas, o modulando las cotizaciones de estas, manipulando las tasas de interés), o en modos muy peculiares en el resto de los Estados, como una medida para cubrirse de las contingencias monetarias y financieras, comprando los bonos de la reserva federal norteamericana, sin rendimiento alguno, para optar por representar el equivalente monetario en formas financieras supuestamente más sólidas; o directamente representando sus reservas del banco central en la que es aún considerada “divisa mundial”, sin caer en cuenta que en dicho actuar lo que se ha hecho no es sino financiar de manera indirecta a la economía norteamericana y su ineficacia productiva.

Pero el declive hegemónico se aprecia también en dos procesos, más directamente relacionados con el ejercicio de la política. El primero a través del colapso del programa socialdemócrata como proyecto político que acompañó e hizo efectiva y viable la hegemonía norteamericana. El engaño consiste en que lo que hace viable la construcción de una sólida estructura estatal es la promesa de orientarla hacia el aseguramiento del bien común, esto es, la posibilidad de que haya disponibilidad estatal para la atención de problemas sociales y el despliegue de ciertas infraestructuras colectivas o públicas que indiquen avances hacia una mejor condición de vida (hacia el desarrollo por llamarle de algún modo). Sin embargo, lo cierto es que lo que termina por instrumentarse es una entidad que muta en Estado niñera de amplio y nada legítimo apoyo al “poder corporativo” multinacional, pero norteamericano en particular, lo que hace que muchas de las externalidades económicas sean positivas para el capital y negativas para la sociedad, con el Estado mediando estas transferencias del excedente público y social. Si en eso quedó convertido el ideario socialdemócrata, con la crisis del capitalismo mundial y las dificultades de operar este mecanismo, ello se efectuó directamente con base en el programa emergente y rival (el neoliberal), pero con ello se hizo traslúcido el espejismo socialdemócrata, tanto del desarrollo como del ascenso social, lo que en definitiva muestra un ángulo del deterioro hegemónico.

El otro aspecto es más definitivo en el deterioro de la hegemonía, y lo es en cuanto el sistema ha promovido la creación de determinados mecanismos de consumo y de consumo de ideología: esto significa que es eficaz para promover y colocar nuevas mercancías en el mercado⁵ (industrias que no contaminan, hamburguesas que no engordan, bebidas que no embriagan, café sin cafeína, coca-cola sin azúcar, sexo sin placer, etc.). Se comienza a deteriorar también esa hábil construcción de una izquierda que no modifica al sistema, esa democracia que no es sino simulacro, ese discurso profiláctico y bien portado que promete un cambio que no sólo no llega sino que es “gatopardismo”: el cambio para que todo siga igual. Pues bien, parece que se está llegando a límites, pues la toma de conciencia de los indignados comienza a no aceptar más este tipo de productos del capitalismo y quiere modificar genuinamente este orden social inhumano, parasitario y depredador.

Duración y simultaneidad histórica. La(s) contemporaneidad(es) de la política emancipatoria

Lo nuevo en la historia puede ser, sí, un pliegue más en el espacio estriado de la forma inconexa de lo actual, siempre que sea atrapado y subsumido, canalizado y sometido, canibalizado y engullido por el complejo maquínico. Pero en tanto no lo sea, es elemento orientador e iluminador, ramificación posible de ese árbol, de ese campo, que llamamos vida.

Es cierto que Marx, en una parte tan significativa de su obra, como lo es la Introducción (Cuaderno M) a los *Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política de 1857-1858*, llega a expresar que “el capital es la potencia económica, que lo domina todo, de la sociedad burguesa”. Justo eso, para Marx el capital no se *ontologiza*, ni la sociedad burguesa es equivalente al mundo (la for-

ma valor no es la subsunción completa y definitiva del trabajo vivo). Hay espacio, entonces, para las alternativas. Dado que no hay cierre de la totalidad, es este un campo de lucha, no algo ya decidido de antemano.

En tiempos de guerra global como en la que nos hallamos, el postulado de “una sociedad en la que todos quepan” adquiere consecuencias éticas y morales que cuestionan los principios de la mercantilización absoluta, del individualismo solipsista y de las metodologías de la acción racional. Si al postulado anterior añadimos el punto de partida de que “el asesinato es suicidio” (Hinkelammert, 2010), llegamos a la necesidad (no como juicio de valor sino como un realismo de lo posible) de una ética de la vida (la negación de la vida del otro, niega mi propia humanidad: la bala que mata por la espalda al otro, por la globalidad del mundo, también me alcanza) y de una racionalidad reproductiva, muy superior, en los tiempos actuales, a la racionalidad instrumental medios-fines o al mecanismo de la mano invisible del mercado y su principio moral adyacente (vicios privados que crean virtudes públicas).

Si atendemos a lo señalado por John Berger con relación a su percepción sobre la reciente ola de disturbios en Londres, y teniendo en mira lo que de modo cotidiano se presenta ante nuestros ojos en nuestra inmediata realidad cotidiana, no podemos sino suscribir su juicio: vivimos “aislados pero juntos” y habitamos un presente violento al punto de la desesperación. La sociedad en la que vivimos se ha revelado no sólo como capaz sino muy eficaz para dejar en el desamparo de la vida, en el abandono a una existencia bajo condiciones de precariedad a toda una generación de jóvenes que cuenta con muy altos estándares de calificación laboral y de adiestramiento técnico, aptos y hábiles en el manejo de las nuevas tecnologías, y bien actualizados en el saber científico. Los niveles de desempleo como realidad global, la migración en flujos bien articulados por el mundo entero, o la falta de oportunidades los convierten en un mercado cautivo de los más diversificados mecanismos de la economía criminal. Este es uno de los rasgos más perturbadores (socialmente) de la crisis, pero desde otro ángulo, es también en este sector de la población donde se ha expresado el descontento. Los jóvenes han concentrado en ellos la agitación política potencial, con el valor agregado que a esta virtualidad política de respuesta le otorga el amplio flujo de información que circula por el internet y las redes sociales (emergente forma de auto convocatoria política y plasticidad organizativa). Ante la lógica negadora de la existencia humana del orden social vigente: me rebelo, luego existo; nos rebelamos, luego existimos. Nos indignamos, luego existimos, pues al visibilizarnos nos revelamos como existente humano ante un sistema que promueve la no existencia. Para decirlo en los términos en que lo enunciara Edward Thompson: “Me resisto a aceptar que esa determinación sea absoluta [...] Tenemos que lanzar contra esa lógica degenerativa todos los recursos que existan aún en la cultura humana. Tenemos que protestar, si hemos de sobrevivir” (Thompson, 1983: 17). La labor experimental de lucha conlleva el hacerse sujeto(s) como un acto intersubjetivo. El yo sujeto vence o niega al yo individuo. La propuesta de una racionalidad re-productiva de la vida humana real puede ser un criterio para conformar un nuevo horizonte de sentido para la teoría crítica.

Hoy, desde el discurso crítico y desde la experiencia práctica de los que resisten y contradicen activamente la lógica del sistema, se requiere imaginación y uto-

pía, sí; pero ello no es suficiente, hace falta oficio también para que esos valores se vuelvan posibles y alcanzables, y no se conviertan en principios o postulados paralizantes, que generen escepticismo hacia cualquier incompleta vocación de cambio. Los movimientos de agitación y participación más generalizada quizá correspondan a un momento del propio movimiento cuya curva llega a su cenit, pero que es imposible sostener (de modo permanente) y que, por tal razón, en algún momento cambia su tendencia. El discurso que ahí se enuncia puede también exhibir tal conformación, y esto quiere decir contextualizar la proclama, hacerla parte de su lógica fundante, la de la protesta y movilización en que se inscribe. Esto implica no naturalizarla sino ponerla en correspondencia al curso de la situación, lo que exige no ver (en el marco de tal proceso) la traición a valores, por no hacerle seguidilla (al petitorio, al programa) en cualquier situación, sino hacer del discurso algo vivo como lo es la situación que le anima. Esta es también, al parecer, una perpetua situación de aprendizaje. Ya, en su momento, Amílcar Cabral sostenía que “la lucha de liberación es un hecho esencialmente político”, y este proceso sustancialmente político es, en el fondo, un proceso eminentemente cultural: “la lucha de liberación no es sólo un hecho cultural sino también un *factor de cultura*”. Y aquí, al igual que en otros casos, cultura equivale a cultivo de la diversidad, no a monocultura, ni a imposición.

Para aquellos comprometidos con la lucha social por construir “otro mundo posible”, podría estarse revelando como limitada, o muy ajustada a una situación coyuntural, no esgrimible bajo cualquier circunstancia, una proposición como la siguiente: “Que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar; la ira, a organizar” (Gilly, 2009: 21).

No avanzaremos mucho de ese modo, pues nos impide entrar en cuenta de que en los tiempos actuales no hay garantía de transformación efectiva si se camina por sendas paralelas que no se juntan, dado que no es suficiente ni la “ira desesperada” ni la “esperanza desorganizada”.

Los rumbos de la política emancipatoria no terminan de emanciparse de los caminos anteriores y las sendas nuevas se miran escarpadas y sin horizontes definidos. Caminar es el rumbo que la utopía parece consistir, no alcanzar un horizonte que espacio-temporalmente nunca se cierra, sino que se abre en cada paso y a cada trecho. En una especie de elusión del principio de incompletud gödeliano, los axiomas de la emancipación no pueden sustraerse de la axiomática emancipatoria, tienen que ceñirse a una especie de diseño fractal. En otras palabras, la lucha por la democracia no puede sino corresponder a una política de democratización sin término, inconclusa, una que distienda del modo en que Marx entiende la curva, el discurrir, el vaivén de los procesos políticos que edifican un nuevo orden desde las ruinas del orden anterior. Es así que en *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* se afirma:

Las revoluciones proletarias [...] se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen constantemente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzar de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos (Marx: 1971: 16).

La de la emancipación-liberación parece corresponder, pues, a una lucha que constituye “una tarea infinita” (Badiou, 2010: 30), no estática sino dinámica, una gesta que estaría animada por *atractores* de muy diversa índole, según las situaciones históricas concretas. Es dicho carácter en su temporalidad lo que podría impedir su petrificación. Ya desde el género literario, pues qué es un libro sino el entrecruzamiento de historias, lo llegó a vislumbrar John Berger cuando argumentó que:

Toda la historia es historia contemporánea; no en el sentido más común de la palabra, conforme al cual la historia contemporánea significa la historia del pasado relativamente reciente, sino en sentido estricto: el de la conciencia de la actividad de uno tal cual uno la realiza. La historia es así el propio conocimiento de la mente viva. Pues aun cuando los acontecimientos que estudia el historiador sucedieran en el pasado distante, la condición para que sean históricamente conocidos es que vibren en la mente de éste (Berger, 1994: 62).

El registro de nuestra contemporaneidad es de distintas temporalidades porque es diversa la argamasa temporal en que se configura el hacer de la existencia, y el imaginario en que uno se ve representado, o la memoria que se reivindica, o lo por construir que se anhela; sin embargo, pueden hallarse en dichos complejos u órdenes emergentes los puntos de confluencia y el espacio de lo común que impulse las luchas. De otro modo seremos incapaces de revertir la barbarie que se avecina.

Bibliografía

- Amin, Samir 2009 *La crisis. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis* (Madrid: Viejo Topo).
- Anderson, Perry 1997 “Neoliberalismo: Balance provisorio” en Sader, Emir y Gentili, Pablo (coords.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: Eudeba).
- Arrighi, Giovanni 1999 *El largo siglo XX* (Madrid: Akal).
- Badiou, Alain et al. (comps.) 2010 *Sobre la idea del comunismo* (Buenos Aires: Paidós).
- Benjamin, Walter 2010 “Calle de dirección única” en *Obras* (Madrid: Ábada) Libro IV, Vol. I.
- Berger, John. 1994 (1972) *G* (Madrid: Alfaguara).
- Chomsky, Noam 2011 Entrevista del periódico *La Jornada* publicada el viernes 17 de junio.
- Duchrov, Ulrich y Hinkelammert, Franz 2004 *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad* (México: Dríada).
- Duchrov, Ulrich y Hinkelammert, Franz 2004 *La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad* (México: Dríada).
- Echeverría, Bolívar 1988 “El concepto de fetichismo en Marx y en Lukács” en Borja Sarmiento, Graciela et al. *Simposio Internacional Gyorgy Lukacs y su época* (México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco).
- Echeverría, Bolívar 1998a *La modernidad de lo barroco* (México: Era).
- Echeverría, Bolívar 1998b *La contradicción entre el valor y el valor de uso en El capital de Karl Marx* (México: Ítaca).

- Gandarilla Salgado, José Guadalupe 2003 *Globalización, totalidad e historia. Ensayos de interpretación crítica* (Buenos Aires: Herramienta/CEIICH-UNAM).
- Gandarilla Salgado, José Guadalupe 2008 *El presente como historia. Crisis capitalista, cultura socialista y expansión imperialista* (México: CEIICH-UNAM).
- Gilly, Adolfo 2009 *Historias clandestinas* (México: Ítaca).
- González Casanova, Pablo 2002 "El neoliberalismo de guerra y los retos del pensamiento crítico" en *América Latina en Movimiento* (Quito) Año XXVI, N° 351, Época II, 9 de abril.
- Griffin, Roger 2010 *Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler* (Madrid: Akal).
- Harvey, David 2010 "Organizarse para la transición anticapitalista" en *Crítica y emancipación* (Buenos Aires: CLACSO) N° 4.
- Herf, Jeffrey 1990 *El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Hinkelammert, Franz 1995 "Capitalismo y socialismo: la posibilidad de alternativas" en *Acuario* N° 8, suplemento.
- Hinkelammert, Franz 2010 *Yo soy, si tú eres. El sujeto de los derechos humanos* (México: Dríada).
- Howard Kustler, James 2007 *La gran emergencia* (Huesca: Barrabes).
- Jessop, Robert 2008 *El futuro del Estado capitalista* (Madrid: La Catarata).
- Malraux, André 1977 *Antimemorias* (Buenos Aires: Sur).
- Marichal, Carlos 2010 *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873 – 2008* (México: Debate).
- Marx, Karl 1971 *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* (Barcelona: Ariel).
- Marx, Karl 1984 "El proceso de producción del capital" en *El Capital* (México: Siglo XXI) Tomo I, Vol. I.
- Marx, Karl 1984b *El Capital* (México: Siglo XXI) Libro I, Capítulo VI "Inédito".
- Marx, Karl 1989 *Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857-1858* (México: Siglo XXI Editores) Tomo I.
- Marx, Karl 2005 *La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización (extractos del manuscrito 1861 – 1863)* (México: Ítaca).
- Mattick, Paul 1979 (1934) "Sobre la teoría marxiana de la acumulación y del derrumbe" en Korsch, Karl et al. *¿Derrumbe del capitalismo o sujeto revolucionario?* (México: Siglo XXI).
- Mészáros, Itsván 1986 "La industria de la destrucción. Último camino del capitalismo" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Año XXXII, N° 126, Nueva época, octubre-diciembre.
- Mészáros, Itsván 2001 *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición* (Caracas: Vadell).
- Mignolo, Walter 2009 "Coloniality: The Darker Side of Modernity" en *Catalog of Museum Exhibit: Modernologies* (Barcelona: Museo de Arte Moderno).
- O'Connor, James 2001 *Causas naturales: ensayos de marxismo ecológico* (México: Siglo XXI).

- Pierano, Marta y Gómez, Sonia 2009 *El Rival de Prometeo Vidas de Autómatas Ilustres* (Madrid: Impedimenta).
- Quijano, Aníbal 1992 "Colonialidad y modernidad/razionalidad" en Heraclio Bonilla (comp.) *Los conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas* (Bogotá: Tercer Mundo/FLACSO/Libri Mundi).
- Taylor, Peter y Flint, Collin 2002 *Geografía política. Economía-mundo, Estado-nación y localidad* (Madrid: Trama).
- Thwaites Rey, Mabel 2010 "Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina?" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 27, abril.
- Thompson, E. P. et al. 1983 *Protesta y sobrevive* (Madrid: Blume).

Notas

1 Virtualmente, desde el mismo momento (hace cuatro décadas) en que un personaje de muy escasa estatura intelectual y que ocupaba el puesto de presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declarase la "guerra contra las drogas", uno de cuyos "efectos no deseados" ha sido la confrontación entre "los cárteles de la droga" y el Estado mexicano (que ha tomado parte por uno de ellos), la cual ya suma, en México, más de sesenta mil muertos y veinte mil desaparecidos, tan sólo en los últimos años de la administración del gobierno federal (Véase Chomsky, 2011: 4).

2 Dos ejemplos, desde México, vendrían al caso: en primer lugar la tragedia ecológica en el Golfo de México del yacimiento petrolero de Macondo, en que la explotación de los yacimientos de aguas profundas en esquemas ahorradores de costos por las grandes petroleras dio lugar a esa desafortunada expresión del presidente Obama en que "había llegado la hora de patear traseros" y la más grave aún en la entidad federativa de San Luis Potosí, en la que el cerro de San Pedro fue reducido a polvo, de julio de 2005 a marzo de 2010, por las operaciones a cielo abierto de la canadiense New Gold Inc., a través de

su filial, Minera San Xavier, la cual aun careciendo de los permisos legales correspondientes para explotar ese yacimiento de oro y plata, a sólo 8 kilómetros de la capital del estado, nunca detuvo sus actividades y amenaza con ampliarlas.

3 El ejemplo no podría ser más propicio: las tierras sagradas y ancestrales de Wirikuta, correspondientes al pueblo Wixárika, experimentan actualmente la amenaza de destrucción de la mega minería canadiense con el apoyo u omisión del Estado mexicano.

4 Una mercancía ficticia es "algo que tiene forma de mercancía (en otras palabras, que puede ser comprado y vendido), pero que no ha sido creado en un proceso de trabajo que tenga por objeto obtener beneficios, ni tampoco se halla sujeto a las típicas presiones competitivas de las fuerzas del mercado para racionalizar su producción y reducir el plazo de rotación del capital invertido" (Jessop, 2008: 16).

5 Véase si no la dificultad que los "amos del dinero" en México han tenido que enfrentar para colocar, como si fuera una mercancía en el mercado (electoral), a la opción electoral de su preferencia, más funcional a sus intereses, como si estuvieran vendiendo una nueva marca de jabón.

Experiencias latinoamericanas

**El *#YoSoy132* y las elecciones en México.
Instantáneas de una imposición anunciada
y del movimiento que la desafió**

Luz Estrello y Massimo Modonesi

El #YoSoy132 y las elecciones en México

Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió

LUZ ESTRELLLO

Socióloga por la UNAM. Profesora adjunta del Centro de Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS-UNAM).

MASSIMO MODONESI

Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor titular y coordinador del Centro de Estudios Sociológicos, FCPS-UNAM.

Resumen

Este 2012, en plena campaña electoral, un inesperado movimiento estudiantil irrumpe en el escenario político mexicano para denunciar la falta de imparcialidad informativa de los principales medios de comunicación, por considerar que sus coberturas favorecían al candidato Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido, ausente durante doce años de la casa presidencial, había desplegado una enorme cantidad de recursos para asegurar su regreso al poder. Uno de ellos era la alianza con los magnates de la televisión y con los dueños de empresas encuestadoras. El presente artículo muestra cuáles han sido los acontecimientos que, en poco más de dos meses, han sacudido a los poderes fácticos en México. Los autores narran el surgimiento del #YoSoy132, cuya crítica al sistema político va ligada a la exigencia de democratización, no sólo de los medios de comunicación, sino de las instituciones. Por tanto, el objetivo es evaluar someramente los alcances y perspectivas de este nuevo movimiento, así como apuntar cuáles son y cómo se han desarrollado sus planteamientos políticos.

Abstract

In 2012, in the midst of an election campaign, an unexpected student-led movement broke into Mexico's political scene to denounce that the leading media outlets purposefully failed to provide unbiased political information on the grounds that their reports favoured presidential candidate for Partido Revolucionario Institucional Enrique Peña Nieto. This party, which had been denied office for twelve years, deployed substantial resources to ensure its return to power, including alliances with television moguls and pollsters. This paper shows the events which shook the de facto powers in Mexico in barely two months. Modonesi and Estrello recount the emergence of #YoSoy132, a movement whose criticism against the political system is associated with a demand for the democratisation of the media and institutions. The authors' goal is to offer a general assessment of the scope and perspectives of this new movement, and to focus on the development and content of their political approach.

Palabras clave

Movimiento estudiantil, medios de comunicación, conflicto electoral, democratización.

Key words

Student-led movement, the media, electoral conflict, democratisation.

Cómo citar este artículo

Estrello, Luz y Modonesi, Massimo 2012 "El #YoSoy132 y las elecciones en México. Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

Este 2012, la primavera comenzó en mayo. Mientras se demoraba, la contienda electoral ya había acaparado toda la atención del país, colocándose en el centro del escenario sociopolítico. La cobertura mediática, en manos de las dos únicas empresas de televisión abierta del país (Grupo Televisa y Televisión Azteca) había posicionado claramente al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, como el favorito, incluso desde antes que arrancara oficialmente la campaña. En poco tiempo, las alianzas en torno a este candidato habían logrado instalar en la mente de muchos mexicanos la idea de que la elección presidencial sólo sería una confirmación de las encuestas. Hasta que se desató una cadena de acontecimientos que movió las piezas del tablero.

En este artículo vamos a dar cuenta de la trayectoria del movimiento Yo Soy 132, a través de un relato que recorre cronológicamente su emergencia y las acciones que lo colocaron en el centro de la vida política mexicana. Para su elaboración, recurrimos a tres tipos de información: la registrada por los reporteros al calor de los acontecimientos, difundida por la prensa escrita y medios independientes; la generada por el propio movimiento, que abarca desde pronunciamientos y boletines de prensa hasta campañas audiovisuales, compartidas "de mano en mano" a través de las redes sociales; y la obtenida mediante observación directa en las asambleas estudiantiles y movilizaciones. Con el objetivo de ahorrarle a los lectores el cúmulo de referencias que utilizamos, hemos procurado indicar, al final del artículo, las principales fuentes a las que se pueden remitir. Es preciso considerar que esta es una historia que continúa escribiéndose con el paso de los días, pero eso no impide que en las conclusiones tratemos de sintetizar, brevemente, las características de este movimiento, para evaluar su impacto y perspectivas.

11 de mayo de 2012

Acostumbrado a los foros de acceso controlado, en los que su equipo vigila cada uno de los detalles (incluso las preguntas que se hacen), Enrique Peña Nieto acudió a la Universidad Iberoamericana (UIA) para sostener un encuentro con estudiantes llamado "Buen Ciudadano Ibero", del que participaron, en distintas ocasiones, los cuatro candidatos a la presidencia. Aquella mañana, cuando el priísta llegó al auditorio, parte del público lo esperaba con máscaras del ex presidente Carlos Salinas y con pancartas alusivas a la represión en San Salvador Atenco, ocurrida seis

años atrás¹. En el recinto, Peña Nieto tuvo que responder a más de una decena de preguntas formuladas por los universitarios, una tarea difícil para quien, como él, posee un marco discursivo tan estrecho. Antes de retirarse, se refirió a lo sucedido en Atenco como una acción de autoridad que asumía personalmente, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”, y que había sido “avalada” por la Suprema Corte de Justicia. Lo dicho disparó la indignación de los cientos de estudiantes dentro y fuera del auditorio, quienes lo despidieron en medio de bullas, consignas y hasta con un zapatazo. Toda la escena fue documentada por decenas de teléfonos móviles y de inmediato subida a las redes sociales, así que la noticia y las imágenes circularon rápidamente, llegando a miles de personas. La primera declaración a la prensa del candidato –todavía en medio de los gritos, mientras se subía apresuradamente a su vehículo– fue que la manifestación no había sido “genuina”, pero que la respetaba. Poco después, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell, calificó de lamentable el comportamiento de los jóvenes y dudó que se tratara de estudiantes. Para rematar, el vocero del Partido Verde (aliado del PRI) afirmó que sin duda se trataba de porros ajenos a la universidad, vinculados al PRD (el partido de centroizquierda), además.

Durante las horas siguientes, la protesta en la Ibero fue el principal tema de conversación en las redes sociales, donde circulaban videos del acontecimiento tomados desde todos los ángulos. Sin embargo, los rostros consternados del candidato y su equipo, prácticamente acorralados por los estudiantes, pasaron casi inadvertidos para la mayoría de la población, debido a la escasa cobertura que los medios masivos de comunicación le dieron al asunto. Algunos de ellos, incluso, llegaron al extremo de presentar la visita de Peña Nieto a la UIA como todo un éxito². Quienes sabían que no era cierto, se agitaban en sus asientos; hasta que de pronto, cibernautas anónimos convocaron a una “marcha de información anti Peña Nieto” para el día 19 de mayo. Las suspicacias en torno a la convocatoria no se hicieron esperar, pues al desconocer el origen de la misma, algunos usuarios señalaron que podría ser una trampa que terminaría beneficiando a la derecha (concretamente a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien efectivamente trató de montarse más tarde en las protestas, sin conseguirlo). Sin embargo, la convocatoria “anti Peña” adquirió gran resonancia, lo mismo que otra que llamaba a una concentración de apoyo al candidato Andrés Manuel López Obrador, justo para el día siguiente, 20 de mayo.

12 de mayo

Las declaraciones de los dirigentes priístas, transmitidas en todos los noticieros, recibieron una pronta (y peculiar) respuesta desde las redes sociales. En un video casero de más de diez minutos, 131 jóvenes que participaron en las protestas del día anterior mostraron sus credenciales y refutaron lo dicho en su contra. Se describieron como ciudadanos informados que no eran controlados por ningún partido o candidato. Se dirigieron a los medios de comunicación y les reprocharon su “dudosa neutralidad” por ocultar lo que aconteció en la Ibero. Ante la cámara, uno a uno “firmó” con su nombre y número de cuenta. Este gesto bastó para que, inmediatamente, una oleada de mensajes de simpatía inundara los foros de YouTube, Facebook y Twitter. En este último, los usuarios expresaron su solidaridad

con las etiquetas (*hashtags*) #yotambiénsoy131, #somosmásde131, hasta derivar en #YoSoy132.

Cabe mencionar que la irrupción de los estudiantes de la UIA también causó revuelo por tratarse de una de las universidades más caras del país, situada en la zona más exclusiva de la ciudad de México, cuya comunidad era considerada indiferente a los problemas del país. Así, los “niños Ibero” habían dado, de un momento a otro, una gran lección a quienes pensaban que las protestas, especialmente las estudiantiles, nacían y morían sólo en las universidades públicas.

16 de mayo

Las primeras réplicas de la protesta en la Iberoamericana comienzan en el interior del país, en las ciudades de Saltillo y Córdoba, en el marco de la visita del candidato. Los manifestantes no tienen la misma suerte de los capitalinos y son agredidos por grupos con insignias priístas. Aunque los hechos son denunciados, las autoridades no intervienen. El viejo PRI se respira en el aire.

Mientras tanto, en la Ibero se lleva a cabo una primera asamblea con el objetivo de impulsar un proceso de organización estudiantil. Acordaron conformarse como una red “en pro de la democracia, sin bandera partidista”, con el objetivo de abrir un espacio para la discusión de ideas, en pro del derecho a la información. La red, además, contemplaba ir más allá de la UIA y vincularse con otros estudiantes. Y así, los primeros en responder a este llamado fueron los de otras universidades privadas.

18 de mayo

La presentación en público de la naciente red juvenil arrojó un hecho sin precedentes. Casi un millar de universitarios se manifestó simultáneamente en dos de las instalaciones de Televisa en la ciudad de México: San Ángel y Santa Fe. Exigían el cese a la manipulación de la información con fines electorales, operada desde los noticieros de la empresa. Hartos de lo que llamaron el sesgo informativo de los medios durante el proceso electoral, dañino para la vida democrática, los jóvenes portaron por primera vez pancartas con la leyenda #YoSoy132 y formaron cadenas humanas sin obstruir el tráfico vehicular. Eran estudiantes de las universidades Iberoamericana, Anáhuac (UA), La Salle (ULSA), el Tecnológico de Monterrey (TEC) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Antes de retirarse, aclararon que ellos no participarían en la concentración anti Peña por desconocer a los organizadores y por no querer pronunciarse ni a favor ni en contra de algún candidato. Anunciaron, además, que la siguiente concentración de estudiantes sería en la “Estela de luz”, el miércoles 23 de mayo³.

19 de mayo

En toda la historia del país nunca se había visto una manifestación contra un candidato presidencial, y mucho menos convocada desde las redes sociales, donde se difundió “de voz en voz”. Cuando llegó el día, el temor a posibles actos de provocación se desvaneció en una gran fiesta política a lo largo de la principal avenida

de la capital. De forma simultánea, ciudadanos de veinte estados del país respondieron al llamado y tomaron las calles para expresar su rechazo al candidato, a las televisoras y al PRI, cuya ventaja en las encuestas permanecía inalterable. En algunos lugares, como Nayarit, Durango y Veracruz, sí hubo intentos de provocación por parte de simpatizantes priístas. Por otro lado, no faltaron los candidatos locales del PAN que aprovecharon para encabezar la marcha en Aguascalientes. En todos lados, la mayoría de los manifestantes eran jóvenes, muchos estudiantes organizados por escuelas, pero también familias enteras y grupos de artistas. No hubo más oradores que los espontáneos que se dirigían a los que estaban a su alrededor, y que sólo se representaban a sí mismos. Los automovilistas hacían sonar sus bocinas para demostrar simpatía y la manifestación entera fue un carnaval en el cual el principal objeto de la burla popular fue Peña Nieto. De acuerdo con los reportes de Seguridad Pública del Distrito Federal, y para sorpresa de muchos, 46 mil personas se manifestaron pacíficamente durante casi cuatro horas. Las pancartas, lejos de llamar a votar por otros candidatos, se concentraron en repudiar al “dinosaurio” (el apodo del PRI) y a las televisoras. Aquella multitud de ciudadanos había asociado con una fluidez asombrosa la figura de Peña Nieto con Televisa, relación que tiene como trasfondo uno de los problemas fundamentales de la democracia mexicana: la concentración de los medios de comunicación en un par de empresas que utilizan el espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación, para favorecer los intereses de la cúpula política y empresarial. Así, quienes protestaban estaban denunciando ante la opinión pública que semejante alianza, cuyo producto es Peña Nieto, es la materialización de todo lo peor del sistema político mexicano.

20 de mayo

Desde que se realizaron las cadenas humanas afuera de sus instalaciones, algunos espacios noticiosos de Televisa intentaron mostrarse abiertos a la crítica, y transmitieron notas más extensas sobre las protestas, en comparación con las que solían hacer cuando se trataba de cualquier otro movimiento social. Algunos conductores, impostando jovialidad, invitaron a estudiantes de las universidades privadas a hablar de sus inconformidades. Se vieron obligados, incluso, a transmitir imágenes de sí mismos (como empresa) siendo el objeto de las protestas. Sin embargo, la falsa “apertura” se puso al descubierto cuando al día siguiente de la movilización, uno de los diarios asociados a la empresa (Milenio) publicó en su encabezado que la panista Josefina Vázquez Mota había llamado a tomar las calles contra Enrique Peña Nieto, con una fotografía de la marcha del día anterior. Si los ánimos ya estaban caldeados, esto los avivó. En pocas horas ya estaba lista una “videorespuesta”, protagonizada por los estudiantes de la Ibero, que dio mayor fuerza a la convocatoria del día miércoles. Aunque la panista no tardó en desdecirse, la afrenta ya no encontró disculpas, y los jóvenes volvieron a salir a la calle con una sola demanda: democratización de los medios de comunicación y de las instituciones.

Paralelamente, pero marcando distancia respecto al movimiento #YoSoy132, el 20 de mayo tuvo lugar otra manifestación muy numerosa en las principales plazas públicas del país, convocada por simpatizantes del candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición opositora al PRI y al PAN. En la ciudad de México,

sin la presencia del candidato –que se encontraba haciendo campaña en algún otro punto del país–, miles de ciudadanos repitieron la ruta de la manifestación del sábado, esta vez con la libertad de portar sus insignias partidistas. Al día siguiente, lunes 21, se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes con AMLO, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, al que asistieron alrededor de 10 mil jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

23 de mayo

La primera manifestación convocada por el movimiento #YoSoy132 había despertado gran expectativa en algunos medios privados y, principalmente, en los medios independientes. Antes de las cinco de la tarde, poco a poco, de las estaciones del metro cercanas al lugar de la cita fueron emergiendo jóvenes agrupados por escuelas, gritando y llevando mantas. Pronto, la explanada de la “Estela de luz” fue insuficiente para dar cabida a tantas personas, así que la concentración devino marcha y casi 15 mil universitarios se volcaron sobre el Paseo de la Reforma con dirección al Ángel de la Independencia. Contingentes de universidades públicas y privadas avanzaban recibiendo muestras de apoyo de los automovilistas y transeúntes. Iban gritando las porras representativas de sus escuelas. Estuvieron presentes jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Tecnológico de Monterrey, de La Salle, del Claustro de Sor Juana y la UNITEC, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Escuela Nacional de Danza, entre otras. El reclamo general era contundente: alto a las mentiras, democratización de los medios de comunicación. También estaban los estudiantes de la Ibero que habían encendido la mecha, pero que ya habían decidido constituirse como un colectivo autónomo, llamado “Más de 131”, conscientes de la tremenda cantidad y diversidad de colectivos que se estaban sumando al movimiento. Cuando los manifestantes llegaron al Ángel de la Independencia, sin líderes ni coordinadores, continuaron en dirección al centro de la ciudad, hasta que un impulso colectivo hizo que la columna doblara en una esquina para dirigirse a la sede principal de Televisa, situada en avenida Chapultepec. Una vez ahí, los jóvenes expresaron todo su repudio hacia la empresa, por manipular la información y carecer de imparcialidad noticiosa. Además, exigieron que el segundo debate entre candidatos se transmitiera en cadena nacional, no como el primero, que se difundió únicamente por los canales de menor audiencia, a pesar de que un amplio sector de la opinión pública había demandado que se le diera mayor cobertura.

Mientras tanto, la prensa registraba “movilizaciones espejo” en más de 14 estados del país. Varias centenas de jóvenes identificados con la demanda de democratizar los medios salieron a las calles de Querétaro, Oaxaca, Toluca, Monterrey, Tijuana, Cuernavaca, Villahermosa, Saltillo, Xalapa, Veracruz, Mérida y Tuxtla Gutiérrez, entre otras ciudades. Al finalizar la jornada, en el Zócalo capitalino, los participantes acordaron reunirse en asambleas por escuela y encontrarse nuevamente en una gran Asamblea Interuniversitaria, con el objetivo de darle dirección a toda esa fuerza que se había demostrado durante la marcha. Por unanimidad, el lugar elegido fue la Ciudad Universitaria de la UNAM.

Tal y como había estado sucediendo en los últimos días, las televisoras tuvieron que incluir en sus noticieros la manifestación que tuvo lugar frente a sus instalaciones, así como las que se fueron sumando a lo largo de la semana al interior del país. A esas alturas, el escarnio público ya acosaba a Peña Nieto en, prácticamente, todos los lugares que pisaba. El “efecto Ibero”, como lo llamaron algunos, era evidente, y el desgaste del candidato también.

26 de mayo

En menos de dos semanas, el escenario político había cambiado. Antes de los sucesos del 11 de mayo, el papel que la campaña electoral había reservado a los jóvenes sólo era el de “votantes potenciales”, generalmente apáticos y desencantados de la política, pero que bien podrían emplearse –temporalmente, claro– como “acarreados” en los actos proselitistas. En los discursos de los candidatos apenas figuraba el tema de la enorme falta de oportunidades que tienen las juventudes en México; y de los cuatro, sólo uno de ellos había mencionado la importancia de la educación para revertir la ola de violencia que, en los últimos seis años, le ha arrebatado la vida a más de 80 mil personas, la mayoría jóvenes⁴. Por otro lado, el activismo juvenil se hallaba disperso en distintas iniciativas, muchas de carácter estudiantil, pero sin mayor resonancia más allá de los contextos locales. De esta manera, la irrupción de un amplio sector de carácter juvenil (y urbano, principalmente) en la vida pública sorprendió muchísimo a quienes creyeron que a los jóvenes no les importaban los problemas del país; pero no tanto a quienes, al menos al interior de las universidades, sabían de la existencia de grandes reservas de pensamiento crítico, un material explosivo que aguarda silenciosamente, hasta que una chispa lo revienta y lo transforma en acción directa.

Los acontecimientos en México lograron captar la atención de otros movimientos sociales alrededor del mundo, como los indignados españoles y el Occupy Wall Street en Nueva York, que no se demoraron en enviar sus saludos y solidaridad. Fueron ellos quienes, a través de las redes sociales, bautizaron la efervescencia juvenil con el nombre de Primavera Mexicana.

Con el objetivo de ajustar detalles para la primera Asamblea General Interuniversitaria, varias decenas de universitarios se reunieron en Tlatelolco el 26 de mayo. Para entonces, ya había surgido un primer intento de estructura organizativa, llamada Coordinadora Interuniversitaria, que se encargaba de establecer los enlaces con las distintas universidades deseosas de participar. Al concluir aquella reunión, se dio a conocer un primer documento, leído a varias voces, que esbozaba los principios del movimiento. El texto llamaba “a todos los oprimidos a unirse en una misma lucha por la libertad, la justicia, por los suelos que compartimos y por el futuro que merecemos”. Además, se acordó mantener la exigencia de democratizar los medios de comunicación, así como asumirse “como un movimiento apartidista, pero no apolítico, y rechazar la llegada de Peña Nieto al poder”. Para difundir este primer posicionamiento, se impulsó una campaña de videos, audios e imágenes que circularon por internet. Pero la actividad no sólo se disparó en los foros cibernéticos, puesto que se materializó en cada una de las escuelas que organizaron asambleas locales, con un alto nivel de respuesta. Poco a poco, el

protagonismo que en un inicio tuvieron los estudiantes de universidades privadas, fomentado en gran parte por los medios de comunicación, se vio rebasado por la masiva participación que comenzaban a tener las universidades públicas, cuyas discusiones al interior estaban comenzando a tocar asuntos que iban mucho más allá de la coyuntura electoral y de la propia democratización de medios.

30 de mayo

Desde muy temprano, en los jardines de la Ciudad Universitaria, conocidos como “las Islas”, se respiraba un ambiente festivo y de enorme expectación. A las nueve de la mañana comenzó el registro de los voceros y con el sol del mediodía arrancaron los saludos. Llegaron representantes de 150 universidades de distintos puntos del país. Todos festejaron la unión de tantos estudiantes, y se felicitaron por terminar con las barreras entre universidades públicas y privadas, pues ahora estaban dispuestas a trabajar en conjunto por objetivos comunes. Una multitud de aproximadamente 5 mil jóvenes aplaudió sin descanso casi dos horas, para después tomar un receso y comenzar con la discusión en las 15 mesas de trabajo organizadas por tema. Luego de casi cuatro horas de intercambio de ideas, y tras sortear diversas dificultades, los estudiantes lograron armar una relatoría con los principales acuerdos que debían ser aprobados por las asambleas locales antes de ser considerados como resolutivos, así como una lista de disensos, los cuales también debían ser canalizados “de regreso” a las escuelas para que se continuaran discutiendo.

La mesa que tuvo la discusión más acalorada fue la que debía definir la posición política del movimiento ante las elecciones del primero de julio. También fue la más concurrida. El punto que generó mayor tensión giró en torno a qué hacer con la cuestión del voto, pues los grupos de activistas con más tradición en las universidades públicas (especialmente, en la UNAM) se hallaban divididos entre los que llamaban a anularlo y los que llamaban a votar “útilmente” por la izquierda. El punto se salvó con una tercera opción: promover el ejercicio del voto libre e informado.

Sobre asumirse como un movimiento anti Peña o no, la Asamblea decidió definirse como un movimiento autónomo y de carácter antineoliberal, que se declaraba en contra del sistema corrupto y autoritario que representa Enrique Peña Nieto, pero no en contra “de su persona”.

Uno de los acuerdos que se tomó por unanimidad fue el de impulsar el movimiento estudiantil mirando más allá del primero de julio, y se comenzaron a esbozar algunos puntos para armar un plan de lucha. También hubo discusión en torno a cómo impulsar una auténtica democratización de medios que no implique solamente mayor competencia entre empresas privadas, sino la inclusión de la sociedad civil en la gestión del espacio radioeléctrico, a través de proyectos de comunicación comunitaria. Una de las mesas de trabajo se centró exclusivamente en plantear los antecedentes históricos del movimiento, partiendo de la idea de que sin memoria histórica no puede existir lucha social. Al final de la jornada, después de leer las relatorías, los estudiantes se retiraron con la encomienda de seguir puliendo las propuestas por escuela, que serían llevadas nuevamente a una Asamblea de Voceros, con el objetivo de generar resoluciones para el día 5 de junio.

1 al 9 de junio

Pocos días antes de que culminaran los cursos en las universidades, se registraba una intensa actividad. Había asambleas por todos lados y se armaban comisiones con distintas tareas. Cada escuela definía su agenda con iniciativas propias: brigadeos, conciertos, charlas sobre derechos humanos, generación de documentos y material visual, intervenciones artísticas en el transporte público y hasta “incursiones” en territorio del Estado de México (el bastión más importante del priísmo) para repartir volantes y hablarle a la gente del movimiento. Algunas de estas misiones fueron agredidas por simpatizantes de Peña, y brigadistas fueron detenidos varias horas por la policía. En el interior del país también habían comenzado a surgir grupos de estudiantes organizados, que ahora tenían que lidiar no sólo con el acoso de los priístas durante sus manifestaciones, sino con los intentos del resto de los partidos para utilizar el movimiento en su beneficio.

Las bases estudiantiles llamaron constantemente a evitar los protagonismos de algunos participantes del movimiento, tanto a nivel individual como por parte de los colectivos más ideologizados

Mientras tanto, en el Distrito Federal, la mayor polémica giraba en torno a la estructura organizativa del movimiento y al papel que estaba jugando la Coordinadora Interuniversitaria, señalada por hacer declaraciones fuera de los acuerdos de la asamblea. Las bases estudiantiles llamaron constantemente a evitar los protagonismos de algunos participantes del movimiento, tanto a nivel individual como por parte de los colectivos más ideologizados. Para revertir dicha situación, se optó por elegir voceros rotativos sujetos a los mandatos de su asamblea, que debían evitar hacer declaraciones de carácter personal a nombre del movimiento. De alguna manera, los estudiantes tenían muy presente una estrategia de los medios de comunicación que consiste en crear líderes para, posteriormente, desprestigiarlos. Estaba el antecedente de la huelga de la UNAM en 1999, o el caso de la APPO en 2006, cuando Televisa y Televisión Azteca se encargaron de mediatizar supuestos líderes y confundir a la opinión pública. En este sentido, el recelo de los estudiantes era comprensible, sobre todo porque durante los primeros días de movilización se desataron rumores acerca de una supuesta intervención del equipo de López Obrador y hasta de políticos ex priístas. Ante esto, los jóvenes no podían hacer otra cosa más que refutar las acusaciones en las redes sociales y en las calles, o a través de las intervenciones de los voceros en (muy escasos) medios de comunicación.

El 7 de junio, el periódico inglés *The Guardian* publicó una investigación que señalaba la implementación de toda una “estrategia de comunicación” diseñada para brindarle al candidato del PRI una “cobertura favorable” en los noticieros y espacios de entretenimiento de Televisa. El reportaje se basaba en documentos proporcionados por una fuente anónima, en 2005, en los que se detallaban los pasos a seguir para desprestigiar a López Obrador en los mismos espacios televisivos. La noticia fue seguida sólo por unos cuantos medios mexicanos, y descalificada al día siguiente por

los voceros de la televisora. Para entonces, el furor anti Peña había tomado nueva fuerza en las redes sociales, y se convocó a otra manifestación para el día 10 de junio. Esta vez, la convocatoria coincidía con una fecha simbólica que las asambleas del Yo Soy 132 ya habían decidido conmemorar, pues se cumplían 41 años de cuando el gobierno (priísta) de Luis Echeverría mandó reprimir una manifestación estudiantil.

10 de junio

La mayoría de los contingentes de estudiantes del movimiento Yo Soy 132 partió del Casco de Santo Tomás, un conjunto de escuelas del Instituto Politécnico, con dirección al Zócalo. Al mismo tiempo, otra manifestación partió del Zócalo a la Columna de Independencia. La primera marcha ponía el acento en una de las represiones más emblemáticas del Estado mexicano. Al recordar, marchando, aquel “jueves de corpus” de 1971, los estudiantes del 2012 estaban diciendo, una vez más, que no querían el regreso del régimen más autoritario que ha tenido México. La segunda marcha, a la que acudieron ciudadanos de todas las edades y muchos simpatizantes del #YoSoy132, estaba mucho más concentrada en el presente, a escasas tres semanas de la elección, donde el adversario principal era Peña. Al final de cuentas, ambas manifestaciones reivindicaban lo mismo: no a la imposición del candidato de la televisión. Juntas sumaron más de 100 mil personas, tan sólo en la ciudad de México.

Por la noche, se realizó el segundo debate entre candidatos a la presidencia, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro que se había caracterizado por su mediocre desempeño en la regulación de las elecciones, por ser omiso ante los gastos excesivos del PRI y la “guerra sucia” de *spots* impulsada por el PAN. El IFE había demostrado no tener facultades ni disposición política para hacer que los consorcios televisivos transmitieran en cadena nacional el primer debate presidencial. Esta vez, las televisoras trataban de hacer otro gesto de apertura y ofrecieron la transmisión por sus canales de mayor audiencia, no sin antes jactarse de saber escuchar las demandas de los jóvenes.

Pese a la insistencia del movimiento en que el encuentro entre candidatos fuese transmitido al mayor número de hogares posible, en pro del voto informado, el debate no tuvo demasiados impactos en cuanto a preferencia electoral, o al menos eso reportaban los estudios de opinión. Televisa insistió, a su vez, en dar a conocer encuestas que ubicaban a Peña Nieto a la cabeza, a más de veinte puntos del segundo lugar.

Una de las iniciativas que impulsó el colectivo “Más de 131” de la Ibero, y que fue respaldada por estudiantes de todas las asambleas, fue organizar desde el movimiento un tercer y último debate entre los candidatos. Los trabajos de los jóvenes se centraron en formular preguntas con sentido crítico, que además debían ser acordadas entre todos. El formato que se diseñó estuvo pensado para incluir los mayores espacios de réplica posibles y así generar un diálogo más fluido. Se definieron tres fases de discusión, moderadas por un académico, un periodista y un estudiante, respectivamente. Una de ellas, la segunda, estaría dedicada exclusivamente a la cuestión de democratización de los medios y al combate a los monopolios. La última fase fue abierta a preguntas que, previamente y a través de la página oficial del movimiento, habían enviado ciudadanos.

18 de junio

El “Debate Yo Soy 132” resultó un ejercicio inédito. Nunca se había convocado desde la ciudadanía un encuentro entre candidatos sin la intermediación de las instituciones. El único que rechazó la invitación del movimiento, a pesar de que se le garantizaba un trato respetuoso e imparcial, fue Peña Nieto, argumentando que no encontraba adecuada su presencia en un evento organizado por quienes abiertamente se habían pronunciado en su contra. Los otros tres candidatos sí asistieron a la cita. Los jóvenes, a pesar de que no lograron que el evento fuera transmitido en vivo por los canales de las universidades (TV UNAM y canal Once) y mucho menos por las televisoras, recurrieron a herramientas gratuitas disponibles en internet para difundirlo. Así, se realizó una accidentada transmisión vía You Tube, plataforma que no soportó la cantidad de usuarios que intentaban captar la señal. Sin embargo, fue seguido por radio y durante los días siguientes fue consultado miles de veces (hasta rebasar el millón de visitas tan sólo en un canal de You Tube). Los canales de televisión universitarios, finalmente, televisaron el debate unos días después, el 24 de junio.

23 de junio

Con el objetivo de continuar la campaña para promover el voto informado, el movimiento convocó a una marcha-brigadeo en la ciudad de Toluca, capital del estado de México. De forma simultánea, en el Zócalo capitalino se llevó a cabo el Festival Yo Soy 132, organizado en menos de tres días por el movimiento, cuyos brigadistas trabajaron sin descanso para recaudar fondos mediante colectas callejeras y cooperaciones en las escuelas. Al concierto acudieron 50 mil personas, animadas por una decena de bandas musicales que se pronunciaron en apoyo al movimiento juvenil. Durante ocho horas, el rock se combinó con las artes circenses y la realización de esculturas con material reciclado. A pesar de la lluvia, la plaza permaneció llena durante todo el recital.

24 de junio

Nuevamente, desde las redes sociales y sin la convocatoria del movimiento estudiantil, decenas de miles de personas salieron a las plazas del país en lo que se llamó la “Tercera marcha nacional informativa: no más PRI”. Eso comprueba que la efervescencia social no estaba esperando a que el movimiento convocara a protestas. Sin embargo, las insignias y motivos que mueven al “132” estaban presentes en todas las movilizaciones. Así, arranca la última semana previa a la elección presidencial.

26 de junio

Uno de los acuerdos de asamblea fue impulsar una campaña de vigilantes electorales a lo largo del país. El llamado se sumaba a iniciativas independientes que ya tenían un tiempo promoviendo el cuidado de las casillas, para denunciar cualquier tipo de delito electoral mediante toma de fotografías y difusión en las redes.

Había, incluso, plataformas alternativas de conteo de votos⁵. De esta manera, más de tres mil observadores del Yo Soy 132, repartidos en las principales ciudades, se reportaban listos para denunciar cualquier irregularidad el día de la elección. También ya estaba preparado un mecanismo de sistematización de información con el objetivo de dar a conocer, al final de la jornada, un balance sobre la misma. Los jóvenes bautizaron la operación como *#vigilancia132* y “cuarto de paz”, al lugar desde donde coordinarían las acciones de observación electoral.

Además, aquel 26 de junio, el movimiento se manifestó en las instalaciones del IFE, para demandar imparcialidad y celeridad en la publicación de resultados, además de garantías de seguridad para los ciudadanos que se desempeñarían como observadores.

27 de junio

Mientras en la capital del país se llevaba a cabo el multitudinario cierre de campaña del candidato de izquierda, en Texcoco, municipio del estado de México, se realizaba otra marcha del Yo Soy 132 y de habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco, justo al mismo tiempo del cierre de Peña Nieto en Toluca.

Al culminar las campañas, comienza lo que se conoce como “veda electoral”, periodo durante el cual se prohíbe a los partidos realizar actos proselitistas y manifestaciones a favor –o en contra– de algún candidato. También se prohíbe la difusión de encuestas, que hasta el último momento mostraron a Peña en la primera posición. Sólo faltaban cuatro días para la elección, y las denuncias por irregularidades, que habían marcado toda la campaña, no cesaban. El 29 de junio, el Movimiento Progresista da a conocer que el PRI repartió 1,8 millones de tarjetas de prepago, expedidas por la cadena de supermercados Soriana, con el evidente objetivo de comprar y coaccionar el voto. Cada tarjeta estaba cargada con mil pesos y fueron repartidas en el estado de México y algunas otras entidades. El banco MONEX también fue señalado como uno de los cómplices de la operación, al expedir otras tarjetas que fueron repartidas entre los representantes de casilla del PRI. Por si fuera poco, el Movimiento Progresista señaló indicios de lavado de dinero⁶.

Las quejas no provenían solamente de la izquierda institucional, sino de organizaciones civiles. Un grupo de ellas presentó ante la FEPADE (la fiscalía especializada en delitos electorales), dos días antes de la elección, 180 delitos federales relacionados con la compra y coacción del voto, así como con el condicionamiento de programas sociales y uso de recursos públicos para fines electorales. Todo apuntaba a que el PRI había movilizado toda su maquinaria partidista, implementando las viejas prácticas antidemocráticas de siempre, sólo que modernizadas gracias a los “monederos inteligentes”. A pesar de las quejas, ninguna autoridad ordenó congelar las cuentas de banco involucradas, y el partido de Peña Nieto negó todo.

30 de junio

Argumentando que la “veda electoral” sólo es aplicable a los candidatos, partidos y encuestadoras, el movimiento Yo Soy 132 se vuelca nuevamente a las calles de la ciudad de México la noche del 30 de junio de 2012. Sólo que esta vez los

asistentes evitaron llevar pancartas contra Peña Nieto y se concentraron en llamar a vigilar el desarrollo de la jornada electoral. El lema fue, justo, “en vela por la democracia” y aglutinó a una gran cantidad de jóvenes que partieron de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, portando antorchas y veladoras. La intención de muchos de los asistentes era caminar en silencio, lo cual se logró en muchos momentos —especialmente cuando se desataron murmuraciones sobre la presencia de provocadores, rumores que fueron casi inmediatamente desmentidos—, pero la mayor parte del recorrido se realizó en medio de un ambiente festivo, animado por los cantos, percusiones y las porras de los estudiantes. La columna, a cuya cabeza iba una comitiva de Atenco, se manifestó delante de Televisa Chapultepec y continuó su camino hacia el corazón de la ciudad, donde se anunciaron las acciones de vigilancia ciudadana que se llevarían a cabo al día siguiente. Los estudiantes sostuvieron que, independientemente de quién resultara ganador de la contienda electoral, ellos continuarían organizándose para generar un contrapeso ante cualquier intento de vulnerar los derechos de la ciudadanía. Por último, leyeron el programa de lucha que fue discutido y aprobado en asamblea⁷. Nunca en la historia del país se había llevado a cabo una manifestación que demandara comicios limpios en la víspera de la elección presidencial.

1 de julio

El día esperado llegó. Desde muy temprano, la prensa reportaba largas filas de ciudadanos esperando su turno para votar. De acuerdo con el IFE, 79 millones de ciudadanos debían elegir no sólo quién sería presidente de la República, sino 128 senadores y 500 diputados federales. Asimismo, en seis estados (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Jalisco y Morelos) se votaría para renovar gubernaturas, y en la ciudad de México para escoger jefe de gobierno, asambleístas y jefes delegacionales. Oficialmente, estaban registrados 28 mil observadores nacionales y 615 extranjeros que vigilarían el desarrollo de la jornada, repartidos en las 140 mil casillas instaladas.

La votación se realizó de ocho de la mañana a seis de la tarde. Algunos estados norteros, con huso horario diferente, cerraron una hora después en relación al centro del país. A las ocho de la noche comenzaron a circular las encuestas de salida de los medios, y en todas iba ganando Peña Nieto. El conteo rápido apenas había comenzado en las casillas y en la televisión ya se perfilaba el ganador. Antes de que se anunciara de forma oficial quién iba adelante, la candidata Josefina Vázquez Mota aceptó que el resultado no le favorecía. A las once de la noche, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dio un mensaje televisivo en el que calificó la jornada como “ejemplar, participativa, pacífica y realmente excepcional”, cuyo ganador, de acuerdo al conteo rápido, era Peña Nieto. El consejero presidente no aclaró que hasta esa hora sólo se habían computado 7 mil casillas, ni que el segundo lugar, López Obrador, estaba a menos de tres puntos del puntero. De forma igualmente apresurada, Felipe Calderón salió a reconocer el triunfo del priísta. Acto seguido, desde la sede del partido, Peña Nieto se declaró ganador, mientras la mayoría de los ciudadanos encargados de las casillas todavía no terminaban, ni siquiera, de contar los votos. Lo siguiente fue un llamado de López Obrador a la

calma y a la espera de los resultados finales, así como a la recopilación de toda la información posible (sobre las irregularidades cometidas), para emitir una postura al respecto. El candidato de la izquierda sostuvo que todavía nada estaba dicho, y que lo más sensato sería apegarse a la normatividad y actuar conforme a la ley electoral. Por lo tanto, no llamó a movilizaciones en el corto plazo.

Al día siguiente de la elección, en las plazas públicas no hubo ciudadanos que festejaran masivamente el triunfo del PRI. Lo que sí hubo fue una enérgica manifestación del movimiento Yo Soy 132

2 de julio

A la una de la mañana del 2 de julio, el movimiento Yo Soy 132 difundió (en video y por escrito) un pronunciamiento sobre la jornada electoral. Los estudiantes declararon que a lo largo del día recibieron numerosos reportes de irregularidades (compra de votos, robo de boletas, violencia y agresiones, anomalías en el conteo), amenazas, acoso a observadores electorales y demás ilícitos, por lo que no podían ratificar la aseveración del IFE, que calificaba a la elección como ejemplar. Durante los días siguientes, la comisión de vigilancia electoral del movimiento sistematizó más de mil casos de irregularidades y presentó un informe detallado.

Al día siguiente de la elección, en las plazas públicas no hubo ciudadanos que festejaran masivamente el triunfo del PRI. Lo que sí hubo fue una enérgica manifestación del movimiento Yo Soy 132, convocada a las dos de la tarde en la "Estela de luz". El recorrido fue inusual, pues en lugar de caminar por el Paseo de la Reforma y dirigirse a la Columna de Independencia o al Zócalo, los contingentes se dirigieron a Polanco, una de las colonias más ricas de la ciudad. Los gritos de indignación contra lo que llamaron una elección comprada sorprendieron a los vecinos, que nunca habían visto pasar una manifestación frente a sus casas. Después, la marcha de más de 20 mil personas tomó el Circuito Interior y se encaminó al Monumento a la Revolución, donde días antes se había instalado un campamento (llamado "Acampada Revolución") de ciudadanos independientes, que también pretendían vigilar la elección. Llegando al monumento se desató una tormenta que no logró asustar a los manifestantes, quienes cuando terminó de llover, se volvieron a juntar para encaminarse hacia la sede nacional del PRI. "Prohibido rendirse. No a la imposición", era el mensaje de la mayoría de los carteles. El movimiento afirmaba que existían pruebas suficientes para asegurar que el voto había sido coaccionado no sólo con dinero y monederos electrónicos, sino a través de los medios de comunicación y las encuestadoras. Por lo tanto, no podía reconocerse el triunfo de Peña Nieto. Por la tarde del mismo día, una vez que se fijó la ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador en 6,5 puntos, este último anunció que impugnaría la elección, al sostener que se había realizado en condiciones de completa inequidad.

3 de julio

Se llevó a cabo una toma pacífica del IFE por parte de algunos integrantes del movimiento estudiantil, sumándose algunas asambleas ciudadanas que habían surgido en los últimos días, y que también querían manifestarse contra los resultados de la jornada electoral. El movimiento Yo Soy 132 no había llamado, todavía, a nuevas manifestaciones, pero la gente continuaba con las protestas.

5 de julio

Mediante un comunicado, el movimiento estudiantil afirmó que la imposición de Peña Nieto “[es] un proceso fraguado desde hace varios años por los poderes fácticos, nacionales y extranjeros, violatorios de la soberanía nacional”, y expresó su rechazo. Además, hizo un llamado a la coordinación y movilización política de todos los sectores no sólo a través de marchas, sino mediante asambleas de base y brigadas informativas. Así, el movimiento anunció la realización del primer Encuentro Nacional Estudiantil que comenzaría al día siguiente, y convocó a todas las organizaciones sociales a una Convención Nacional contra la Imposición, en San Salvador Atenco.

6, 7 y 8 de julio

El Encuentro Nacional Estudiantil se realizó en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, donde los gobiernos estatal y federal planean construir un gasoducto y una central termoeléctrica financiados por una empresa española, que pretende arrebatar a los pobladores el derecho sobre sus tierras. Durante los tres días que duró el encuentro, delegados jóvenes de todo el país reflexionaron sobre la actual situación sociopolítica e intercambiaron propuestas de acción. No tenían el objetivo de llegar a un resolutivo final, sino de generar insumos para la discusión en cada una de las asambleas locales del movimiento. Las actividades se dieron a través de mesas de trabajo, una por cada punto planteado en el programa de lucha. Al final del encuentro, los jóvenes se comprometieron a acompañar al pueblo de Huexca en la defensa de su territorio.

7 de julio

Mientras parte del movimiento Yo Soy 132 deliberaba en el Encuentro Estudiantil, 100 mil personas llenaron las calles de la ciudad de México repudiando la imposición de Peña Nieto. La protesta no fue convocada por López Obrador ni por el movimiento estudiantil, sino que fue la pura indignación lo que impulsó a miles de personas a manifestarse sin necesidad de líderes ni templetes. Decenas de miles de personas se sumaron a las movilizaciones en al menos 16 estados del país. En el mundo, se reportaron protestas de mexicanos en Estados Unidos y varios países europeos.

Esta vez, a la lista de portadores del desprecio popular (Televisa, el PRI, Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, etc.) se sumó Soriana, la cadena de supermercados responsable de entregar tarjetas electrónicas con dinero a cambio de votos. Los manifestantes llamaron a no consumir más en sus sucursales. Al caer la noche, por

si semejante caminata por las principales avenidas de la ciudad de México hubiera sido poco, una gruesa columna de inconformes se dirigió a una iglesia en el centro histórico, pues Televisa estaba transmitiendo la boda de dos figuras de la farándula. Sobra decir que la cadena de televisión no había dado seguimiento a las protestas postelectorales, atizando el enojo de la ciudadanía. El objetivo, fraguado de forma espontánea, consistió en dar a conocer por televisión la magnitud de las protestas contra el PRI. Así fue como cientos de personas tomaron por sorpresa a los organizadores del evento, corearon consignas contra la empresa e impidieron la entrada de los invitados. La televisora se vio obligada a cortar la transmisión alegando fallas técnicas, y los manifestantes se quedaron horas cantando y gritando afuera del edificio de la Universidad del Claustro, cuya rectora renta ocasionalmente como salón de fiestas.

Mientras Enrique Peña Nieto daba sus primeras entrevistas a la prensa internacional, asumiéndose como presidente electo aun cuando no le había sido entregada la constancia de mayoría de votos que expide el IFE, Calderón hacía declaraciones sobre la compra de votos y su necesario castigo. Por su parte, el equipo de López Obrador extiende el plazo para dar a conocer su postura hasta el jueves 12 de julio, pero adelanta que solicitaría la invalidez de la elección.

A pesar de que el IFE ordenó volver a contar (voto por voto) más del 50% de las casillas, la credibilidad de los resultados de la elección siguió menguando, pues el escándalo en torno a las tarjetas de MONEX y Soriana aumentó de tono y las denuncias de compra de votos continuaron multiplicándose por todo el país.

11 de julio

Brigadistas del movimiento Yo Soy132 agrupados en el Frente Oriente (llamado así por la zona de la ciudad de México donde están ubicadas sus escuelas) realizaron una marcha-brigadeo por colonias de la delegación Iztapalapa. Se manifestaron en la entrada de una tienda Soriana y llamaron a la población a organizarse para evitar la imposición del candidato promovido por Televisa. Mediante volantes, informaron acerca de las múltiples irregularidades que mancharon el proceso.

12 de julio

La sexta Asamblea Interuniversitaria se realizó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). A ella acudieron, por primera vez, representantes de pueblos indígenas y comunidades en resistencia para manifestar su respaldo a la lucha de los estudiantes y para llamar a la unidad de todos los opositores a la imposición de Enrique Peña Nieto. Asistieron, igualmente, representantes de asambleas ciudadanas que en los últimos días habían comenzado a movilizarse. Los voceros de las asambleas de los estados informaron que cada vez asistía más gente a las reuniones y a las protestas, y demandaban mayor incidencia en el proceder del movimiento. El acuerdo principal al que llegaron los jóvenes fue descentralizar la Asamblea Interuniversitaria, con el objetivo de impulsar el carácter nacional del movimiento. La siguiente asamblea quedó programada en la ciudad de Morelia, Michoacán los días 28 y 29 de julio de 2012.

Un punto que se discutió ampliamente fue la postura del movimiento ante la realización de la Convención Nacional contra la Imposición, convocada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y se aprobó difundir una carta de invitación a nombre del Yo Soy 132, para impulsar el evento conjuntamente.

Ese mismo día, López Obrador presentó formalmente un juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial. Argumentó que existían razones y evidencias suficientes que demostraban que la jornada no se realizó en condiciones de libertad y autenticidad, como lo indica la Constitución, y por lo tanto que el Tribunal Electoral debía dictaminar su invalidez. Asimismo, adelantó que en los siguientes días se pondría en marcha un “Plan nacional para la defensa de la democracia y dignidad de México”, cuyos ejes estarían respaldados por los derechos ciudadanos plasmados en la carta magna.

14 y 15 de julio

El movimiento Yo Soy 132 y la resistencia a la imposición del candidato del PRI dieron un gran salto durante la primera Convención Nacional contra la Imposición, en San Salvador Atenco. Por primera vez, el movimiento estudiantil se encontraba con representantes de movimientos campesinos, indígenas, trabajadores y maestros disidentes, con el objetivo de generar un plan de acción unitario para evitar la imposición de Peña Nieto. La convocatoria, lanzada por el FPDT y #YoSoy132, consideraba tres motivos por los cuales el PRI no debía regresar a la presidencia del país. Primero, por haber ganado la elección con el apoyo de los poderes fácticos y haciendo uso de numerosas prácticas antidemocráticas no sólo durante la votación sino desde hace seis años, cuando inició la promoción de Peña Nieto en los espacios de Televisa. Segundo, porque las intenciones del nuevo gobierno consisten en continuar con el saqueo del país y consolidar el modelo neoliberal mediante reformas estructurales que carecen del respaldo popular. Y tercero, porque el regreso del PRI al poder implica un grave peligro para los movimientos sociales, expuestos a la represión y a la política autoritaria que siempre caracterizó la forma de gobernar de dicho partido. El llamado tuvo una exitosa respuesta, y más de 250 organizaciones se hicieron presentes, entre ellas una comitiva de la comunidad purépecha de Cherán, que había sido agredida nuevamente pocos días antes, con el secuestro y asesinato de dos campesinos. Desde hace un año, Cherán expulsó a los partidos políticos de su cabecera municipal e inició un proceso de construcción de autonomía política y de defensa de su territorio, acosado por talamontes y el crimen organizado. En la convención estaban también los electricistas del SME y hasta integrantes de MORENA. Todos con la intención de detener la imposición del candidato Peña Nieto y todo lo que representa.

Los asistentes a la convención discutieron en distintas mesas de trabajo, y el último día se reunieron en plenaria. Casi al terminar la jornada dieron a conocer el plan de acción, que todavía sería revisado al interior de cada una de las organizaciones, pero que ya representaba un enorme avance respecto a cuál sería el camino a seguir. Así, entre las acciones de protesta que fueron programadas en la Convención de Atenco estaba una marcha nacional el día 22 de julio. Para el 27, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, se planeó un cerco masivo alrede-

dor de las instalaciones de Televisa. El 1 de septiembre se desarrollará la Jornada de Lucha Nacional contra la Imposición, que consistirá en una marcha desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Cámara de Diputados, con el fin de manifestarse contra el sexto informe de gobierno de Calderón, así como en contra de la toma de posesión de diputados y senadores. En tanto, el 6 de septiembre, fecha límite para que el TEPJF calificara la elección, se planeó otra jornada de lucha que incluye tomas, bloqueos y liberación de casetas de peaje en carreteras. Para el 15 y 16 de septiembre, días de fiesta nacional por el aniversario de la independencia, se hizo un llamado a tomar las plazas públicas del país al grito de “¡Viva México sin PRI!”. Los estudiantes debían avalar, escuela por escuela, la realización de un paro nacional el 2 de octubre, además de encargarse de la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. Finalmente, la convención acordó que se hará un cerco en el Congreso para evitar que Enrique Peña Nieto tome posesión el día 1 de diciembre.

16 al 20 de julio

Las protestas por el resultado de la elección presidencial continúan. El Tribunal Electoral reporta que ha recibido 356 juicios de inconformidad promovidos contra la elección presidencial (en alrededor de 290 distritos de los 300 que hay en el país) y admite que son más de las registradas en 2006, mientras una importante cantidad de manifestantes permanece afuera de sus instalaciones.

Las tiendas Soriana siguen siendo el blanco de protestas en la capital y en el interior del país. Los métodos de los manifestantes son pacíficos y diversos. Algunos grupos actúan como si fueran a comprar mercancías, y al final cancelan al mismo tiempo su cuenta, como una señal para comenzar con las consignas. Otros entran directamente con pancartas. En todos los casos, llaman a no comprar más en una empresa cómplice del fraude electoral, y en varias ocasiones son aplaudidos hasta por los propios empleados.

Después de negar durante semanas el uso de tarjetas electrónicas durante la campaña, el coordinador de la defensa legal de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, afirmó que sí, que el PRI sí las utilizó, pero sólo para pagar comida y transporte de la “estructura del partido”. En el colmo del cinismo, al pretender justificar la legalidad de estos recursos (que ascendían a 66 millones de pesos), el PRI afirmó que provenían del gasto “ordinario” del partido, no de la campaña.

Esa misma semana, a 16 días de la elección federal, Calderón y Peña Nieto se reinieron en la residencia presidencial. De acuerdo con el presidente del IFE, el proceso electoral no concluye hasta el 6 de septiembre, por lo que el encuentro entre ambos personajes no fue bien visto por quienes venían señalando las irregularidades de la elección. Calderón, haciendo caso omiso de los plazos determinados por la ley, le ofreció a Peña Nieto todo su respaldo para que el proceso de transición se llevara “conforme a derecho”.

El movimiento 132 llamó a la celebración del “Festival Re-evolución”, en la ciudad de México, del 20 al 22 de julio. Por su parte, López Obrador anunció el “Plan nacional de defensa de la democracia y de la dignidad de México”, que consiste en la realización de asambleas informativas a lo largo del país, para dar a

conocer los elementos y pruebas aportados al TEPJF, que tienen el objeto de sustentar la solicitud de invalidez de la elección presidencial. De acuerdo con AMLO, los ejes de acción son la información y la toma de conciencia.

22 de julio

Por tercer fin de semana consecutivo, las calles de las principales ciudades del país se vieron repletas de personas manifestándose a favor de que el Tribunal Electoral invalide los comicios. Esta vez, la convocatoria no sólo provenía del Yo Soy 132, sino que por primera vez se hacía de manera unitaria, en alianza con el FPDT de Atenco, el sindicato de electricistas (SME), la coordinadora disidente del sindicato de maestros, y decenas de organizaciones más. Otra novedad fue la presencia, a la cabeza de la marcha, del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), compuesto por quienes han sido rechazados de las universidades públicas por “falta de cupo”. El MAES lleva un largo camino de movilización, que se acentúa todos los veranos, cuando se dan a conocer los resultados de los exámenes de admisión. Este año, tal y como ha sucedido en la última década, nueve de cada diez aspirantes a la UNAM fueron rechazados, y el MAES alzó la voz en defensa del derecho a la educación.

La columna, que no pudo pasar por la casa presidencial debido al cerco policial, fue creciendo conforme avanzó por el Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo. Podían verse muchos estudiantes, familias enteras, sindicalistas, simpatizantes de López Obrador y grupos de artistas. La indignación ciudadana ante lo que se calificaba como “fraude” se expresaba en pintas sobre los cuerpos, carteles de doble vista (muchos de ellos en otros idiomas, dirigidos a la prensa extranjera), mantas, pancartas, televisores hechos de cartón, playeras y pañuelos. Durante más de tres horas, los contingentes llegaron a su destino. Al mismo tiempo, en más de veinte ciudades del país, miles de ciudadanos hacían lo propio. Al caer la tarde, se dio a conocer que en Oaxaca habrían sido detenidos 24 jóvenes simpatizantes del #YoSoy132, y otros 7 en la ciudad de León. El comité de derechos humanos del movimiento se pronunció al respecto casi inmediatamente, censurando los hechos y demandando la liberación de los aprehendidos, que se consumió horas después. Al parecer, en Oaxaca actuaron infiltrados, y el zafarrancho se desató tras la aprehensión de un activista, señalado anteriormente por el gobierno del estado como “agitador profesional”. En León, las detenciones fueron porque los manifestantes cometieron el “error” de bajarse de la banqueta.

Un día después de la multitudinaria manifestación, uno de los consejeros del Tribunal declaró que el dictamen final de dicho organismo, no sería influenciado “por ninguna marcha”.

23 de julio

Durante una asamblea extraordinaria en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el movimiento #YoSoy132 ratificó lo acordado en Atenco sobre realizar un bloqueo pacífico y simbólico en las instalaciones de Televisa el viernes 27, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Durante varias horas, se debatió en

torno al carácter y manera de proceder del movimiento durante dicha acción. La decisión final, de acuerdo con el comunicado de prensa, sólo involucraba a las asambleas del Distrito Federal y del área metropolitana (78, de las cuales 22 son privadas y 56 públicas). Los voceros aclararon que se respetarían las decisiones que tomaran las asambleas del movimiento en otras entidades del país.

24 de julio

El ahora llamado *MONEX gate* comienza a ser investigado por el IFE a través de una unidad de fiscalización. El objetivo, dicen, es identificar y estudiar a las personas físicas y morales relacionadas con la contratación de los servicios prestados por dicho banco. A los documentos dados a conocer por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), se agregan investigaciones periódicas que comienzan a salpicar el apellido de familias potentadas. A pesar del escándalo, el consejero presidente anuncia que los resultados de la investigación no se difundirán sino hasta enero de 2013.

26 y 27 de julio

Por la noche del día 26, una manifestación de Yo Soy 132 partió de la Acampada Revolución hacia las instalaciones de Televisa, en avenida Chapultepec. Era el inicio del bloqueo simbólico. En la empresa, varios cientos de personas esperaron la llegada de la marcha, mientras 2 mil policías ya habían cercado todos los accesos. El ambiente era festivo, a pesar de que la organización se vio dificultada por el cerco policial, que hizo que se cerraran más calles de las contempladas, entorpeciendo la comunicación entre los activistas. Para dar inicio a la *toma*, dos voceras leyeron un documento en el que se narraba el viejo concubinato Televisa-PRI. El movimiento recordó las circunstancias políticas de la fundación de la empresa, en 1951, cuando acaparó la mayor parte del espectro radioeléctrico, con el patrocinio del gobierno. No olvidó la complicidad de los noticieros de la empresa con los artífices de la matanza de Tlatelolco en 1968, ni en 1971, ni durante la guerra sucia. Denunció, al fin, que el marco legal en cuanto a medios de comunicación es obsoleto y, evidentemente, hecho a la medida de los poderes fácticos: “¿Bloqueo a Televisa? Televisa lleva años bloqueando la verdad”, decía una pancarta. Durante la madrugada no faltaron la música, las proyecciones de cine y el café. Tampoco hubo violencia, pero sí momentos de tensión, sobre todo durante el cambio de turno de los policías. Durante el día 27, grupos de ciudadanos se sumaron al cerco y participaron en los relevos. No sabían que, al mismo tiempo pero en Londres, un grupo de mexicanos increpaba a conductores de la empresa, interrumpiendo la transmisión con consignas anti PRI. Además, una de las cuentas de Twitter de los noticieros deportivos fue *hackeada* por un militante de Anonymous, la famosa red de activistas cibernéticos.

El cerco a Televisa se levantó tras 24 horas de protesta. Nuevamente, la ciudad de México no fue la excepción, y en otras 12 ciudades se realizaron manifestaciones contra las televisoras. La exigencia: apertura informativa e invalidación del proceso electoral.

Los días que siguieron al bloqueo han estado cargados de actividad, aunque no de manifestaciones masivas como los días previos. Los integrantes del movimiento, principalmente los estudiantes, orientaron sus esfuerzos en el trabajo de base, aprovechando el regreso a clases en las escuelas. Organizando foros, preparando documentos, haciendo videos, dando la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso e invitándolos a sumarse al movimiento. En la ciudad de México, las asambleas locales de estudiantes están impulsando la formación de asambleas en barrios y colonias. Muchas de ellas han sido protagonistas de las manifestaciones en tiendas Soriana, que lejos de disminuir alcanzan cada vez mayor sincronización.

En los estados de la República, también continuó la actividad. En Morelos, el movimiento 132 convocó a la celebración del natalicio de Emiliano Zapata, con el objetivo de acercarse más a las luchas de los pueblos en defensa de la tierra. Cada vez con mayor claridad, el Yo Soy 132 asumió la necesidad de descentralizarse y de dar cabida a un mayor número de organizaciones que también identifican el regreso del PRI como una amenaza. Así, en la ciudad de México surgió el Yo Soy 132-Salud, formado por médicos y estudiantes de medicina que se declararon listos para detener los ataques al sector, que ha sido gravemente afectado por el programa neoliberal. Fuera del país, en ciudades europeas y de Estados Unidos, han nacido 52 representaciones del movimiento, que no dejan de organizar acciones contra el fraude.

La agenda, al menos hasta el 1 de diciembre, está clara en términos de movilización. Lo que no está claro todavía es qué ajustes se tendrán que hacer en el camino, pues no sólo hay asambleas generales en puerta, sino también llamados a intensificar el carácter de las protestas, dado el panorama tan oscuro que rodea la decisión del Tribunal Electoral, que no dudará en declarar ganador definitivo a Enrique Peña Nieto.

Conclusiones y perspectivas

Desde la huelga de la UNAM en 1999-2000 no se veía en México un movimiento estudiantil de esta magnitud y, como lo auspiciábamos en el editorial del número 31 de *OSAL*, vaya que hacía falta para desatornillar de la pasividad a una generación cuya participación crítica es indispensable para empezar a agrietar el consenso conservador que, más allá de los colores partidarios de los gobernantes en turno, sigue reproduciéndose en México sexenio tras sexenio. Militarización y supuesta guerra contra el narcotráfico de por medio, el miedo como recurso de control social operó con eficacia en los últimos seis años de gobierno del PAN. En 2012, la agenda política estaba cargada de temas *securitarios*; a diferencia de los tonos antineoliberales que, en consonancia con el clima latinoamericano, acompañaban el tenso ambiente electoral de 2006. En este nuevo contexto, el propio López Obrador optó por una campaña electoral mucho más moderada, tratando de mostrar un rostro amable –llegando hasta teorizar un proyecto de “república amorosa”– en parte para limpiar la imagen mediáticamente construida de un hombre radical, conflictivo y rencoroso, y también porque trató de ampliar lo más posible el marco de sus alianzas hacia sectores de clase media y grupos empresariales. Por medio de esta estrategia, en efecto, la campaña de López Obrador logró conjuntar a una coalición social muy amplia y diversa, políticamente apoyada en núcleos partidarios (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y sostenida desde abajo por vastos

contingentes populares organizados en el marco del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero esto no sólo no fue suficiente para repetir el resultado de 2006 –una apretada victoria arrebatada por medio de un mayúsculo fraude electoral– sino que, sin la irrupción del movimiento Yo Soy 132, no hubiese sido capaz de alcanzar un resultado como el que alcanzó, es decir, no hubiera mantenido el porcentaje de hace 6 años y aumentado el número de votantes en términos absolutos. Ahora, tras la impugnación del resultado de la elección, y a pesar de tener suficientes elementos para probar lo fraudulento del proceso electoral, López Obrador está enfrascado en una batalla legal cuyos términos lo obligan a no llamar a acciones más contundentes. Acciones que, en cambio, el movimiento contra la imposición –sin líderes ni representantes– sí está dispuesto a emprender. En todo este proceso, antes y después de los comicios, el Yo Soy 132 ha sido y es el factor antagonista que atraviesa, tensa y modifica el escenario político, y amenaza la estabilidad, la certidumbre y la solidez del proyecto conservador en este pasaje de su reproducción.

Efectivamente, como lo vimos, el Yo Soy 132 nació y tuvo un impacto en torno a una coyuntura electoral, como reacción hacia la candidatura de Peña Nieto y contra el retorno del PRI al poder. Si bien no impidió la victoria de Peña en las urnas, sí logró visibilizar los vicios de un proceso marcado por la corrupción y la manipulación. Así, con los señalamientos de los jóvenes, el rey no ha sido todavía coronado pero ya se ve desnudo. Con una frescura que no había logrado AMLO y su movimiento, desde la legitimidad de su apartidismo y su espontaneidad, el Yo Soy 132 diagnosticó la enfermedad crónica de la democracia mexicana: el dominio de los medios de comunicación, coludidos con el poder político y, en particular, con los defensores del neoliberalismo y del autoritarismo partidocrático. Los jóvenes del 132 dieron muestra de su madurez política al señalar quiénes son los verdaderos dueños del país, escudados con leyes hechas a la medida de sus intereses y empeñados en imponer un candidato que cumpla con sus requerimientos. En este sentido, en un país donde buena parte de la ciudadanía se diluye en la televidencia, la receta que ha prescrito el movimiento consiste en dejar de consumir televisión y políticos basura. Una empresa nada sencilla, pero que comienza a arrojar sus primeros resultados por lo menos a nivel generacional.

Los estudiantes aplicaron una inyección de adrenalina a las anestesiadas conciencias de muchos ciudadanos, despejaron el escenario político de las huecas propuestas que habían predominado a lo largo de la campaña para poner el dedo en el renglón de las injusticias y arbitrariedades, iluminaron las lógicas y pusieron en evidencia los poderes fácticos que trataban y lograron reproducirse en las instituciones representativas y de gobierno.

Si bien el ideario del Yo Soy 132 se nutre de antineoliberalismo y, en parte, de anticapitalismo, en el centro de sus reivindicaciones está una idea de alternativa democrática, ética, participativa y antipartidaria. En esta dirección, a modo prefigurativo, las formas que asumió abrevan de las experiencias y las prácticas de los movimientos recientes de los indignados y los Occupy, los cuales en parte remontan al altermundismo: horizontalidad, espontaneidad, creatividad, forma red y comunicación vía redes sociales.

Con todo y esta irrupción masiva y festiva de la juventud universitaria, el escenario permanece sombrío. Manipulación y compra de votos muestran no sólo

los recursos de los de arriba sino también la debilidad de la cultura ciudadana que, por necesidad y por falta de consistencia, se deja pervertir. Al mismo tiempo, aunque se descuenten los votos que la coalición progresista sostiene que fueron manipulados, tenemos que en México más de la mitad de la población que acudió a las urnas votó por algún partido de derecha, lo que indica que el Yo Soy 132, así como el MORENA, a diferencia de lo que su optimismo discursivo fue y va sosteniendo, reman a contracorriente.

Yo Soy 132 diagnosticó la enfermedad crónica de la democracia mexicana: el dominio de los medios de comunicación, coludidos con el poder político y, en particular, con los defensores del neoliberalismo y del autoritarismo partidocrático

Sin embargo, continúe o no con la intensidad de estos meses, el movimiento tiene un alcance que rebasa la coyuntura electoral, pues constituye en sí un parateguas de la historia reciente. Movilizó y concientizó a sectores importantes de la juventud mexicana, aquellos con mayores niveles de escolaridad, que abarcan la amplia diversidad socioeconómica de los que podemos genéricamente denominar clase media, radicada en las grandes ciudades, donde se concentran las universidades públicas y privadas. Conscientes de esta concentración, y de la enorme dependencia hacia las herramientas disponibles en internet, las asambleas metropolitanas del movimiento están cada vez más ocupadas en estrategias de difusión más tradicionales, con el objetivo de llegar a las personas que no tienen acceso a la red y, por lo tanto, al cúmulo de información alternativa que ahí se puede encontrar. En este mismo tenor, el movimiento no ha dudado en solidarizarse con las causas campesinas y de los pueblos indígenas, reconociendo así la imperiosa necesidad de tejer alianzas ante los previsible ataques a la soberanía nacional, que el “nuevo” régimen no tardará en impulsar.

Se trata, pues, de un movimiento transversal que reúne a jóvenes alrededor de la indignación, jóvenes que supieron sabiamente mantenerse unidos y consensuar acciones aun cuando, como en cualquier movimiento de esta amplitud e intensidad, son evidentes –si nos aproximamos hasta observar detalles– las diferencias internas, las cuales pudieran ahondarse en el futuro.

En perspectiva, no sabemos qué rumbos y qué intensidad tomará un movimiento que demostró una fuerza sorprendente y una capacidad de interlocución importante con otros sectores. Más allá de que prospere o no su continuidad organizativa como #YoSoy132, que se divida en corrientes con mayor afinidad política o que se vuelva una coordinadora de carácter más o menos permanente, es un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de la movilización en México en la medida en que los recursos y capacidades que se han puesto en marcha en estos días no desaparecen de un plumazo; pues en el peor de los casos se vuelven latentes, entran en letargo, pero se mantienen vivos por un tiempo prolongado, sedimentan y pueden reaparecer frente a nuevas situaciones, nuevos agravios, nuevas coyunturas críticas. Y, lamentablemente, parece que en el México del “nuevo PRI”

no faltarán oportunidades para ello. Menos mal que ahora tenemos una juventud combativa, organizada y movilizada.

Hemerografía

Artistas Aliados: <artistasaliados.wordpress.com>.

Comité Jurídico y de Derechos Humanos: <comitedhyosoy132.blogspot.mx>.

“Diez preguntas frecuentes sobre #YoSoy132”: <yosoy132politicas.wordpress.com>.

La Jornada 2012 (México), junio-agosto. En <www.jornada.unam.mx>.

Página central del movimiento: <www.yosoy132media.org>.

Proceso 2012 (México), mayo-junio: <www.proceso.com.mx>.

Vigilancia Ciudadana: <vigilanciaciudadanayosoy132.wordpress.com>.

Notas

1 El 3 y 4 de mayo de 2006, la policía municipal de Texcoco en el estado de México desalojó con violencia a un grupo de floricultores. Los agraviados, junto con activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del poblado de San Salvador Atenco, bloquearon la carretera en son de protesta. La respuesta del gobierno del estado, encabezado en ese entonces por Enrique Peña Nieto, resultó extremadamente violenta, dejando un saldo de dos muertos, cientos de detenidos, docenas de mujeres abusadas sexualmente y condenas carcelarias excesivas para los líderes del FPDT. El tema continúa siendo una gran mancha política en la ascendente carrera de Peña Nieto y, por la misma razón, había sido evitado durante la campaña, hasta que los estudiantes lo volvieron a poner sobre la mesa. Para más información sobre el caso Atenco, pueden consultarse los diversos informes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: <http://centroprodh.org.mx>.

2 Tergiversaciones como esta y más fueron impulsadas desde la Organización Editorial Mexicana (OEM), propiedad del magnate Mario Vázquez Raña, quien posee, además de 70 periódicos en todo el país (muchos de corte sensacionalista), 20 radiodifusoras y un canal de televisión. Es, por mucho, la compañía de medios impresos más grande de México, con una circulación diaria de más de 2 millones de ejemplares.

3 Se eligió aquel lugar por tratarse de un monumento construido por el gobierno de Felipe Calderón con un escandaloso gasto y evidencias de corrupción. Desde su inauguración en 2011, grupos de ac-

tivistas lo habían rebautizado como “monumento a la corrupción”. Esta vez, los jóvenes lo reafirmaron como el símbolo de la decadencia de la política.

4 Grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos y especialistas en temas de juventud sostienen que en México no existen las condiciones óptimas para el desarrollo pleno de los jóvenes, por lo que se los considera un grupo social en situación de discriminación. No existe, ni siquiera, una ley federal que los reconozca como sujetos de derechos; y menos una política de Estado que se enfoque específicamente a sus necesidades. Para más información sobre el tema, puede consultarse el informe “Derechos humanos de las juventudes en México 2010”, preparado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria: <www.derechoshumanos.org.mx>.

5 Algunas de estas plataformas fueron <hayfe.mx>, <prepciudadano.com> y <fotoxcasilla.com>.

6 Un seguimiento periodístico más meticuloso respecto al caso MONEX, puede consultarse en: <aristeguinoticias.com>.

7 Los puntos que conforman el plan de lucha del movimiento son: 1) Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión; 2) cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico; 3) cambio del modelo económico neoliberal; 4) cambio del modelo de seguridad nacional; 5) transformación política y vinculación con movimientos sociales; 6) salud; y 7) migración. El documento completo puede consultarse en: <www.yosoy132media.org>.

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Adolfo Sánchez Vázquez

Aureliano Ortega Esquivel

La filosofía de la praxis

Adolfo Sánchez Vázquez

Adolfo Sánchez Vázquez

AURELIANO ORTEGA ESQUIVEL

Doctorado en filosofía por la UNAM. Ha publicado libros y artículos sobre teoría de la historia y sobre cultura, historia y política mexicana e iberoamericana. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato.

Resumen

Al cumplirse un año del fallecimiento del notable pensador marxista Adolfo Sánchez Vázquez, Aureliano Ortega Esquivel nos dice que no hay mejor homenaje que seguir considerando su obra como un legado capaz de desencadenar nuevas reflexiones. No se trata, nos dice el autor, de asumir que ya está todo dicho, sino de continuar ejercitando el pensamiento crítico que caracterizó a Sánchez Vázquez hasta el final de sus días. Por lo tanto, este artículo nos ofrece no sólo una semblanza de la vida y obra de nuestro marxista ausente, sino todo un recorrido crítico en torno a tres de los pilares más importantes de su pensamiento: la reflexión sobre el estatuto teórico político del marxismo y la filosofía de la praxis; la cuestión del arte como praxis; y la defensa del socialismo.

Abstract

To mark the first anniversary of Adolfo Sánchez Vázquez' death, an outstanding Marxist thinker, Aureliano Ortega tells us that the best possible tribute to Vázquez is to regard his legacy as capable of catalising new reflections. According to Ortega, it should not be assumed that there is nothing left to say, but rather that it is necessary to continue to pursue critical thinking, as Sánchez Vázquez himself did throughout his entire life. This paper offers an insight into the life and work of a Marxist thinker whose absence is clearly felt, as well as a critical review of three central pillars of his belief: reflections on Marxism's theoretico-political statute and the philosophy of praxis, the question of art as praxis, and the defence of socialism.

Palabras clave

Marxismo crítico, praxis, socialismo.

Key words

Critical marxism, praxis, socialism.

Cómo citar este artículo

Ortega Esquivel, Aureliano 2012 "Adolfo Sánchez Vázquez" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32, noviembre.

*“No en la primera, sino en la última página
es donde aparece el nombre verdadero del héroe.
Y no al inicio, sino al fin de la jornada
es cuando acaso pueda decir el hombre cómo se llama”.*
León Felipe

Debemos aceptar que la lamentable desaparición física de Adolfo Sánchez Vázquez nos tomó por sorpresa. No quiero decir con ello que quienes lo conocimos, y hasta el final tuvimos el cuidado de preguntar entre los amigos de la ciudad de México sobre su salud y su ánimo, pasáramos por alto su avanzada edad o ignorásemos los efectos destructivos que el tiempo –“el implacable, el que pasó”– somete irremisiblemente a nuestros cuerpos. Nada de eso. De antemano sabíamos que 96 son muchos años, aun para una constitución robusta y firme como la del doctor Sánchez Vázquez en su mejor edad. La sorpresa, o mejor dicho el estupor, tenía otro origen, y se asociaba inevitablemente a la conmoción, entre afectiva e intelectual, que la muerte de Bolívar Echeverría nos había provocado un año atrás. Y es que entre el 5 de junio de 2010 y el 8 de julio de 2011 perdimos a los dos pensadores marxistas latinoamericanos más originales, agudos y profundos de los últimos tiempos. Y eso no es poca cosa. En un medio intelectual todavía tan afecto a las “modas y novedades” provenientes del mercado filosófico metropolitano (generalmente entrampadas en el pensamiento afirmativo y amarradas por ello mismo a la impronta reproductiva de un estado de cosas profundamente injusto e inequitativo), el fallecimiento de ambos pensadores, que habían fincado su quehacer teórico en el ámbito del marxismo crítico, hacía concurrentes dos pérdidas; por una parte la de los maestros y los amigos; por otra, la de los pensadores, su obra y su ejemplo vivos.

En uno de sus últimos trabajos, titulado “Sartre a lo lejos”, Bolívar Echeverría escribió: “Nada hay que pueda darse por ganado en la historia de las ideas; en ella, como en el mito de Sísifo, todo tiene que ser pensado cada vez de nuevo” (Echeverría, 2010). En ese sentido, Adolfo Sánchez Vázquez debe ser considerado como un autor cuya obra es ya una obra acabada, una obra total; pero una obra que debemos asumir, también, como un envío, como un legado intelectual cuyo conocimiento y análisis tienen que ser pensados “cada vez de nuevo”. Esto porque, por su originalidad y su riqueza, los desenlaces se nos presentan, o mejor, se nos imponen, como una nueva tarea por cumplir.

Para dar curso a esta tarea “por cumplir”, a esta labor propia y característica del mejor marxismo –no dar nada por sentado y asumir la crítica radical de todo lo existente–, deberíamos pensar en esa obra como una obra abierta. Para ello tendremos que establecer desde luego alguna forma de tópica relativa a Sánchez Vázquez y su correlativa agenda problemática. En las líneas que siguen, en unos cuantos trazos abordaremos la vida y la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, para posteriormente dar curso a una sucinta exposición de las que a nuestro juicio han sido sus ideas y cuidados principales en el ámbito del marxismo crítico, indudablemente el horizonte discursivo en el que cobran sentido y forma la totalidad de sus intervenciones.

1

Adolfo Sánchez Vázquez¹ nació en Algeciras, provincia de Cádiz, España, el 17 de septiembre de 1915. Fue el segundo hijo de un teniente de la Guardia Civil cuya filiación republicana le acarrea una condena a muerte, finalmente conmutada por largos años de encierro en una prisión franquista. Hacia 1925 la familia fija su residencia en Málaga, donde el joven Adolfo cursa el bachillerato y los primeros estudios de la carrera magisterial. Decía Max Aub en sus apuntes autobiográficos que uno es del lugar en donde ha cursado el bachillerato, de modo que ello podría explicar el motivo por el que muchos de sus discípulos siempre dimos por cierto, sin ser por ello desmentidos, que el doctor Sánchez Vázquez era malagueño. Abonan esa idea de oriundez adquirida el hecho de que, en esa ciudad, Adolfo Sánchez Vázquez inicia tanto su tarea poética y literaria como su compromiso político. Málaga es a la sazón un enclave político cultural en el que convergen vecinos y visitantes como Emilio Prados o Rafael Alberti; se editan revistas literarias y políticas como *Octubre*, en la que Sánchez Vázquez publica su primer poema; y se discute acaloradamente el presente y el futuro de la novel República española. Es también en Málaga, *la Roja*, en donde conoce y lee por primera vez textos, si no de Marx, sí relativos al pensamiento marxista y a esa “nueva aurora” que promete y parece poner al alcance de la mano la deseada y próxima revolución comunista.

En 1935, contando con veinte años, Sánchez Vázquez viaja a Madrid para cursar estudios universitarios en la Universidad Central, los que debe interrumpir al estallar la Guerra Civil. Para ese entonces, compartiendo créditos con Enrique Rebolledo –con cuya hermana, Aurora, se casará en 1941–, ya ha fundado su propio periódico literario, *Sur*, y colabora regularmente con el órgano del Partido Comunista Español, *Mundo Obrero*. Es hasta entonces que inicia la lectura de los textos originales de Marx y Engels, gracias a las traducciones de otro futuro exiliado: Wenceslao Roces. La Guerra Civil lo sorprende en Málaga, en donde desarrolla un amplio trabajo político desde el seno de la Juventud Socialista Unificada (JSU). Ahí mismo trabaja como editor de *Octubre*, fundado por Alberti y ahora habilitado como órgano del Comité Regional de la JSU. Viaja a Valencia y posteriormente se traslada a Madrid y toma a su cargo la dirección del periódico, mismo que abandona en septiembre de 1937 para incorporarse a la onceava división del Ejército Republicano. Ahí, se desempeña como comisario de Prensa y Propaganda y como redactor en jefe del periódico *¡Pasaremos!* Cuando los dirigentes de aquella división, Enrique Líster y Santiago Álvarez, son reconocidos como artífices de la victoria de Teruel y distinguidos, respectivamente, como jefe y comisario político del quinto cuerpo del ejército, Sánchez Vázquez es nombrado redactor en jefe de la revista *Acero*, lo que no impide su participación en hechos de armas.

Derrotada la República y replegado el quinto cuerpo del ejército hasta la frontera francesa, Sánchez Vázquez atraviesa los Pirineos en febrero de 1939, viaja a París, y finalmente se reúne con otros intelectuales españoles en el campo de Roissy-en-Brie. Poco después, en mayo del mismo año, viaja al puerto de Sète para abordar el primer barco fletado por el gobierno mexicano para el traslado de los que, desde entonces, se reconocen como “refugiados espa-

ñoles": el Sinaia. Ya en México, Sánchez Vázquez se dedica a lo que entonces sabía hacer mejor: editar revistas culturales. Funda, junto con Antonio Sánchez Barbudo, Juan Rejano y José Herrera Petere la revista *Romance*, de la que, entre 1940 y 1941, llegan a editarse y distribuirse por toda Latinoamérica más de 50 mil ejemplares en un total de 24 entregas. En la ciudad de Morelia, en donde a la sazón vive y trabaja María Zambrano, entre 1941 y 1943 imparte clases de bachillerato y empieza a ampliar su formación intelectual, principalmente por lo que atañe a la cultura filosófica y el marxismo. Sin embargo, en 1944 ya está de vuelta en la ciudad de México e ingresa a la Maestría en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudios que no concluye ante la necesidad de mantener a la familia realizando traducciones y pequeños trabajos periodísticos aquí y allá.

Hacia 1950 Sánchez Vázquez regresa a la Facultad de Filosofía y Letras, pero ahora acude principalmente a cursos de filosofía, materia en la que obtiene el grado de maestro en 1955 con la tesis "Conciencia y realidad en la obra de arte", dirigida probablemente por Samuel Ramos. En 1959, obtiene una plaza de profesor de tiempo completo y con ello la posibilidad de profundizar sus conocimientos filosóficos, particularmente su estudio del marxismo. De la articulación de sus preocupaciones de orden estético y literario con su compromiso intelectual con la obra de Marx, surgen sus primeros trabajos y publicaciones teóricas, reunidas en su primer libro: *Las ideas estéticas de Marx*, publicado en 1965. Al año siguiente recibe el grado de doctor en filosofía con el trabajo "Sobre la praxis", matriz de su obra quizá más conocida, *Filosofía de la praxis*, publicada en 1967.

El movimiento estudiantil de 1968, la Primavera de Praga y el repunte de la insurgencia obrera, cuyo impulso declinará hacia 1977, le permiten a Sánchez Vázquez ostentar públicamente su compromiso con las causas sociales y le dan, a sus obras publicadas hasta entonces, una proyección inusitada en nuestro país y fuera de él. Esto se refrenda con la publicación de *Ética*, en 1969; la ambiciosa antología *Estética y marxismo*, en 1970; y *Textos de estética y teoría del arte*, en 1972. En este grupo de obras, Sánchez Vázquez muestra su perfil pedagógico y continúa vigorosamente con su labor de traductor y difusor del marxismo, asunto al que contribuye a través de la publicación, en México y otros países, tanto de importantes obras de representantes del pensamiento marxista europeo y latinoamericano, como del bloque socialista identificados con el antidogmatismo.

Justamente, esa persistente posición antidogmática lo conduce, a lo largo de los años setenta, a emplazar una vehemente controversia contra las ideas del influyente marxista francés Louis Althusser, en quien reconoce por una parte la legitimidad de su propuesta de relectura de la obra de Marx, pero por otra "el olvido de la *praxis*" envuelto en una sofisticada y aun sofística manifestación de teoricismo. A lo largo de la década siguiente, Sánchez Vázquez mantiene una rica, fresca y siempre renovada actividad editorial y pedagógica de cara y como respuesta lúcida a los avatares políticos, sociales y culturales del momento: el eurocomunismo, la revolución sandinista, el declive del movimiento obrero mundial y la deriva hacia la derecha de la mayor parte de las "democracias" occidentales. La caída del socialismo real le da ocasión para reabrir el expediente

sobre el carácter y la necesidad del socialismo, postura que defiende de manera ejemplar durante un encuentro organizado por Octavio Paz –con los auspicios de Televisa y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari– para celebrar la desaparición del bloque socialista y la nueva “experiencia de la libertad” cobijada por el libre mercado y el Consenso de Washington. Ahí, frente a la crema de la derecha intelectual mundial, Sánchez Vázquez ofrece una de las defensas más lúcidas de las que se tenga memoria del ideal socialista por el que ha luchado toda su vida.

A partir de entonces, las tareas académicas, teóricas y políticas de Sánchez Vázquez le procuran celebridad y múltiples reconocimientos, mientras año tras año, hasta poco antes de su muerte, se incrementa la nómina de sus publicaciones y conferencias dentro y fuera de México².

Es así como, después de una larga y plena vida intelectual, Adolfo Sánchez Vázquez muere en la ciudad de México el 8 de julio de 2011.

2

Lo primero que salta a la vista apenas iniciado el examen de sus intervenciones teóricas es que Adolfo Sánchez Vázquez, pensador indiscutiblemente marxista, cultiva un marxismo original, fresco, no dogmático; en suma, un marxismo crítico. Pero esta primera nota característica no sería propiamente distintiva si Sánchez Vázquez no fuera él mismo una especie de pionero o precursor, en México, de esa corriente renovada y renovadora del marxismo. Porque hay que saber (y para ello hay que decirlo) que el marxismo mexicano, antes de los años sesenta, no se había destacado nunca como algo original; ni siquiera como una postura teórica y un discurso político medianamente consecuentes. Para aquilatar debidamente la importancia que pensadores como Sánchez Vázquez conservan en el espectro general del marxismo mexicano, es preciso situarlo en el espacio y el tiempo que le sirven de referente y de contraste. Para ello realizaremos algunos apuntamientos sobre los días y las formas del marxismo anterior a la publicación de las obras mayores del pensador español. De entrada, empero, debemos afirmar que el marxismo específicamente mexicano no presenta un cuadro unitario u homogéneo sino que, por el contrario, se fragmenta en por lo menos tres vertientes, las que a partir de aquí caracterizaremos como: a) marxismo dogmático; b) marxismo de cátedra; y c) marxismo precrítico³. Abordados de manera sumaria, podemos decir de cada uno de ellos lo siguiente.

El marxismo dogmático es el producto casi natural del atraso y la persistente dispersión del movimiento obrero en México, de la falta de organizaciones políticas consecuentemente comunistas o revolucionarias y de una suerte de inconstancia y devaneo teórico doctrinario atribuible a sus líderes e intelectuales orgánicos, llamado por el marxista crítico mexicano José Revueltas “locura brujular”⁴. Es dogmático, justamente, porque en su configuración discursiva no participan ideas originales resultado del análisis concreto de la realidad y de su necesaria discusión creativa, sino “recetas”, “esquemas”, “verdades” provenientes de los manuales de adoctrinamiento con los que el régimen de

la Unión Soviética sustituyó el conocimiento y la discusión de las obras fundamentales de Marx y Engels. Es claro que excepciones, como José Revueltas, son justamente eso. La regla, para nuestra pena, es cabalmente ilustrada por un intelectual y político como Vicente Lombardo Toledano, cuyo pensamiento "marxista" se configura a partir de ciertos aspectos de la dialéctica, el materialismo francés del siglo XVIII, el evolucionismo de Spencer y el personalismo de Max Scheler; eso sí, aderezado con la retórica de la lucha de clases, el nacionalismo y el antiimperialismo.

Por su parte, el marxismo de cátedra se caracteriza no por la ignorancia de los clásicos del marxismo (a quienes pensadores como Narciso Bassols, Jesús Silva Herzog o Alfonso Teja Zabre conocen, discuten, traducen o publican), sino por el hecho de que sus autores separan el potencial analítico, que para el conocimiento de la realidad aporta el instrumental teórico conceptual del marxismo, de sus posibilidades y recursos para la transformación revolucionaria del mundo. Para los marxistas de cátedra la revolución ya tuvo lugar, y se llama Revolución Mexicana, de modo que los retos que en el futuro debemos enfrentar no son materia de un discurso transgresor, como el marxismo específicamente político; los retos se enfocan en qué es lo positivo y constructivo que aportan los relatos fundamentales de la modernidad capitalista, principalmente la forma liberal republicana del Estado nación y el régimen democrático.

Es, sin embargo, la segunda generación de estos marxistas la que ha obtenido mayor audiencia y reconocimiento al asociar su quehacer intelectual con el arribo a la mayoría de edad de algunas disciplinas, escuelas y facultades universitarias, o bien, con la aparición de una corriente de opinión pública que ya ha tomado distancia crítica respecto del régimen de la Revolución Mexicana, o que inscribe en su ideario las consignas de la Revolución Cubana. Hablamos de Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Eli de Gortari, Alonso Aguilar Monteverde, Víctor L. Urquidi, José Luis Ceceña, Jorge Carrión, Ifigenia Martínez, Enrique González Pedrero y los jóvenes autores y publicistas que animaron las revistas *Los grandes problemas agrícolas e industriales de México* (1946/49), *El Espectador* (1958), *Política* (1960) o, años más tarde, *Estrategia* (1972). En su mayoría, salvo señaladas excepciones, no se trata de auténticos marxistas o de militantes comunistas que buscan en la obra de Marx una herramienta y una guía para las tareas revolucionarias, sino de profesionales universitarios y demócratas radicales que reconocen la pertinencia y las cualidades teóricas y críticas del marxismo cuando el objetivo consiste en plantear problemas de índole económica o social en el plano de la universalidad abstracta, pero que se olvidan de él cuando se trata de proponer soluciones prácticas a los grandes problemas de nuestro país; soluciones que, desde su perspectiva, se encuadran en las "ventajas" que, a pesar de sus modelos autoritarios, ofrecen tanto el régimen de la Revolución Mexicana como su Estado representativo.

A su vez, el marxismo que aquí llamamos precrítico está representado por una serie de autores que, habiendo militado la mayoría de ellos en organizaciones tan dogmáticas e inculcas como los partidos de izquierda o el sindicalismo asimilado, habrían aprendido las lecciones de las más sonadas derrotas de los movimientos

sociales durante la segunda mitad del siglo XX (particularmente las sufridas por el movimiento obrero popular mexicano: trabajadores mineros y petroleros en 1951-1952, ferrocarrileros en 1958-1959, maestros en 1959-1960 y estudiantes en 1968) para finalmente entender, y asumir, que no existe en México una organización política verdaderamente comunista y revolucionaria; que la formación del “partido de la clase obrera” y de la opción revolucionaria de izquierda pasa necesariamente por un largo período de formación teórica y aprendizaje político; y que el marxismo, asumido como el único discurso teórico capaz de procurar tanto el conocimiento necesario como la expresión adecuada “de y para la revolución” debe ser estudiado y discutido directamente en sus fuentes originales y sus desarrollos teóricos y políticos más consecuentes. Lo precrítico de esta posición no se refiere tanto a su posición teórica sino a su posición política, en tanto la mayoría de sus autores conserva la idea, como los marxistas de cátedra, de que la transformación de México puede y debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y los espacios que le proporcionan el Estado liberal burgués y la lucha política de partidos que participan en las justas electorales.

Finalmente, el surgimiento y maduración del marxismo crítico, por justicia, debe asociarse con la obra y el pensamiento de José Revueltas. Escritor, dramaturgo, hombre de cine, ensayista y filósofo, su obra constituye un verdadero oasis en el desierto del marxismo mexicano. A través de sus intervenciones literarias y de su obra teórica y política, Revueltas propone un ambicioso dispositivo crítico para enfrentar los problemas fundamentales del movimiento comunista mexicano: en primer lugar, la inexistencia histórica de un auténtico partido de la clase obrera en México, y en segundo, la “locura brujular” que desde siempre aqueja a sus teóricos y dirigentes. No es difícil identificar aquella “locura” con el dogmatismo, la improvisación y el oportunismo que privan al interior de las organizaciones comunistas, por lo que parecería casi natural que su superación exija un enérgico proceso de transformación teórica y doctrinaria cuya condición de posibilidad, casi única, está en regresar a los clásicos del marxismo; pero, además, en mantener una postura abierta y desprejuiciada frente a lo fresco e innovador que aporta la discusión teórica desarrollada durante la desestalinización en el orbe del socialismo real o al interior del marxismo occidental. Pero Revueltas, por lo menos hasta 1968, actúa fuera de la academia, por lo que su marxismo crítico, al margen de su círculo más próximo, carece de una interlocución siquiera inteligente.

Dentro del ámbito universitario, Adolfo Sánchez Vázquez trabaja y propone un marxismo renovado, no dogmático, e inspira intelectualmente a un grupo de jóvenes profesores marxistas que, por lo menos en aquellos años, pugnan por dejar atrás el dogmatismo que distingue al movimiento revolucionario. Entre ellos, por sólo mencionar a los ya ausentes, figuran Carlos Pereyra, Ignacio Osorio, Pedro López Díaz, Juan Garzón Bates y Bolívar Echeverría. A este grupo original habría que sumar los marxistas críticos latinoamericanos que coinciden en la UNAM entre 1965 y 1975: Adolfo Gilly, Oscar Terán, Oscar del Barco, Agustín Cueva, Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos, entre muchos otros, y aún considerar los esfuerzos editoriales que representan las empresas Era y Siglo XXI y las revistas *Historia* y *Sociedad* y *Cuadernos Políticos*.

En tales condiciones, y a través de las intervenciones teóricas y políticas de los autores mencionados, en nuestro país se efectúa el tránsito entre el marxismo no dogmático (o precrítico) y el marxismo crítico propiamente dicho; es decir, un marxismo que insiste en señalar que lo importante no es la precisión “pura” con la que puede entenderse o aplicarse algún concepto en el curso del análisis contemplativo de la realidad concreta. Es precisamente crítico porque su apuesta no se limita al “disfrute contemplativo” de la realidad, sino se inscribe en su transformación revolucionaria. Es crítico, finalmente, el marxista que deja de comportarse “como los filósofos”, quienes a decir de Bolívar Echeverría en esos años componen “mensajes redundantes dentro de un campo discursivo solidificado y pasivamente enigmático”, o le ofrecen al mundo “imágenes remozadas de lo que él fue en el pasado: hermenéuticas, ‘interpretaciones’ de lo que él ya no es.” (Echeverría, 2011: 43) Pues bien, como se dijo, Adolfo Sánchez Vázquez no sólo milita en esa versión crítica del marxismo en México, sino que conduce y sirve de inspiración a toda la corriente. Una muy breve relación de sus temas nos puede ayudar a ilustrar esos respectos.

3

Tres son, a nuestro modo de ver, los grandes temas, pero igualmente, las tres grandes aportaciones de Adolfo Sánchez Vázquez al pensamiento crítico marxista, a saber: a) la siempre abierta y renovada discusión sobre el estatuto teórico y político del marxismo, que lo lleva a reelaborar el concepto de *praxis*, a examinar profundamente la epistemología marxista y, en consecuencia, su relación peculiar y específica con la acción política, incluida para tal efecto una larga discusión (contra Louis Althusser y otros autores) sobre el carácter científico del marxismo y sus configuraciones y usos ideológicos; b) la propuesta del arte, o mejor dicho, la *praxis* artística, como espacio ejemplar de la creatividad humana y, en esa condición, como experiencia emancipadora, lo que a su vez implica concebir y ejercer la estética marxista como su imprescindible momento teórico; y c) la puesta en valor del socialismo, lo que se resuelve, a contrapelo de la historia, como una decidida y consecuente postura política en tiempos oscuros, pero sobre todo, como una esclarecedora y valiente apuesta ética.

A ello habría que sumar su incansable tarea pedagógica (ejemplificada por sus largos años de magisterio) y su tarea como difusor del pensamiento crítico específicamente marxista, como ilustra su labor como traductor, editor y comentarista de los autores más importantes del marxismo renovado. A continuación diremos algo, aunque sea muy brevemente, sobre cada uno de estos temas.

Sobre el estatuto teórico político del marxismo y la filosofía de la *praxis*

Dado que se trata propiamente de la espina dorsal del pensamiento crítico de Adolfo Sánchez Vázquez, es un hecho que la pregunta por el estatuto teórico político del marxismo ocupa un lugar primerísimo y central en el orden de sus

preocupaciones intelectuales. Ni más ni menos porque de las respuestas, que “en la perspectiva de sus fundadores” puedan formularse a ese respecto, depende que podamos caracterizar el pensamiento y la obra de Marx y Engels como una contribución decisiva para la transformación revolucionaria de la realidad, como una teoría social entre otras o, en su defecto, como el simple ideario utópico de “algún reformador del mundo”. Es por ello que, desde el momento en el que Sánchez Vázquez reconoce las graves deficiencias teórico discursivas que arrastra el marxismo dogmático y oficializado, que bajo el nombre de Dia-Mat preconiza y exporta la Academia de Ciencias de la URSS –reconocimiento que podría fecharse a la mitad los años cincuenta del siglo pasado–, su inclinación original por los problemas de la literatura y de la estética cede, parcial y temporalmente, a la pregunta por las formas en las que el pensamiento de Marx puede conciliar, como de hecho lo hace, el rigor inquisitivo de una ciencia, la firmeza de una guía para la acción política revolucionaria y la fuerza de un imperativo ético humanista, emancipador y solidario. La respuesta, largos años meditada y preparada –y expuesta en su totalidad en el libro publicado originalmente en 1967 y reeditado con importantes adiciones en 1980– se formula como “filosofía de la *praxis*”, porque en esta expresión se recogen y sintetizan ese rigor, esa firmeza y esa fuerza. Es decir, porque en el marxismo, caracterizado como filosofía de la *praxis*, esto es, “como filosofía que se concibe a sí misma no sólo como interpretación del mundo, sino como elemento del proceso de su transformación”, Sánchez Vázquez (1980: 21) encuentra la posibilidad de pensar un marxismo enteramente renovado.

¿Por qué *praxis* y no otra de las categorías con las que, desde el interior del dilatado *corpus* marxista, este puede hablar de sí mismo y autocaracterizarse como la ciencia de la historia y las transformaciones sociales, y como teoría de la acción revolucionaria y de la práctica política transformadora? Porque, por una parte, la *praxis* engloba y representa todo eso; pero, además, porque en el concepto de *praxis* queda indisolublemente inscrito el sentido más profundo del marxismo, el que lo concibe como “una filosofía de la acción transformadora y revolucionaria, en la que la actividad en su forma abstracta, idealista, ha sido invertida para dejar cabeza arriba la actividad práctica, real, objetiva del hombre como ser concreto y real, es decir, como ser histórico-social” (1980: 54). Pero, igualmente, porque la *praxis* a la que alude el pensamiento de Marx conserva y cumple plenamente las tareas propias de la emancipación humana. “Y es aquí donde [la *praxis*] se nos aparece vinculada íntimamente al concepto de creatividad y, en el terreno social, a esa forma peculiar de la actividad transformadora y creadora que es la revolución” (1980: 55).

Para quienes el marxismo no es un arcano, es claro que las fuentes teóricas en las que se apoya la propuesta de una filosofía de la *praxis* son las obras juveniles de Marx (y Engels), particularmente los *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, la *Ideología alemana* y, en forma destacada, las *Tesis sobre Feuerbach*; sin que ello signifique que Sánchez Vázquez haya hecho caso omiso, para la construcción de su propuesta, de la obra madura de Marx. Esto es así porque, en esa obra juvenil, Sánchez Vázquez reconoce la presencia, o por lo menos el esbozo, de un pensamiento capaz de articular, en pleno

equilibrio, todos los elementos que requiere la renovación no dogmática del marxismo, entrampado hasta entonces en desviaciones epistemológicas, ontológicas o humanistas.

La reivindicación de la praxis, como categoría central, se había convertido en una tarea indispensable para rescatar la médula marxista de su envoltura ontologizante, teorícista o humanista abstracta

En primer lugar, Sánchez Vázquez encuentra en el joven Marx una posición de discurso que en el curso de su crítica a las limitaciones e inconsecuencias de las posturas idealista y materialista vulgar respecto a la relación sujeto/objeto, se postula como materialista, histórica y dialéctica, por cuanto concibe la realidad y sus transformaciones como efecto de la relación práctica, objetiva y concreta de los hombres con la naturaleza; es decir, porque entiende y explica la realidad y sus transformaciones en términos de *praxis*. En segundo término, porque en el pensamiento antropológico del joven Marx, Sánchez Vázquez reconoce las herramientas teóricas para superar el humanismo abstracto, es decir, la posibilidad de situar el problema de la *praxis* en un terreno propiamente humano, arribando a una concepción del hombre como ser activo, creador, práctico, que al transformar al mundo a través de su actividad práctica (no sólo en el orden de la idea) se transforma a sí mismo y con ello transforma su conciencia de manera real, objetiva y concreta. Para el joven Marx, de acuerdo con Sánchez Vázquez, la transformación de la naturaleza aparece necesariamente asociada a la transformación del hombre mismo y, más allá, como la condición de posibilidad de una verdadera autoconciencia, esto dado que a través del dominio sobre la naturaleza el hombre domina la suya propia y crea un mundo y una cultura humanos. Bajo estas determinaciones, producción, hombre y sociedad; y producción, acción humana e historia, forman una unidad indisoluble. Si en una sola frase es posible sintetizar toda esa riqueza teórica ésta es, para Sánchez Vázquez, la Tesis XI sobre Feuerbach, en donde se afirma que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversos modos, cuando de lo que se trata es de transformarlo. “Así entendida, la *praxis* ocupa el lugar central de la filosofía que se concibe a sí misma no sólo como interpretación del mundo, sino como elemento del proceso de su transformación. Tal filosofía no es otra que el marxismo” (1980: 21).

Si atendemos al contexto teórico y político anteriormente aludido (la circunstancia histórica y el marxismo específicamente mexicanos) es claro que el pensamiento y la obra de Sánchez Vázquez constituyen un saludable contrapunto; propiamente un enérgico planteamiento crítico que encara y denuncia las limitaciones de un pensamiento y una acción que han sido una y otra vez presas de su dogmatismo y de su “locura brujular” –como se ha dicho, es muy probable que la dolorosa derrota del movimiento ferrocarrilero (1958-1960) y el movimiento magisterial (1960-1961), la permanente incultura filosófica y política de

la organizaciones de izquierda y los usos puramente académicos del marxismo sean sus detonadores.

Pero es claro que el mensaje inscrito en la filosofía de la *praxis* no se dirige única y exclusivamente a los marxistas mexicanos, sino al conjunto del marxismo tal y como lo representan en esos años los pensadores que permanecen presos en las limitaciones del Dia-Mat, tanto como aquellos que en el resto del mundo mantienen una tenaz y persistente lucha en contra de los saldos negativos del dogmatismo y de las desviaciones ontologistas, científicistas y humanistas abstractas del marxismo. De ahí la insistencia de nuestro autor en la ineludible articulación entre la teoría y la práctica y en el carácter transformador de una *praxis* verdaderamente revolucionaria.

La reivindicación de la *praxis*, como categoría central, se había convertido en una tarea indispensable para rescatar la médula marxista de su envoltura *ontologizante*, teorícista o humanista abstracta. Ciertamente, era preciso deslindar el marxismo del que filosóficamente, como materialismo dialéctico, lo reducía a una nueva filosofía del ser o a una interpretación más del mundo. Pero era preciso también marcar las distancias respecto de un marxismo científicista o epistemológico que, impulsado por el legítimo afán de rescatar su científicidad y, con ella, la racionalidad de la práctica política, desembocaba en una nueva escisión de la teoría y la práctica. Finalmente, era obligado revalorizar el contenido humanista del marxismo, pero sin olvidar que la emancipación del hombre pasa necesariamente por la emancipación de clase del proletariado, fundada a su vez en un conocimiento científico, objetivo, acerca del mundo social a transformar (1980: 11).

Sobre la *praxis* artística como experiencia creativa y emancipadora

Este aspecto de su obra es, probablemente, en donde Sánchez Vázquez se ha movido con mayor soltura a lo largo de los años; es, pues, su tema. Tal vez debido a que en su mocedad fue poeta –y podemos decir que buen poeta– y porque una de las cualidades del socialismo es la preocupación por la educación y la expresión estético artística de todo individuo; el hecho es que desde siempre Sánchez Vázquez se sintió especialmente atraído por el problema del arte, de sus formas y manifestaciones y de los emplazamientos teóricos para su comprensión. Sin embargo, sería un error considerar su preocupación por la estética y la teoría del arte al margen de su concepción del marxismo como filosofía de la *praxis*. Es un hecho que Sánchez Vázquez entiende y asume a la *praxis* artística, tanto como la teoría científica marxista que pretende explicarla, como uno de los aspectos privilegiados de la creatividad humana y, por ello mismo, de las capacidades transformadoras o revolucionarias de los hombres. De ahí que, aun cuando en principio sea posible hablar con pertinencia de una “estética marxista”, a Sánchez Vázquez le haya sido preciso desarrollar un largo alegato donde dicho señalamiento deba y pueda ser probado con sobrada y firme suficiencia.

Con ese fin, en la notable introducción general a la obra antológica *Estética y marxismo*, de 1970 –que es una respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los principios que informan la estética marxista y contribuyen a resolver problemas estéticos

cardinales?—, el autor nos ofrece una sólida argumentación que fundamenta los principios a partir de los cuales es posible cumplir con los compromisos teóricos que exige, tanto la cabal comprensión de la *praxis* artística, como su encuadramiento en el proceso histórico general de la emancipación humana. “Cuatro principios que entrañan sendas concepciones del hombre, la historia, la sociedad y el método de investigación” (Sánchez Vázquez, 1970: 24).

En primer lugar, en el curso de una impecable conceptualización histórico materialista, Sánchez Vázquez invoca una concepción del hombre como ser práctico, productor y transformador. Esto, en sintonía con los principios de su filosofía de la *praxis*, entraña el hecho de entender al hombre como productor de un mundo de objetos que sólo existen por él y para él, es decir, destaca la actividad práctica del hombre como creadora de su propio mundo, y a la par como creadora y transformadora de sí mismo. De esta forma, en términos marxistas el arte es concebido como una de esas prácticas y, como tal, como uno de los ámbitos privilegiados de su “potencialidad creadora”.

En segundo lugar, siempre en la perspectiva histórico materialista, Sánchez Vázquez sostiene que toda producción y autoproducción humana deben ser asumidas radicalmente como procesos de orden histórico, y por lo tanto el arte no escapa a esta determinación. Sin embargo, como creación humana, el arte rebasa cada momento histórico particular en el que se produce para inscribir, en esa misma historia que le sirve de marco, la proyección de un futuro posible. La explicación de ambos principios sigue una argumentación que descansa en el conjunto de tesis que Marx propone en los *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, que es donde se encuentra la fuente de dicha concepción social de lo estético. En aquel texto, el arte —como el trabajo— se presenta en relación con la necesidad del hombre de objetivar sus fuerzas esenciales, es decir, creadoras. Asimismo, esto también puede apoyarse en los trabajos de madurez de Marx, lo cual no debería sorprendernos si se tiene presente que son perfectamente congruentes con la concepción que subyace en los primeros: “el hombre como ser práctico, histórico y social, que al humanizar la naturaleza con su actividad práctica crea un mundo de relaciones, valores, productos, del que forman parte la relación estética con la realidad, los valores estéticos y las obras de arte” (1970: 31).

El tercer principio histórico materialista incorporado por Sánchez Vázquez entiende al hombre como ser social y a la sociedad como un todo estructurado. De acuerdo con esta idea central, el arte, como creación humana, es un fenómeno social que responde a las características y determinaciones esenciales del tipo de sociedad en que se produce. De esta forma, responde necesariamente a determinados intereses sociales de clase, se inscribe en la superestructura ideológica de la sociedad y participa activamente, de manera afirmativa o crítica, en la configuración de las formas dominantes de tal o cual ideología. Aquí Sánchez Vázquez es enfático, ya que, si hemos sido atentos, podemos percibir claramente la ceñida articulación y apoyo mutuo que los tres principios señalados hasta ahora mantienen entre sí:

La relación estética se desarrolla sobre una base histórico-social en el proceso de humanización de la naturaleza mediante el trabajo. Lo estético no existe, por tanto, al margen del hombre social.

Se da al margen de la conciencia de un sujeto individual, pero no fuera de una relación sujeto/objeto entendida ésta como relación social, y no meramente individual. La realidad estética es una realidad social, humana o humanizada" (1970: 30).

...como creación humana, el arte rebasa cada momento histórico particular en el que se produce para inscribir, en esa misma historia que le sirve de marco, la proyección de un futuro posible

Por último, el cuarto principio se refiere al método dialéctico propio del marxismo, mismo que Sánchez Vázquez asume como principio fundamental de todo el pensamiento marxista. Como uno de sus aspectos esenciales, nuestro autor destaca el principio de totalidad, que en todos los casos prescribe considerar a la realidad como un todo concreto y, en el caso particular del arte, debe asumirlo como parte de esa totalidad sin reducirlo absolutamente a ella. Esto porque, ni más ni menos, la necesidad y la racionalidad del arte no pueden descubrirse o explicarse al margen de la totalidad social ni de los elementos con los que ésta establece relaciones de dependencia e influencia recíprocas, ya que, como se ha asentado anteriormente, el arte es producto de esa sociedad y de esas relaciones. Pero, más allá, porque el arte es un elemento específico, concreto, con estructura y legalidad propias; y no puede ser reducido al todo social o a una parte de él, como sería el caso de las escuelas idealistas, positivistas o marxistas dogmáticas que lo reducen a la determinación de la economía, la política o la religión. Firmemente apoyado en el principio dialéctico de totalidad, Sánchez Vázquez sostiene que el arte es una producción humana específica, condicionada por las formas histórico concretas que en cada caso le prescribe la sociedad en la que se produce, aunque mantiene empero una relativa autonomía respecto de esas formas de condicionamiento social, justamente por ser una forma privilegiada de *praxis* creadora y, por ello, transformadora de esa misma realidad.

El método dialéctico marxista que tiene por base el enfoque de la realidad como un todo estructurado no permite, en efecto, que un elemento sea reducido a otro –lo ideológico a lo económico, lo artístico a lo político, etc.– pero veda asimismo borrar las diferencias cualitativas de los distintos elementos de una y la misma totalidad. La mayor parte de las deformaciones ideologizantes o sociologistas de la estética marxista tiene su raíz en el olvido de ese principio dialéctico cardinal (1970: 24).

Acudir a una obra temprana para ilustrar la posición de discurso materialista, histórica y dialéctica que sostiene Sánchez Vázquez en torno a los problemas de la estética, no significa que en su obra posterior no haya agregado nada nuevo o digno de mención. Al contrario, el número de artículos y conferencias posteriores a 1970 dedicados al tema, ya en el plano de la teoría, ya en términos de crítica literaria y artística, no sólo suma varias decenas, sino constituye un importante ejemplo de pensamiento vivo, siempre atento a las demandas del presente. Algu-

nos de esos trabajos han sido reunidos en libros y otros aguardan, en el seno de sus publicaciones originales, los buenos oficios del investigador. Como ejemplo, podemos mencionar las cinco conferencias reunidas en el libro *De la estética de la recepción a la estética de la participación* (2005) donde, conservando como hilo conductor el contrapunto entre la “estética de la recepción” y la “estética de la participación”, Sánchez Vázquez aborda críticamente las últimas tendencias del arte contemporáneo y las consecuencias que para la producción artística tendrán las nuevas tecnologías en el futuro próximo. Lo importante, en todo caso, es que la estética de Sánchez Vázquez, aún la más reciente, se nutre, crece y madura al compás que le imponen su propia concepción revolucionaria del mundo y su marxismo crítico, cuya urdimbre teórico conceptual, articulada indisolublemente a su filosofía de la *praxis*, se configura y pone a punto en el curso de los años sesenta; no para anquilosarse y devenir dogmática, sino para servir de base a un pensamiento marxista siempre nuevo y siempre renovado.

Sánchez Vázquez perfila un concepto de socialismo ceñidamente fiel a los principios teóricos y filosóficos del materialismo histórico y del pensamiento dialéctico, al que agrega, como nota personal, un pertinente sentido ético y humano

El valor del socialismo⁵

Sánchez Vázquez prepara y propone una sólida argumentación a favor del socialismo fundada en la idea de que este no es únicamente una forma de organización social, deseada y posible, que mecánica e inexorablemente sustituirá al capitalismo en cuanto haya agotado todas sus posibilidades de desarrollo, sino el efecto de una gran transformación histórico social que no puede prescindir de la participación decidida y consciente de los hombres en su realización; es decir, que el socialismo será efecto de una *praxis* específica y concreta, de una *praxis* revolucionaria.

Conservando el tono y el sentido que Marx y Engels inscribieron en el *Manifiesto Comunista*, y haciendo eco al hecho de que las tesis teóricas en las que el socialismo se sustenta no se basan “en ideas y principios inventados o descubiertos por tal y cual reformador del mundo”, sino que son la expresión de conjunto de las condiciones reales de la lucha de clases y de un movimiento histórico real “que se está desarrollando ante nuestros ojos”, Sánchez Vázquez perfila un concepto de socialismo ceñidamente fiel a los principios teóricos y filosóficos del materialismo histórico y del pensamiento dialéctico, al que agrega, como nota personal, un pertinente sentido ético y humano.

El socialismo es, ante todo, la solución de la contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la apropiación privada de los medios de producción mediante la apropiación social de los medios de producción. Pone de manifiesto su superioridad al permitir el pleno desarrollo de las fuerzas productivas en virtud de que las nuevas relaciones de producción se hallan en

consonancia con el carácter social de ellas. Pero el valor del socialismo no radica sólo en que funciona mejor que el capitalismo en el terreno de la producción material. Lo valioso no reside propiamente en producir más, sino en el significado social, humano, de la producción. La superioridad del socialismo –y en consecuencia, la conciencia de ella– no reside en los índices de productividad sino en que su producción está al servicio de las necesidades de la sociedad entera; reside en que no es producción para la producción, sino producción para el hombre (1975: 35).

Para Sánchez Vázquez ese valor y esa superioridad no son abstractos, porque, apoyándose en Marx, para él el socialismo no es solamente un ideal, sino una posibilidad real inscrita en las condiciones reales de existencia de la sociedad contemporánea. Siempre y cuando cobremos conciencia de ello y luchemos por su realización, el socialismo conserva un valor y una superioridad objetiva que tiene por fundamento la más cabal comprensión de las relaciones del hombre con la naturaleza y de los hombres entre sí; porque asume y denuncia que esa relación ha sido parasitada y deformada por el antagonismo entre la apropiación privada y la producción social y el carácter de las luchas de clases bajo el capitalismo; y porque entiende que la superación de ese estado de cosas no puede ser efecto sino de una *praxis* conscientemente trasformadora, convencida de que su lucha se dirige hacia un fin históricamente necesario, prácticamente realizable y moralmente justo.

El socialismo se presenta, en la relación del hombre con la naturaleza y en las relaciones de los hombres entre sí, con un valor y con una superioridad objetiva, real, que tiene por fundamento la abolición del antagonismo entre la apropiación privada y la producción social, y la división de clases que deriva de él. Pero en la incorporación de los hombres a la lucha por el socialismo es decisivo el convencimiento de esa superioridad, de ese valor, no como algo simplemente deseado o soñado, sino desprendido de las condiciones reales que lo hacen posible (1975: 35).

He aquí, una vez más, cómo y hacia qué desenlaces conduce una postura teórica y política que ha hecho suyos los principios fundamentales del marxismo de Marx y Engels y que bajo la categoría de *praxis* ha sabido articular inteligentemente los desarrollos teóricos y conceptuales que pensadores posteriores han aportado al marxismo –cuando estos han conservado el sentido histórico y crítico del pensamiento de sus fundadores. Porque Sánchez Vázquez no ignora que su idea de sociedad emancipada ha debido enfrentar y superar muy distintos avatares en el curso de los años transcurridos desde que en su primera juventud, en Málaga, abrazó la causa comunista. Es decir, porque la historia le ha mostrado que las ideas relativas a la necesidad, a la posibilidad y a la actualidad del socialismo frente a otras propuestas de organización de la vida social deben ser sometidas, ellas mismas, no sólo a la a veces terrible prueba de la práctica, sino a una revisión teórica continua con acuerdo al principio marxista: no dar nada por sentado y asumir la crítica radical de todo lo existente.

Es por eso que cada una de las derrotas, desviaciones o desfallecimientos que eventualmente ha sufrido la apuesta socialista no lo desaniman sino, por el contrario, le imponen una nueva tarea teórica y política: pensar una y otra vez la

posibilidad y el valor del socialismo de cara a los nuevos, inestables y siempre sorprendentes contenidos de la realidad. Esta necesidad le ha llevado, en situaciones sumamente adversas, a formular una serie de principios teóricos que, independientemente del lugar y la circunstancia en la que se exponen, configuran una densa trama argumental –podríamos pensar en la red que salvaguarda la vida de los atletas circenses– que nos impele a conservar la confianza, y acaso la certeza, de que eventualmente la humanidad vivirá una vida libre y digna. Ese y no otro es el mensaje, entre lúcido, sereno y expectante, que podemos rescatar de trabajos como “Ideal socialista y socialismo real”, “El valor del socialismo”, “Once tesis sobre socialismo y democracia” o “Después del derrumbe”. Sin embargo, a pesar del “derrumbe”, ya situado en una vía para ir más allá de él, Sánchez Vázquez sostiene, prácticamente hasta su último aliento, la idea de que la posibilidad del socialismo seguirá viva mientras existan hombres y mujeres que conserven no sólo la conciencia de su posibilidad, sino el optimismo de su búsqueda.

Marx y Engels descubrieron que el socialismo podía realizarse cuando se sumaran las condiciones adecuadas, entre las que había que contar forzosamente la conciencia de la posibilidad de su realización, la aspiración a realizarlo y la organización y lucha correspondientes. Así, el socialismo como alternativa al capitalismo resulta no sólo un producto histórico posible y necesario, sino un ideal fundado objetiva e históricamente. Pero, en cuanto no se realice todavía, funciona como una hipótesis que ha de ser verificada en la práctica (1999: 166).

Pero esta apuesta por el socialismo no puede llevarse a cabo al margen o sin la guía lúcida, esclarecedora y revolucionaria del marxismo. Es por ello que, para cerrar esta contribución, reproducimos el mensaje final del discurso de agradecimiento que Adolfo Sánchez Vázquez pronunciara en septiembre de 2004 en la Universidad de La Habana con motivo de recibir el doctorado *honoris causa* de aquella institución y como respuesta a la pregunta: ¿Se puede ser marxista hoy?

Llegamos al final de nuestro discurso con el que pretendíamos responder a la cuestión de si se puede ser marxista hoy. Y nuestra firme respuesta al concluir, es ésta: puesto que una alternativa social al capitalismo –como el socialismo– es ahora más necesaria y deseable que nunca, también lo es, por consiguiente, el marxismo que contribuye –teórica y prácticamente– a su realización. Lo cual quiere decir, a su vez, que ser marxista hoy significa no sólo poner en juego la inteligencia para fundamentar la necesidad y posibilidad de esa alternativa, sino también tensar la voluntad para responder al imperativo político moral de contribuir a realizarla.

Bibliografía

- Cepedello Boiso, José 2009 “Adolfo Sánchez Vázquez: Filosofía y política en el exilio” en *Revista Internacional de Pensamiento Político* (Sevilla) Vol. 4, Primera Época.
- Echeverría, Bolívar 2010 *Modernidad y blanquitud* (México: Era).
- Echeverría, Bolívar 2011 “El materialismo de Marx” en *El materialismo de Marx. Discurso crítico y revolución* (México: Ítaca).
- Gandler, Stefan 2007 *Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría* (México: Fondo de Cultura Económica).

- Ortega Esquivel, Aureliano 2011 "Bolívar Echeverría: 1941-2010" en *Hispanismo Filosófico* (Madrid) N° 16.
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1970 *Estética y marxismo* (México: Era) Tomo I.
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1975 *Del socialismo científico al socialismo utópico* (México: Era).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1980 (1967) *Filosofía de la praxis* (México: Enlace/Grijalbo).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1999 *Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre política, moral y socialismo* (México: Fondo de Cultura Económica/UNAM).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 2004 "¿Por qué ser marxista hoy?" en *La Jornada* (México) 12 de septiembre.

Notas

1 Sánchez Vázquez dejó abundantes testimonios sobre su vida en múltiples apuntes autobiográficos. Asimismo, antes y después de su muerte han aparecido en medios impresos y electrónicos ininidad de apuntes biográficos y bibliográficos. Para la composición de esta semblanza nos hemos apoyado principalmente en la magnífica biografía que Stefan Gandler incluye en su obra sobre Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría (2007). Asimismo, es digno de mención el trabajo de José Cepedello Boiso (2009).

2 Entre sus libros más importantes posteriores a 1972 se encuentran: *Del socialismo científico al socialismo utópico* (1975), *Ciencia y Revolución. El marxismo de Althusser* (1978), *Sobre arte y revolución* (1979), *Filosofía y economía en el joven Marx. Los manuscritos de 1844* (1982), *Ensayos marxistas sobre historia y política* (1985), *Del exilio en México* (1991), *Filosofía y circunstancias* (1997), *Entre la realidad y la Utopía. Ensayos sobre política, moral y socialismo* (1999), *El valor del socialismo* (2000), *A tiempo y destiempo* (2003), *De la estética de la recepción a la estética de la participación* (2005), *Una trayectoria intelectual comprometida* (2006) y, finalmente, *Ética y política* (2007). Asimismo, entre los muchos homenajes y reconocimientos recibidos en el último tramo de su vida podemos mencionar los doctorados *honoris causa* por las universidades de Puebla, Nuevo León, Guadalajara y Michoacán, en México; el otorgado por la Universidad de La Habana en Cuba; los conferidos por la UNED, la Universidad de Cádiz y la Complutense de Madrid en España; así como los premios Universidad Nacional y Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Humanidades en México, la Gran Cruz de

de Alfonso X "El Sabio", el Premio María Zambrano de la Junta de Andalucía y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Estado español.

3 Para una caracterización más completa y documentada de las clases de marxismo que se han cultivado en México, ver: Ortega, A. 2011 "Bolívar Echeverría: 1941-2010" en *Revista de Hispanismo Filosófico* (Madrid: Asociación de Hispanismo Filosófico/FCE) N° 16, septiembre.

4 "La locura brujular del marxismo en México" es un texto inédito de Revueltas, escrito en 1970, en la entonces prisión preventiva de la ciudad de México (El *palacio negro* de Lecumberrí), cuya versión mecanografiada se encuentra en la *Latin American Collection* de la Biblioteca "Nettie Lee Benson", de la Universidad de Texas, bajo el rubro *José Revueltas Papers 1906-1989*. Sin embargo, la expresión ha cobrado carta de ciudadanía crítica a través de múltiples aplicaciones relativas a la condición de minoría de edad, desconcierto, improvisación y carencia de asideros teóricos y doctrinales muy propia, en su momento, del Partido Comunista Mexicano y, en la actualidad, del conjunto de la izquierda política mexicana.

5 Para aquilatar debidamente este aspecto del pensamiento y del legado de Adolfo Sánchez Vázquez es preciso acudir, entre muchos otros trabajos, a los libros *Del socialismo científico al socialismo utópico* (1975), *Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre política, moral y socialismo* (1999), *El valor del socialismo* (2002) y, finalmente, a *Ética y política* (2007), o bien remitirnos a un importante número de artículos, entrevistas y apuntes autobiográficos.

La filosofía de la praxis¹

ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ²

I. Introducción

Por “filosofía de la praxis” entendemos el marxismo que hace de la praxis su categoría central: como gozne en el que se articulan sus aspectos fundamentales y eje en torno al cual giran su concepción del hombre, de la historia y de la sociedad, así como su método y teoría del conocimiento.

En el presente trabajo nos ocuparemos sucesivamente: 1) de las vicisitudes de la praxis en el marxismo; 2) de los aspectos fundamentales de éste; 3) de las mediaciones en la praxis política; y 4) de la validez y vigencia del marxismo hoy.

II. Vicisitudes de la praxis en el marxismo

Por su carácter praxeológico, el marxismo tiene su acta de nacimiento en las *Tesis de Feuerbach* (1845) de Marx. Desde el mirador de ellas, rastreamos los antecedentes de la filosofía de la praxis más cercanos y las vicisitudes de su reivindicación y reconstrucción posteriores.

En su *Fenomenología del Espíritu*, Hegel concibe la praxis, en cuanto trabajo humano, como autoproducción del hombre dentro del proceso universal de autoconciencia de lo Absoluto. En su *Lógica*, la praxis es una fase categorial de la Idea en el movimiento hacia su verdad, o sea: es, como Idea práctica, una determinación suya. En suma, como trabajo humano, o Idea práctica, tiene su fundamento y fin en el devenir de lo Absoluto, y, por ello, es teórica, abstracta o espiritual (Sánchez Vázquez, 1980: 61-90).

Antes de Marx, en sus *Prolegómenos a la filosofía de la Historia*, de 1838, Cieskowsky habla por primera vez de filosofía de la praxis, entendiendo por ella la que influye, con su verdad, no sólo en el presente de los hombres, sino también en su futuro. E influye no por sí misma, como crítica de lo real, que es lo que cree la izquierda hegeliana, sino trazando fines que la acción debe aplicar.

Moses Hess sostiene igualmente, en *La Triarquía europea*, de 1843, que la tarea de la filosofía consiste en llegar a ser una filosofía de la “acción libre y creadora” de la vida social futura. Pero, tanto en Cieskowsky como en Hess, filosofía y acción se hallan en una relación exterior. Esta exterioridad se da también en los primeros escritos de Marx, particularmente en su *Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel*, de 1843, y sólo en los *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, y sobre todo en sus *Tesis sobre Feuerbach*, de 1845, pensamiento y acción se consideran en su unidad. La teoría se presenta entonces como aspecto intrínseco de la praxis (Marx, 1959). En los *Manuscritos* de 1844, la praxis productiva o trabajo se concibe como una actividad material consciente, aunque enajenada en la producción capitalista. La transformación de esta praxis enajenada en la verdaderamente humana, libre y creadora, requerirá para Marx un cambio social radical o revolución, a partir de la abolición de la propiedad privada. Este concepto de praxis revolucionaria entraña ya la unidad de interpretación y transformación del mundo, de teoría y práctica, que queda claramente formulada en las *Tesis sobre Feuerbach*.

Como “actividad crítica práctica”, la praxis tiene un aspecto material, objetivo, por lo que no puede reducirse a su lado subjetivo, consciente; a la vez, por este lado consciente no cabe reducirla a su lado material. De donde se infiere que la teoría no es práctica de por sí, ni tampoco como modelo que se aplica, sino que lo es por formar parte del proceso práctico.

Como se reafirma en la definición del trabajo en *El Capital* (Marx, 1964: 130-131, Tomo 1), la praxis incluye necesariamente su aspecto subjetivo, consciente. Por tanto, la teoría no puede desligarse de la práctica y, menos aún, pretender guiar o modelar el proceso práctico desde fuera.

Así hay que entender, a nuestro juicio, las tantas veces citada e incomprensible Tesis XI de Marx: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx, 1959: 635). No hay que entenderla como si se postulara el sacrificio de la teoría en el altar de la acción.

La centralidad de la praxis se pone de manifiesto a lo largo de la obra de Marx, aunque a veces empañada por ciertas recaídas deterministas. Pero sus seguidores inmediatos no se atuvieron, ni en el pensamiento ni en la acción, a su visión de la praxis. Y, después de su muerte, los teóricos de la socialdemocracia alemana (Bernstein, Kautsky, Hilferding), estimulados por el objetivismo de Engels, redujeron su teoría a una ciencia positiva de la economía y la sociedad, y dieron a su concepción de la historia un acento tan determinista que acabó por disolver el papel de la subjetividad revolucionaria, y, por tanto, el concepto mismo de praxis.

Más tarde, después de la Revolución Rusa de 1917, los elementos científicistas y positivistas, que ya habían aflorado antes de ella, se integraron en una nueva versión del viejo materialismo filosófico: el Dia-Mat soviético, que desterró de su marxismo la categoría de praxis. La reconquista y reconstrucción del marxismo como filosofía de la praxis ha sido un largo y complejo proceso de lucha desigual con la doctrina institucionalizada que mantuvo su dominio incomprometido en los países del “socialismo real” hasta su derrumbe en 1989. Sin embargo, la validez teórica y práctica de ese marxismo ya era impugnada y rechazada, incluso dentro de esos países y, sobre todo, fuera de ellos, por marxistas cada vez más críticos.

Ahora bien, la reivindicación de la categoría de praxis ya había comenzado en los años veinte con la obra del joven Lukács, *Historia y consciencia de clase* (1969). La praxis se concibe aquí, muy hegelianamente, como el acto revolucionario que realiza la unidad de sujeto y objeto en cuanto que el proletariado conoce y actúa al mismo tiempo.

En *Marxismo y filosofía*, de 1923, Karl Korsch (1971) presenta el marxismo como una filosofía revolucionaria que tiene por base la unidad de la “crítica teórica” y del “cambio práctico”. La teoría es praxis no sólo porque expresa la lucha de clases, sino también porque revela la posibilidad de otra alternativa.

Años más tarde, en 1933, Herbert Marcuse afirma, con base en la distinción marxiana de los dos reinos, el de la necesidad y el de la libertad, que la praxis en el “reino de la libertad” es “la realización plena de la existencia humana como un fin en sí”.

Y en América Latina, Mariátegui, en la década del veinte, al poner el énfasis en la subjetividad revolucionaria frente a todo positivismo y fatalismo, destaca la función práctica del marxismo, acercándose así a su interpretación como filosofía de la praxis (Mariátegui, 1982).

Después del largo periodo (entre los años treinta y cincuenta) en que la categoría de praxis desaparece casi por completo del horizonte marxista, vuelve al primer plano con el Sartre de la *Crítica de la Razón dialéctica* (Sartre, 1960) y sobre todo con el grupo de filósofos yugoslavos (Petrovic, Marcovic, Vranicki, Stojanovic y otros) que publican en Zagreb la revista *Praxis* (1964, 1973). Para ellos, el hombre es el ser de la praxis y ésta, como actividad libre y creadora, se contrapone a la praxis inauténtica, propia del hombre en su autoenajenación (Petrovic, 1967).

En los años sesenta afloran también otras posiciones que, si bien rechazan el Dia-Mat soviético, no siempre reivindican la praxis. Así sucede con la corriente althusseriana que, al tratar de rescatar la cientificidad del marxismo, atribuye a la práctica teórica una autonomía y autosuficiencia tales que llevan a divorciar la teoría de la práctica política real (Althusser, 1967; Sánchez Vázquez, 1978b).

En la reivindicación de la praxis cumplen un papel importante los marxistas italianos a raíz de su descubrimiento, en los años cuarenta y cincuenta, de las aportaciones inéditas de Gramsci. En el pensamiento gramsciano, y particularmente en su oposición al mecanicismo y al objetivismo, representados ejemplarmente por el manual de Bujarin, *Teoría del materialismo histórico*, de 1921 (Bujarin, 1974), los marxistas italianos descubren una rica veta que explotan fecundamente, enriqueciendo en algunos casos la visión del marxismo como filosofía de la praxis (Cassano, 1973).

Finalmente, desde los años sesenta, la atención a la praxis marca también la importante obra de Kosík (1967), *Dialéctica de lo concreto*, y en mayor o menor grado la obra de marxistas como Lefebvre, Goldmann, Löwy, Desanti, Sacristán, Mézáros, Sánchez Vázquez, Tosel y otros.

III. El marxismo como filosofía de la praxis

La introducción de la praxis como categoría central no sólo significa reflexionar sobre un nuevo objeto, sino fijar asimismo el lugar de la teoría en el proceso

práctico de transformación de lo real (Sánchez Vázquez, 1987). Pero, a su vez, determina la naturaleza y función de los distintos aspectos del marxismo: como crítica, proyecto de emancipación, conocimiento y vinculación con la práctica. Estos aspectos se integran en la totalidad a la que se remiten necesariamente. Sin perderla de vista, detengámonos en cada uno de ellos.

1. El marxismo como crítica

El marxismo es en primer lugar una crítica de lo existente (Marx, 1964: XXIV, Tomo 1), que apunta a un triple blanco: a) la realidad capitalista; b) las ideas (falsa conciencia o ideología) con las que se pretende mistificar y justificar esa realidad; c) los proyectos o programas que sólo persiguen reformarla. La crítica presupone, pues, cierta relación con la realidad presente que exige ser transformada. Se trata, por tanto, de una relación en la que ésta es problematizada o negada. Así, pues, aunque la crítica marxista tiene por base la explicación de los males sociales del capitalismo, fustiga estos males y condena al sistema –la realidad económica y social– en que se dan. Pero esta desvalorización que acompaña a su crítica, entraña a la vez como contrapartida la opción por ciertos valores recortados, ignorados o negados en esa realidad. Por este componente valorativo, la crítica de la realidad capitalista empuja a otro aspecto esencial del marxismo que examinamos a continuación.

2. El marxismo como proyecto de emancipación

El marxismo no es sólo una crítica del capitalismo, sino a la vez el proyecto de una sociedad emancipada en la que se aspira a realizar los valores degradados o irrealizables en la realidad criticada. Hay, pues, una relación entre crítica y proyecto que, ya antes de Marx, los socialistas utópicos habían puesto de manifiesto. Ciertamente, a su aguda crítica –fundamentalmente moral– de los males de la sociedad presente, corresponde un cuadro prolijo y fantástico de la sociedad futura en la que esos males serán abolidos.

Ahora bien, lo que distingue, en Marx, esa relación de la que se da en las críticas y utopías sociales de Owen, Fourier y Cabet, es su pretensión de apoyar unas y otras en el conocimiento de la realidad, así como la parquedad con que diseñan los rasgos de la nueva sociedad (Sánchez Vázquez, 1975: 38-58). Sin embargo, queda claro que para Marx se trata de una sociedad en la que los hombres dominan sus condiciones de existencia: con una fase superior o “reino de la libertad” –sin clases, Estado ni relaciones mercantiles y con una distribución de los bienes “conforme a las necesidades” de los individuos– y una fase inferior, o de transición, en la que dicha distribución se hace “conforme al trabajo” que aporta cada quien (Marx, 1974). Ahora bien, por la opción valorativa que representa, el proyecto de una sociedad emancipada es deseable para quienes sufren los males de un sistema de dominación y explotación. Pero, asimismo, es necesario, en el sentido de que responde a necesidades radicales no sólo particulares de las clases explotadas sino universales humanas. De ahí la renovada y dramática actualidad del dilema de Rosa Luxemburgo, “socialismo o barbarie”. No basta, sin embargo, que el proyecto socialista de emancipación sea hoy más necesario que nunca. Para la filosofía de la praxis, no es sólo la idea o el ideal que responde a necesi-

dades radicales, sino una posibilidad entre otras –incluso la no emancipatoria de una nueva barbarie– por cuya realización los hombres deben pugnar.

Pero ¿esa posibilidad puede convertirse en realidad? A esta cuestión, o sea: a la de si el socialismo es factible o viable, se han dado algunas respuestas negativas, recurriendo a diversos tipos de argumentos que podemos reducir a dos. El primero, de corte antropológico filosófico, se expone en estos términos: el socialismo es una utopía absoluta y, por tanto, irrealizable. Y lo es por contraponerse a la “naturaleza humana”, definida por una serie de rasgos esenciales e inmutables, entre los cuales destaca el egoísmo, diametralmente opuesto al intento solidario socialista. Este argumento presupone una naturaleza humana invariable, al margen de la historia y la sociedad, de la que formaría parte esencialmente el comportamiento egoísta del hombre.

El segundo argumento, de tipo histórico empírico, se formula así: el socialismo, no obstante su bondad y deseabilidad, es inviable ya que, como demuestra la experiencia histórica, al tratar de realizarse, fracasa inevitablemente toda vez que se convierte en un nuevo sistema de dominación.

A nuestro modo de ver, uno y otro argumento no pueden sostenerse. El primero, porque sin ignorar que el egoísmo se da, a lo largo de la historia real, en las relaciones humanas de sociedades diversas, sólo adquiere ese carácter dominante o esencial en la sociedad moderna burguesa. El segundo tampoco se sostiene porque, si bien hay que reconocer –como lo han reconocido hace ya tiempo los marxistas críticos– que el proyecto socialista no se realizó en las sociedades del “socialismo real”, de esto no cabe concluir la imposibilidad de su realización, cualesquiera que fueran las condiciones y mediaciones de ella. Semejante conclusión significaría la generalización ilegítima de un resultado histórico concreto.

Así, pues, sólo 1) elevando un modo histórico de ser hombre a la condición de “naturaleza humana”, abstracta e inmutable, o 2) decretando que determinada experiencia histórica es inevitable y la única posible –lo que entrañaría presuponer una concepción determinista fatalista de la historia– se puede proclamar la imposibilidad de una alternativa social que se rija por los principios de autodeterminación, igualdad, justicia y solidaridad, cualquiera que sea el nombre que se le dé. Ahora bien, la cuestión de si el socialismo es factible o viable, involucra otros dos aspectos del marxismo que aún nos toca abordar.

3. El marxismo como conocimiento

Lo que distingue al marxismo de otras doctrinas que critican la sociedad presente y proyectan otra, nueva, no es sólo su espíritu crítico y su voluntad de emancipación, sino su contenido científico en el análisis del capitalismo.

No obstante que los importantes cambios que el capitalismo ha experimentado en las últimas décadas de nuestro siglo han obligado a abandonar o rectificar –en ciertos puntos que indicaremos más adelante– el pensamiento de Marx, se mantienen en pie sus tesis y previsiones acerca de la expansión y mercantilización crecientes de la producción, la concentración cada vez mayor de la riqueza, la progresiva limitación de la concurrencia y la correspondiente eliminación de la mediana y pequeña empresa, la transformación de la ciencia en fuerza productiva, y otras no menos relevantes que han respondido positivamente a la exigencia

científica de ser contrastadas con la realidad. Ahora bien, en cuanto que la realidad en movimiento contiene no sólo lo que es efectivamente, sino también lo que potencialmente germina en ella, el conocimiento descubre en lo realmente existente un campo de posibilidades.

A ese campo pertenecen la posibilidad de la desaparición del capitalismo, así como la de otra alternativa social. Y, asimismo, como ya hemos apuntado, la de una nueva barbarie. Por su contenido científico, el marxismo trata de fundamentar racionalmente las dos primeras, y de orientar la práctica necesaria para convertirlas en realidad. Es, por ello, la unidad de un conocimiento práctico y de una práctica consciente.

Ciertamente, hay que pensar el mundo para poder transformarlo. Pero, esto no significa en modo alguno que baste conocerlo para garantizar su transformación. Ésta no es una cuestión simplemente teórica, sino práctica. Y justamente porque la praxis en la que se unen ambos aspectos –cuando es auténtica es creadora, libre e innovadora, y no simple aplicación de un modelo preestablecido–, su destino es en gran parte incierto e imprevisible, y ningún conocimiento puede prever –y menos garantizar– su resultado final. Confundir aquí posibilidad y realidad significa ignorar la naturaleza misma de la historia humana, y, en definitiva, negar la praxis creadora que convierte lo posible en real (Sánchez Vázquez, 1980: 303-306). Pero, si el conocimiento no garantiza la transformación de lo real, esto no significa que, en el proceso práctico, podamos prescindir de él. Por el contrario, es indispensable justamente por la función práctica que cumple dentro de ese proceso que no es inevitable ni se halla predeterminado. Ciertamente, en la medida en que se conoce la realidad a transformar, las posibilidades de transformación inscritas en ella, así como el sujeto, los medios y las vías necesarios y adecuados para esa transformación; es decir, en la medida en que se introduce cierto grado de racionalidad en el proceso práctico, el sujeto de éste no actúa como un náufrago en un mar de incertidumbres, sino como el marino que, brújula en mano, pone proa en ese mar al puerto al que anhela llegar. Y si el conocimiento náutico no garantiza que su arribo a él sea inevitable, sí garantiza que, al trazar fundamentalmente la ruta a seguir, su acción no sea una simple aventura.

De manera análoga, aunque el conocimiento que brinda el marxismo no garantiza la realización de su proyecto de emancipación, sí permite descubrir su posibilidad y que la práctica necesaria para realizarlo, al servirse de dicho conocimiento, no se convierta en una empresa irracional, pura utopía o simple aventura.

4. El marxismo en su relación con la práctica

Los tres aspectos ya señalados del marxismo se articulan con su aspecto práctico. Su crítica de la realidad capitalista inspira su crítica en acto. Su proyecto tiene la vocación práctica de transformarse en realidad. El conocimiento de lo real, indispensable para esa transformación, sirve asimismo a ciertos fines o valores, sin que sacrifique a éstos su contenido de verdad. Así, pues, estos tres aspectos remiten necesariamente a la práctica, la cual a su vez sólo será la adecuada si se nutre de ellos. Lo que quiere decir también que no cualquier relación entre esos aspectos permite la práctica adecuada. Pueden recordarse, con este motivo, prácticas políticas que, en un sentido socialista, han resultado no sólo inadecuadas, sino inde-

seables por haber dejado en el camino a uno u otro de los aspectos mencionados. Tales han sido, por ejemplo: 1) la reformista de la socialdemocracia clásica (no nos referimos a la actual que, al integrarse como gestor suyo en el capitalismo, ha renunciado al objetivo socialista); 2) la “marxista leninista”, que en los países del Este europeo negó realmente ese objetivo, aunque se presentara como socialista y que, fuera de ellos, supeditó los fines verdaderamente emancipatorios a los del Partido y el Estado soviéticos; y 3) la lucha armada de los movimientos guerrilleros latinoamericanos de signo mesiánico o foquista, que en los años sesenta y setenta desplegaban el más extremo voluntarismo. En todos estos ejemplos históricos, la lectura que se hace de la realidad y de las posibilidades que encuentran en ella, no permite fundamentar racionalmente la práctica adecuada a la consecución del objetivo socialista que se proclama. Y el resultado del proceso práctico, en cada uno de los tres casos, ha sido, respectivamente: 1) apuntalar un capitalismo liberal, “más civilizado”, que tolera incluso el “Estado de bienestar” que hoy se desvanece ante la ofensiva neoliberal de desempleo creciente, precariedad del empleo y recorte a las prestaciones sociales; 2) construir una sociedad poscapitalista, no socialista, que por sus rasgos esenciales –propiedad estatal absoluta, Estado totalitario y Partido único– constituye un nuevo sistema de dominación y explotación; y 3) exterminar las guerrillas y, con la represión generalizada, cerrar las opciones de las fuerzas sociales más amplias interesadas en arrancar espacios democráticos al poder dictatorial o autoritario.

Ciertamente, hay que pensar el mundo para poder transformarlo. Pero, esto no significa en modo alguno que baste conocerlo para garantizar su transformación. Ésta no es una cuestión simplemente teórica, sino práctica

En ninguno de los ejemplos históricos mencionados, sus resultados han correspondido a los fines socialistas. Ciertamente, para alcanzarlos era indispensable –como hemos señalado– una interpretación racional de la realidad, que difícilmente podría encontrarse en los ejemplos anteriores. Y era necesario asimismo recurrir, con vista a los fines, a los medios adecuados. Fácilmente puede advertirse que los medios, en cada caso, resultaron ineficaces para la consecución de los fines que se buscaban. Pero no se trata sólo de la eficacia o ineficacia de los medios, sino también de su relación con los valores que vertebran el proyecto socialista.

Los medios eficaces o ineficaces en un sentido instrumental, pueden ser deseables o indeseables en un sentido valorativo (y ahora tenemos presente los valores del socialismo). Y, en verdad, las estrategias mencionadas resultaron no sólo ineficaces desde el punto de vista instrumental, sino indeseables por su alto costo humano, no sólo político, sino social y moral. Ciertamente fueron indeseables, y en consecuencia reprobables, en cada caso: 1) al contribuir a mantener la explotación del hombre por el hombre y la degradación de las relaciones humanas; 2) al apelar al terror masivo del que fueron víctimas millones de seres humanos

inocentes, incluidos los más fieles a la causa del socialismo; y 3) al recurrir a una violencia que, si bien se justifica política y moralmente contra el poder despótico o autoritario que cierra todo resquicio legal, pacífico, no se justifica cuando se trata de alcanzar una forma de relación (socialista) entre los hombres, que por su propia naturaleza democrática tiene que asentarse en el más amplio consenso social, y no en la coerción de una minoría armada. En todos estos casos, los medios a que se recurre entran en contradicción con los fines y valores socialistas que se proclaman.

Las distinciones anteriores –entre práctica adecuada e inadecuada y entre práctica deseable e indeseable– en el tránsito al (o realización del) socialismo, pasan por el tipo de relación que mantienen con la práctica política los aspectos antes señalados. Si se elimina o desnaturaliza cualquiera de ellos, la práctica perderá su carácter socialista. Así, por ejemplo, al excluir la crítica de lo existente, reducir el conocimiento a pura ideología o proclamar retóricamente los fines emancipatorios, el marxismo acrítico, ideologizado o retórico que así se comporta, sólo puede vincularse a una práctica política determinada: la que obstruye y finalmente cierra el camino –como lo cerró en los países del Este europeo– al verdadero socialismo.

En verdad, el “marxismo leninismo” no dejó de cumplir en esos países una función práctica: la de inspirar y justificar el “socialismo realmente existente”. Pero, por otro lado, si del marxismo se cortan sus nexos con la práctica, se le reduce a una teoría más, cualquiera que sea el valor de verdad que le reconozca la Academia, y no puede negarse que en los años sesenta ese reconocimiento era alto en los medios académicos de Europa y América Latina. Es lo que sucedió con los representantes de la Escuela de Fráncfort (Horkheimer, Adorno, aunque no tanto Marcuse y Löwenthal), que ante los fracasos de la práctica revolucionaria en Alemania renuncian a la práctica política real, y se refugian en la teoría. Y es lo que sucede asimismo con el marxismo anglosajón, que potencia el análisis crítico, o con la corriente althusseriana, que, al proclamar la autonomía y autosuficiencia de la práctica teórica reduce la práctica real a una aplicación de ella. En todos estos casos, se desvanece la verdadera función práctica del marxismo y, por tanto, el lugar que corresponde a la teoría como el aspecto subjetivo, consciente, de la praxis.

Ahora bien, para el marxismo como filosofía de la praxis, sus diferentes aspectos –como proyecto, crítica y conocimiento– sólo encuentran su razón de ser no sólo en su unidad, sino en su vinculación con la práctica.

IV. Las mediaciones de la praxis política

Si fijamos ahora la atención en la praxis política para ver cómo se vinculan en ella sus lados subjetivo y objetivo, consciente y real, veremos que se unen a través del puente que tiende, desde unas condiciones necesarias, una serie de mediaciones sin las cuales el proyecto socialista no podría realizarse. El modo de entender esas condiciones y mediaciones, así como su alcance y articulación, han dado lugar en el marxismo a esquemas diferentes, entre los cuales nos interesa destacar, para reexaminarlos, dos fundamentales: el clásico, de Marx y Engels, y el leninista, o estalinista después de la muerte de Lenin.

Veamos, primero, el esquema marxista clásico. En él encontramos diferentes niveles: 1) la realidad objetiva de una formación social –el capitalismo– en la que entran en contradicción el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que frenan ese desarrollo, contradicción que “abre una era de revolución social” (Marx, 1980); 2) la conciencia de ese conflicto básico y de la necesidad de cambio social que Marx identifica con la conciencia de clase del proletariado; 3) la organización política de esa clase a través de diferentes partidos obreros; y 4) la acción a que se ve impulsado irrevocablemente el proletariado, acción que puede discurrir por vías diferentes: la revolucionaria y violenta que Marx privilegia, y la gradual y pacífica por la que Engels se inclina en los últimos años de su vida. En este esquema destaca la confianza en que el proletariado, dada su posición objetiva en el sistema, pueda elevarse por sí mismo, en el curso de su propia praxis, a su conciencia de clase, y en que, al agudizarse las contradicciones básicas del capitalismo, se vea empujado a actuar revolucionariamente. Ahora bien, la historia real no ha confirmado esa doble confianza en la elevación del proletariado a su conciencia de clase y en su actuación revolucionaria conforme a ella.

Veamos ahora el esquema leninista. Lenin corrige a Marx al sostener que la clase obrera por sí misma –es decir, en el curso de su propia praxis– no puede elevarse al nivel de su conciencia de clase y actuar revolucionariamente. Necesita una instancia exterior a ella para poder rebasar los límites que la ideología burguesa impone a su conciencia y a su acción. Esa instancia es el Partido como destacamento de vanguardia que, por poseer el privilegio epistemológico de encarnar la verdad y conocer el sentido de la historia, introduce la conciencia socialista en la clase obrera, a la que organiza y dirige en sus luchas (Lenin, 1981).

El verdadero sujeto histórico no es, pues, la clase –como pensaba Marx– sino el Partido. Esta teoría leninista, de origen kautskyiano, criticada desde el primer momento por Plejánov, Trotsky y Rosa Luxemburgo, se convierte en la concepción del Partido de la III Internacional. Y, en su versión estalinista, el protagonismo del Partido pasa a su Comité Central y, finalmente, a un solo hombre, el Secretario General, cumpliéndose así un sombrío vaticinio del joven Trotsky.

Contrastando las concepciones marxiana y leninista de las mediaciones políticas con la rica y compleja experiencia histórica, y reexaminando una y otra con base en las lecciones de esta experiencia, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 1) las contradicciones sociales del sistema no se reducen a la que Marx consideraba fundamental, entre burguesía y proletariado industrial; 2) el arco de la explotación y dominación abarca no sólo la forma clasista que corresponde a la contradicción básica entre capital y trabajo (que hoy se extiende a todo el trabajo asalariado), sino también a las de carácter étnico, nacional, sexista, generacional, etc., así como a las que se dan entre las potencias hegemónicas del sistema capitalista mundial y los países explotados por ellas; 3) dada la pluralidad de clases y fuerzas sociales que sufren los males del sistema, el sujeto del proceso de emancipación no es único, central y exclusivo, sino plural; 4) la relación entre la posición objetiva de las diversas fuerzas y clases sociales que constituyen el sujeto potencial del cambio, y su nivel de conciencia, organización y acción con vistas a él, es contingente y no forzosa; y 5) aunque dado el potencial subversivo

que genera su situación objetiva, dichas fuerzas y clases pueden elevarse por sí mismas a cierto nivel de conciencia y acción, no puede descartarse la necesidad de la teoría y la organización políticas para que, en el proceso práctico, alcancen un nivel más alto su acción consciente.

Por lo que toca a la revisión leninista de la concepción marxiana, al sustituir el protagonismo histórico de la clase por el del Partido, su premisa hay que buscarla en la teoría de Lenin de la doble conciencia de la clase obrera: “tradeunionista” y “socialista”. Mientras la primera se da espontáneamente en la clase obrera, la segunda –conciencia del interés propio, fundamental, de clase– no pueden adquirirla los obreros por sí mismos. De ahí la necesidad del Partido que, desde fuera, la introduzca en la clase obrera (Lenin, 1981). La experiencia histórica desmiente esta separación tajante entre las “dos conciencias”, y demuestra asimismo que, al atribuirse el privilegio epistemológico de poseer la verdad, el Partido excluye la relación democrática con otras fuerzas políticas y con toda la sociedad, y acaba por excluirlas en su propio seno. Por otra parte, si el Partido no es un fin en sí, sino un medio o instrumento en la realización del proyecto socialista en condiciones históricas determinadas, no puede aceptarse –como no la aceptó Marx– la tesis de un modelo universal y único del Partido, y menos aún dentro del pluralismo político y social de una sociedad verdaderamente democrática (Sánchez Vázquez, 1980: 356-378).

En el esquema leninista, y sobre todo en la versión de él canonizada por Stalin, la democracia queda excluida: a) de la vía de acceso al poder, ya que se absolutiza la estrategia de la violencia; b) del sujeto del cambio revolucionario –el Partido–, tanto en sus relaciones con otras fuerzas políticas y organizaciones sociales, como en sus relaciones internas; c) del modelo de sociedad socialista, ya que en ella se imponen, de hecho y de derecho, el Estado omnipotente y el Partido único a la voluntad de sus miembros.

A partir de las aportaciones de Marx, pero más allá de él, así como de las –tardíamente conocidas– de Gramsci, y tomando en cuenta la experiencia histórica de las sociedades seudosocialistas de los países del Este europeo y del movimiento comunista fuera de ellos, el marxismo como filosofía de la praxis rescata la unidad de socialismo y democracia en los tres planos antes mencionados. Rescatarla significa admitir respectivamente: a) que no se trata de tomar el poder, sino de alcanzarlo como fruto de la hegemonía de las fuerzas políticas y sociales (o “bloque histórico”, según Gramsci) interesadas y comprometidas con el cambio; de la obtención del consenso social o, en términos gramscianos, de la lucha política y la “reforma intelectual y moral” que hay que librar ya antes de alcanzarlo (Gramsci, 1970); b) que el sujeto plural del cambio a una sociedad verdaderamente democrática como la socialista, sólo puede serlo si él mismo practica la democracia en sus relaciones externas e internas; y c) que el proyecto de sociedad socialista incluye necesariamente la democracia, pero una democracia que lejos de limitarse a su forma política, se extiende a todas las esferas de la vida social.

Finalmente, hay que insistir una vez más en que, aun dándose las condiciones y mediaciones necesarias para la realización del proyecto socialista, el socialismo no es inevitable, ya que su realidad no se halla garantizada por las leyes de la historia ni por la necesidad y posibilidad de que se alcance, ni tampoco por los

valores de justicia, igualdad y libertad que lo hacen deseable. Pero si esto es así, frente al error, la incertidumbre o el fracaso posibles, hay que introducir la mayor racionalidad en la práctica, sometiendo para ello los resultados obtenidos a un examen y a una crítica constantes, sin que este examen y esta crítica sean privilegio de un individuo, un partido o una clase social.

V. Marxismo y praxis

¿Cuál es la situación del marxismo, o de los marxismos, hoy? ¿Qué validez y vigencia se le puede reconocer? He ahí dos cuestiones que no pueden ser superadas, pero tampoco confundidas. Ciertamente, no son nuevas, pero en nuestros días cobran un nuevo sesgo, inquietante para unos y definitivo para otros, que sentencian que su lugar está –de acuerdo con su mayor o menor indulgencia– en el arcón o en el basurero de la historia.

Pero cualquiera que sea la respuesta que se dé a estas cuestiones, los marxistas no pueden ni deben eludir el criterio de verdad que Marx elevó al primer plano: el de la práctica. Pues bien, recurramos a él para determinar qué es lo que prueba la práctica histórica que invocan los que decretan la muerte –“ahora sí”– del marxismo. Se trata del “socialismo real” que se ha derrumbado en los países del Este europeo, y que un buen número de marxistas críticos –y algunos, como Rosa Luxemburgo, casi desde sus comienzos (1918)– rechazaron sin necesidad de esperar a su derrumbe. Aunque nuestras apreciaciones críticas sobre el proyecto, sus resultados y el marxismo que los inspiró y justificó no son nuevas (Sánchez Vázquez, 1971; 1981; 1985; 1990; 1992), vale la pena resumirlas y reafirmarlas, aunque sea esquemáticamente. Ellas son: 1) la práctica política que sigue a la toma del poder en noviembre de 1917, estaba impulsada por un proyecto de emancipación social que se remitía a Marx y Engels y que los dirigentes bolcheviques aspiraban a realizar, desde el poder conquistado, no obstante las condiciones históricas y sociales adversas para ello. 2) El resultado de ese proceso práctico histórico –la sociedad que se construyó–, medido con el parámetro marxiano que se invocaba, fue un sistema peculiar, ni capitalista ni socialista, de economía totalmente centralizada, Estado omnipotente y Partido único, que excluía toda libertad y democracia. En suma: un nuevo sistema de dominación y explotación, aunque durante cierto tiempo permitió modernizar industrialmente el país y alcanzar logros sociales importantes. 3) El proyecto marxista clásico que originariamente se invocaba, acabó por perder, en la práctica, todo contenido emancipatorio. 4) Para justificar el sistema que era la negación misma del socialismo, surgió la necesidad de otro “marxismo”: el marxismo ideologizado –convertido en doctrina oficial del Partido y del Estado– es el que se autodenominaba “marxismo leninismo”. Y 5) este “marxismo”, como parte indisoluble del sistema conocido como “socialismo real”, no podía dejar de compartir el destino final –el derrumbe– de dicho sistema. Ha muerto con él, y como él, bien muerto está.

Ahora bien, si el proyecto socialista no se ha realizado aún en ninguna parte del mundo, y si la “ideología marxista leninista” contribuyó a bloquear su realización, el marxismo que se orienta hacia este objetivo no tiene por qué compartir el destino del que, con el “socialismo real”, ha llegado a su fin. Ciertamente, sólo

podría compartir ese destino si se pudiera: 1) negar su aspecto emancipatorio; o 2) demostrar que lo sucedido realmente ya estaba idealmente en el marxismo originario que retóricamente se invoca. Pero, como ya hemos señalado, 1) no se puede negar el contenido emancipatorio del proyecto marxiano, cualesquiera que sean sus limitaciones o carencias; y 2) de la idea y proyecto que Marx aspiraba a realizar, no cabe deducir lógicamente, necesariamente, el “socialismo real”. Ello significaría derivar muy hegelianamente lo real de lo ideal, pasando por alto las condiciones y mediaciones necesarias. Con lo anterior, no se trata de salvar al marxismo ignorando que algo tiene que ver Marx con la práctica histórica que se despliega en su nombre. Pero tampoco puede ignorarse que, en ella, no se daban las condiciones históricas y sociales que él consideraba necesarias para el socialismo, y cuya ausencia los bolcheviques trataron de suplir con la estatalización integral de la sociedad y con la “dictadura del proletariado”, no en el sentido marxiano, sino en el de dictadura, en sentido habitual, del Partido único.

¿Cómo se podría negar que la realidad presente, en su cortejo de violencia, desigualdades, paro masivo, destrucción de la naturaleza, marginación de grupos sociales y pueblos enteros, cosificación de la existencia, etc., exige una severa crítica?

Estos métodos de construcción del socialismo no podían estar en Marx, como tampoco lo más opuesto a su proyecto de emancipación: el terror masivo, o sea, el Gulag. Lo que prueba prácticamente el seudosocialismo que se ha derrumbado es, junto a la negación del contenido emancipatorio del proyecto socialista, la necesidad de tener presente, en su realización, ciertas tesis fundamentales: 1) que –como dijo Marx– “los hombres hacen la historia en condiciones dadas”. Y que, por lo tanto, el voluntarismo extremo no puede hacerla sin ellas, es decir, no puede forzar la mano de la historia. Y 2) que siendo el socialismo una alternativa social necesaria, deseable y posible, y aun dándose las condiciones necesarias, no siempre es viable y, mucho menos, inevitable.

Por todo lo anterior puede comprenderse por qué el intento fracasado de construir el socialismo, cuando no se daban las condiciones necesarias, sólo podría producir el engendro histórico que Kautsky agudamente advirtió, y que el marxismo que lo justificaba sólo podía hacerlo negándose a sí mismo como crítica, conocimiento y proyecto de emancipación; es decir, afirmándose como pura ideología de la burocracia del Estado y del Partido. Pero esto no prueba la imposibilidad del socialismo ni quebranta la necesidad de una teoría como la marxista, cuando hoy –como en tiempos de Marx– “de lo que se trata es de transformar el mundo”. Ciertamente, no cualquier marxismo sirve a esa transformación, sino aquel que contiene en su unidad los aspectos fundamentales ya señalados.

No sirven por ello el marxismo ideologizado, soviético, ni el humanismo abstracto, antropológico o existencial que se mece en el limbo de la utopía. Ni tampoco el teorista de corte althusseriano o analítico. En cada uno de ellos se sacrifica alguno de sus aspectos –como crítica, proyecto o conocimiento– y en

todos se pierde de vista la práctica política adecuada para alcanzar el objetivo socialista. En consecuencia, la validez del marxismo no puede desvincularse de la validez de esos aspectos, considerados en su unidad. Veamos, pues, en qué consiste su validez actual después de tomar el pulso a cada aspecto por separado.

1. El marxismo como crítica

¿Cómo se podría negar que la realidad presente, en su cortejo de violencia, desigualdades, paro masivo, destrucción de la naturaleza, marginación de grupos sociales y pueblos enteros, cosificación de la existencia etc., exige una severa crítica? Y ¿cómo podría ignorarse que su flecha ha de apuntar al corazón del sistema en el que esos males sociales se incuban y florecen necesariamente?

La crítica de Marx al capitalismo, no obstante los cambios operados en él, sigue siendo válida, ya que sus tendencias básicas a la expansión ilimitada de la producción, así como la mercantilización generalizada para asegurar la acumulación creciente de beneficios no ha hecho más que reproducirse y extenderse a escala mundial. Ciertamente es también que la crítica marxista debe apuntar, asimismo, como apunta la de Sweezy, Baran, Mandel y otros, a aspectos del capitalismo que no se daban en tiempos de Marx, o que él apenas atisbaba. Pero todo esto, lejos de debilitar o refutar la necesidad de la crítica de lo existente, exige profundizarla y extenderla. Y de lo existente forma parte igualmente todo lo que se ha hecho invocando infundadamente el nombre del socialismo y del marxismo, razón por la cual debe ser objeto también de una crítica que los marxistas no siempre hemos practicado.

2. El marxismo como proyecto de emancipación

Se trata de un proyecto que, por sus valores, se contrapone al sistema capitalista que, por su propia estructura, los desconoce, limita o degrada.

Este proyecto, que no se reduce a su anticapitalismo, sigue siendo válido, pero a condición de que sea redefinido para ponerlo a la altura de nuestro tiempo. Y su redefinición exige abandonar o enriquecer algunos de sus elementos. Así, por ejemplo, se ha de enriquecer su contenido democrático –muchas veces olvidado o desvirtuado–, acentuando la necesidad de la participación consciente de la mayoría de la sociedad, tanto en la praxis política que ha de conducir a un nuevo sistema social, como –ya en él– en la toma y el control de las decisiones en todas las esferas de la vida social. Esta democracia radical –indisociable del socialismo–, permitirá disolver los viejos dilemas de Estado o sociedad civil, planificación o mercado, individuo o comunidad. Y entre los elementos nuevos que hay que introducir en el proyecto socialista, está una nueva visión de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, en la que ésta deje de ser lo que ha sido desde la modernidad: objeto de dominio del hombre como “amo y señor” de sus materiales y reservas de energía. Todo esto obliga a revisar la tesis marxista clásica de la contradicción capitalista entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ciertamente, el capitalismo ha demostrado –frente a esa tesis– su capacidad para desarrollar incesantemente la producción, pero no se trata sólo de esto. Se trata de que el desarrollo incesante de las fuerzas productivas en nuestra época, cualquiera que sea su signo –capitalista o socialista–, entra en

contradicción con los imperativos ecológicos. Por lo cual, unas nuevas relaciones (socialistas) de producción se hacen necesarias, no ya para incrementar ese desarrollo, sino justamente para ponerle los límites que la economía del lucro y del mercado generalizado no le puede poner. Finalmente, el proyecto socialista clásico tiene que ser reconsiderado también extendiendo su contenido emancipatorio, ya que éste ha de tener no sólo el carácter particular que corresponde a la explotación clasista de los trabajadores, sino también el correspondiente a las formas de dominación que sufren otros sectores sociales, e incluso el universal humano que le impone la necesidad de hacer frente a la amenaza que cierto uso de la ciencia, la técnica y la producción –en perverso maridaje– ciernen sobre la supervivencia misma de la humanidad.

3. El marxismo como conocimiento

No basta que el proyecto socialista sea necesario y deseable, sino que ha de ser también viable. De ahí –como hemos subrayado– la exigencia de fundamentar racionalmente que el socialismo, posible en determinadas condiciones y con las mediaciones necesarias, sea realizable. Ahora bien, en este terreno, el marxismo, como todo conocimiento, ha de ser contrastado con la realidad, y admitir que algunas tesis o predicciones de Marx no han resistido con el tiempo la prueba de la práctica, su contraste con lo real. Y entre esas tesis y predicciones estarían las siguientes: 1) La Ley universal del desarrollo incesante de las fuerzas productivas, ya que si bien rige cabalmente en el capitalismo, no es aplicable a otras sociedades en las que no imperaba el principio de la acumulación creciente e ilimitada de los beneficios; y ello sin contar con que el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas en nuestro tiempo entra en contradicción –como ya hemos señalado– con imperativos ecológicos. 2) La concepción lineal y ascensional de la historia, impregnada de eurocentrismo, aunque el propio Marx la rectificó, al final de su vida, en su correspondencia con los populistas rusos, al rechazar “toda filosofía universal y transhistórica de la historia”. 3) La idea –ya mencionada– del proletariado como sujeto central y exclusivo del cambio social. 4) El reduccionismo de clase que estrecha el campo de las relaciones de explotación y dominación. 5) La subestimación de la capacidad del capitalismo para sobrevivir a sus propias crisis. 6) La predicción de la desaparición de las clases medias ante el antagonismo fundamental de la burguesía y el proletariado. 7) El olvido de las previsiones del joven Marx (en los *Manuscritos...* de 1844) sobre la posibilidad de un “comunismo despótico” como el que se dio efectivamente con el “socialismo real”, y, por último, y en relación con lo anterior: 8) La imprevisión de Marx de que su propio pensamiento fuera ideologizado, aunque quizás algo atisbó al declarar irónicamente que él no era “marxista”.

Con respecto a su vocación científica, el marxismo está obligado, como todo conocimiento, a abandonar las tesis que han caducado o que no han podido ser confirmadas. Está obligado igualmente a reconocer sus limitaciones y carencias; por ejemplo, las que han sido señaladas en su teoría política con respecto al poder burgués o a un Estado socialista. Y ha de asumir asimismo la obligación de mantener, introduciendo las modificaciones necesarias, las tesis que han sido verificadas satisfactoriamente.

Y todo ello, no simplemente por exigencias teóricas, sino porque sólo así, ajustándose al movimiento de lo real, el marxismo podrá cumplir –como conocimiento– la función práctica de contribuir a lo que para él es prioritario: transformar el mundo.

4. El lado práctico del marxismo, hoy

La vigencia del marxismo no puede considerarse sólo en relación con los aspectos mencionados, ya que –como hemos venido insistiendo– se justifica sobre todo por la actividad práctica transformadora, o praxis, del mundo existente en dirección a ese mundo inexistente aún, que llamamos socialismo. No puede negarse, en verdad, la influencia real que, históricamente, ha ejercido el marxismo al elevar la conciencia de las clases trabajadoras, así como al organizar y dirigir sus luchas para alcanzar, aun dentro del capitalismo, mejores condiciones de vida. Tampoco podría negarse que –como hemos visto– cierto uso del marxismo ha tenido consecuencias desastrosas para la realización del proyecto socialista.

Pero, cualquiera que sea el alcance que se reconozca a sus relaciones entre teoría y práctica, es indudable que el marxismo –como pretendía Marx– no sólo ha sido interpretación del mundo, y que la historia real como proceso de su transformación, desde hace 150 años, no habría sido la misma sin él.

No puede ignorarse, ciertamente, que una parte importante de ella la han hecho millones de hombres y mujeres, poniendo en el tablero su libertad o su vida, inspirados por el marxismo. Pues bien ¿cuál es hoy su situación al doblar el cabo de ese siglo y medio de experiencia histórica, atendiendo a ese aspecto esencial suyo que es la relación con la práctica?

Aunque anteriormente hemos señalado la validez –con todas las rectificaciones necesarias– del marxismo como crítica, proyecto de emancipación y conocimiento, no podemos dejar de reconocer que, en la actualidad, justamente por el adelgazamiento –casi mortal– de sus vínculos con la práctica, su vigencia se encuentra en una grave crisis. El derrumbe del “socialismo real” ha afectado profundamente su credibilidad en un punto vital: su potencial práctico emancipatorio.

Aunque su proyecto sigue siendo válido, pues hoy es más necesario que nunca, no se puede dejar de reconocer que palidece su vigencia.

Ciertamente, al quedarse en el aire, como idea que no encuentra las condiciones y mediaciones necesarias para tomar tierra, el proyecto se ha vuelto intempestivo y mortecino en un mar de sinceros desencantos y turbias abjuraciones y mistificaciones. Unas veces se condena el proyecto mismo, al identificar el socialismo con el “socialismo real”, al hacerle cargar necesariamente con los males de éste; otras veces –al parecer con más indulgencia para no perder la condición “socialista”– se admite la bondad del socialismo como proyecto o idea, pero no en la práctica.

Ahora bien, si el socialismo es forzosamente perverso –en idea o en su realización– no queda otra alternativa social que la del capitalismo realmente existente. Pues bien, por injusta, falsa o infundada que nos parezca esta conclusión, es la que hoy martillea, con efectos impresionantes, los poderosos medios de comunicación, y no sólo ellos, sino una parte de la izquierda, especialmente la hasta hace poco más dogmática y autoritaria.

Ciertamente, la estrella polar –incluso para la vieja y nueva izquierda– no es hoy el socialismo, sino la democracia, tardíamente reivindicada por ella. Pero, al reivindicarla, sacrifica en su altar el socialismo. Olvida así que sólo el socialismo, si es consecuentemente democrático, puede superar los límites que la desigualdad económica y social impone tanto a las reglas universales de la democracia como a su extensión a todas las esferas de la vida social. En este sentido, si bien es cierto que no hay socialismo sin democracia, también lo es que no hay democracia consecuente sin socialismo.

Ahora bien, este socialismo hoy por hoy no es factible. Aunque existe el sujeto plural, explotado u oprimido, que debe asumirlo, falta que lo asuma efectivamente como proyecto irrenunciable de emancipación y faltan las condiciones y mediaciones indispensables para su realización. No puede aceptarse, sin embargo, que esta postración temporal del cumplimiento de viejas esperanzas sea insuperable. O, dicho en otros términos: que haya que conciliarse con un capitalismo que pondría “fin” a la historia (Fukuyama, 1992) y admitir, por tanto, que el socialismo es inviable.

Si se llegara a esta conclusión y, por ende, a la renuncia a realizar su proyecto de emancipación, ¿qué quedaría del marxismo? o ¿qué marxismo sobreviviría? Tal vez el que interesa a la Academia por su valor teórico, o el que retiene la “bondad” de su proyecto, pero sin caer en la tentación de pretender realizarlo; o quizás subsistiría el que se complace en la crítica del capitalismo, siempre que no lime sus aristas más ásperas.

En todos estos casos, el marxismo –cierto marxismo– se salvaría del naufragio al que lo ha arrojado la práctica, justamente porque la práctica se ha vuelto para él innecesaria o inviable. Es decir: se salvaría el marxismo como interpretación para perderse a sí mismo en la transformación del mundo. Pero si la historia no tiene fin y el capitalismo es, en definitiva, un capítulo de ella, y si, por otro lado, el socialismo, aunque no esté a la vista, sigue siendo necesario, también lo es cierto marxismo para que esa alternativa social, deseable y posible –aunque no inevitable– pueda darse realmente. Y ese marxismo, de resistencia en tiempos sombríos, será el que mantenga la unidad de sus aspectos crítico, emancipatorio y cognoscitivo, sin desdibujar, en la espesa niebla de nuestros días, su vinculación con la práctica.

Bibliografía

- Althusser, Louis 1967 *La revolución teórica de Marx* (Madrid: Siglo XXI).
- Bernstein, Richard 1979 *Praxis y acción* (Madrid: Alianza).
- Bujarin, Nicolai 1974 (1921) *Teoría del materialismo histórico* (Madrid: Siglo XXI).
- Cassano, Franco 1973 *Marxismo e filosofía in Italia (1958-1971)* (Bari: De Donato).
- Fernández Buey, Francisco 1993 *Discursos para insumisos discretos* (Madrid: Libertarias).
- Fukuyama, Francis 1992 *El fin de la historia y el último hombre* (Barcelona: Planeta).

- Gandler, Stefan 1991 "Praxis und Erkenntnis im Werk Adolfo Sánchez Vázquez". Tesis doctoral, Goethe-Universität, Berlín.
- Gramsci, Antonio 1970 *Antología* (Madrid: Siglo XXI) Selección, traducción y notas de M. Sacristán.
- Habermas, Jürgen 1963 *Theorie und Praxis* (Berlín: Luchterhand) [1987 *Teoría y Praxis* (Madrid: Tecnos)].
- Korsch, Karl 1971 *Marxismo y filosofía* (México: Era).
- Kosík, Karel 1967 *Dialéctica de lo concreto* (México: Grijalbo).
- Lenin, Vladimir 1981 (1902) "¿Qué hacer?" en *Obras escogidas I* (Moscú: Progreso).
- Lukács, Georg 1969 *Historia y conciencia de clase* (México: Grijalbo).
- Mariátegui, José Carlos 1982 "Defensa del marxismo" en *Obras I* (La Habana: Casa de las Américas).
- Marx, Karl 1959 "Tesis sobre Feuerbach" en Marx, K. y Engels, F. *La ideología alemana* (Montevideo: Pueblos Unidos).
- Marx, Karl 1962 "Manuscritos económico-filosóficos de 1844" en Marx, K. y Engels, F. *Escritos económicos varios* (México: Grijalbo).
- Marx, Karl 1964 *El Capital* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Marx, Karl 1974 "Crítica del Programa de Gotha" en Marx, K. y Engels, F. *Obras escogidas I* (Moscú: Progreso).
- Marx, Karl 1980 *Contribución a la crítica de la Economía Política* (México: Siglo XXI).
- Muguerza, Javier 1990 *Desde la perplejidad* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Muñoz, Jacobo 1978 *Lecturas de filosofía contemporánea* (Barcelona: Materiales).
- Paramio, Ludolfo 1989 *Tras el diluvio* (Madrid: Siglo XXI).
- Petrovic, Gajo 1967 *Marx in the mid-Twentieth Century* (Nueva York: Anchor).
- Roemer, John 1989 *El marxismo: una perspectiva analítica* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Sacristán, Manuel 1983 *Sobre Marx y marxismo. Panfletos y materiales I* (Barcelona: Icaria).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1971 "Del socialismo científico al socialismo utópico" en Kolakowski, Leszek et al. *Crítica de la utopía* (México: FCPS-UNAM).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1975 *Del socialismo científico al socialismo utópico* (México: Era).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1978a *Filosofía y economía en el joven Marx (Los Manuscritos de 1844)* (México: Grijalbo).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1978b *Ciencia y revolución. El marxismo de Althusser* (Madrid: Alianza).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1980 (1967) *Filosofía de la praxis* (Barcelona: Crítica).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1981 "Democracia socialista y socialismo real" en *El Machete* (México) N° 11.
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1985 *Ensayos marxistas sobre historia y política* (México: Océano).
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1987 *Escritos de política y filosofía* (Madrid: Ayuso/HM).

- Sánchez Vázquez, Adolfo 1990 "Fin del socialismo real. El marxismo vive". Publicado en tres partes en *La Jornada* (México) 3, 4 y 6 de septiembre.
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1991 "¿De qué socialismo hablamos" en *Sistema* (Madrid) N° 101.
- Sánchez Vázquez, Adolfo 1992 "Después del derrumbe: estar o no a la izquierda" en *Sistema* (Madrid) N° 108.
- Sartre, Jean-Paul 1960 *Critique de la raison dialectique* (Paris: Gallimard).
- Schaff, Adam 1991 "¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo?" en *El socialismo del futuro* (Madrid), N° 4.
- Sher, G. S. (ed.) 1978 *Marxist Humanism and Praxis* (Nueva York: Prometheus).
- Tucker, Robert 1972 *Philosophy and Myth in Karl Marx* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Vargas Lozano, Gabriel 1984 *Marx y su crítica de la filosofía* (México: UAM-Iztapalapa).
- Vargas Machuca, Ramón 1992 "Ética y marxismo" en Camps, Guariglia y Salmerón (eds.) *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía 2* (Madrid: Trotta/CSIC).
- Vilar, Gerard 1979 *Raó i marxisme* (Barcelona: Ediciones 62).
- VV. AA. 1982 *Storia del marxismo IV: Il marxismo oggi* (Torino: Einaudi).
- VV. AA. 1992 "El marxismo contemporáneo" en *Iztapalapa* (México) N° 28.

Notas

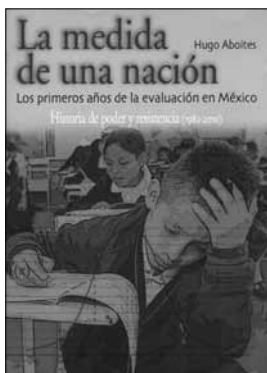
1 El texto procede de *Filosofía Política I. Ideas Políticas y movimientos sociales*, editado por Fernando Quesada en 1997 por cuenta de Trotta y CSIC.

2 Agradezco a mis colegas y amigos Samuel Arriarán, Bolívar Echeverría, Stefan Gandler, Ana María Rivadeo y Gabriel Vargas Lozano sus sugerencias y observaciones críticas.

Reseña bibliográfica

La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982 – 2010)

Tatiana Coll Lebedeff



La medida de una nación

Los primeros años de la evaluación en México.
Historia de poder y resistencia (1982-2010)

HUGO ABOITES
México, CLACSO/
UAM/Ítaca, 2012

TATIANA COLL LEBEDEF

Socióloga por la Universidad de La Habana, Cuba. Candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, campus Ajusco.

La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México, cuyo autor es el conocido y significativo profesor e investigador Hugo Aboites, es efectivamente una gran historia de poder y resistencia, protagonizada por sujetos que habitan, implementan, rechazan y transforman las políticas educativas. Este enfoque, aunque a primera vista parece evidente, en realidad no lo es. La mayoría de los investigadores que analizan las políticas públicas en general, y en particular las políticas educativas, construyen sus planteamientos a partir de una lógica unidimensional que va del Estado constructor y planificador, al implementador y ejecutor. Así, los “espacios de recepción y realización” de las políticas, es decir los maestros y estudiantes, son perfilados muchas veces como meros reproductores pasivos listos para capacitarse técnicamente; y los “expertos asesores” que las cocinaron se ocultan bajo el anonimato necesario y cómodo. Esta lógica imperante, la de un Estado siempre con mayúscula, considera a las políticas como el verdadero sujeto de la acción educativa, en este caso, cuando en realidad no lo es. Ante ello, el libro de Aboites está dedicado precisamente a los estudiantes en resistencia, verdaderos sujetos y actores de los procesos educativos, junto con los maestros y las comunidades.

Las políticas educativas son, eso sí, un instrumento de intervención del Estado; o a veces del gobierno en turno, en diferentes niveles y procesos del complejo sistema educativo nacional (SEN). Representan claramente la intención, visión y determinación del Estado en esta intervención que produce. Este es uno de los hilos conductores que sigue Hugo Aboites en el libro: quién, cómo, por qué y para qué se fraguó dicha percepción y propuesta sobre el funcionamiento del SEN. La apreciación que se tiene desde el poder acerca del papel de la educación pública, sus requerimientos, resultados e impactos sociales, marca de forma indeleble el modelo que se decide implementar a través de políticas que dependen estratégicamente de ciertas afiliaciones políticas, económicas y sociales. Esto significa que el autor asumió el reto de responder claramente a la compleja cuestión de cómo y para qué domina cierta clase mediante el control de la educación.

Por otro lado, el hecho de conocer quién, por qué, para qué y cómo resisten los sujetos en contra del poder, también nos habla de una comprensión diametralmente opuesta sobre las funciones sociales de lo educativo y sobre el proyecto de nación que está en juego. Desde esta perspectiva, claramente podemos entender el motivo por el cual el autor escogió el título de su riguroso trabajo, y porqué en el subtítulo asignó a la evaluación dicho atributo de medición y control.

En México, en estos últimos tiempos, se ha desarrollado un debate, muchas veces subliminal, en torno a si el conjunto de las políticas expresadas como “acuerdos” o “pactos”, como el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa (ANMEB) y la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), signados por presidentes como Salinas de Gortari o Felipe Calderón, representan en realidad una política de Estado o son un arbitrario conjunto de medidas deplorables que se han ido acumulando por 25 años. La percepción de sentido común generalmente expresa que se han dado “muy malas políticas que desconocen el sentido y necesidades reales de la educación”, o bien “políticas deficientes, muy mal planteadas, que no resuelven los problemas debido a la ineptitud del gobierno”. Los términos académicos, siempre más elaborados y complejos, muchas veces son críticos, pero no asumen el riesgo de definir claramente qué es lo que implica esta política de Estado en relación a la educación. Ante esto, *La medida de una nación...* es un libro que nos aporta de manera sumamente detallada y precisa todos los elementos para entender, claramente, que se trata de una política de Estado perfectamente delineada, diseñada de manera coherente, con plena conciencia de sus implicaciones y acorde a la visión neoliberal predominante.

Podemos apuntar que estos procesos constituyen una verdadera política de Estado porque queda claro que, en primer lugar, son políticas que se han instrumentado con una continuidad pasmosa por muy diferentes gobiernos, e impulsadas por partidos anteriormente opositores, desde hace ya casi treinta años. Estos gobiernos han sido secundados y acompañados activamente por un conjunto de organizaciones empresariales que sostienen membretes de diverso tipo; sin contar los compromisos transexenales asumidos desde la crisis de los años ochenta con una serie de organismos internacionales (BM, OCDE, entre otros); y reforzados con la firma del Tratado de Libre Comercio, muy bien acoplados al papel maquilador que nos destina. Todo esto conduce a Aboites a la conclusión de que la matriz nodal de la nueva forma de “evaluar” son los organismos inter-

nacionales y los empresarios. En segundo lugar, en el libro quedan claramente asentados el conjunto de mecanismos, directrices y regulaciones que repercuten directamente en los procesos de regulación financiera, como la constante reducción y control del gasto público en el rubro de educación; la contención de los salarios de millones de profesores y fragmentación de sus ingresos; y la canalización de presupuesto hacia las actividades de investigación y docencia determinada desde centros empresariales, fundaciones privadas o secretarías de Estado. Estas son políticas que han permitido, incluso, vulnerar el carácter público de la educación al introducir las cuotas y pagos en las escuelas de educación básica, librando al Estado de su responsabilidad en el mantenimiento de las mismas. Son también políticas que han logrado menguar sustancialmente la autonomía real de las universidades públicas, mediante el control de una parte sustancial del financiamiento a las principales actividades académicas. Finalmente, entendemos que es una política de Estado gracias a que el texto nos permite vislumbrar que la creación de un gran número de instituciones, donde se concentra la mayoría de los “expertos y especialistas”, dotadas de muy significativos recursos y además con poder de medición e intervención en la definición de planes y programas curriculares de todos los niveles (investigaciones, proyectos, procesos sustantivos de maestros y estudiantes), son acciones que refieren a una función estructural inherente e imprescindible del sistema educativo nacional. Esto último es particularmente importante porque cualquier proyecto de cambio sustantivo no debe considerar cómo remendar las estructuras institucionales existentes y el tipo de evaluación que sostienen, sino su remoción: no se puede arreglar el actual sistema de evaluación y certificación, hay que sustituirlo por uno diferente.

En este sentido, la lectura del texto de Aboites nos permite comprender que las resistencias y las revueltas de los actores educativos involucrados, que por cierto son relatadas por el autor espléndidamente al ser parte de ellos y no como mero espectador, adquieren una dimensión compleja y muy difícil. Esto porque se enfrentan directamente a una visión y proyecto de nación que emana del poder, y que recurre a toda la batería de mecanismos desplegados por el Estado (desde la corrupción, el desprestigio, la división, hasta la criminalización y desmantelamiento de los movimientos a través de la represión), como en el significativo caso de la huelga de la UNAM en 1999, o el de las Normales Rurales. Los diferentes gobiernos han contado con el apoyo de poderosos grupos empresariales que, autoerigidos como “fiscales de la educación”, han armado a lo largo de estos años una especie de “santa cruzada” contra la educación pública, desplegada a través de una radical e incisiva campaña mediática sin precedentes. Desde la educación básica hasta la superior, el autor documenta exhaustivamente el micro relato de las resistencias, ante las cuales el Estado interviene siempre de forma contundente. El detalle con que Aboites desmenuza dichos procesos podría parecer excesivo, o provocar la pérdida del hilo interpretativo. Sin embargo, frente a los empeños por invisibilizarlos, y ante el constante embate al que son sometidos estos movimientos de resistencia, tal vez esto sea necesario.

Una interesante novedad es el descubrimiento, en este gran entramado, de la meticulosidad y rigor con que el autor persigue la historia de cómo se fue desplegando en el mundo académico la noción de medición, o quizá deberíamos decir

“la arqueología del *test*”. Dicha noción fue horneada en los sótanos académicos de la psicología conductista norteamericana de principios del siglo XX (aquella que fue partidaria de calibrar la “inteligencia innata”, o su contraparte, a los “débiles mentales”, así como de las lobotomías y las esterilizaciones), hasta llegar a la convicción de haber logrado establecer una medición científica universal, que podría ser implementada como política no sólo en el marco de algunas fronteras nacionales, sino en los espacios institucionales internacionales y globales. Esto nos permite entender claramente cómo se realizó la conversión de la evaluación en medición, para ser utilizada como el elemento clave y hegemónico que permite instrumentar una batería de pruebas o exámenes (mal llamadas evaluaciones) que logre clasificar, estandarizar, cuantificar, *rankear*, certificar, controlar, individualizar y mercantilizar todo lo educativo. Así, el trabajo de Aboites nos permite concluir, sin lugar a dudas, que la visión y el carácter instrumental y reduccionista son los que prevalecen entre los elaboradores e interventores de estas políticas.

Es precisamente por lo anterior que Roberto Lerner, coordinador del grupo de trabajo “Universidad y Sociedad” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, plantea en el prólogo del libro que “la obra tiene una importancia singular en el pensamiento crítico latinoamericano porque ofrece elementos teóricos que permiten deconstruir los fundamentos de la herramienta principal de que se valen los grupos dominantes para reconfigurar el conjunto de la educación latinoamericana: la evaluación”. Efectivamente, uno de los terrenos donde se despliega la batalla por una educación diferente a la impuesta por los neoliberales es, sin duda, el simbólico; es decir, el campo del conocimiento y del lenguaje mediante el cual se expresa. Y es que, probablemente, uno de los daños más difíciles de erradicar del mundo académico sea el nuevo lenguaje que campa a sus anchas por todo el espectro educativo. En el ámbito académico todos los rincones han sido invadidos, consciente o inconscientemente, por decisión o por mero hábito, por esta ola de términos instrumentalizadores, plagados de anglicismos, que se pegan como chicles a base de una constante reiteración y que marcan la pauta de la nueva articulación del pensamiento y prácticas en el mundo educativo. La apropiación de este lenguaje tecnocrático pone en evidencia la creación de una nueva cultura: la cultura de la evaluación, de la certificación. Una cultura pragmática, utilitarista, que abre paso a la competencia individualizada, al eficientismo mercantil, que pretende eliminar la diversidad, la controversia, la riqueza multicultural y la diferencia social, en pos de homogeneizar bajo la pedestre visión empresarial. Esto es perseguir el falso manto de una “cultura de la calidad”, una calidad educativa definida sencillamente bajo los parámetros clientelares, como una mercancía cuyo valor se tasa utilitariamente en el mercado de la mano de obra. Con la cultura de la evaluación, nos dice el autor, “se trataba de introducir en la educación un conjunto de valores y actitudes y una visión del mundo cuyos elementos fundamentales eran la competencia, productividad, exigencia, excelencia, selectividad e individualismo”. Valores y actitudes que también aseguran la imposición de una visión meritocrática de la educación, como escalera de ascenso social.

El autor recoge sistemáticamente información generada en torno a las miles de pruebas que se han aplicado en el sistema educativo mexicano, millones en realidad, a estudiantes de todos los niveles educativos. Las primeras que se aplicaron

son el resultado de la acuciante necesidad del Estado de controlar el creciente flujo de estudiantes que demandan su ingreso a la educación, en los niveles medio superior y superior, pues había que cerrar las compuertas para lograr reducir los gastos; había que acabar de una vez por todas con esa vieja política populista que tan altos costos tenía; había que llegar a realizar una selección eficiente y clara que evitara sospechas y escondiera, además, la mano del Estado. Se logró establecer de esta manera un organismo rector, el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), cuya validez se sustentó supuestamente en su total independencia (a pesar de que su primer responsable fue un conocido y eterno funcionario de la Secretaría de Educación Pública) como garantía de neutralidad de quien decide finalmente quién entra, a qué opción educativa, y quién sencillamente se queda fuera. En el texto queda claro que estos procedimientos, a pesar de sus cuantiosas deficiencias, que responden a una imperiosa necesidad del Estado, sirven para justificar y “diagnosticar” que existe un número importante de estudiantes que no deben ni pueden entrar al sistema de educación media y superior por las enormes deficiencias que acarrear en su formación. Se logra, de esta manera, con el falso argumento de la calidad y la excelencia, excluir a grandes contingentes de jóvenes que se quedan sin futuro. Así, el fenómeno de la exclusión de millones de jóvenes es uno de los resultados más graves y denigrantes de esta nueva política evaluadora.

Por supuesto que esta función de exclusión sistemática de los jóvenes es la que provocó, desde 1996, diferentes oleadas de movimientos estudiantiles, de padres de familia y de profesores que chocaron reiteradamente contra la intransigencia gubernamental y se enfrentaron de muy diversas maneras a este enorme problema que había contribuido a acrecentar la vocación evaluadora del Estado. El relato pormenorizado de estas acciones y de las respuestas oficiales constituye un elemento clave para entender y desmitificar el falso cientificismo y validez de los procedimientos de selección establecidos, así como la riqueza de los procesos de resistencia.

El libro nos lleva de la mano al conocimiento profundo de los diferentes organismos que se han puesto en marcha, que construyen y aplican los instrumentos de medición; pruebas siempre estandarizadas que les permiten clasificar, ordenar, colocar y organizar a los múltiples y diversos sujetos que forman este enorme sistema educativo nacional, que en México involucra a unos 37 millones de seres humanos. Una conclusión fundamental del autor nos señala que el Estado, proyectado a través de esta importante cantidad de “incuestionables” instituciones y provisto de una enorme cantidad de datos, cifras, mediciones y *rankings* (producto de reiteradas y masivas aplicaciones de sus pruebas estandarizadas, escuela por escuela, estudiante por estudiante, maestro por maestro y sustentadas en una visión para ellos científica y objetiva, verificable y estrechamente empirista), es y ha sido incapaz de producir en todos estos años un verdadero diagnóstico, ni siquiera medianamente aceptable, de los procesos profundos y sustantivos que se desarrollan a lo largo del sistema educativo; de los problemas reales de la enseñanza y el aprendizaje; o de las condiciones educativas y sociales en que se encuentran las escuelas, los maestros y los estudiantes. Este es seguramente uno de sus fracasos más significativos.

Es difícil reseñar con justicia un libro tan rico en información, reflexiones, presencias, relatos, descripciones, pormenores y análisis. Hemos intentado, a grandes brochazos, presentar algunas de las líneas que nos parecieron más importantes e incisivas entre sus múltiples planos y escenarios, pero seguramente dejamos fuera otras tantas igual de importantes. La necesaria conclusión es que este libro representa un enorme trabajo acumulado durante años y que hoy día muy pocos investigadores se aventuran a realizar, además que constituye innegablemente un referente imprescindible para cualquier actor y analista de lo educativo.

Finalmente, es preciso señalar que no es un libro que busque la supuesta neutralidad y el reconocimiento academicista; por el contrario, es un libro comprometido en primer lugar con una denuncia rigurosa, meticulosa y visionaria de lo que los grupos del poder han establecido para lo educativo y que no debe prevalecer. Es un libro comprometido con una concepción libre y profunda acerca de lo que debe ser la educación; con los enormes esfuerzos de múltiples actores que buscan día a día revertir, por diferentes vías, el poderoso flujo de valores y acciones que desde el poder neoliberal nos descerrajan; y finalmente con la firme esperanza de que múltiples alternativas construidas desde los espacios de resistencia de los maestros, estudiantes y comunidades irán aflorando inevitablemente para instalar otra visión, otros valores, recuperando el compromiso social real con una educación pública, laica, verdaderamente nacional.

Una de las reflexiones finales que nos brinda el autor, y con la que cerraremos esta reseña, es en torno a las distintas experiencias de comunidades y maestros. Aboites señala que:

[...] aparece así una demanda implícita de transformación del papel de los gobiernos y del Estado en la educación. En un rumbo distinto al de la redefinición neoliberal, de achicamiento del Estado-educador pero de fortalecimiento del Estado-evaluador, se exige desmontar la estructura vertical de la supervisión que hoy asfixia a la educación, de manera que existan condiciones para que los actores del proceso puedan crear espacios de autonomía que faciliten el desarrollo de iniciativas desde abajo y la creación de espacios de discusión y acuerdos sobre la educación en todos sus niveles. Son tendencias que pueden llevar a expresiones de conducción nacional muy distintas a la SEP actual, como por ejemplo, un Congreso de la Educación, que integre a sus actores y la diversidad de manifestaciones locales y regionales, y las exprese en acuerdos nacionales. Sería una manera de combinar las ventajas de un marco nacional, pero también una enorme diversidad que lo sustente desde abajo.

Lista de publicaciones recientes

Argentina

Pérez, Verónica y Rebón, Julián 2012 *Las vías de la acción directa* (Buenos Aires: Aurelia Rivera).

Bolivia

Andamios. Estado Plurinacional 2010-2011: balance y connotaciones (La Paz) N° 3, octubre de 2011; N° 4, enero de 2012.

Antequera, Nelson y Cielo, Cristina 2011 *Ciudad sin Frontera; multilocalidad urbano rural en Bolivia* (La Paz: PIEB).

Antezana, Luis 2011 *Ensayos escogidos 1976-2010* (La Paz: Plural).

Arze, Carlos et al. 2011 *Gasolinazo: subvención popular al estado y a las petroleras* (La Paz: CEDLA).

Bonifaz, Gustavo y Lunstedt, Christian 2011 *¿Bolivia en el desorden global?* (La Paz: ILDIS-FES).

Burman, Anders 2011 *Descolonización aymara. Ritualidad y política* (La Paz: Plural).

Calderón, Fernando 2011 *Los laberintos de la libertad* (La Paz: Plural).

Canedo, Gabriela 2011 *La Loma Santa: una utopía cercada. Territorio, cultura y Estado en la Amazonía boliviana* (La Paz: IBIS/Plural).

Carrasco Jaldín, Ronald 2011 *La indigencia del pensamiento político de Linera y el posmodernismo* (La Paz: s/d).

CIPCA 2011 *Modelos de desarrollo, desarrollo rural y economía campesina indígena. Memoria del Seminario Internacional 2011* (La Paz: Grupo Design).

Claros, Luis 2011 *Colonialidad y violencias cognitivas. Ensayos político-epistemológicos* (La Paz: Muela del Diablo).

Damante, Gerardo 2011 *Construyendo territorios. Narrativas territoriales aymaras contemporáneas* (Lima: Fundación Tierra/GRADE/CLACSO).

- Deere, Carmen Diana; Lastarra, Susana y Ranaboldo, Claudia 2011 *Tierra de mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina* (La Paz: Skorpion).
- Díaz Astete, Álvaro 2011 *Compendio de etnias indígenas y ecoregiones. Amazonia, Oriente y Chaco* (La Paz: CESA).
- EPRI-CCI 2011 *Los trasfondos del TIPNIS: La complejidad de Conflicto* (La Paz) N° 36.
- Farah, Ivonne y Ampuero, Igor (eds.) 2011 *Manual para los estudios críticos del desarrollo* (La Paz: CIDES).
- Fontana, Lorenza 2011 *Los conflictos sociales en América Latina* (La Paz: Plural/PNUD/UNIR).
- Fundación Friedrich Ebert y Fundación Bolivia para la Democracia Multipartidaria 2011 *Lo que unos no quieren recordar es lo que otros no quieren vivir (Bolivia y la Asamblea Constituyente)* (La Paz: FES).
- Fundación UNIR 2011 *Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potenciales de paz* (La Paz: UNIR); *Medios a la vista 2: análisis sobre el derecho a la información y la comunicación y el periodismo en Bolivia 2009-2011* (La Paz: UNIR/ABOCCS/ONADEM).
- García Linera, Álvaro 2011 *Las Tensiones Creativas de la Revolución* (La Paz: VEP); *El "Oenegismo", Enfermedad Infantil del Derechismo* (La Paz: VEP).
- Gutiérrez, Raquel et al. 2011 *Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo* (Cochabamba: Textos Rebeldes).
- Jordán, Enrique 2011 *Ivipöra, Vitarësiva. Cosmovisión y espiritualidad de los pueblos del Amazonia y tierras bajas* (La Paz: ISEAT).
- Kahane, Adam 2011 *Poder y amor: teoría y práctica para el cambio social* (La Paz: Plural).
- Kaitaya Quispe, Jaime 2011 *El anticolonial. Construcción del pensamiento crítico y la potencia aymaras* (El Alto: UPEA/M-MIL/Ulaqa Qullana/Coca Chimpu); *Lazos. Violencia directa, cultural y estructural en Bolivia 2011* (La Paz) Año N° 9.
- Mansilla, Hugo Celso Felipe 2011 *Los problemas de la democracia y los avances del populismo* (La Paz: El País).
- Mayorga, Fernando 2011 *Dilemas: ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional* (La Paz: CESSU/Plural/ASDI/UMSS).
- Molina, Fernando 2011 *René Zavaleta: la etapa nacionalista* (La Paz: Gente Común).
- Montaño, Patricia 2011 *El Imperio de Tiwanaku* (La Paz: UASM/FUNDAPPAC).
- Morales, Miguel (coord.) 2011 *Hablemos de tierras. Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia* (La Paz: Plural/Consultora Sur/INRA/Reino de los Países Bajos).
- PNUD 2011 *Cuadernos del Futuro 29: Personas adultas mayores, desiguales y diversas. Política pública y envejecimiento en Bolivia* (La Paz).
- Poma, Juan Manuel 2011 *Fausto Reynaga, o la frustración del programa indio* (La Paz: Textos Marxistas).
- Puente, Rafael 2011 *Recuperando la memoria. Historia crítica de Bolivia* (La Paz: Plural) Tomos I y II.

- Quiroz, Marcelo 2011 *Comunitarismo y descolonización. Percepción política e ideológica de los jóvenes de la ciudad de El Alto* (La Paz: CEPIES/Convenio Andrés Bello).
- Rodríguez, Gustavo 2011 *Estado, nación, región* (Santa Cruz: UAGRM).
- Sandoval, Isaac 2011 *El desarrollo político en la formación social boliviana* (Santa Cruz: Industrias Gráficas Sirena).
- Schütrumpf, Jörd (ed.) 2011 *Rosa Luxemburg o el precio de la Libertad* (s/d: RSL/ Imprenta Wa-gui).
- Soruco, Ximena 2011 *La ciudad de los cholos. Mestizaje y colonialidad en Bolivia (siglos XIX y XX)* (La Paz: PIEB/IFEA).
- Sosa Soruco, Jorge 2011 *La cuestión nacional e indígena en Bolivia* (La Paz: Ediciones Insurgente).
- Spedding Pallet, Alison 2011 *Descolonización. Crítica y problematización a partir del contexto boliviano* (La Paz: ISEAT).
- Talavera, María Luisa 2011 *Formaciones y transformaciones. Educación pública y culturas magisteriales en Bolivia. 1899-2010* (La Paz: CIDES/PIEB).
- Tapia, Luis 2011 *El estado de derecho como tiranía* (La Paz: Autodeterminación/CIDES).
- Timmer, Hibert 2011 *Cosmología andina. Sabiduría indígena boliviana en encuentro con la ciudad* (La Paz: ISEAT).
- Tinajeras, Gonzalo 2011 *Lógica y política en Hegel. Silogismos y poderes* (La Paz: Demiougost).
- Tinkazos* 2011 (La Paz) N° 30.
- Urquieta, Patricia (coord.) 2011 *Ciudades en transformación* (La Paz: CIDES).
- VV. AA. 2011 *Con-Textos políticos. Conjeturas y debates de la transición política boliviana (2008-2010)* (La Paz: PNUD/FBDM).
- VV. AA. 2011 *Debates sobre el Cambio. Descolonización, Estado Plurinacional, Economía Plural, Socialismo Comunitario* (La Paz: VEP).
- Wanderley, Fernanda (coord.) 2011 *El desarrollo en cuestión* (La Paz: CIDES).
- Zamora, Kathia 2011 *Contrastes: ensayos sobre democracia y ciudadanía* (Sucre: Tupac Katari); (coord.) *Autonomías para Chuquisaca: visiones y proyecciones para su aplicación* (Universidad San Francisco Xavier/Tupac Katari) Tomos I y II.
- Zegada, María Teresa et al. 2011 *La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano* (La Paz: Muela del Diablo/ CLACSO).
- Zemelman, Hugo 2011 *Conocimiento y Sujetos Sociales* (La Paz: VEP).

Brasil

- Abrahão, Jorge Luiz 2011 "Controle social, transparência e integridade. Esse é o nome do jogo" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 50, setembro.
- Antunes, Ricardo 2011 *O continente do Labor* (São Paulo: Boitempo); "O Brasil da Era Lula" em *Margem Esquerda* (São Paulo: Boitempo) N° 16.
- Assunção, Valmir 2011 "A luta camponesa: mobilizações e conquistas" em *Alainet* (Quito) 2 de setembro.

- Bava, Silvio Caccia 2011 "Ventos de Mudança" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 48, julho; "A renda do Brasileiro", edição 52, novembro.
- Baratta, Giorgio 2011 *Antonio Gramsci em contraponto - Diálogos com o presente* (São Paulo: UNESP).
- Barbosa, Maria Valéria; Esterci, Neide e Franco, Mariana Pandoja 2011 *Assentamentos rurais: Uma visão multidisciplinar* (São Paulo: UNESP).
- Barrocal, André 2011 "Debate com movimento social é fundamental" em *Alainet* (Quito) 18 de agosto; "Camponeses mobilizam-se para empurrar Dilma à reforma agrária", 22 de agosto; "Marcha por moradia entrega pauta ao Planalto e denuncia atentados", 4 de outubro; "Novo Código Florestal ameaça acordo que controla soja na Amazônia", 14 de outubro; "Senado aprova Código Florestal pró-agronegócio com 70% dos votos", 7 de dezembro.
- Bernardo, Márcia Hespagnol 2011 *Trabalho duro: discurso flexível* (São Paulo: Expressão Popular).
- Betto, Frei 2011 "A Copa (não) é nossa" em *Alainet* (Quito) 25 de novembro; "Grito dos excluídos 2011", 5 de setembro.
- Bombardi, Larissa Mies 2011 "Intoxicação e morte por agrotóxicos no Brasil: a nova versão do capitalismo oligopolizado" em *Boletim Dataluta* (São Paulo: UNESP) setembro.
- Bonelli, Laurent 2011 "Nas trilhas íngremes da luta armada" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 49, agosto.
- Cavalcante, Sávio 2011 *Sindicalismo e privatização das telecomunicações* (São Paulo: Expressão Popular).
- Coutinho, Carlos Nelson 2011 *De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política* (São Paulo: Boitempo).
- Cherobini, Demetrio 2011 "A emancipação feminina e a luta pela superação do capital: uma visão a partir de István Mészáros" em *Margem esquerda* (São Paulo: Boitempo) Nº 16.
- De Filippo, Francisco Carneiro 2011 "Aspectos da criminalização da luta social no Brasil" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 51, outubro.
- Falaise, Benoît 2011 "O Banco Mundial no comando da invasão de terras" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 50, setembro.
- Fernandes, Florestan 2011 *Brasil em compasso de espera* (Rio de Janeiro: UFRJ).
- Gohn, Maria da Glória 2011 "Movimentos sociais na contemporaneidade" em *Revista Brasileira de Educação* (Rio de Janeiro: ANPEd) Vol. 16, Nº 47, maio-agosto.
- Gomes, Marcel 2011 "CUT rejeita unidade com centrais e busca caminho próprio com Dilma" em *Alainet* (Quito) 11 de agosto; "MST aposta em assentados para reforçar a sua base", 20 de dezembro.
- Grandin, Greg 2011 "O sonho de Henry Ford no meio da Amazônia" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 49, agosto.
- Guzmán, Tracy Devine 2011 "Autorepresentação indígena e a reformulação da política nacional" em *Alainet* (Quito) 22 de novembro.
- Harvey, David 2011 *O enigma do capital* (São Paulo: Boitempo).
- Kofler, Leo 2011 *História e dialética: estudos sobre a metodologia da dialética marxista* (Rio de Janeiro: UFRJ).

- Leher, Roberto 2011 "Universidade, socialismo e consciência social: Florestan Fernandes na Revista Universidade e Sociedade" em *Universidade e Sociedade* (Brasília) Vol. 47; "Conhecimento científico: tensões entre comodificação e emancipação" em Bertusi, G.T. y Ouriques, N. *Anuário Educativo Brasileiro - visão retrospectiva* (São Paulo: Editora Cortez); "Crise capitalista, neodesenvolvimentismo e problemática ambiental" em Menezes, Ana Maria Dorta et al. (orgs.) *Trabalho, Educação, Estado e a Crítica Marxista* (Fortaleza: Edições UFC); "Desafios para uma educação além do capital" em Jinkings, Ivana y Nobile, Rodrigo *István Mészáros e os desafios do tempo histórico* (São Paulo: Boitempo).
- Markman, Marcio 2011 "Lançamento de livro sobre repressão política no campo atualiza agenda da reforma agrária" em *Alainet* (Quito) 25 de novembro.
- Martins, Carlos Eduardo 2011 *Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina* (São Paulo: Boitempo).
- Nassif, Fabio 2011 "Sem teto, sem terra e trabalhadores fazem ato em São Paulo" em *Alainet* (Quito) 8 de dezembro.
- Navarro, Vera Lucia 2011 *Trabalho e trabalhadores do calçado* (São Paulo: Expressão Popular).
- Naves, Rubens; da Silva, Guilherme Amorim Campos 2011 "As licitações para a Copa do Mundo e as Olimpíadas" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 49, agosto.
- Noronha, Maria Izabel Azevedo 2011 "Uma luta por respeito e valorização" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 50, setembro.
- Passos, Najla 2011 "Ocupe Brasília cobra 10% do PIB em educação; relatório propõe 8%" em *Alainet* (Quito) 6 de dezembro; "Partidos de esquerda, CUT, UNE e OAB defendem reforma política", 5 de outubro.
- Pochmann, Marcio 2011 "Transformação do capitalismo" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 51, outubro.
- Salles, Marcelo 2011 "Globo muda cobertura para seduzir população carioca" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 50, setembro.
- Santos, Adriano P. 2011 *Usinagem do capital e o desmonte do trabalho* (São Paulo: Expressão Popular).
- Severo, Leonardo 2011 "BS Friboi: quando o dinheiro público financia a dor nos frigoríficos" em *Alainet* (Quito) 12 de setembro; "Garantir direitos e demarcação de terras", 9 de novembro.
- Szermeta, Ramon 2011 "Desrespeito e exploração dos trabalhadores dos jogos" em *Le Monde Diplomatic Brasil* (São Paulo) edição 52, novembro.
- Tavares, Elaine 2011 "Os trabalhadores das universidades e as 'regras' da greve" em *Alainet* (Quito) 11 de agosto; "Trabalhadores das universidades voltam ao trabalho", 26 de setembro; "A luta indígena em Santa Catarina", 19 de outubro; "Levanta povo indígena! Levanta povo de luta!", 22 de novembro; "Energia: privatizar não é a solução", 9 de dezembro; "A luta pela moradia em Florianópolis", 12 de dezembro; "Belo Monte não é a única", 28 de dezembro.
- Teixeira, Gerson 2011 "Agravamento do quadro de concentração da terra no Brasil?" em *Boletim Dataluta* (São Paulo: UNESP) julho.

- Tragtenberg, Maurício 2011 *Autonomia operária* (São Paulo: UNESP).
- Vigna, Edécio 2011 "Código Florestal: uma festa de incentivos econômicos e isenções fiscais" em *Alainet* (Quito) 18 de dezembro.
- Vittoria, Paolo 2011 *História e dialética: estudos sobre a metodologia da dialética marxista* (Rio de Janeiro: UFRJ).
- Whitakes, Chico 2011 "E agora, Forum Social Mundial?" em *Alainet* (Quito) 21 de outubro.

Chile

- Acevedo, Paulina 2012 "La dignidad habita en la Patagonia. La región austral no puede ser doblegada por la represión" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.
- Acuña, Esteban 2012 "En Chile sí hubo dictadura" en *El Ciudadano* (Santiago) 8 de enero.
- Amtmann, Carla 2012 "Cómo despertar a la izquierda. Ante los cambios del escenario tras un año de movilización" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Bizama, Gonzalo 2012 "El retorno de la derecha: primero como tragedia..." en *Rebelión* (Madrid: Iepala) 4 de enero.
- Boric, Gabriel 2012 "Los horizontes del movimiento estudiantil. La lucha por una educación gratuita, democrática y de calidad en este 2012" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Briones, Mario 2012 "Chile será arrasado por las Transnacionales, no por los terremotos" en *Fortín Mapocho* (Santiago).
- Cáceres, Javier 2012 "Las formas de lucha y la violencia" en *Clarín de Chile*, 11 de abril.
- Calderón, Aminie y Gutiérrez, Rosa (comps.) 2011 *Éramos Liceanas en septiembre del 73* (Valparaíso: Planeta de Papel).
- Calfullan, Celso 2012 "Aysén: 'Tu Problema, es mi Problema'" en *Rebelión* (Madrid: Iepala) 20 de febrero; "La represión contra los Mapuche va en aumento", 7 de abril.
- Candia, Ricardo 2012 "La Concertación se secó" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 752; "¿Candidatos del movimiento social?", N° 753.
- Castillo Melgarejo, Cristhian 2012 "Chile: El paraíso del mercado educativo. Una herramienta para reproducir el modelo neoliberal" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.
- Cuadra, Álvaro 2012 "Chile: Discriminación y clasismo" en *Clarín de Chile*, 2 de enero.
- Cuello, Marjorie 2012 "Hacia un movimiento político social. Los objetivos estudiantiles para el 2012" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 127.
- De la Fuente, Víctor Hugo 2012 "El ejemplo de Aysén. Tu problema es mi problema. Tu lucha es mi lucha" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Díaz, Danae 2012 "El poder constituyente nace desde abajo. El horizonte político de las movilizaciones estudiantiles" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.

- Espinoza, Vicente 2012 "Jóvenes: La experiencia de la desigualdad de oportunidades" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.
- Estay Reyno, Jaime; Lara, Claudio y Silva, Consuelo (eds.) 2012 *El neoliberalismo y su crisis. Causas, escenarios y posibles desenvolvimientos* (Santiago: Heinrich Böll Stiftung/BUAP/ELEP-UARCIS).
- Farfan, Sebastián 2012 "Revolución pasiva a la chilensis. La clase dominante frente a las luchas sociales en Chile" en *Rebelión* (Madrid: Iepala) 25 de abril.
- Fazio, Hugo 2012 "La reforma tributaria que Chile espera. Una demanda que ganó terreno con las movilizaciones sociales" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Fuentes, Iván 2012 "El rugido de la Patagonia" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Garcés, Mario 2012 *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales de América Latina y Chile* (Santiago: LOM).
- Grez, Sergio 2012 "Chile 2012: el movimiento estudiantil en la encrucijada" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 126.
- Gutiérrez, Claudia et al. 2012 *Pasado y presente de la educación pública. Miradas desde Chile y Francia* (Santiago: Catalonia).
- Guzmán, Huego 2012 "Derecha y Educación: Hay que pagar" en *El Ciudadano* (Santiago) N° 116; "Las promesas incumplidas de Piñera. Conflictos y movilizaciones sociales que sacuden a Chile", en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.
- Iglesias Vázquez, Mónica 2012 *Rompiendo el Cerco. El movimiento de pobladores contra la Dictadura* (Santiago: Radio UCH).
- Matamala, María 2012 "Una propuesta libertaria de las mujeres. En el marco de las luchas y movilizaciones sociales" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 127.
- Muñoz Cortés, Víctor Manuel 2011 *Julio Rebosio. La historia de un anarquista* (Santiago: USACH).
- Pérez, Arnaldo 2012 "La discriminación reina en Chile" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 755.
- Pérez, Libio 2012 "Protestas y Propuestas" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 126; "La rebelión de Aysén. Otra región chilena que se levanta", N° 127; "La derecha levanta su propia barricada. Incierto futuro electoral vislumbra el oficialismo", N° 128.
- Pinto, Ricardo 2012 "Calama, la protesta que viene" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 753.
- Quimantú, Diátriba y Observatorio Chileno de Políticas Educativas 2012 *Trazas de Utopía: La experiencia de autogestión de cuatro liceos chilenos durante 2011* (Santiago: s/d).
- Ramis, Alvaro 2012 "Un viaje al Planeta de Piñera" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 751.
- Riveros, Luis 2012 "Renovar una sociedad agotada. Chile necesita una Asamblea Constituyente" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.

- Rojas, Luis 2012 *De la rebelión a la sublevación imaginada* (Santiago: LOM).
- Salazar, Manuel 2012 "El nuevo giro de Sebastián Piñera" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 750; "El óxido traba a la Concertación", N° 752; "El año en que se forjaron las protestas nacionales", N° 754.
- Segura, Patricio 2012 "La incansable batalla de Aysén" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 128.
- Sepúlveda, Lucía 2012 "Violencia del Estado se ensaña con mapuches" en *Punto Final* (Santiago: SEIDPVPF) N° 749.
- Servicio Médico Legal 2012 *Memoria: Programa de Derechos Humanos 2007-2010* (s/d).
- Sosman, Adriana y Carreño, Jenny (comps.) 2012 *Violencia(s). Coordinadas y Perspectivas. Aportes a una praxis transformadora* (Santiago: Mallku).
- Titelman, Noam 2012 "De dónde venimos y adónde vamos. Haciendo universidad para una sociedad" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 127.
- Torres, Claudia 2012 "Fuimos dueños del tiempo y las calles. Aysén: un triunfo tras otro" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 129.
- Vallejo, Camila 2012 *Podemos cambiar el mundo* (Santiago: Ocean Sur/La Vida es Hoy).
- Vielma, Alfredo 2012 "El camino es la unidad, la movilización y la autodefensa" en *Le Monde Diplomatique* (Santiago: Aún creemos en los sueños) N° 127.
- Vitale, Luis 2011 *Interpretación marxista de la Historia de Chile* (Santiago: LOM).
- Walder, Paul 2012 "De la protesta social al nuevo poder político" en *Punto Final* (Santiago SEIDPVPF) N° 750; "Aysén es nuestro destino", N° 752; "Movimiento social busca un cambio político", N° 753.

Colombia

- Alonso Espinal, Manuel Alberto; Pérez Toro, William Fredy y Vélez Rendón, Juan Carlos 2012 *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín, 1997-2007* (Medellín: IEP-UA).
- Álvarez Hidalgo, Juan Diego y Zapata Ávila, Juan Guillermo 2012 *La amenaza: El caso de las organizaciones sindicales antioqueñas: 1986-2010* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Aponte, David y Vargas, Andrés 2011 *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN* (Bogotá D.C.: Códice).
- Arcanos 2012 (Bogotá D.C.: Corporación Nuevo Arco Iris) N° 17, enero.
- Arias Castillo, Wilson 2012 "Con Santos, las tierras ¿para quién?" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Arias Ortiz, Angélica 2012 "Las Bacrim retan a Santos" en *Arcanos* (Bogotá D.C.: CNAI).
- Ávila, Ariel 2012 "Las FARC: la guerra que el país no quiere ver" en *Arcanos* (Bogotá D.C.: CNAI).
- Ávila, Ariel Fernando y Velasco, Juan David 2012 "Triunfos y derrotas de las mafias en las locales" en *Arcanos* (Bogotá D.C.: CNAI).

- Ávila, Ricardo 2011 *América Latina y el efecto dominó* (Bogotá D.C.: Planeta).
- CEPA 2012 (Bogotá D.C.) Vol. IV, N° 14, "Capitalismo, Territorios y Resistencias".
- Cepeda, Iván y Giraldo, Javier 2012 *Víctor Carranza alias "el patrón"* (Bogotá D.C.: Debate).
- Choachi, Helberth y Campo, Soledad 2012 "Ordenamiento territorial y proyecto hegemónico de regionalización para el centro del país" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- CINEP-PPP (Programa por la Paz del CINEP) 2011 *Colombia, Deuda con la humanidad 2: 23 años de falsos positivos (1988-2011)* (Bogotá D.C.: Códice).
- CINEP-PPP 2011 "Primer año de Santos" en *Cien días vistos por CINEP/PPP* (Bogotá D.C.) N° 73, agosto-noviembre; 2012 "Una década de luchas estudiantiles", N° 74, diciembre-febrero.
- CINEP-PPP 2012 *A los diez años del Caguán: algunas lecciones para acercarse a la paz* (Bogotá) febrero; *Conflicto armado en Colombia durante 2011*, junio.
- Córdoba Aldana, John Harold 2012 "¿Qué es territorio?" en *CEPA* (Bogotá).
- Correa Montoya, Guillermo y Malagón Díaz, Lina Paola 2012 *Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010* (Bogotá D.C.: ENS/CCJ).
- Correa Montoya, Guillermo et al. 2012 *Precario pero con trabajo: ¿otros están peor!* (Medellín: ENS).
- Duque Chalarca, Catherine y Gil Ramírez, Max Yuri 2012 *Entre memorias, voces y conversaciones ciudadanas: Reflexiones analíticas del proyecto "Museo: Casa de la memoria" para Medellín* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- El Rebelde - Medios Alternativos 2011 "Por una educación pública, de calidad y al servicio del pueblo" en *Desde abajo* (Bogotá D.C.) N° 174, octubre; "Estudiantes deciden suspender el paro: Vamos a estudiar y luchar", N° 175, noviembre.
- Escuela Nacional Sindical (ENS) 2011 "Informe nacional: Estado del Trabajo Decente en Colombia" en *Desde abajo* (Bogotá D.C.) N° 174, octubre; 2012 "Informe del Sistema de Información Sindical y Laboral (SISLAB). Estadísticas e información laboral sistematizada a diciembre de 2011" (Medellín); "Informe nacional de coyuntura económica, laboral y sindical en 2011".
- Fajardo Montaña, Darío 2012 "La política agraria de la «prosperidad»... ¿para todos?" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Fog Corradine, Lisbeth 2011 *Divulgar la ciencia. Curso de periodismo científico* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Foro 2012 "Reformas en marcha: ¿Hacia un nuevo país?" N° 76, abril (Bogotá D.C.: Foro Nacional por Colombia).
- Fuchs, Christian 2012 "Una contribución a la crítica de la economía política del capitalismo informacional transnacional" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Garay, Luis Jorge y Vargas Valencia, Fernando 2012 "Los retos de la restitución de tierras y reparación en Colombia" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- García, David; Montenegro, Mauricio; Astáiza, Fernando y Martín, Carlos 2012 "El campo publicitario colombiano: entre los imaginarios y las condiciones objetivas" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).

- García Sánchez, Andrés 2012 *Espacialidades del destierro y la re-existencia: afrodescendientes desterrados en Medellín, Colombia* (Medellín: La carreta editores).
- Garzón Flórez, Carlos Alberto 2012 "Educación superior. Una reforma urgente con previa consulta social" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Girón, Antonio y Manrique, Helena 2012 *El Oasis* (Bogotá D.C.: Consejería Cultural de la Embajada de España).
- González Posso, Camilo 2012 "Consolidación territorial y resurgimiento de paras y guerrilla" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Guzmán Tovar, César 2012 "La configuración del campo de legitimidad de la producción del saber científico en Colombia" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Hechos de Paz* 2012 "Transformar la sociedad rural: el gran reto" N° 64 (Bogotá D.C.: PNUD).
- Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás (IVUSTA) 2012 *Congreso: el papel de las víctimas en el proceso de justicia y paz: memorias* (Bucaramanga).
- Jaramillo López, Juan Camilo 2012 "¿Comunicación estratégica o estrategias de comunicación? 'El arte del ajedrecista'" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Jiménez Vásquez, Lina Mercedes y Mazo Zea, Rodrigo 2012 *Ideas irracionales y estrategias de afrontamiento en desmovilizados, excombatientes de grupos armados al margen de la ley que pertenecieron al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD)* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Lazos de Unidad* 2012 (Bogotá D.C.: CUT) N° 78.
- Lozano, Pilar 2011 "Las colombianas lideran la lucha por la restitución de la tierra" en *Desde abajo* (Bogotá D.C.) N° 174, octubre.
- Mantilla, Alejandro 2012 "Locomotoras que aceleran, frenos que se activan, disputas por el territorio en el gobierno Santos" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Marciales Vivas, Gloria Patricia 2012 "Competencia informacional y brecha digital: preguntas y problemas emergentes derivados de investigación" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Mondragón, Héctor 2012 "Sector agropecuario: crecimiento limitado, rezagado y transitorio" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Moreno, Jimmy Alexander 2012 "La minería en el páramo de Santurban. Un territorio en el que se defiende el agua y la vida" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Morsolino, Cristiano 2012 "La lucha contra la violencia urbana, por la participación de los adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias. Paralelismos entre Medellín y Gela (Italia)" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Nómadas* 2012 "Sociedad de la información y el conocimiento: debates críticos" N° 36, abril (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Núñez Gantiva, Magda Paola 2012 "ELN-FARC: ahora sí juntos" en *Arcanos* (Bogotá D.C.: CNAI).
- OACNUD 2012 "Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia" (s/d).

- Otero Prada, Diego Fernando 2012 "El sector energético-minero y la economía colombiana" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).
- Pacheco Simanca, José Luis 2011 *Un modelo energético para Nuestra América* (Bogotá D.C.: Desde abajo).
- Parra Mesa, Iván Darío 2011 *Innovación. Conceptos, proceso, mitos y realidades* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Parra Mosquera, Carlos Andrés 2012 "TIC, conocimiento, educación y competencias tecnológicas en la formación de maestros" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Pérez-Bustos, Tania; Prieto, Fabián y Franco-Avellaneda, Manuel 2012 "Una lectura desde los estudios feministas de las tecnologías: el caso OLPC y Sugarlabs en Colombia" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Philip, Kavita 2012 "¿Tecnologías para pobres o tecnologías pobres? Poscolonialismo, desarrollo y tecnología en India" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Ramírez Ceballos, Alhen David y Monsalve Vargas, Timisay 2012 *El control y el dominio de las representaciones simbólicas del cuerpo en la desaparición forzada: representaciones simbólicas del cuerpo en la desaparición forzada en el municipio de San Vicente Ferrer - Oriente Antioqueño* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Ramonet, Ignacio 2012 *La crisis del siglo* (Bogotá D.C.: *Le Monde Diplomatique*); *La explosión del periodismo: internet pone en jaque a los medios tradicionales* (Bogotá D.C.: *Le Monde Diplomatique*).
- Romero, Mauricio; González, Lina María y Bonilla, Laura 2012 "Restitución de tierras" en *Arcanos* (Bogotá D.C.: CNAI).
- Roncancio, Germán 2012 "El territorio, la vida digna y la resistencia campesina e indígena" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Rueda Ortiz, Rocío 2012 "Sociedades de la información y el conocimiento: tecnicidad, pharmakon e invención social" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Ruiz Muñoz, Carlos Alberto 2012 *Sistema normativo Wayuu a la luz del pluralismo que defiende la Constitución Política de Colombia de 1991* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Sarmiento, Fernando 2011 *Lecciones para la paz negociada* (Bogotá D.C.: CINEP-PPP/Colciencias/ILC/US IP/Trocaire).
- Solarte Lindo, Guillermo 2012 *Política para camaleones* (Bogotá D.C.: *Le Monde Diplomatique*).
- Suárez Molano, José Olimpo 2011 *Sobre la desobediencia civil* (Medellín: Universidad de Antioquia).
- Valderrama H., Carlos Eduardo 2012 "Sociedad de la información: hegemonía, reduccionismo tecnológico y resistencias" en *Nómadas* (Bogotá D.C.: Universidad Central).
- Vega Cantor, Renán 2012 "Capitalismo gangsteril y despojo territorial en Colombia" en *CEPA* (Bogotá D.C.).
- Velásquez C., Fabio E. 2012 "Industrias extractivas y ordenamiento territorial en Colombia: tensiones no resueltas" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).

Zuluaga Nieto, Jaime 2012 "El complejo pero imperioso camino hacia la negociación política" en *Foro* (Bogotá D.C.: FNC).

México

Adame Cerón, Miguel Ángel 2011 *Antropología de los encuentros y de los impactos turísticos en las comunidades* (México: Navarra); (comp.) *Marxismo y antropología (e historia y filosofía)* (México: Navarra).

AA. VV. 2011 *La izquierda en nuestra América ¿Avance o retroceso?* (México: Movimiento de Solidaridad Nuestra América).

AA. VV. 2011 *Pensar las autonomías* (México: Bajo tierra ediciones/Sísifo ediciones/JRA).

Bartra, Armando 2011 *Tiempo de mitos y carnaval: indios, campesinos, revoluciones. De Felipe Carrillo Puerto a Evo Morales* (México: Ítaca).

Concheiro Bórquez, Elvira 2011 *Reencuentro con Marx. Partido y praxis revolucionaria* (México: CEIICH-UNAM/Colección Debate y Reflexión).

Crespo, Horacio (ed.) 2011 *Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo: curso de El Colegio de México. José Aricó* (México: El Colegio de México/FCE).

Desacatos. Revista de Antropología Social 2011 (México: CIESAS) N° 36, "El clientelismo a debate"; N° 37, "Más allá del Estado y el capital".

De Teresa, Ana Paula (coord.) 2011 *Quia-na. La selva chinanteca y sus pobladores* (México: UAM-I/Juan Pablos editores).

Drucker Colín, René y Namihira Guerrero, Rosalba 2011 *México, país éxito o fracaso* (México: Porrúa).

Dussel, Enrique 2011 *Carta a los indignados* (México: La Jornada ediciones).

Fernández Santillán, José 2011 *Política, gobierno y sociedad civil* (México: Fontamara).

Memoria 2011 (México: CEMOS) N° 251, septiembre, "Las izquierdas hacia 2012".

Obregón, Carlos 2011 *La crisis financiera mundial. Perspectivas de México y de América Latina* (México: Siglo XXI).

Osorio, Jaime (coord.) 2011 *Violencia y crisis estatal. Estudios sobre México* (México: UAM).

Pérez, Ana Lilia 2011 *El cártel negro. Como el crimen organizado se ha apoderado de Pemex* (México: Grijalbo).

Raphael, Ricardo 2011 *El México indignado* (México: Destino).

Rebeldía 2011 Año 9, N° 76, 77, 78 y 79.

San Juan Victoria, Carlos (coord.) 2011 *El XX mexicano. Lecturas de un siglo* (México: Ítaca).

Sánchez Gudiño, Hugo y Carrera Bravo, Gonzalo (coords.) 2011 *Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México* (México: Porrúa).

Scherer García, Julio 2011 *La Guerra de Calderón. El dolor de los inocentes* (México: Grijalbo); 2012 *Calderón de cuerpo entero* (México: Grijalbo).

Sicilia, Javier 2011 *Estamos hasta la madre* (México: Temas de Hoy).

Zepeda Patterson, Jorge (coord.) 2007-2011 *Los amos de México* (México: Planeta).

Paraguay

- Acción. *Revista de reflexión y diálogo de los jesuitas del Paraguay* 2011 (Asunción: CEPAG) N° 310, enero; N° 311, febrero; N° 312, marzo; N° 313, abril; N° 314, mayo; N° 315, junio.
- Acción. *Revista de reflexión y diálogo de los jesuitas del Paraguay* 2012 (Asunción: CEPAG) N° 321 al 325, enero a junio.
- ACNUDH-Paraguay 2012 *Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género* (Asunción: s/d).
- Bareiro, Line 2011 *Hitos del Bicentenario* (Asunción: ServiLibro).
- BASE Investigaciones Sociales 2012 *Es lógico que una sociedad agredida se defienda* (Asunción: BASE IS).
- Capdevila, Rubén 2011 *Violencia. Medios de comunicación y representaciones sociales* (Asunción: CDIAObserva/CODEHUPY).
- Colmán Gutierrez, Andrés (ed.) 2011 *EPP la verdadera historia* (Asunción: Diario Última Hora).
- CONAMURI 2012 *Géneros, patriarcado, feminismo* (Asunción: s/d).
- Cooney, Jerry W. 2012 *El proceso de la Independencia del Paraguay. 1807-1814* (Asunción: Intercontinental).
- Coronel, Bernardo 2011 *Breve Interpretación Marxista de la Historia Paraguaya (1537-2011)* (Asunción: BASE IS/Arandurâ).
- Corvalán, Graziella 2012 *La Construcción social del Movimiento Feminista Paraguayo* (Asunción: Mujeres por la Democracia).
- Cresta, Juan et al. 2011 *Paraguay en el Mercosur: Asimetrías Internas y Políticas y Política Comercial Externa* (Asunción: CADEP).
- Dictadura y Memoria* 2012 (Asunción) N° 1, enero; N° 2, febrero.
- Duré, Elizabeth; Ortega, Jaquelina y Palau, Mariel 2012 *Mujeres campesinas. Actoras de la producción y de la soberanía alimentaria* (Asunción: Servilibro) Colección de la Mujer Paraguaya en el Bicentenario de la Secretaría de la Mujer.
- Echauri, Carmen y Serafini, Verónica 2011 *Igualdad entre hombres y mujeres en Paraguay: la necesaria conciliación entre familia y trabajo* (Santiago: OIT).
- Filártiga, Joel 2011 (comp.) *Guerra biotecnológica* (Asunción: Fundación Joel Filártiga h/BASE IS).
- González, Erasmo 2012 *El gobierno de 1936 y su proyecto de identidad nacional* (Asunción: El Lector).
- Halpern, Gerardo (comp.) 2012 *Migrantes: perspectivas (críticas) en torno a los procesos migratorios del Paraguay* (Asunción: Ápe Paraguay).
- Informativo Campesino* 2011 (Asunción: CDE) N° 244, enero a marzo; N° 245, abril a junio; N° 247 octubre a diciembre.
- Insrán, Martín 2012 *La aventura paraguaya* (Asunción: Don Bosco).
- Irala, Abel 2011 *El imperialismo norteamericano en Paraguay: Bases militares y USAID* (Asunción: SERPAJ-Py); *Paraguay. Base militar estadounidense. Una mirada a Mariscal Estigarribia Chaco* (Asunción: SERPAJ-Py).
- Monte, Mary; Bareiro, Line y Soto, Clyde 2011 *Al fin ciudadanas. 50 años de derechos políticos de las mujeres en Paraguay* (Asunción: CDE).

- Monte de López Moreira, Mary 2012 *La Gente del XVI: habitantes del Paraguay durante la conquista* (Asunción: FONDEC/Arandura).
- Numan Caballero Merlo, Javier (org.) 2011 *Realidad Social del Paraguay-II* (Asunción: CEADUC).
- Organización de Lucha por la Tierra (OLT) 2011 *Momento de participación, organización y luchas unitarias del campesinado* (Asunción: s/d).
- Palau, Marielle (org.) 2011 *La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo. Memoria del Seminario Desarrollo, Militarización y Criminalización en el IV Foro Social de las Américas* (Asunción: BASE IS/DIAKONÍA/SERPAJ-Py).
- Paredes, Roberto 2011 *El golpe que derrocó a Stroessner* (Asunción: Servilibro).
- Ramos, Antonio 2011 (1976) *La Independencia del Paraguay y el Imperio del Brasil* (Asunción: CFC/IHGB).
- Revista Paraguaya de Sociología* 2011 (Asunción: CEPES) Año 48, N° 138, enero a junio; N° 139, julio a diciembre.
- Rivarola, Milda 2012 *Letras de sangre. Diarios inéditos de la contrainsurgencia y la guerrilla (Paraguay, 1960)* (Asunción: Servilibro).
- Rodríguez, José Carlos 2011 *Análisis del sistema tributario en el Paraguay y potencial de recaudación* (Asunción: CDE/DECIDAMOS); *Cultura Tributaria. Propuestas y argumentos para aumentar la justicia fiscal* (Asunción: CDE/DECIDAMOS).
- Rojas Villagra, Luis (comp.) 2011 *La economía paraguaya bajo el orden neoliberal* (Asunción: Base IS/SEPPY/RLS/Arandurâ); (comp.) 2012 *Proceso histórico de la economía paraguaya* (Asunción: Secretaría Nacional de Cultura).
- Saucedo Rodas, Aníbal 2011 *Augusto Roa Bastos: Autoritarismo, cultura y democracia* (Asunción: Servilibro).
- Soto, Clyde; González, Myrian y Dobrée, Patricio 2012 *La migración femenina paraguaya en las cadenas globales de cuidados en Argentina. Transferencias de cuidados y desigualdades de género* (Asunción: CDE).
- VV. AA. 2011 "Derechos Humanos en el Paraguay" (Asunción: CODEHUPY).

Sumario

Editorial

Movimientos socioambientales en América Latina

Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina

Maristella Svampa

Descaminhos do “ambientalismo consensualista”

Henri Acselrad

Los dolores de *Nuestra América* y la condición neocolonial.

Extractivismo y biopolítica de la expropiación

Horacio Machado Aráoz

Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina

Alberto Acosta y Decio Machado

“Porque juntos somos mucho más”. Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados

Norma Giarracca y Daniela Mariotti

Razones de un distanciamiento político: el Movimiento Indígena ecuatoriano y la Revolución Ciudadana

Pablo Ospina Peralta y Rickard Lalander

La dimensión socioambiental del movimiento mapuche en Chile

César Enrique Pineda

Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple

Mina Lorena Navarro

Conflictos socioambientales en el Perú neoliberal. Una aproximación estructural en términos histórico-políticos

Jorge Luis Duárez Mendoza

Debate

Para una caracterización de la crisis histórica de nuestra época

José Guadalupe Gandarilla Salgado

Experiencias latinoamericanas

El #YoSoy132 y las elecciones en México. Instantáneas de una imposición anunciada y del movimiento que la desafió

Luz Estrella y Massimo Modonesi

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Adolfo Sánchez Vázquez

Aureliano Ortega Esquivel

La filosofía de la praxis

Adolfo Sánchez Vázquez

Reseña

La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982 - 2010)

Tatiana Coll Lebedeff

Lista de publicaciones recientes



Patrocinado por



Govern
de les Illes Balears

Consell de les Illes Balears
Departament d'Investigació i
Innovació Científica i Tecnològica

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Patrocinado por



Agència Sueca de Desenvolupament Internacional